**Ante la**

**CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS**

# Caso Vereda La Esperanza
# Vs.
# Colombia

## ESCRITO DE SOLICITUDES, ARGUMENTOS Y PRUEBAS
## 24 DE ABRIL DE 2015

Presentado por

Corporación Jurídica Libertad

y

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional

I. Capítulo I – INTRODUCCIÓN ..... 5
II. Capítulo II – OBJETO DE LA DEMANDA ..... 7
III. Capítulo III – IDENTIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS ..... 9
IV. Capítulo IV – LEGITIMACIÓN Y NOTIFICACIÓN ..... 16
V. Capítulo V – COMPETENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA ..... 16
VI. Capítulo VI - CONTEXTO ..... 17
A. El conflicto armado y los "grupos de autodefensas" ..... 18
B. El Ejército Nacional y la Fuerza de Tarea Águila ..... 21
C. Vínculo entre las Autodefensas del Magdalena Medio y el Ejército Nacional ..... 25
D. La doctrina del enemigo interno ..... 29
E. Violaciones de derechos humanos como práctica sistemática ..... 31
F. Marco normativo: la Ley 975 de 2005 y el Marco Jurídico para la Paz ..... 33
VII. Capítulo VII - HECHOS ..... 35
A. Comunidad de la Vereda La Esperanza ..... 35
B. Presencia militar y paramilitar en la Vereda La Esperanza ..... 36
C. Listado de personas de la Comunidad de la Vereda la Esperanza ..... 37
D. Detención y desaparición forzada de Aníbal de Jesús Castaño Gallego y Oscar Hemel Zuluaga Marulanda ..... 38
1. Antecedentes de Aníbal de Jesús Castaño Gallego ..... 38
2. Antecedentes del menor Oscar Hemel Zuluaga Marulanda ..... 39
3. Detención y Desaparición de Anibal y Oscar Hemel ..... 39
*E.* Desaparición forzada de los menores Juan Crisóstomo y Miguel Ancizar Cardona Quintero, y de NN Fredy y su cónyuge o compañera permanente ..... 41
1. Antecedentes de Juan Crisostomo y Miguel Ancizar Cardona Quintero ..... 41
*2.* Antecedentes de NN Fredy y su cónyuge o compañera permanente ..... 41
3. Detención y desaparición de los menores Juan Crisóstomo y Miguel Ancizar Cardona Quintero ..... 42
F. Ataque a la vivienda de José Eliseo Gallego Quintero y su familia ..... 44
1. Antecedentes del señor José Eliseo Gallego Quintero y su familia ..... 44
2. Ataque a la vivienda del señor José Eliseo Gallego Quintero y su familia ..... 44
G. Detención y desaparición forzada de Irene de Jesús Gallego Quintero ..... 48
1. Antecedentes de Irene de Jesús Gallego Quintero ..... 48
2. Detención y Desaparición de Irene de Jesús Gallego Quintero ..... 48
H. Desaparición de Juan Carlos Gallego Hernández, Jaime Alonso Mejia Quintero y el homicidio de Javier de Jesús Giraldo Giraldo: ..... 51
1. Antecedentes de Juan Carlos Gallego Hernández ..... 51
2. Antecedentes de Jaime Alonso Mejía Quintero ..... 51
3. Antecedentes de Javier de Jesús Giraldo Giraldo ..... 52
4. Detención y desaparición de Juan Carlos y Jaime Alonso, y ejecución de Javier de Jesús ..... 52
I. Desapariciones forzadas de Hernando de Jesús Castaño Castaño, Octavio de Jesús Gallego Hernández, [redacted] Orlando de Jesús Muñoz Castaño ..... 54
1. Antecedentes de Hernando de Jesús Castaño Castaño ..... 54
2. Antecedentes de Octavio de Jesús Gallego Hernández ..... 55

3. Antecedentes de Orlando de Jesús Muñoz Castaño ..... 55

4. Detención y Desaparición de Hernando de Jesús, Octavio de Jesús y Orlando de Jesús. ..... 56

J. Desaparición forzada de Leónidas Cardona Giraldo y Andrés Antonio Gallego Castaño. ..... 60

1. Antecedentes de Andrés Antonio Gallego Castaño ..... 60

2. Antecedentes de Leónidas Cardona Giraldo ..... 61

3. Detención y desaparición de Leónidas y Andrés Antonio ..... 61

K. Daños a los familiares de las victimas ..... 63

L. Proceso ante la jurisdicción ordinaria: RADICADO 233 de la UNDH – DIH ..... 66

M. RADICADO 22.317 de la Fiscalía 53 Delegada ante Jueces del Circuito Especializado, destacada ente el GAULA Rural. 109

A. Procedimiento de la Ley 975 de 2007 denominado Justicia y Paz: Fiscalía 47 de la Unidad de Justicia transicional delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá. Sala de Justicia y Paz: ..... 111

B. Jurisdicción Penal Militar: ..... 117

C. Proceso disciplinario ..... 117

D. Proceso contencioso administrativo ..... 119

VIII. CAPÍTULO VIII – FUNDAMENTOS DE DERECHO ..... 129

A. Consideración general sobre atribución de responsabilidad ..... 129

B. Violación de los derechos a la personalidad jurídica, a la vida, la integridad personal, la libertad personal, la familia y la vida privada y familiar de las víctimas a raíz de la desaparición forzada de las víctimas, por grupos paramilitares, con la colaboración de agentes del Estado. ..... 130

1. La relación entre los hechos del presente caso ..... 131

2. El Estado es directamente responsable por la desaparición forzada de las víctimas ..... 132

***a) Detención y desaparición de Aníbal de Jesús Castaño Gallego y del menor Oscar Hemel Zuluaga Marulanda*** ..... 133

b) Detención y desaparición de los adolescentes Juan Crisóstomo y Miguel Ancizar Cardona Quintero ..... 134

c) Detención y Desaparición de Irene de Jesús Gallego Quintero ..... 135

d) Desapariciones forzadas de Juan Carlos Gallego y Jaime Alonso Mejía Quintero ..... 137

e) Detención y Desaparición de Hernando de Jesús Castaño Castaño, Octavio de Jesús Gallego Hernández y Orlando de Jesús Muñoz Castaño ..... 139

f) Detención y desaparición de Leonidas Cardona y Andrés Antonio Gallego ..... 140

3. El Estado es responsable por el incumplimiento del deber de garantía por la falta de una investigación efectiva de los hechos ..... 140

4. El Estado es responsable por el incumplimiento del deber de adoptar medidas de protección especial para los niños y niñas en el contexto del conflicto armado interno ..... 142

C. El Estado es responsable por la ejecución extrajudicial de Javier Giraldo Giraldo ..... 146

D. El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial de las victimas sus familiares ..... 149

1. Procesos Penales ..... 151

a) Falta de debida diligencia en la primeras etapas de las investigaciones ..... 151

b) Omisión de las líneas de investigación fundamentales e irregularidades en las investigaciones ..... 154

c) Falta de investigación sobre la propiedad, identificación y ubicación de los automóviles utilizados en los hechos delictivos ..... 155

d) Ausencia de diligencias tendientes a identificar y vincular a los agentes militares que participaron o toleraron los hechos denunciados. ..... 156

e) Ausencia de investigación de denuncias presentadas por víctimas y testigos y falta de adopción de medidas para su protección ..... 158

f) Retardo injustificado ..... 160

2. Proceso adelantado ante la jurisdicción de Justicia y Paz ..... 163

3. Conclusión ... 169
4. Acciones en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ... 169
E. El Estado es responsable por la violación del derecho a la verdad de los familiares de las víctimas ... 171
F. El Estado es responsable por la violación del derecho a la propiedad ... 185
G. El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas ... 186
IX. CAPITULO IX - REPARACIONES ... 189
A. Aspectos generales y la obligación de reparar ... 189
B. Titulares del derecho a la reparación ... 190
C. Medidas de reparación solicitadas ... 190
1. Garantías de no repetición y satisfacción ... 191
a) Investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de la desaparición forzada de las víctimas ... 191
b) El Estado debe sancionar de manera proporcional y efectiva tomando en cuenta la gravedad de las violaciones ... 193
c) El Estado debe garantizar que el proceso penal se conduzca de manera que garantice el derecho a la verdad de las víctimas ... 196
d) Se debe ordenar la investigación de los responsables en la obstaculización de las investigaciones ... 199
e) Ordene al Estado la eliminación de la aplicación de la doctrina del enemigo interno ... 200
f) Recuperación de los restos de las víctimas y su entrega a sus familiares ... 201
g) Medidas para la recuperar la memoria de las víctimas ... 201
h) Otorgamiento de becas de estudio para los familiares de las víctimas ... 202
i) Garantizar un adecuado tratamiento médico y psicológico a las víctimas directas así como indirectas ... 203
j) Reconocimiento público de responsabilidad estatal y desagravio ... 204
k) Publicación de las partes pertinentes de la sentencia ... 204
l) Adopción de una medida de reparación comunitaria ... 204
2. Medidas de Compensación ... 205
a) Daño Inmaterial o Moral ... 205
b) Daño Material ... 207
(1) Daño Emergente ... 207
(2) Lucro cesante ... 209
3. Costas y Gastos ... 210
a) Costas y Gastos incurridos por la Corporación Jurídica Libertad ... 211
b) Costas y Gastos incurridos por CEJIL ... 211
c) Gastos futuros ... 212
X. CAPÍTULO X – SOLICITUD DE ACCESO AL FONDO DE VÍCTIMAS ... 212
A. Gastos necesarios para la comparecencia de los declarantes a audiencia pública ... 214
B. Gastos de producción de declaraciones juradas (affidávits) ... 214
C. Gastos que serían asumidos por esta representación ... 214
XI. CAPÍTULO XI – PRUEBA ... 215
A. Declaraciones de las víctimas ... 215
B. Prueba pericial ... 216
C. Prueba documental ... 218
XII. CAPÍTULO XII – PETITORIO ... 218

## I. Capítulo I – INTRODUCCIÓN

La Corporación Jurídica Libertad (en adelante "CJL") y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante "CEJIL") (en su conjunto "representantes de las víctimas y sus familiares" o "representantes") nos dirigimos a la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "Corte Interamericana", "Corte IDH", "Corte" o "Tribunal") en calidad de representantes las víctimas identificadas en el capítulo III del presente escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante "ESAP"), a saber: Aníbal de Jesús Castaño Gallego, Oscar Hemel Zuluaga Marulanda, Miguel Ancízar Cardona Quintero, Juan Crisóstomo Cardona Quintero, Irene de Jesús Gallego Quintero, Juan Carlos Gallego Hernández, Jaime Alonso Mejía Quintero, Javier de Jesús Giraldo Giraldo, Hernando de Jesús Castaño Castaño, Octavio de Jesús Gallego Hernández, Orlando de Jesús Muñoz Castaño, Andrés Antonio Gallego Castaño, y Leónidas Cardona Giraldo[1], y sus familiares, en virtud de lo dispuesto en los artículos 25.1 y 40 del Reglamento de la Honorable Corte, con el fin de presentar nuestras solicitudes, argumentos y pruebas en el presente caso.

Los hechos del caso se refieren a las desapariciones forzadas de 14 personas en la comunidad Vereda la Esperanza, de los cuales tres eran niños y dos eran del sexo femenino; a la ejecución extrajudicial de una (1) persona, así como a la privación ilegal de la libertad de un (1) menor, ocurridas en la comunidad de la Vereda La Esperanza, ubicada en el Municipio Carmen del Vivoral, Departamento de Antioquia, Colombia (en adelante "Vereda la Esperanza" o "La Esperanza").

Dichos delitos fueron cometidos en distintas oportunidades, entre el 21 de junio y el 27 de diciembre de 1996, por el grupo paramilitar del Magdalena Medio que operaba en la zona, el cual actuaba con el conocimiento y la colaboración de miembros del Ejército colombiano. La detención de una de las mujeres víctima del caso fue llevada a cabo por miembros del ejército colombiano. Estas acciones realizadas por los grupos paramilitares hacen parte de una práctica sistemática y generalizada de violaciones a los derechos humanos, cometidas con participación y tolerancia de las fuerzas militares de Colombia y dentro del contexto del conflicto armado de ese país a la época de los hechos del caso.

Desde principios del mes de junio de 1996 integrantes del Ejército comenzaron los hostigamientos en contra de los habitantes de la Vereda La Esperanza, a través de amenazas, interrogatorios o formulando falsas acusaciones respecto de su presunta colaboración con miembros de la guerrilla colombiana. Posteriormente aparecen los paramilitares cometiendo las desapariciones forzadas y varios testigos aseguran la colaboración directa de los agentes de la base militar La Piñuela en la perpetración de las detenciones y posteriores desapariciones de las víctimas durante el segundo semestre del año 1996[2].

[2] *Cfr.,* CIDH, Informe No. 85/13. Admisibilidad y Fondo. Caso Vereda La Esperanza v Colombia. 4 de noviembre de 2013, párr. 196. (en adelante "CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO"). En su

Hasta la fecha, no existe justicia para las víctimas y sus familiares. Actualmente, se desconoce el paradero definitivo de las víctimas de desaparición forzada y tampoco se ha avanzado en la investigación de la ejecución extrajudicial que tuvo lugar bajo el mismo contexto de violencia. En el ámbito interno, las investigaciones penales en el fuero ordinario que se iniciaron el 17 de julio de 1996 y 11 de febrero de 1997, respectivamente, carecen de una decisión definitiva. Han transcurrido 19 años desde que ocurrieron los hechos y sólo se han identificado cinco posibles responsables, configurando así un retardo procesal totalmente injustificado por parte de las autoridades judiciales colombianas que fomenta que la impunidad en este caso continúe.

Respecto al proceso seguido en aplicación de la Ley 975 de Justicia y Paz, la misma lejos de contribuir a la obtención de la verdad y la justicia, se ha constituido en un obstáculo para la investigación y sanción eficaz de los hechos del presente caso. En ese sentido, los procesos en este fuero especial siguen abiertos, sin que hasta la fecha exista sanción alguna contra los responsables.

El 1 de julio de 1999, los representantes interpusimos la petición inicial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "Comisión Interamericana", "Comisión" o "CIDH") y el caso se registró bajo el número 12.251[3].

El 4 de noviembre de 2013, la CIDH emitió el Informe No. 85/13 sobre la Admisibilidad y el Fondo del caso, en el cual declaró la responsabilidad del Estado colombiano por violaciones de los derechos consagrados en los artículos 3, 4, 5, 7, 8, 21 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "Convención" o "CADH") en conjunto con el artículo 1.1 del mismo instrumento; así como de los artículos 1.a) y 1.b) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (en adelante "CIDFP") en perjuicio de las víctimas por ella señaladas en el presente caso[4]. De igual manera, la CIDH determinó la responsabilidad internacional del Estado por las violaciones del artículo 19 de la CADH en conjunto con el artículo 1.1 en perjuicio de los niños víctimas del caso y por las violaciones del artículo 5.1 de la CADH en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de los familiares de las víctimas desaparecidas y ejecutada. En consecuencia, la CIDH recomendó al Estado adoptar una serie de medidas para reparar el daño causado[5].

La CIDH notificó el referido Informe al Estado el 13 de diciembre de 2013 y le otorgó un plazo de dos meses para dar cumplimiento a sus recomendaciones. Posteriormente concedió una serie de prórrogas al Estado[6], sin que se haya avanzado sustancialmente en el cumplimiento de las recomendaciones brindadas. En virtud del incumplimiento de sus recomendaciones,

---

informe la CIDH señaló "En el presente caso, la Comisión ha dado por probada la existencia de vínculos y trabajo conjunto entre las Autodefensas del Magdalena Medio y el ejército nacional en la zona. En ese sentido, los efectos de este vínculo en términos de atribución de responsabilidad resultan aplicables al presente caso".

3 *Cfr.,* CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO, *supra,* párr. 5 y ss.



5 *Cfr.,* CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO, *supra,* párr. 311.

6 La CIDH otorgó tres prórrogas al Estado partir de la notificación del Informe 85/13, de conformidad con los artículos 46 y 51(1) de la CADH. *Cfr*., CIDH. Carta de sometimiento del Caso No. 12.251 a la Corte IDH, del 13 de diciembre de 2014.

transcurrido un año y un mes desde la emisión del informe de fondo, la CIDH sometió al conocimiento de esta Honorable Corte el presente caso, el 13 de diciembre de 2014.

## II. Capítulo II – OBJETO DE LA DEMANDA

De acuerdo con los argumentos y pruebas presentados en el transcurso de este proceso, los representantes respetuosamente solicitamos que esta Honorable Corte Interamericana declare que el Estado colombiano es responsable por la violación de los derechos a:

i. Personalidad jurídica; vida; integridad personal; libertad personal: y derechos de la niñez, contenidos en los artículos 3, 4, 5, 7 y 19 de la CADH, éste último para aquellas personas menores de 18 años al momento de los hechos, en concordancia del incumplimiento con el artículo 1.1 del mismo instrumento, a raíz de la desaparición forzada de Aníbal de Jesús Castaño Gallego, Irene de Jesús Gallego Quintero, Juan Carlos Gallego Hernández, Jaime Alonso Mejía Quintero, Hernando de Jesús Castaño Castaño, Octavio de Jesús Gallego Hernández, Orlando de Jesús Muñoz Castaño, Andrés Antonio Gallego Castaño, Leónidas Cardona Giraldo, así como de los niños Oscar Hemel Zuluaga Marulanda, Miguel Ancízar Cardona Quintero y Juan Crisóstomo Cardona Quintero.

ii. Deber de prevención y sanción del delito de desaparición forzada establecido en el 1.a y 1.b de La Convención Interamericana para la Desaparición Forzada de Personas (CIDFP).

iii. Vida e integridad personal, contenidos en los artículos 4 y 5 de la CADH en concordancia con el incumplimiento del artículo 1.1 del mencionado instrumento, en perjuicio de Javier de Jesús Giraldo Giraldo.

iv. Derecho a la propiedad privada, contenido en el artículo 21 de la CADH en conjunto con el incumplimiento de los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, a raíz de la destrucción la vivienda del señor José Eliseo Gallego y su esposa María Engracia Hernández.

v. Derecho a las garantías judiciales y protección judicial consagrados en los artículos 8 y 25 de la CADH, en concordancia con el incumplimiento del artículo 1.1 del mismo instrumento, por la impunidad imperante en el presente caso tanto en el fuero ordinario como en la jurisdicción de Justicia y Paz en perjuicio de las víctimas y sus familiares.

vi. Derecho a la verdad, consagrado en los artículos 5, 8, 25 y 13 de la CADH en concordancia con el incumplimiento del artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de los familiares de las víctimas.

vii. Derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas de la desaparición forzada, contenido en el artículo 5 de la CADH en concordancia con el incumplimiento del artículo 1.1 del mencionado instrumento.

Con base en las referidas violaciones, solicitamos que la Honorable Corte ordene al Estado colombiano implementar las siguientes medidas de no repetición:

i. Llevar a cabo una investigación completa, imparcial, efectiva e identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones de los derechos humanos en perjuicio de las víctimas del presente caso, dentro de un plazo razonable[7];

ii. La imposición de la pena de los responsables se debe realizar de forma proporcional y efectiva, atendiendo a la gravedad de las violaciones de derechos humanos.

iii. Llevar a cabo un proceso penal que este orientado a garantizar el derecho que tienen los familiares de las víctimas a conocer la verdad.

iv. Llevar a cabo una investigación, completa imparcial y efectiva e identificar, juzgar y sancionar mediante el uso de medidas administrativas, disciplinarias o penales que correspondan a los funcionarios estatales, que por acciones u omisiones, contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad en la que se encuentran los hechos del caso o que participaron en medidas para obstaculizar los procesos destinados a identificar y sancionar a los responsables[8];

v. El Estado debe tomar las medidas necesarias para eliminar la aplicación de la doctrina del enemigo interno.

Además, solicitamos que la Honorable Corte ordene al Estado implementar las siguientes medidas de satisfacción:

i. La recuperación de los restos de las víctimas, su identificación y entrega a sus familiares[9];

ii. Medidas para recuperar la memoria de las víctimas, tales como la realización de un monumento así como la construcción de un museo de la memoria en la comunidad de Vereda la Esperanza para conmemorar los hechos de este caso;

iii. Brindar becas para la educación de aquellos familiares de las víctimas que se vieron obligada a interrumpirla;

iv. Garantizar un adecuado tratamiento médico y psicológico a los familiares de las víctimas desaparecidas y ejecutada; y

v. Llevar a cabo un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y perdón a sus familiares como forma de desagravio;

vi. Publicar la sentencia en un diario de circulación nacional y en las páginas web de las Fuerzas Armadas de Colombia;

vii. Establecer, con la participación de la comunidad de la Vereda La Esperanza, una medida de reparación comunitaria que reconozca el impacto que tuvo la secuencia de hechos de violencia contra la población civil en el presente caso[10].

---

7 *Cfr.,* CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO, *supra,* párr. 311, párr. 4.

8 *Cfr.,* CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO, *supra,* párr. 311, párr. 5.

9 *Cfr.,* CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO, *supra,* párr. 311, párr. 3.

Finalmente, solicitamos que la Honorable Corte ordene al Estado reparar las violaciones sufridas por las víctimas a través del pago de una indemnización pecuniaria por conceptos de daño moral y daño material, así como el reintegro de las costas y gastos procesales a nivel nacional e internacional. Los gastos futuros que se generen del litigio del caso ante la Corte y su posterior implementación también deberán ser contemplados al momento de dictar reparaciones.

## III. Capítulo III – IDENTIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

La Corporación Jurídica Libertad y CEJIL representan a doce (12) personas víctimas de desaparición forzada, incluyendo tres (3) niños y una (1) mujer, así como a la víctima de ejecución extrajudicial[11]. Tomando en cuenta las violaciones de derechos humanos que han sufrido sus familiares a raíz de la acción y omisión por parte de las autoridades colombianas, así como de los grupos paramilitares del Magdalena Medio, el universo de las víctimas da un total de 129. A continuación presentamos un cuadro que enumera los familiares que representamos como víctimas en el presente caso[12].

***(1) Aníbal de Jesús Castaño Gallego (Desaparecido)***

| No. | Nombre | Parentesco | Identificación (cédula) |
|---|---|---|---|
| 1 | María Oveida Gallego Castaño | Cónyuge | No. 43 403.456 |
| 2 | Leidy Yohana Castaño Gallego[13] | | |
| 3 | Santiago Castaño Gallego | Hijo | No. 1.045.022.456 |
| 4 | Hernando Castaño Gallego | Hermano | No. 70.692. 040 |
| 5 | Abelino Castaño Gallego | Hermano | No. 71.111.362 |
| 6 | Bernabe Castaño Gallego[14] | Hermano | No. 70 693 261 |
| 7 | Rubén Antonio Castaño Gallego | Hermano | No. 70.411.371 |
| 8 | María Brígida Castaño Gallego | Hermana | No. 21.657.426[15] |

[10] *Cfr.,* CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO, *supra,* párr. 311, párr. 6.

[12] En el Anexo 1 del presente ESAP se encuentran los documentos de identidad de las víctimas del presente caso.

[13] El 19 de febrero de 2015, cumplió la mayoría de edad.

[14] Se aclara su nombre ya que en el anexo de familiares de las víctimas que presenta la CIDH lo transcribe como Abernabe Castaño Gallego. ANEXO 1 del ESAP.

[15] En el anexo de familiares allegado por la CIDH, por error involuntario se adicionó una B en el número de la cédula de ciudadanía de la señora María Brígida. ANEXO 1 del ESAP.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | Ester Julia Castaño Gallego | Hermana | No. 21.657. 273 |
| 10 | Heriberto Antonio Castaño Gallego | Hermano | No. 3.449.218 |
| 11 | María Elvira Castaño Gallego | Hermana | No. 21.658.917 |

***(2) Oscar Hemel Zuluaga Marulanda (Desaparecido)***

| No. | Nombre | Parentesco | Identificación (cédula) |
|---|---|---|---|
| 12 | María Romelia Marulanda de Zuluaga (fallecida)[16] | Madre | No. 21.657.576 |
| 13 | José Bernardo Zuluaga Aristizabal | Padre | No. 3.447.565 |
| 14 | Arbey Esteban Zuluaga Marulanda | Hermano | No. 1.120.747.298 |
| 15 | Sandra Liliana Zuluaga Marulanda | Hermana | No.1.036.423.231 |
| 16 | Luz Marina Zuluaga Marulanda | Hermana | No. 1.036.422.614 |
| 17 | Blanca Orfilia Zuluaga Marulanda | Hermana | No.1.120.739.415 |
| 18 | Bernando Efrén Zuluaga Marulanda | Hermano | No. 9.186.663 |
| 19 | Daniel Antonio Zuluaga Marulanda | Hermano | No. 70.418.591 |
| 20 | Adolfo De Jesús Zuluaga Marulanda | Hermano | No 70 384 097 |
| 21 | Gladis Elena Zuluaga Marulanda | Hermana | No 32.39 2911 |
| 22 | María Noelia Zuluaga Marulanda | Hermana | No 32.392.795 |
| 23 | Omaira Lucia Zuluaga Marulanda | Hermana | No 38.872.868 |
| 24 | Jhon Arnilson Zuluaga Marulanda | Hermano | No.15.186.290 |
| 25 | Aníbal Alonso Zuluaga Marulanda | Hermano | No. 5.164.853 |

***(3) Juan Crisóstomo y (4) Miguel Ancizar Cardona Quintero***

| No. | Nombre | Parentesco | Identificación (cédula) |
|---|---|---|---|
| 26 | María Dioselina Quintero (fallecida)[17] | Madre | |
| 27 | Héctor Hugo Cardona Quintero | Hermano | No. 1.045.019.640 |

[16] Falleció el pasado 27 de diciembre de 2013. En el anexo de familiares de la CIDH figura como María Romelia Marulanda Zuluaga, pero en su cédula de ciudadanía el "de Zuluaga" es por provenir del apellido de su cónyuge. ANEXO 1 del ESAP.

[17] Falleció el día 10 de enero de 2008.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 28 | Román Antonio Cardona Quintero | Hermano | No. 1.045.016.750 |
| 29 | Diana Marcela Quintero[18] | Hermana | No. 1.045.018.019 |
| 30 | Clara Rosa Cardona Quintero | Hermana | No. 1.037.579.895 |
| 31 | Jorge Enrique Cardona Quintero (fallecido)[19] | Hermano | No. 70 698 120 |
| 32 | Pedro Claver Quintero | Hermano | No. 70.693.278 |
| 33 | Luis Alberto Quintero[20] | Hermano | No. 70.694.452 |
| 34 | Martha Lucia Quintero | Hermana | No. 32.220.420 |
| 35 | Luz Marina Quintero | Hermana | No. 43.597.701 |
| 36 | Duván Alexander Quintero | Hermano | No.1.045.021.773 |
| 37 | Leónidas Quinterio (fallecido)[21] | Hermano | |

### *(5) Irene de Jesús Gallego Quintero (Desaparecida)*

| No. | Nombre | Parentesco | Identificación (cédula) |
|---|---|---|---|
| 38 | Ester Julia Quintero De Gallego (fallecida)[22] | Madre | No 21.656.387 |
| 39 | José Apolinar Gallego Quintero[23] | Padre | No 3.447.618 |
| 40 | María Lucely Gallego Quintero | Hermana | No 43.785.898 |
| 41 | Eladio Gallego Quintero (fallecido)[24] | Hermano | No 71.111.121 |
| 42 | María Luz Mery Gallego Quintero[25] | Hermana | No 43.715 125 |
| 43 | Luz Mary Del Socorro Gallego Quintero[26] | Hermana | No 43.467.734 |

[18] En el anexo de la CIDH con los nombres de los familiares figura como Diana Marcela Cardona Quintero, pero ella no fue reconocida por su padre y solo le figura el apellido de la madre. ANEXO 1 del ESAP.

[19] Falleció el 31 de marzo de 2003.

[20] Se adiciona el apellido de este familiar puesto que en el anexo de familiares de la CIDH figuraba sin su apellido. ANEXO 1 del ESAP.

[21] Leónidas Quintero era mellizo de Juan Crisóstomo, pero falleció a los pocos años después de la desaparición de su hermano. Diligencia de Declaración rendida por la señora María Dioselina Quintero, el 11 de noviembre de 1996. Folio 99. Cuaderno 10 Radicado 233 UNDH-DIH. ANEXO 2 del ESAP.

[22] Falleció el 25 de enero del 2013.

[23] Se corrige su nombre ya que en el anexo de familiares de la CIDH figura como Apaolinar. ANEXO 1 del ESAP.

[24] Falleció el día 23 de agosto de 2013

[25] Se complementa el nombre pues en el anexo de la CIDH solo estaba como Luz Mery Gallego Quintero. ANEXO 1 del ESAP.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 44 | Marleny Gallego Quintero | Hermana | No 43.713.616 |
| 45 | José Iván Gallego Quintero[27] | Hermano | No. 71.114.037 |

***(6) Juan Carlos y (7) Octavio de Jesús Gallego Hernández (Desaparecidos)***

| No. | Nombre | Parentesco | Identificación (cédula) |
|---|---|---|---|
| 46 | Eliseo de Jesús Gallego Quintero (fallecido)[28] | Padre | |
| 47 | María Engracia Hernández de Gallego (fallecida)[29] | Madre | |
| 48 | Florinda de Jesús Gallego Hernández | Hermana | No. 21.660.262 |
| 49 | María Aurora Gallego Hernández | Hermana | No. 21.625.885 |
| 50 | María de los Ángeles Gallego Hernández | Hermana | No 21.625.884 |

***Cónyuge e hijos de Octavio de Jesús***

| No. | Nombre | Parentesco | Identificación (cédula) |
|---|---|---|---|
| 51 | María Florinda Gallego Hernández | Cónyuge | No. 32.391.307 |
| 52 | Yanet Gallego Gallego | Hija | No. 1.045.020.921 |
| 53 | Deicy Gallego Gallego | Hija | No. 1.036.398.159 |
| 54 | Johana Gallego Gallego | Hija | No. 1.045.022.304 |

***(8) Jaime Alonso Mejía Quintero (Desaparecido)***

| No. | Nombre | Parentesco | Identificación (cédula) |
|---|---|---|---|
| 55 | Alba Rosa Mejía Quintero | Hermana | No. 21.624.893 |
| 56 | Oliva del Socorro Mejía de Gallego[30] | Hermana | No 21.658.678 |
| 57 | Luz Dary Mejía Quintero | Hermana | No. 43.785.777 |

[26] En el anexo de familiares de la CIDH figura con el número de cédula de ciudadanía diferente. ANEXO 1 del ESAP.

[27] Se corrige el nombre del familiar y el número de su cédula de ciudadanía de como aparece en el anexo de la CIDH. ANEXO 1 del ESAP.

[28] Falleció el 11 de noviembre de 1997.

[29] Falleció el 28 de septiembre de 2008.

[30] Se adiciona el segundo apellido del familiar que faltaba en el anexo de la CIDH. ANEXO 1 del ESAP.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 58 | Marta Edilma Mejía Quintero | Hermana | No. 21.625.880 |
| 59 | Elda Emilsen Mejía Quintero | Hermana | No.43.404.506 |
| 60 | José Octavio Mejía Quintero[31] | Hermano | No. 70.380.222 |
| 61 | Pedro Nel Mejía Quintero | Hermano | No.3.449.472, |
| 62 | Ana Oveida Mejía Quintero | Hermana | No. 21.625.881 |
| 63 | Consuelo de Jesús Mejia Quintero | Hermana | No 21.626.154 |
| 64 | Rubén de Jesús Mejía Quintero | Hermano | No. 70.692.453 |
| 65 | Dolly Amanda Mejía Quintero[32] | Hermana | No. 43.402.680 |
| 66 | Luz Mery Mejía Quintero | Hermana | No. 43.403.029 |
| 67 | Luis Alveiro Mejía Quintero | Hermana | No. 70.694.164 |
| 68 | Edgar de Jesús Mejía Quintero | Hermano | No. 70.696.103 |

***(9) Hernando de Jesús Castaño Castaño:(Desaparecido)***

| No. | Nombre | Parentesco | Identificación (cédula) |
|---|---|---|---|
| (48) | Florinda De Jesús Gallego Hernández | Cónyuge | No. 21.660.262 |
| 69 | Jhon Fredy Castaño Gallego | Hijo | No. 70.385.541 |
| 70 | Claudia Yaneth Castaño Gallego[33] | Hija | No. 1.036.395.557 |
| 71 | Wilder Castaño Gallego | Hijo | No.1.036.397.128 |
| 72 | Juan Diego Castaño Gallego | Hijo | No. 1.036.398.327 |
| 73 | Celeni Castaño Gallego | Hija | No. 1.036.400.155 |
| 74 | Jasmin Lorena Castaño Gallego | Hija | No. 1.036.402.085 |
| 75 | Héctor de Jesús Castaño Castaño | Hermano | No. 70 691 953 |
| 76 | Berardo de Jesus Castaño Castaño[34] | Hermano | No. 70. 693.232 |

[31] Se adiciona el primer nombre del familiar que faltaba en el anexo de la CIDH. ANEXO 1 del ESAP.

[32] Se corrige el segundo nombre de la víctima en relación con el del anexo de la CIDH. ANEXO 1 del ESAP.

[33] Se corrige el número de la cédula de ciudadanía que se registró en el anexo de familiares de la CIDH. ANEXO 1 del ESAP.

[34] Se corrige el primer nombre de la víctima, pues en el anexo de la CIDH fue registrado como Gerardo. ANEXO 1 del ESAP.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 77 | María Sofía Castaño Castaño | Hermana | No. 21.624.889 |
| 78 | Josefina Castaño Castaño[35] | Hermana | No. 43.403.482 |
| 79 | Blanca Inés Castaño Castaño | Hermana | No. 43.402.045 |
| 80 | Edilma de Jesús Castaño Castaño | Hermana | No. 21.625.595 |

***(10) Orlando De Jesus Muñoz Castaño (Desaparecido)***

| No. | Nombre | Parentesco | Identificación (cédula) |
|---|---|---|---|
| 81 | Arsecio Muñoz García (fallecido) [36] | Padre | No 624.155 |
| 82 | Rubén Darío Muñoz Castaño[37] | Hermano | No. 70.384.549 |
| 83 | Abelardo Muñoz Castaño | Hermano | No. 70.384.508 |
| 84 | Carlos Amador Muñoz Muñoz | Hermano | No. 71.111.122 |
| 85 | Rosa María Muñoz Muñoz | Hermana | No 21.657.968 |
| 86 | María Aurora Muñoz Muñoz | Hermana | No 21.659.586 |
| 87 | Marco Aurelio Muñoz Muñoz[38] | Hermano | No 70.380.465 |
| 88 | María Rubiela Muñoz Castaño | Hermana | No 32.392.060 |
| 89 | Cruz Elena Muñoz Castaño[39] | Hermana | No 43.759.046 |
| 90 | Bertha Inés Muñoz Castaño | Hermana | No 43.869.670 |
| 91 | Florinda Muñoz Castaño[40] | Hermana | No 42.883.944 |
| 92 | Oscar Santiago Muñoz Castaño[41] | Hermano | |

35 Se corrige el número de la cédula de ciudadanía. ANEXO 1 del ESAP.

36 Fallecido el 15 octubre de 2013. Se hace contar que es el padre de la víctima y no su hermano como señala el anexo de familiares de la CIDH. Adicionalmente se corrige el número de la cédula de ciudadanía. ANEXO 1 del ESAP.

37 Se complementa el nombre de este familiar. ANEXO 1 del ESAP.

38 Se corrige el número de la cédula de ciudadanía. ANEXO 1 del ESAP.

39 Se corrige el primer nombre del familiar de la víctima. ANEXO 1 del ESAP.

40 Se corrige el número de la cédula de ciudadanía. ANEXO 1 del ESAP.

41 Hijo del señor Arsecio Muñoz García (padre de la víctima) y la señora María Ana Cilia Giraldo Castaño, quien otorga poder en su representación. Se hace notar que por error ante la CIDH, este menor fue incluido como familiar de Leónidas Cardona Giraldo. ANEXO 1 del ESAP.

### *(11) Andrés Antonio Gallego Castaño (Desaparecido)*

| No. | Nombre | Parentesco | Identificación (cédula) |
|---|---|---|---|
| 93 | María De La Cruz Hernández De Gallego | Cónyuge | No. 21.624.025 |
| 94 | Ricaurte Antonio Gallego Hernández | Hijo | No 70.698.710 |
| 95 | Eusebio Gallego Hernández[42] | Hijo | No. 71 396. 659 |
| 96 | María Nubia Gallego Hernández | Hija | No. 43.404.177 |
| 97 | Lucelly Gallego Hernández. | Hija | No. 43.788.516 |
| 98 | Omaira Gallego Hernández | Hija | No 21.627.749 |
| 99 | Rosa Linda Gallego Hernández. | Hija | No 32.390.185 |
| 100 | Belarmina Gallego Hernández[43] | Hija | No 32.391.756 |
| 101 | María Florinda Gallego Hernández | Hija | No 32.391.307 |
| 102 | Miguel Antonio Gallego Castaño | Hermano | No. 626.172 |
| 103 | Juan de Jesús Gallego Castaño | Hermano | No 3.447.737 |
| 104 | Juan Cristóbal Gallego Castaño[44] | Hermano | No 3.448.759 |

### *(12) Leónidas Cardona Giraldo (Desaparecido)*

| No. | Nombre | Parentesco | Identificación (cédula) |
|---|---|---|---|
| 105 | María del Roció Cardona Fernández | Cónyuge | No. 32.392.046 |
| 106 | Yormarti Cardona Cardona | Hijo | No. 1.045.023.296 |
| 107 | Luz Dary Cardona Giraldo | Hermana | No. 32.391.046 |
| 108 | María Cemida Cardona Giraldo | Hermana | No. 32.391.086 |
| 109 | Aura Luz Cardona Giraldo | Hermana | No. 43.751.936 |
| 110 | Cándida Rosa Giraldo Gallego[45] | Madre | No 21.657.694 |

[42] En el anexo de familiares de la CIDH se repite su primer apellido. ANEXO 1 del ESAP.

[43] Se corrige el número de la cédula de ciudadanía. ANEXO 1 del ESAP.

[44] Se adiciona el primer nombre. ANEXO 1 del ESAP.

[45] Queremos aclara a la Ilustre Corte, que en el poder otorgado actúa en nombre propio y no en representación del menor Oscar Santiago Muñoz Giraldo, quien es hijo del señor Arsecio Muñoz García, padre del desaparecido Orlando Muñoz Castaño, y la señora María Ana Cilia Giraldo Castaño. Lo anterior se debió a un error involuntario.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 111 | María Isabel Giraldo Gallego | Hermana | No. 43.787.324 |
| 112 | Bernardo De Jesús Giraldo Gallego | Hermano | No. 15.443.423 |
| 113 | Elda Nury Giraldo Gallego[46] | Hermana | No. 36.296.759 |
| 114 | Marcela Giraldo Gallego[47] | Hermana | No. 1.090.382.482 |

***(13) JAVIER DE JESUS GIRALDO GIRALDO: (Ejecutado extrajudicialmente)***

| No. | Nombre | Parentesco | Identificación (cédula) |
|---|---|---|---|
| 115 | Nelly Soto de Castaño | Cónyuge | No. 21.657.798 |
| 116 | Cruz Verónica Giraldo Soto[48] | Hija | No. 1.128.400.617 |

## IV. Capítulo IV – LEGITIMACIÓN Y NOTIFICACIÓN

Las víctimas del presente caso han designado como sus representantes ante esta Honorable Corte Interamericana, a la señora Liliana María Uribe Tirado y el señor Bayron Ricardo Gongora Arango en su carácter de abogados de la Corporación Jurídica Libertad; a la señora Viviana Krsticevic y el señor Francisco Quintana, en su carácter de representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), así como los representantes de sus organizaciones que estas personas designen[49]. Los representantes hemos establecido nuestro domicilio unificado para recibir notificaciones en la siguiente dirección:



## V. Capítulo V – COMPETENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA

De conformidad con el artículo 62.3 de la CADH, la Corte Interamericana es competente para conocer cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones contenidas en la Convención Americana que le sea sometida, siempre que el Estado Parte haya reconocido o reconozca dicha competencia. El Estado colombiano ratificó la Convención Americana el 31 de julio de 1973 y aceptó la jurisdicción contenciosa de la Corte

46 Se corrige nombre por error ortográfico. ANEXO 1 del ESAP.

47 Se elimina el primer nombre. ANEXO 1 del ESAP.

48 Se adiciona el primer nombre de la familiar. ANEXO 1 del ESAP.

49 *Cfr*., poderes otorgados de las víctimas remitidos a la Corte IDH en fecha 9 de febrero de 2015.

Interamericana el 21 de junio de 1985[50]. Dado que los hechos de este caso empezaron a ocurrir el 21 de junio de 1996, este Tribunal tiene competencia *ratione temporis* para pronunciarse sobre los hechos de este caso.

De igual manera, las victimas señaladas en el capítulo III son personas naturales que se encontraban bajo la jurisdicción del Estado colombiano a la fecha de los hechos aducidos. En consecuencia, la Corte tiene competencia *ratione personae* para pronunciarse sobre la responsabilidad internacional de Colombia respecto a los hechos del presente caso.

Asimismo, la Corte IDH posee competencia *ratione materiae* y *ratione loci* para conocer de la presente demanda internacional, por cuanto en esta se alegan violaciones a la Convención Americana que tuvieron lugar dentro del territorio de un Estado parte de dicho tratado, como lo es Colombia.

Adicionalmente, Colombia ratificó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas el 12 de abril de 2005[51]. Debido a la naturaleza continuada o permanente de las violaciones de derechos humanos derivadas de las desapariciones forzadas[52], el Tribunal también tiene competencia para aplicar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas en relación con las múltiples violaciones de derechos humanos ocurridas después del 2005.

## VI. Capítulo VI - CONTEXTO

En los siguientes dos apartados, contexto y hechos, nos referiremos a los fundamentos fácticos que sustentan las violaciones a los derechos humanos alegadas respecto de las víctimas previamente identificadas.

Al respecto, es importante recordar que esta Honorable Corte ha señalado en su jurisprudencia reiterada que las víctimas y sus representantes tenemos derecho a "exponer aquellos [hechos] que permitan explicar, aclarar o desestimar los que han sido mencionados en [el informe de fondo de la CIDH], o bien, responder a las pretensiones del demandante"[53].

En este sentido, si bien las organizaciones representantes nos adherimos a las consideraciones de hecho expuestas por la Ilustre Comisión en su Informe de Admisibilidad y Fondo No. 85/13, en el presente ESAP profundizaremos sobre algunas de ellas, en la medida

---

[50] El Estado colombiano aceptó la jurisdicción contenciosa de la Corte IDH el 21 de junio de 1985, en concordancia con los artículos 45 y 62 de la Convención. Disponible en: http://www.cidh.org/Basicos/Basicos3.htm.

[51] El Estado colombiano ratifico la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas el 12 de abril de 2005. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-60.html.

[52] "[C]abe distinguir entre actos instantáneos y actos de carácter continuo o permanente […] Dentro de esta categoría de actos se encuentra la desaparición forzada de personas, cuyo carácter continuo o permanente ha sido reconocido de manera reiterada por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos […]". Corte IDH. *Caso Radilla Pacheco Vs. México*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párrs. 22 y 23 (*citando* Eur. Ct. HR, *Case of Loizidou v. Turkey*, Judgment of 18 December 1996, paras. 25 y 41); *inter alia*.

[53] *Cfr.,* Corte IDH. *Caso Vera Vera y otra Vs. Ecuador.* Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2011. Serie C No. 226. Párr. 32.

en que resulten relevantes para demostrar las violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de las víctimas.

En relación con el contexto en el que se producen los hechos de un caso concreto, este Alto Tribunal ha señalado que:

> " […]para resolver los distintos casos sometidos a su conocimiento ha requerido tomar en cuenta el contexto, pues el entorno político e histórico es determinante para el establecimiento de las consecuencias jurídicas en el caso, comprendiendo tanto la naturaleza de las violaciones a la Convención como las correspondientes reparaciones. Por esta razón, el análisis de los hechos [del caso en cuestión], no puede aislarse del medio en el que dichos hechos ocurrieron ni se puede determinar las consecuencias jurídicas en el vacío propio de la descontextualización"[54].

En este sentido, las organizaciones representantes sostenemos que los hechos del presente caso no pueden desligarse del contexto del conflicto armado ampliamente comprobado ante los órganos del Sistema Interamericano de Protección y Promoción de Derechos Humanos (en adelante, el "SIDH").

Por ello, a continuación realizaremos un recuento de los aspectos más importantes que implica el referido contexto, en relación con el caso bajo estudio.

### A. El conflicto armado y los "grupos de autodefensas"

Colombia ha vivido un conflicto armado interno durante más de cincuenta años[55]. Esta Honorable Corte ha conocido a profundidad este contexto y ha tenido por probado que:

> " […] el 24 de diciembre de 1965, el Estado emitió el Decreto Legislativo No. 3398 "por el cual se organiza la defensa nacional", el cual tenía una vigencia transitoria, pero fue adoptado como legislación permanente mediante la Ley 48 de 1968 (con excepción de los artículos 30 y 34). Los artículos 25 y 33 del referido Decreto Legislativo dieron fundamento legal a la creación de "grupos de autodefensa". En la parte considerativa de esta normativa se indicó que "la acción subversiva que propugnan los grupos extremistas para alterar el orden jurídico, requiere un esfuerzo coordinado de todos los órganos del poder público y de las fuerzas vivas de la Nación" y, al respecto, el referido artículo 25 estipuló que "[t]odos los colombianos, hombres y mujeres, no comprendidos en el llamamiento al servicio militar obligatorio, pod[í]an ser utilizados por el Gobierno en actividades y trabajos con los cuales contribuy[eran] al restablecimiento de la normalidad". Asimismo, en el parágrafo 3 del

---

[54] *Cfr.,* Corte IDH. *Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163. Párr. 76.

[55] *Cfr.,* CIDH. "Verdad, justicia y reparación: cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia". OEA/Ser.L/V/II. Doc. 49/13. 31 de diciembre de 2013. Párr. 41. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/docs/pdfs/Justicia-Verdad-Reparacion-es.pdf.

> mencionado artículo 33 se dispuso que "[e]l Ministerio de Defensa Nacional, por conducto de los comandos autorizados, podrá amparar, cuando lo estime conveniente, como de propiedad particular, armas que estén consideradas como de uso privativo de las Fuerzas Armadas". Los "grupos de autodefensa" se conformaron de manera legal al amparo de las citadas normas, por lo cual contaban con el apoyo de las autoridades estatales.
>
> En el marco de la lucha contra los grupos guerrilleros, el Estado impulsó la creación de tales "grupos de autodefensa" entre la población civil, cuyos fines principales eran auxiliar a la Fuerza Pública en operaciones antisubversivas y defenderse de los grupos guerrilleros. El Estado les otorgaba permisos para el porte y tenencia de armas, así como apoyo logístico"[56].

Estos grupos paramilitares se vincularon a sectores económicos y políticos, establecieron estrechos lazos con el narcotráfico, y se fortalecieron notablemente hacia fines de la década de 1970 y principio de los años 1980[57].

Así, el 22 de febrero de 1978, en la región del Magdalena Medio[58], se creó el grupo denominado "Autodefensas del Magdalena Medio" (en adelante, las "AMM"), liderado por Ramón María Isaza Arango y conformado por campesinos dueños de pequeñas y medianas extensiones de tierra[59], creadas con el objetivo de combatir a la guerrilla. Las AMM recibieron ayuda por parte del Ejército Nacional mediante armas, municiones, entrenamiento y respaldo en sus operaciones; así como financiamiento por parte de grupos que tenían intereses

---

[56] *Cfr.,* Corte IDH. *Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109. Párrs. 84.a)-84.b) y 116-118. Corte IDH. *Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134. Párr. 96.1-96.2. Corte IDH. *Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140. Párr. 95.1-95.2. Corte IDH. *Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006 Serie C No. 148. Párr. 125.1. Corte IDH. *Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163. Párrs. 78, 82 y 101.a). Decreto Legislativo 3398 de 1965, ANEXO 9 del ESAP.

[57] *Cfr.,* CIDH. "Verdad, justicia y reparación: cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia". OEA/Ser.L/V/II. Doc. 49/13. 31 de diciembre de 2013. Párr. 44.

[58] El Magdalena Medio es una región que se encuentra al norte del territorio del Estado colombiano, principalmente en el departamento de Antioquia, aunque también abarca los departamentos de Bolívar, Boyacá, Cesar y Santander (*cfr.* CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO. Párr. 65 (nota al pie 8); ver también, Tribunal Superior de Bogotá – Sala de Justicia y Paz. Sentencia Ramón María Isaza Arango y otros, de 29 de mayo de 2014. Rad. 11-001-60-00253-2007 82855 - Rad interno 1520. Párrs. 475-478. Disponible en: http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2014/12/2014-05-29-82855-RAMON-ISAZA.pdf , ANEXO 8 del ESAP.

[59] CIDH. *Caso No. 12.251, Vereda La Esperanza (Colombia)*. Informe de admisibilidad y fondo No. 85/13 de 4 de noviembre de 2013. Párr. 65. Ver también, Tribunal Superior de Bogotá – Sala de Justicia y Paz. Sentencia Ramón María Isaza Arango y otros, de 29 de mayo de 2014. Rad. 11-001-60-00253-2007 82855 - Rad interno 1520. Párrs. 514 y 716. ANEXO 8 del ESAP.

económicos en las zonas donde operaban los grupos subversivos, tales como narcotraficantes, ganaderos, hacendados, transportadores y comerciantes[60].

De conformidad con los documentos que constan en el expediente de la CIDH, las AMM operaban en un territorio de más de 4000 kilómetros cuadrados que cubría, entre otros municipios, a Cocorná, que colinda con el municipio de El Carmen de Viboral, ubicándose entre ambos la Vereda La Esperanza[61]; contaban con armas automáticas y semiautomáticas, de corto y largo alcance, sistemas de comunicación[62] y una gran infraestructura de transporte[63]; estaban compuestas por "ex soldados, ex policías, ex guerrilleros, mercenarios a sueldo y guías activos del Ejército Nacional" –quienes habrían recibido una remuneración en dinero "bonificando por cada guerrillero muerto"–, practicando también el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes[64]. En el Informe de Admisibilidad y Fondo de la CIDH se hizo referencia a:

> "Las AMM, que trabajaban bajo un mando jerarquizado[65], se regían por la siguiente orden: "si es guerrillero denle baja, si es colaborador denle baja"[66]. En esta línea, su líder, Ramón Isaza, afirmó que "en las partes donde manda la guerrilla, son Guerrilleros. Entonces cuando toca (…) entrar a una región donde todo el mundo le colabora a la Guerrilla, (…) por todos los lados son enemigos (…) del Ejército, son enemigos de las Autodefensas, (…) entonces toca (…) entrar arrasando por parejo, porque (…) no hay otra solución, porque si uno no arrasa, a uno lo arrasan"[67].

---

60 *Cfr.,* CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO, *supra,* párr. 65 y anexo 1. Ver también, Tribunal Superior de Bogotá – Sala de Justicia y Paz. Sentencia Ramón María Isaza Arango y otros, de 29 de mayo de 2014. Rad. 11-001-60-00253-2007 82855 - Rad interno 1520. Párrs. 525, 527 y 637-647. ANEXO 8 del ESAP.

61 *Cfr.,* CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO, *supra,* párr. 66 y anexo 1 del CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO.

62 *Ibíd.*, párr. 66, anexo 1 y anexo 4 (cuarta página) del CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO.

63 *Ibíd.*, párr. 66 y anexo 1 del CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO.

64 *Ibíd.*, párr. 66, anexo 1 del CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO y anexo 7 del CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO (Denuncia de Arley de Jesús Arango ante el Juzgado 27 de Instrucción Penal Militar, de 30 de abril de 1996. Declaración de Arley de Jesús Arango ante el Departamento Administrativo de Seguridad, de 10 de septiembre de 1996. Folios 118-120, Cuaderno 3, Radicado 233 UNDH-DIH). Ver también, Tribunal Superior de Bogotá – Sala de Justicia y Paz. Sentencia Ramón María Isaza Arango y otros, de 29 de mayo de 2014. Rad. 11-001-60-00253-2007 82855 - Rad interno 1520. Párrs. 387-388 y 957-958. ANEXO 8 del ESAP. Asimismo, ver: International Center for Transitional Justice (ICTJ). "Reparación integradora para niños, niñas y jóvenes víctimas de reclutamiento ilícito en Colombia". Octubre de 2014. Págs. 8-9. Disponible en: https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Informe-Colombia-Reparacion-reclutamiento-ilegal-2014.pdf, ANEXO 4 del ESAP.

65 *Cfr.,* CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO, *supra,* párr. 66 y anexo 1 del CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO. Ver también, Tribunal Superior de Bogotá – Sala de Justicia y Paz. Sentencia Ramón María Isaza Arango y otros, de 29 de mayo de 2014. Rad. 11-001-60-00253-2007 82855 - Rad interno 1520. Párrs. 624 y 631. ANEXO 8 del ESAP.

66 *Cfr.,* CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO, *supra,* párr. 66 y anexo 5 del CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO.

67 *Ibíd.*, párr. 66 y anexo 6 del CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO.

En este sentido, tanto la Fiscalía como el personero municipal de Cocorná indicaron que, para la época de los hechos, las AMM eliminaban a sus enemigos en forma selectiva, pues contaban con listados de personas acusadas de ser integrantes o colaboradores de grupos guerrilleros; y que, una vez que encontraban a alguien de sus listas, "lo desaparecen […], se apoderan de las víctimas, les sacan toda la información posible y luego las asesinan", afectando a gente ajena al conflicto con la guerrilla[68]. Asimismo, se les acusaba de "innumerables homicidios selectivos de campesinos, de dirigentes políticos de izquierda y sindicalistas, así como de secuestros y desapariciones"[69].

Entre noviembre de 2003 y agosto de 2006 se desmovilizaron aproximadamente 32,000 integrantes de grupos paramilitares[70]. Así, en el marco de la Ley 975 de 2005 (ver *infra*), el 7 de febrero de 2006 inició el proceso de desmovilización de las AMM[71].

Sin embargo, pese a la postura de los sucesivos gobiernos de que en Colombia únicamente subsisten grupos organizados de delincuencia común (denominados "bandas criminales" o "BACRIM")[72], organismos internacionales y grupos de derechos humanos han venido manifestando su preocupación y denunciando que persisten grupos paramilitares que no se han desmovilizado y que personas desmovilizadas se han reagrupado en organizaciones que operan como los paramilitares[73].

### B. El Ejército Nacional y la Fuerza de Tarea Águila

Las principales unidades del ejército acantonadas en el Magdalena Medio fueron las Brigadas V y XIV. La Brigada V se instaló en la región del Magdalena Medio desde inicios del siglo

---

68 *Ibíd.*, párr. 67 y anexo 1 (págs. 2-3) del CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO.

69 *Ibíd.*, párr. 67 y anexo 1 (pág. 7) del CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO.

70 International Crisis Group. "Los nuevos grupos armados de Colombia". Informe sobre América Latina N°20. 10 de mayo de 2007. Pág. 1. Disponible en: http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/latin-america/colombia/20_colombia_s_new_armed_groups_spanish.pdf Anexo 20 del ESAP.

71 Tribunal Superior de Bogotá – Sala de Justicia y Paz. Sentencia Ramón María Isaza Arango y otros, de 29 de mayo de 2014. Rad. 11-001-60-00253-2007 82855 - Rad interno 1520. Párr. 636. ANEXO 8 del ESAP.

72 Project Counselling Service (PCS), Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) y Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos (FCSPP). "El Desmantelamiento del Paramilitarismo: Aprendizajes y Recomendaciones desde las Víctimas". Agosto de 2014. Págs. 20-21. Disponible en: http://www.colectivodeabogados.org/IMG/pdf/desmantelamiento.pdf. Anexo 21 del ESAP. Ver también, International Crisis Group. "Desmantelar los nuevos grupos armados ilegales en Colombia: lecciones de un sometimiento". Informe sobre América Latina N°41. 8 de junio de 2012. Págs. 1-3. Disponible en: http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/latin-america/colombia/041-dismantling-colombias-new-illegal-armed-groups-lessons-from-a-surrender-spanish Anexo 22 del ESAP.

73 International Crisis Group. "Los nuevos grupos armados de Colombia". Informe sobre América Latina N°20. 10 de mayo de 2007. Págs. 1-3. Ver también, PCS, CIJP, CCAJAR y FCSPP. Anexo 20 del ESAP. "El Desmantelamiento del Paramilitarismo: Aprendizajes y Recomendaciones desde las Víctimas". Agosto de 2014. Págs. 21-25 y 31-39. Anexo 21 del ESAP. Asimismo, ver: Andreu Guzmán, F. (Comisión Colombiana de Juristas, CCJ). "Algunas anotaciones sobre Bacrim y paramilitares". 19 de junio de 2013. Disponible en: http://www.coljuristas.org/documentos/pronunciamientos/algunas_anotaciones_sobre_bacrim_y_paramilitares.html Anexo 18 del ESAP.

XX[74]. Para 1978, ya se venían ejecutando prácticas ilegales como las detenciones arbitrarias, el desplazamiento forzado, los bombardeos en zonas rurales, y la desaparición y el asesinato de supuestos guerrilleros y colaboradores de la guerrilla[75]. Sin embargo, ese año, con la expedición de los decretos 0070 y 1923[76], además de la represión contra la población campesina, se sumaron también medidas legales que dificultaban su vida cotidiana, tales como retenes militares, carnetizaciones, censos poblacionales, controles para la compra de alimentos, entre otros[77].

Posteriormente, en junio de 1983, se activó en esta región la Brigada XIV, cambiando la dinámica de las fuerzas militares en la región, pues "pasaron de unidades móviles a destacamentos con una presencia más o menos permanente"[78]. Su relación con los grupos élite de la región se vio fortalecida no sólo por la estrategia de inteligencia que implicaba el acoplamiento del ejército al entorno social, sino también por los recursos que, a cambio de favores, dichos grupos brindaban al ejército para que pudiera operar adecuadamente[79]. Así, mientras las fuerzas militares afianzaban sus relaciones con quienes ejercían el poder local, con los sectores marginados la relación era conflictiva y marcada por la represión, ello también debido a la concepción de "enemigo interno" (ver *infra*) propia de la Doctrina de Seguridad Nacional[80].

Años después, la Brigada XIV formó parte de la Fuerza de Tarea Águila (en adelante, la "FTA"). Así, mediante la Directiva No. 0061 del Comando del Ejército, se creó la FTA el 1 de agosto de 1994[81]. A partir del 6 de agosto de 1994, se organizó una unidad del Batallón de Ingeniero Pedro Nel Ospina de la Brigada IV y una unidad del Batallón de Infantería Bárbula de la Brigada XIV con jurisdicción en los municipios de San Luis, San Francisco y Cocorná en el departamento de Antioquia[82]. En 1995, se agregó una compañía del Batallón de

---

74 Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. "La Rochela: memorias de un crimen contra la justicia". 2010. Pág. 272. Disponible en: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/en/2014-01-29-15-08-26/la-rochela-memorias-de-un-crimen-contra-la-justicia , ANEXO 16 del ESAP.

75 *Ibíd.*, págs. 273-274.

76 Mediante los cuales se otorgaba inmunidad a policías y militares por homicidios cometidos durante operaciones planeadas, y se estableció el estatuto de seguridad (*cfr. Ibíd.*, pág. 273, notas al pie 35 y 36).

77 *Ibíd.*, pág. 273.

78 *Ibíd.*, págs. 272-273.

79 *Ibíd.*, págs. 275-276.

80 *Ibíd.*, págs. 276-277.

81 CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO. Párr. 68 y anexo 14 del CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO (Informe No. FGN CTI SI GDH C4-C13 del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, de 1 de febrero de 1999. Expediente No. 233 UNDH. Cuaderno No. 3).

82 *Ibíd.*, párr. 68, anexo 10 del CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO (Inspección judicial realizada por la Fiscalía General de la República a las Primera División del Ejército Nacional, de 7 de septiembre de 1999. Expediente No. 233 UNDH. Cuaderno No. 3A. Folio 73) y anexo 11 del CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO (Diligencia judicial realizada a la guardia de la XIV Brigada solicitada por la Unidad de Derechos Humanos, de 26 de febrero de 2001. Expediente No. 233 UNDH. Cuaderno No. 8; y, Caso Táctico No. BR14-BIBAR-S3-326 del Ejército Nacional, firmado por el coronel Carlos Suárez, de 10 de junio de 1996. Folios 26-34. Cuaderno No. 8).

Contraguerrillas No. 42 Héroes de Barbacoas, de la Brigada IV. El mando de la FTA se asumía, alternándose cada tres meses, por un oficial de dichas brigadas[83]; su función consistía en ejercer el "control directamente" sobre los soldados de esa zona[84] y era responsable de estar al tanto de todos los hechos y registrar las operaciones de las tropas[85]. La jurisdicción territorial de la FTA abarcaba los kilómetros 59 al 137 de la autopista Medellín-Bogotá[86], incluyendo 5 kilómetros a cada lado de la misma[87]. En el perímetro de dicha competencia, se encuentra ubicada la Vereda La Esperanza, del Municipio del Carmen de Viboral.

La FTA, asentada en la base militar La Piñuela del municipio de Cocorná[88], tenía como objetivo diseñar un plan estratégico de control y seguridad sobre la zona así como estructurar "un dispositivo de combate ofensivo" contra-guerrillas[89]. Dos ex comandantes de la FTA, incluido el mayor Carlos Guzmán, refirieron que ésta no contaba con vehículos asignados para sus operaciones, por lo que se desplazaban en vehículos particulares con "previo consentimiento del conductor"[90] o que "a lo mejor se presentaban personas [...] y se ofrecían para llevar las tropas hacia el área donde se pudieran ubicar personal de las cuadrillas [...] de subversión"[91].

Así, bajo la FTA, continuaron las actividades que desde años anteriores las fuerzas militares venían adelantando en la zona, tales como la instalación de retenes permanentes y móviles

---

83 *Ibíd.*, párr. 68.

84 *Ibíd.*, párr. 68 y anexo 12 del CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO (Declaración de Carlos Alberto Guzmán Lombana ante la Dirección Regional de Fiscalías, Sección Recepción de Diligencia, de 26 de marzo de 1998. Expediente No. 233 UNDH. Cuaderno No. 2. Folios 118-131).

85 *Ibíd.*, párr. 68 y anexo 13 del CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO (Diligencia de declaración de Carlos Arturo Suárez Bustamante ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, de 27 de septiembre de 2002. Expediente No. 233 UNDH. Cuaderno No. 9. Folios 125-130).

86 *Ibíd.*, párr. 68 y anexo 14 del CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO (Informe: Apreciación de situación por término del Comando de la FTA que asegura la autopista Medellín-Bogotá, firmado por el Comandante de la FTA saliente, mayor Jairo Hurtado Olaya, de 31 de octubre de 2005. Expediente No. 233 UNDH. Cuaderno No. 3).

87 *Ibíd.*, párr. 68, anexo 15 del CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO (Diligencia de indagatoria de Carlos Alberto Guzmán Lombana, Radicado 233 UDH, de 13 de febrero de 2001) y anexo 11 (Continuación de diligencia indagatoria a Carlos Guzmán Lombana, ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos, de 20 de febrero de 2001. Expediente No. 233 UNDH. Cuaderno No. 8).

88 *Ibíd.*, párr. 69 y anexo 16 del CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO (Declaración del Sargento Segundo Luis Fernando Guerrero Burbano ante la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, Sección Antioquia, de 16 de noviembre de 1995. Indagación preliminar No. 009-151553).

89 *Ibíd.*, párr. 69, anexo 17del CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO (Plan No. 000969/BR4-BIOSP-S3-375 que emite el Comando del Batallón de Ingenieros No. Pedro Nel Ospina para el control de la autopista Medellín-Bogotá bajo responsabilidad de la FTÁ del 1 de febrero al 30 de abril de 1995, de 1 de febrero de 1995) y anexo 14 (Oficio No. BR4 del Comandante de la Cuarta Brigada, brigadier general Jorge Mora Rangel, de febrero de 1995. Expediente No. 233 UNDH. Cuaderno No. 3).

90 *Ibíd.*, párr. 69, anexo 15 del CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO (Diligencia de indagatoria de Carlos Alberto Guzmán Lombana, Radicado 233 UDH, de 13 de febrero de 2001) y anexo 11 (Continuación de diligencia indagatoria a Carlos Guzmán Lombana, ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos, de 20 de febrero de 2001. Expediente No. 233 UNDH. Cuaderno No. 8).

91 *Ibíd.*, párr. 69 y anexo 13 del CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO (Diligencia de declaración de Carlos Arturo Suárez Bustamante ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, de 27 de septiembre de 2002. Expediente No. 233 UNDH. Cuaderno No. 9. Folios 125-130).

sobre la autopista Medellín-Bogotá[92], así como la elaboración y actualización de un censo de la población que habitaba la zona aledaña a dicha autopista[93], incluyendo un croquis con "el nombre de los habitantes, casa en la que vivían [y] cuántos vivían en cada casa"[94]. El mayor Jairo Hurtado, ex comandante de la FTA, manifestó que la función del censo era para ejercer un control sobre los habitantes y sus domicilios, así como para controlar la gran mayoría de puntos críticos[95].

Sobre las acciones de la FTA, en octubre de 1996, el personero municipal de Cocorná dirigió un oficio al Defensor del Pueblo Regional de Medellín en el que informó que "en nuestro municipio (…) no han ocurrido tomas por grupos armados ilegales", que las acciones del ejército "se han limitado a la militarización de diferentes zonas con allanamientos a viviendas campesinas y amenazas a sus residentes por parte de los militares" y que el aspecto más grave de enfrentamientos entre el ejército y grupos guerrilleros son las "represalias que los militares toman contra los campesinos de la región, con la justificación de que le prestan apoyo a la guerrilla"[96].

El Personero del Municipio del Carmen de Viboral, al igual que testigos, mencionó actos de tortura, violación sexual, detenciones ilegales, entre otros atropellos cometidos por el ejército contra la población civil percibida como colaboradora de la guerrilla[97]. Por su parte, pobladores

---

92 *Ibíd.*, párr. 70 y anexo 12 del CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO (Declaración de Carlos Alberto Guzmán Lombana ante la Dirección Regional de Fiscalías, Sección Recepción de Diligencia, de 26 de marzo de 1998. Expediente No. 233 UNDH. Cuaderno No. 2. Folios 118-131).

93 *Ibíd.*, párr. 70 y anexo 18 del CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO (Informe trimestral No. 005003/BR4/BIOSP-S3-375 sobre actividades de la Fuerza de Tarea Águila, firmado por el coronel Gustavo Porras, de 31 de octubre de 1995. Expediente No. 233 UNDH. Cuaderno No. 6).

94 *Ibíd.*, párr. 70 y anexo 14 del CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO (Declaración de Jairo Hurtado Olaya ante la Fiscalía Regional de la Unidad Nacional, de 17 de julio de 1998. Expediente No. 233 UNDH. Cuaderno No. 3; Declaración de Hugo Alonso del Milagro Abondano Mican ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos, de 31 de julio de 1998, Expediente No. 233 UNDH. Cuaderno No. 3; y, Declaración de Hugo Alonso del Milagro Abondano Mican ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos, de 4 de agosto de 1998. Expediente No. 233 UNDH. Cuaderno No. 3).

95 *Ibíd.*, párr. 70, anexo 15 del CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO (Diligencia de indagatoria de Carlos Alberto Guzmán Lombana, Radicado 233 UDH, de 13 de febrero de 2001) y anexo 11 (Continuación de diligencia indagatoria a Carlos Guzmán Lombana, ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos, de 20 de febrero de 2001. Expediente No. 233 UNDH. Cuaderno No. 8).

96 *Ibíd.*, párr. 71 y anexo 9 del CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO (Oficio del Personero Municipal de Cocorná, Edgar Alzate García, al Defensor del Pueblo Regional Medellín, de 21 de octubre de 1996. Expediente No. 233 UNDH. Cuaderno No. 12. Folios 313-314).

97 *Ibíd.*, párr. 71, anexo 19 del CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO (Escrito de la Corporación Jurídica Libertad a la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, presentado el 2 de abril de 2007), anexo 20 (Declaración de Luis Eleazar Gallego Castaño ante la Personería Municipal de El Carmen de Viboral, de 27 de junio de 1996), anexo 21 (Informe de Inteligencia No. 164 de la Oficina de Información Análisis y Apoyo Operativo, Dirección Seccional Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, de 13 de noviembre de 2006. Expediente No. 233 UNDH. Cuaderno No. 1), anexo 7 (Decisión del Comandante de la IV Brigada, Brigadier General Eduardo Herrera Verbel, de 19 de mayo de 1999. Expediente No. 233 UNDH. Cuaderno No. 4), anexo 22 (Oficio PM-044 del Personero Municipal de El Carmen de Viboral, Heli Gómez Osorio, de 5 de junio de 1996. Expediente No. 008-10799-98. Procuraduría Delegada Disciplinaria de Derechos Humanos. Ministerio Público. Folio 14; y Oficio PM-043 del Personero Municipal de El Carmen de Viboral, Heli Gómez Osorio, de 28 de mayo de 1996. Expediente No. 008-10799-98. Procuraduría Delegada Disciplinaria de Derechos Humanos. Ministerio Público. Folio 16).

de la región declararon que el ejército retenía a personas acusándolas de guerrilleras[98], y detenían y golpeaban a civiles, incluso niños y niñas, para preguntarles sobre la ubicación de la guerrilla[99]. Según el personero municipal de El Carmen de Víboral, para 1996, los militares obligaban a los campesinos a retirar las denuncias por hechos como estos[100].

El mayor Carlos Guzmán Lombana asumió el cargo de comandante de la FTA a partir del 1 de mayo de 1996[101]. Según información obtenida mediante inspección judicial a una brigada militar, la FTA se habría desactivado en julio de 1996 "porque las unidades que la integraban asumieron responsabilidades en otros sectores"[102]. Sin embargo, un ex-comandante de la FTA señaló que la Brigada IV mantuvo sus funciones hasta diciembre de 1996 aunque "se le siguió llamando FTA al personal que estaba sobre la autopista"[103].

### C. Vínculo entre las Autodefensas del Magdalena Medio y el Ejército Nacional

Según ha podido constatar esta Honorable Corte, entre 1969 y 1982 se emitieron en Colombia diversos instrumentos normativos que:

> "88. (…) contienen información específica sobre las funciones de patrullaje y apoyo a la ejecución de operaciones de combate y de inteligencia militar que desempeñaban los miembros de los grupos o juntas de autodefensa, así como las funciones de organización y control que respecto de ellos debían ejercer los miembros de las Fuerzas Militares. Se trata del "Reglamento de Combate de Contraguerrillas" y del Manual "COMBATE CONTRA BANDOLEROS O GUERRILLEROS", aprobados por el Comandante General de las Fuerzas Militares el 9 de abril de 1969 y el 25 de junio de 1982, respectivamente. El Estado no realizó indicación alguna respecto del contenido, implicaciones y vigencia de dichas normas.
>
> 89. La Corte estima preciso enfatizar que los citados reglamento y manual de combate constituían una normativa que regulaba de forma más detallada y con mayores alcances las funciones y relaciones entre los grupos de civiles armados y las fuerzas de seguridad del Estado, que

---

98 *Ibíd.*, párr. 71 y anexo 24 del CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO (Declaración de María de la Cruz Hernández de Gallego ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, de 10 de noviembre de 2004. Expediente No. 233 UNDH. Cuaderno No. 10. Folios 71-72).

99 *Ibíd.*, párr. 71 y anexo 23 del CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO (Declaración de pobladora de la Vereda La Esperanza).

100 *Ibíd.*, párr. 71 y anexo 22 del CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO (Oficio PM-045 del Personero Municipal de El Carmen de Viboral, Heli Gómez Osorio, de 12 de junio de 1996. Expediente No. 008-10799-98. Procuraduría Delegada Disciplinaria de Derechos Humanos. Ministerio Público. Folio 3).

101 *Ibíd.*, párr. 72 y anexo 11 del CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO (Formulario confidencial No. 4 de la Sección de Hojas de Vida del Comando de Ejército en Bogotá. Folio 169. Cuaderno No. 8).

102 *Ibíd.*, párr. 73 y anexo 18 del CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO (Diligencia de inspección judicial a la IV Brigada del Ejército con sede en Medellín, realizada por la Unidad Nacional de Derechos Humanos, de 21 de noviembre de 2000. Expediente No. 233 UNDH. Cuaderno No. 6).

103 *Ibíd.*, párr. 73 y anexo 14 del CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO (Declaración de Hugo Alonso del Milagro Abondano Mican ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos, de 31 de Julio de 1998, Expediente No. 233 UNDH. Cuaderno No. 3; y, Declaración de Hugo Alonso del Milagro Abondano Mican ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos, de 4 de agosto de 1998. Expediente No. 233 UNDH. Cuaderno No. 3).

> la regulación dispuesta en el Decreto Legislativo 3398 de 1965 (*supra* párr. 82). Es decir, existían normas jurídicas que autorizaban expresamente que grupos de civiles fueran armados, entrenados y organizados por el Estado para recibir órdenes de oficiales de las Fuerzas Armadas con el objetivo de que participaran y colaboraran en acciones de seguridad propias del Estado"[104]. (mayúsculas e itálicas en el original; subrayado añadido).

En esta misma línea, también la Honorable Corte ha corroborado que, para octubre de 1987, el grupo paramilitar que operaba en la región del Magdalena Medio, comandado por Gonzalo Pérez y sus hijos Henry y Marcelo Pérez[105], "actuaba con la colaboración y apoyo de diversas autoridades militares de los Batallones de dicha zona"[106]. De esta manera, altos mandos militares apoyaron los actos de los paramilitares que precedieron la detención –que conllevó la posterior ejecución– de 19 comerciantes[107], descuidando su control y vigilancia, y dejándoles tomar ventaja[108]. Cabe señalar que este grupo paramilitar operaba a través de la fachada de la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio (ACDEGAM)[109], la cual financiaba a su vez, al grupo paramilitar que entonces lideraba Ramón Isaza ("Los Escopeteros")[110], y con el que posteriormente se fusionaría[111].

La continuación de la relación de colaboración entre fuerzas militares y grupos paramilitares fue evidente, pues en enero de 1989, con la cooperación y aquiescencia de agentes estatales, al menos cuarenta miembros del grupo paramilitar "Los Masetos" retuvieron a 15 integrantes de una comisión judicial –que investigaba, entre otros, los hechos antes relatados respecto de los 19 comerciantes– para, posteriormente, ejecutar a la mayoría de ellos[112]. Cabe destacar, que dicho grupo paramilitar se denominaba "Los Masetos" en atención al nombre original del grupo de "Muerte A Secuestradores (MAS)"[113]. Desde 1983, se evidenció que sus integrantes "contaban con apoyo, instrucción o direccionamiento por parte de oficiales del Ejército Nacional o eran personas activas de la Fuerza Pública que actuaban de manera clandestina realizando

---

104 *Cfr.,* Corte IDH. *Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párrs. 88-89.

105 Corte IDH. *Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 84.d).

106 *Ibíd.*, párr. 86.b).

107 *Ibíd.*

108 *Ibíd.*, párr. 86.c).

109 Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. "La Rochela: memorias de un crimen contra la justicia". 2010, pág. 281. ANEXO 16 del ESAP.

110 Tribunal Superior de Bogotá – Sala de Justicia y Paz. Sentencia Ramón María Isaza Arango y otros, de 29 de mayo de 2014. Rad. 11-001-60-00253-2007 82855 - Rad interno 1520, párrs. 529-535. ANEXO 8 del ESAP.

111 *Cfr.,* CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO, *supra,* Anexo 1. Ver también, Tribunal Superior de Bogotá – Sala de Justicia y Paz. Sentencia Ramón María Isaza Arango y otros, de 29 de mayo de 2014. Rad. 11-001-60-00253-2007 82855 - Rad interno 1520, párr. 430. ANEXO 8 del ESAP.

112 *Cfr.,* Corte IDH. *Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párrs. 74-75.

113 Tribunal Superior de Bogotá – Sala de Justicia y Paz. Sentencia Ramón María Isaza Arango y otros, de 29 de mayo de 2014. Rad. 11-001-60-00253-2007 82855 - Rad interno 1520, párr. 455. ANEXO 8 del ESAP.

actividades en nombre del MAS. Estos operaban para controlar la población civil y el territorio, cuando la fuerza pública tenía que replegarse"[114]. El grupo MAS también se fusionó con los grupos de Ramón Isaza y Henry Pérez para la conformación de las AMM[115].

Para marzo de 1994, luego de una emboscada de la guerrilla a tropas militares de la base de la Piñuela, el paramilitar Luis Eduardo Zuluaga aclara que fueron citada una reunión con los paramilitares y " nos proponen hacer unos trabajos en la autopista "porque a ellos les habían metido una bomba a los del ejército ahí en ese intermedio de la Mañosa a la entrada de Cocorná *y habían matado varios soldados* y ahí que actuábamos con ERIC PERILLA como agente de civil del DOS …[116]" Así mismo, ratifica que recibió instrucciones y entrenamiento en la base militar de la Piñuela para mediados de 1995[117]. Otros paramilitares del grupo de Ramón Isaza, también recibieron entrenamiento en esa base militar.[118]

Igualmente, existe información que indica que para 1995, se evidenciaba el vínculo entre el ejército y las AMM de diferentes manera. Así, el sargento Luis Fernando Guerrero Burbano del Batallón No. 42 Héroes del Barbacoas, quien estuvo asignado a la base militar de La Piñuela, se refirió a conversaciones entre integrantes de las AMM y el "Mayor Hernández", entonces a cargo de la FTA, en la base militar La Piñuela; al libre paso de integrantes de las AMM por los retenes militares y al uso compartido de camionetas a fin de transportarse y realizar operaciones[119]. También, manifestó que luego de las reuniones, su superior mandaba a hacer operaciones con los paramilitares, particularmente, para "desaparecer o dar de baja o capturar guerrilleros o informantes"[120]. De igual manera, indicó que los militares daban órdenes a los paramilitares por radio y que, en ocasiones, éstos últimos actuaban como sus escoltas[121]. En ocasiones, los militares "montaban emboscadas" y posteriormente se retiraban para que llegaran los paramilitares[122].

Para junio de 1996, de acuerdo con información de la Fiscalía General de la República, era sabido que las operaciones de las AMM eran favorecidas "por el apoyo de integrantes de la

---

114 *Ibíd.*, párrs. 461-469. Ver también, Corte IDH. *Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 90.

115 Tribunal Superior de Bogotá – Sala de Justicia y Paz. Sentencia Ramón María Isaza Arango y otros, de 29 de mayo de 2014. Rad. 11-001-60-00253-2007 82855 - Rad interno 1520, párr. 472. ANEXO 8 del ESAP.

116 Diligencia de versión libre de Luis Eduardo Zuluaga Arcila. Fiscalía de Justicia y Paz. Diciembre 19 de 2011, Folio xx, Cuaderno yy, Radicado 233 UNDH_DIH, ANEXO 2 del ESAP.

117 Diligencia de indagatoria de Luis Eduardo Zuluaga Arcila. Unidad de derechos humanos de la Fiscalía. Radicado 233. Febrero 17 de 2014. Cuaderno 14, Radicado 233 UNDH – DIH ANEXO 2 del ESAP.

118 Versiones libres conjuntas de Ramón Isaza Arango, Walter Ochoa Guisao, Luis Eduardo Zuluaga Arcila, Ovidio Suaza, Edgar de Jesús Cataño y Camilo de Jesús Zuluaga Zuluaga. Fiscalía de Justicia y Paz. Diciembre 4 y 5 de 2014. Folios 155 – 220. Cuaderno No. 19. Radicado 233 UNDH - DIH. ANEXO 2 del ESAP.

119 *Cfr.,* CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO, *supra,* párr. 76 y anexo 16 del CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO (Declaración del Sargento Segundo Luis Fernando Guerrero Burbano ante la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, Sección Antioquia, de 16 de noviembre de 1995. Indagación preliminar No. 009-151553).

120 *Ibíd.*

121 *Ibíd.*

122 *Ibíd.*

fuerza pública, que en algunos casos participan directamente con los paramilitares para cometer atrocidades y en otros, sirven como cómplices o encubridores de los mismos"[123]. Asimismo, era conocido que "los grupos paramilitares del Magdalena Medio recib[ian] apoyo logístico y anuencia para sus acciones por parte de algunos miembros del Ejército Nacional, Policía Nacional y en algunos casos del D.A.S."[124]. También contaban con uniformes de la policía y del ejército[125]. Las AMM "circula[ban] tranquilamente por las carreteras de la región"[126] y "se m[ovían] con desconcertante libertad por las zonas rurales, aún en aquellas donde es permanente y notoria la presencia de fuerzas militares y de los cuerpos policivos"[127].

De igual manera, testigos señalaban que las AMM se transportaban en camionetas junto con militares, ostentando sus armas frente a la población[128] y que los militares también colaboraban con el grupo paramilitar en el reclutamiento de niños[129]. Ramón Isaza señaló que su hijo Omar y miembros de las AMM "andaban la mayoría de las veces siempre acompañados del ejército" y que "cuando hablaban con el ejército él mandaba a Omar"[130]. Por su parte, uno de los altos mandos de las AMM, Alonso Jesús Baquero Agudelo, declaró que "todos los comandantes paramilitares tienen que coordinar con el Ejército o la Policía, cualquier asociación que hagan en la zona que le toca a cada uno […] la función de ellos es trabajar en coordinación con el Ejército, en operaciones militares e intercambiar inteligencia e información, ningún paramilitar se puede mover ni hacer operaciones sin coordinar con la fuerza pública"[131]. Añadió que "a nosotros nos tocaba hacer lo que el Ejército no podía hacer, es decir la facilidad de hacer operativos más rápido que el Ejército, y que nosotros podíamos hacer masacres que el Ejército no podía hacer"[132].

---

123 *Cfr.,* CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO, *supra,* párr. 74 y anexo 1 del CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO.

124 *Ibíd.*

125 *Ibíd.*, párr. 74 y anexo 1 del CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO (pág. 7).

126 *Ibíd.*, párr. 75 y anexo 1 del CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO (págs. 2-3).

127 *Ibíd.*, párr. 75 y anexo 1 del CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO (pág. 6).

128 *Ibíd.*, párr. 75, anexo 1 del CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO (pág. 3), anexo 21 del CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO (Ampliación de denuncia de Andrés Gallego Castaño ante la Fiscalía General de la Nación, Cocorná, de 25 de octubre de 1996. Expediente No. 233 UNDH. Cuaderno No. 1) y anexo 12 del CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO (Declaración de Florinda de Jesús Gallego Hernández ante la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos, de 14 de abril de 1998. Expediente No. 233 UNDH. Cuaderno No. 2. Folios 210-213).

129 *Ibíd.*, párr. 75 y anexo 22 del CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO (Declaración de Uriel Antonio Hernández ante la Personería Municipal de El Carmen de Viboral, de 31 de julio de 1996. Expediente No. 008-10799-98. Procuraduría Delegada Disciplinaria de Derechos Humanos. Ministerio Público. Folios 97-98).

130 *Ibíd.*, párr. 75 y anexo 3 del CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO (Diligencia de indagatoria de Ramón Isaza Arango, ante la Fiscalía Especializada adscrita a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, de 23 de abril de 2007).

131 *Ibíd.*, párr. 77 y anexo 25 del CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO (Declaración de Alonso de Jesús Baquero Agudelo ante la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos, de 11 de diciembre de 1997).

132 *Ibíd.*

Por su parte, la Ilustre Comisión, en su Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia[133], expresó que:

> "La Comisión está obligada a concluir que el Estado ha jugado un papel importante en el desarrollo de los grupos paramilitares y que no ha combatido adecuadamente estos grupos. El Estado es por lo tanto responsable, de manera general, de la existencia de los grupos paramilitares y, por lo consiguiente, se le tendrá como responsable de las acciones llevadas a cabo por estos grupos.
>
> Como fue anotado en el Capítulo I de este Informe, el Estado permitió que los paramilitares actuaran con protección legal y legitimidad en las décadas de los años setenta y ochenta. En aquella época, funcionarios estatales apoyaron el crecimiento de los paramilitares como un medio para combatir los grupos armados disidentes. El Estado, a la larga, se vio obligado a prohibir la creación de los grupos paramilitares porque estos grupos se habían vuelto aliados poderosos de aquellos comprometidos en el narcotráfico. Sin embargo, aun cuando se habían declarado ilegales a fines de los años ochenta, el Estado hizo poco para desmantelar la estructura que había creado y fomentado, particularmente cuando aquellos grupos llevaban a cabo actividades de contra insurgencia"[134].

De lo anterior, resulta por demás evidente que, para la época de los hechos del presente caso, existía una estrecha y consolidada relación entre militares y paramilitares en la región del Magdalena Medio.

### D. La doctrina del enemigo interno

En Colombia, con la expedición del Decreto 1705 de 1960[135], se asignó al Ministro de Guerra la dirección de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional "con el objeto de hacer efectivo el servicio Público de la Defensa Nacional. salvaguardiar (sic) la seguridad e independencia de la Nación, el orden interno y las instituciones Patrias"[136]. Posteriormente, se expidieron otra serie de disposiciones normativas tales como Manuales y Reglamentos aplicados por las Fuerzas Armadas en el ámbito de las acciones ofensivas y defensivas en la lucha contrainsurgente. Se trata del "Reglamento de Combate de Contraguerrillas"[137] y del Manual "Combate contra

---

133 CIDH. Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia. OEA/Ser.L/V/II.102 Doc. 9 rev. 1. 26 febrero 1999. Disponible en: http://www.cidh.org/countryrep/Colom99sp/indice.htm.

134 CIDH. Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia. OEA/Ser.L/V/II.102 Doc. 9 rev. 1. 26 febrero 1999. Párrs. 236-237. Disponible en: http://www.cidh.org/countryrep/Colom99sp/capitulo-4c.htm.

135 Presidencia de la República de Colombia. Decreto 1705 de 1960. Publicado en el Diario Oficial No. 30.302 de 11 de agosto de 1960. Disponible en: http://cgfm.mil.co/documents/10197/176447/decreto+21.pdf/d13ba977-0df5-4e87-a5db-ecb654b33067, Anexo 19 del ESAP.

136 *Ibíd.*, artículo 1.

137 Corte IDH. *Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163. Párr. 88, pie de página 57. En dicho pie de página se señala que "En el mismo Reglamento se estipula que sería identificado como "REGLAMENTO EJC 3-10 RESERVADO" (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos [del caso La Rochela], Tomo VIII, anexo 72, folios 3740 a 3747). Allí se indica que entre los objetivos de las operaciones de organización de la población civil se encuentra "organizar en forma militar a la población civil, para que se proteja contra la acción de las guerrillas y apoye la ejecución de operaciones de combate". Asimismo, se estipula que "[l]a Junta de autodefensa es una organización de tipo militar que se hace con personal civil […], que se entrena y equipa para desarrollar acciones contra grupos de guerrilleros que amenacen el área o para operar en coordinación con tropas de acciones de combate", y que "[l]a junta de

bandoleros o guerrilleros"[138], aprobados por el Comandante General de las Fuerzas Militares el 9 de abril de 1969 y el 25 de junio de 1982, respectivamente. Este Tribunal ya decretó anteriormente que "[e]l Estado no realizó indicación alguna respecto del contenido, implicaciones y vigencia de dichas normas"[139].

Adicionalmente, las Fuerzas Armadas de Colombia han sustentado la lucha contrainsurgente en Manuales tales como: El Manual de Operaciones contra Fuerzas Irregulares (traducción del manual FM 31 – 15 del Ejército de los EEUU; la guerra Moderna (biblioteca del ejército colombiano, No. 12, traducción del francés R. Trinquier); el Reglamento de Combate Contraguerrilla (EJC-J 10 aprobado por resolución No. 005 del 09-04-69 del Comando General de las Fuerzas Militares); las Instrucciones Generales para Operaciones de Contraguerrillas (publicado por la Ayudantía General del Comando del Ejército Nacional en 1979); Reglamento de Combate de contraguerrillas (EJC-3-101 aprobado por disposición 036 del 12-11-87 del Comando General de las Fuerzas Militares)[140].

En el reglamento de Combate de contraguerrillas EJC – 3- 10 reservado, 1969 del Comando de las Fuerzas Armadas, se "subraya la importancia de reclutar oficiales en la reserva con una lealtad demostrada y entrenarlos junto con otros líderes en 'técnicas de combate', 'táctica de defensa de la región', y 'adoctrinamiento psicológico'. Se suministraran armas, incluidas las restringidas al uso militar, a los grupos de autodefensa para "operaciones de búsqueda, control y destrucción". Según el manual, la misión esencial de las autodefensas es "el rechazo violento de las acciones guerrilleras en la región."

En dichos Manuales, la población civil es tenida como objetivo de la lucha contrainsurgente ya que en ella "se fundamenta la existencia de los grupos subversivos" y por lo tanto hacia ella dirigen las operaciones de inteligencia, de guerra sicológica y de "defensa" contenidas en los referidos manuales. Clasifican a los pobladores en listas negras, grises y blancas, para luego realizar un "boleteo al personal de lista gris y negra que no quiere colaborar con la tropa, para obligarlos a que se descubran, atemorizándolos haciéndolos creer que están comprometidos y que deben abandonar la región".

---

autodefensa debe tener un control directo de la unidad militar de la zona de combate y para ello el comandante designa un oficial o un suboficial encargado de transmitir las órdenes correspondientes y de entrenar la agrupación. Entre las "[m]isiones que pueden cumplir las juntas de autodefensa", el Reglamento indica las de actuar como "[p]atrullas de reconocimiento móviles que recorran áreas críticas de poblaciones y veredas […] y [e]n operaciones de control, registro y destrucción, para lo cual se pueden dotar de armas y municiones de uso [privativo] de las fuerzas militares". *(subrayado no es del original).*

138 Corte IDH. *Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163. Párr. 88, pie de página 58. En dicho pie de página se señala que "En el mismo Manual se estipula que sería identificado como "MANUAL EJC-3-101 RESERVADO" (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos [del caso La Rochela], Tomo VIII, anexo 73, folio 3750); y declaración jurada escrita rendida por Federico Andreu Guzmán el 19 de enero de 2007 (expediente de declaraciones y peritajes escritos, Tomo III, folio 7502). El manual indica que organizar las juntas de autodefensa, "instruirlas y apoyarlas debe ser un objetivo permanente de la Fuerza Militar donde la población es leal y se manifiesta agresiva y decidida contra el enemigo. […] Las juntas de autodefensa […s]uministran guías para las operaciones militares. Patrullan sus propias zonas. Suministran apoyo logístico a las patrullas. Cumplen misiones de inteligencia y contrainteligencia". *(subrayado no es del original)*".

139 *Cfr.,* Corte IDH. *Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 88.

140 Manuales anexos en el ANEXO 33 DEL ESAP.

Se inspecciona en los pobladores "sus actitudes; el origen de las mismas; los factores externos que las gobiernan; las vulnerabilidades y susceptibilidades que pueden ser explotadas psicológicamente y las necesidades humanas que originan problemas políticos, sociales y económicos" todo con la finalidad de "poder explotarla en provecho de la unidad contraguerrilla", "de reeducación de elementos disidentes"[141] y de "influir en las opiniones, emociones, actitudes y comportamientos de grupos hostiles, de tal manera que apoyen la realización de los objetivos nacionales"[142]. Las escuelas y materiales pedagógicos son también objeto de intervención al facultarse a los Comandantes militares su evaluación, para fines de la confrontación militar[143].

## E. Violaciones de derechos humanos como práctica sistemática

El informe conjunto del Relator Especial encargado de la cuestión de la Tortura, Sr. Nigel S. Rodley, y del Relator Especial encargado de la cuestión de las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Sr. Bacre Waly Ndiaye, emitido luego de su visita a Colombia realizada entre el 17 y el 26 de octubre de 1994, señala que:

> "Los informes recibidos por los Relatores Especiales muestran claramente que en las zonas de conflicto armado ni las fuerzas de seguridad ni las guerrillas armadas respetan el derecho a la vida y a la integridad física. Por el contrario, los Relatores Especiales recibieron numerosos informes sobre violaciones de los derechos humanos cometidas por diversos batallones militares y otras unidades de las fuerzas de seguridad basadas en las "zonas rojas". Con todo, se expresó una particular preocupación por las actividades de las brigadas móviles, de reciente creación. Por ejemplo, la brigada móvil Nº 1 ha estado operando desde 1991 en el departamento de Meta y las regiones vecinas de Casanare y Boyacá, en tanto que la brigada móvil Nº 2 fue creada en 1993 en la región del Magdalena Medio. Según se ha informado, esas brigadas patrullan la región durante períodos prolongados, sin tener una base permanente, y los batallones que normalmente operan en la región consideran que no tienen ninguna responsabilidad por las actividades de esas brigadas. Se dice que los miembros de las brigadas móviles son responsables de un gran número de casos de desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial, sumaria o arbitraria"[144] (subrayado añadido).

---

[141] Operaciones contra las Fuerzas Irregulares (traducción del manual FM 31 – 15 del ejército de los EEUU, por el Ejército Nacional, 1962 pág. 6). ANEXO 33 DEL ESAP

[142] Manual de Instrucciones Generales para operaciones contraguerrillas, Ayudantía General del Comando del Ejército, Bogota, 1979. Pág 50. ANEXO 33 DEL ESAP

[143] Reglamento de Cooperación Cívico Militar FFMM 5 – 1. 1986 pág. 33. ANEXO 33 DEL ESAP

[144] ONU – Consejo Económico y Social. Informe conjunto del Relator Especial encargado de la cuestión de la tortura, Sr. Nigel S. Rodley, y del Relator Especial encargado de la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Sr. Bacre Waly Ndiaye. E/CN.4/1995/111. 16 de enero de 1995. Párr. 32. Disponible en:

Por su parte, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias determinó que:

> "Según diversos informes, las desapariciones no han disminuido, sino que han continuado y se han mantenido constantes o incluso podrían haber aumentado desde 1996. En la mayoría de los casos de que se ha informado al Grupo de Trabajo, se ha señalado como principales culpables de los casos de desapariciones a los paramilitares, que actúan presuntamente con el consentimiento de ciertos elementos del ejército y de las fuerzas de seguridad del Estado. Las desapariciones tampoco se han detenido tras las negociaciones y los acuerdos de cese del fuego y de desmovilización concertados entre los paramilitares y el Gobierno. En las entrevistas con funcionarios del Estado se ha negado con frecuencia la implicación del Estado o su connivencia en las desapariciones. Con todo, las entrevistas con ciudadanos comunes víctimas de violencia generalizada en su vida diaria han proporcionado testimonios abundantes y convincentes de a participación directa del Estado y de su complicidad en las desapariciones forzadas o involuntarias en muchas partes del país"[145].

De igual manera, este Grupo, al analizar la cantidad de casos de desapariciones por él recibidos respecto de Colombia[146] –manifestando, a su vez, preocupación por los casos que permanecen sin ser denunciados[147]–, manifiesta que:

> "Pueden observarse dos períodos distintos. El primero se inicia con el primer caso recibido por el Grupo de Trabajo en 1973, y se prolonga hasta fines del decenio de 1990. Durante ese período, los presuntos perpetradores de desapariciones fueron principalmente la policía, las fuerzas militares y los servicios de seguridad. Durante este período, las fuerzas paramilitares respaldaban según parece a las fuerzas oficiales en estas operaciones, aunque algunas veces actuaban por cuenta propia. Las principales víctimas seleccionadas de estas desapariciones eran personas activas en asociaciones (de defensa de los derechos humanos, de defensa de los agricultores, de los desplazados internos y de los sindicatos), personas acusadas de pertenecer o de apoyar a las guerrillas o a partidos de izquierda, o agricultores. Durante el segundo período, que se inicia alrededor de 1998, hasta el momento de la redacción del presente documento, las características de los perpetradores y de las víctimas parecen haber cambiado. Los informes recibidos indican un menor número de casos de participación directa de

http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/informes/onu/rest/E-CN-4-1995-111.html, ANEXO 15 del ESAP.

145 ONU – Consejo Económico y Social. Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. E/CN.4/2006/56/Add.1. 17 de enero de 2006. Párr. 21. Disponible en: http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=E/CN.4/2006/56/Add.1, ANEXO 10 del ESAP.

146 *Ibíd.*, párr. 54.

147 *Ibíd.*, párrs. 57 y 60.

> fuerzas oficiales y muchos más casos en que las desapariciones pueden atribuirse directamente a fuerzas paramilitares"[148] (subrayado añadido).

### F. Marco normativo: la Ley 975 de 2005 y el Marco Jurídico para la Paz

En torno al aspecto normativo, pese a la intención de prevenir y sancionar las actividades de grupos paramilitares, las medidas legislativas adoptadas por el Estado entre 1989 y 2005 para prohibir, prevenir y castigar las actividades de estos grupos "no se vieron traducidas en la desactivación concreta y efectiva del riesgo que el propio Estado había contribuido a crear"[149].

La última de estas medidas conocidas en su momento por la Corte IDH fue la Ley 975 de 2005[150], conocida públicamente como la "Ley de Justicia y Paz", aprobada por el Congreso de la República de Colombia el 22 de junio de 2005 y sancionada y publicada el 25 de julio de 2005[151]. A través de esta ley, "se dicta[ro]n disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios"[152].

Ante diversas demandas de inconstitucionalidad, el 18 de mayo de 2006, la Corte Constitucional se pronunció sobre la constitucionalidad global de la Ley 975 de 2005 señalando, condiciones para que varias de sus disposiciones pudieran considerarse constitucionales, entre ellas, las relacionadas con la participación de las víctimas en el proceso y su acceso a la reparación integral[153]. Del mismo modo, introdujo consecuencias legales como la pérdida del beneficio de la pena reducida (de 5 a 8 años de prisión) en caso de que la persona desmovilizada ocultara información a la autoridad judicial[154].

---

148 *Ibíd.*, párr. 55.

149 Corte IDH. *Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párrs. 125-126.

150 Congreso de la República de Colombia. Ley 975 de 2005. Publicada en el Diario Oficial No. 45.980 de 25 de julio de 2005 (en adelante, "Ley 975 de 2005"). Disponible en: http://www.fiscalia.gov.co:8080/Documentos/LEY_975_concordada.pdf.

151 Corte IDH. *Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134. Párr. 96.17. Corte IDH. *Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140. Párr. 95.20. Corte IDH. *Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006 Serie C No. 148, párr. 125.22.

152 *Ibíd.*

153 CIDH. "Verdad, justicia y reparación: cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia". OEA/Ser.L/V/II. Doc. 49/13. 31 de diciembre de 2013. Párrs. 280-281. Ver también, Corte IDH. *Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163. Párrs. 183-184.

154 CIDH. "Verdad, justicia y reparación: cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia". OEA/Ser.L/V/II. Doc. 49/13. 31 de diciembre de 2013. Párr. 281.

Las disposiciones de la Ley 975 de 2005 han sido precisadas y/o reformadas a través de numerosos pronunciamientos judiciales e instrumentos normativos[155]. Adicionalmente, se han adoptado otras disposiciones que establecen mecanismos de justicia transicional. Entre los más recientes se encuentra el Acto Legislativo No. 01 de 31 de julio de 2012[156], conocido como el "Marco Jurídico para la Paz", a través del cual se incorporan artículos transitorios a la Constitución en materia de justicia transicional; destacando lo relativo a la inclusión de los criterios de priorización y selección para el ejercicio de la acción penal en contra de los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad o de guerra[157]. Cuestionada su constitucionalidad, la Corte Constitucional decidió que dichos criterios son acordes a la justicia transicional y que la imputación de los máximos responsables permitirá cumplir con mayor efectividad con el "deber de proteger los derechos de las víctimas del conflicto"[158].

En este sentido, la CIDH –retomando jurisprudencia de la Corte IDH– manifestó que

> "[…] observa con preocupación que el Marco Jurídico para la Paz contempla la posibilidad de renunciar a la investigación de los casos de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH que no sean seleccionados, circunstancia que llevaría a la impunidad. Tomando en consideración que el deber de investigar y juzgar casos de graves violaciones de derechos humanos es irrenunciable, la selección y ausencia de investigación de esos casos plantea incompatibilidades con las obligaciones internacionales del Estado"[159].

Posteriormente, en diciembre de 2012, se reformó la Ley 975 de 2005 –a través de la Ley 1592 de 2012[160]– para establecer, entre otras cosas, criterios de priorización y regionalización para investigar los delitos más graves[161]. Con ello y la adopción de diversos instrumentos normativos relacionados con la priorización de casos[162], se estableció el "Plan de Acción" para el año 2013

---

155 Fiscalía General de la Nación. Normatividad Proceso Especial de Justicia y Paz. Disponible en: http://www.fiscalia.gov.co/jyp/direccion-de-fiscalia-nacional-especializada-de-justicia-transicional/relatoria/normatividad-proceso-especial-de-justicia-y-paz/.

156 Congreso de la República de Colombia. Acto Legislativo No. 01 de 31 de julio de 2012. Disponible en: http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/actos-legislativos/Documents/2012/ACTO%20LEGISLATIVO%20N%C2%B0%2001%20DEL%2031%20DE%20JULIO%20DE%202012.pdf.

157 CIDH. "Verdad, justicia y reparación: cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia". OEA/Ser.L/V/II. Doc. 49/13. 31 de diciembre de 2013. Párr. 345.

158 *Ibíd.*, párr. 350.

159 *Ibíd.*, párr. 354.

160 Congreso de la República de Colombia. Ley No. 1592 de 3 de diciembre de 2012. Disponible en: http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2013/04/Ley-1592-del-03-de-Diciembre-de-2012.pdf.

161 CIDH. "Verdad, justicia y reparación: cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia". OEA/Ser.L/V/II. Doc. 49/13. 31 de diciembre de 2013. Párr. 358.

162 Fiscalía General de la Nación. Normativa sobre priorización de casos. Disponible en: http://www.fiscalia.gov.co/colombia/priorizacion/normativa/. Ver también, CIDH. "Verdad, justicia y reparación: cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia". OEA/Ser.L/V/II. Doc. 49/13. 31 de diciembre de 2013. Párrs. 370-384.

de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz[163], decidiendo priorizar los casos de 16 postulados como los máximos responsables de los crímenes de sistema, entre ellos, el de Ramón María Isaza Arango[164].

A través de la Ley 1592, también se pretendió suprimir el incidente judicial de reparación contemplado en la Ley 975 que "permitía formular una acción judicial orientada a buscar reparación, en primer término, por cuenta del victimario directo, y en su caso del grupo paramilitar, y sólo en forma subsidiaria y a falta de bienes suficientes, por el Estado colombiano, a través del fondo de reparación"[165]. El mismo sería reemplazado por un "'incidente de identificación de las afectaciones causadas a las víctimas', en el que se verificarían las pruebas presentadas por la víctimas, si el procesado reconoce las 'afectaciones' alegadas"[166]. Sin embargo, éste que era uno de los puntos más controversiales de la ley, fue declarado inconstitucional mediante la sentencia C-286/14 de la Corte Constitucional[167].

# VII. Capítulo VII - HECHOS

## A. Comunidad de la Vereda La Esperanza

Las desapariciones y la ejecución extrajudicial que ocurrieron en la Vereda La Esperanza entre el 21 de junio y el 27 de diciembre de 1996, se llevaron a cabo en las propias viviendas de las víctimas[168], de vecinos o familiares[169], lugares de culto religioso[170], o mientras se movilizaban por la autopista aledaña[171] en desarrollo de actividades propias de la vida cotidiana de los campesinos de la Vereda La Esperanza. La mayoría de las víctimas eran familiares entre sí y residían en la comunidad.

La Vereda La Esperanza está situada sobre la carretera principal que comunica las ciudades de Medellín y Bogotá (conocida como autopista Medellín-Bogotá) y se extiende por la zona

---

163 Fiscalía General de la Nación – Unidad de Justicia y Paz. Plan de acción de casos a priorizar por la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz. 10 de enero de 2012. Disponible en: http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2012/04/Plan-de-Accion-de-Priorizacion-de-la-Unidad.pdf.

164 CIDH. "Verdad, justicia y reparación: cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia". OEA/Ser.L/V/II. Doc. 49/13. 31 de diciembre de 2013. Párrs. 363-364.

165 *Ibíd.*, párr. 513.

166 *Ibíd.*, párr. 514.

167 Corte Constitucional de la República de Colombia. Sentencia C-286/14 de 20 de mayo de 2014. Disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-286-14.htm. Ver también, CIDH. "Verdad, justicia y reparación: cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia". OEA/Ser.L/V/II. Doc. 49/13. 31 de diciembre de 2013. Párrs. 513-531.

168 Del interior de sus viviendas fueron retenidos: Aníbal de Jesús Castaño Gallego, Oscar Hemel Zuluaga Marulanda (21 de junio de 1996), Juan Crisóstomo y Miguel Ancizar Cardona Quintero, un joven sin identificar, Fredy y su esposa (junio 22 de 1996), María Irene Gallego Quintero (junio 26 de 1996), Hernando de Jesús Castaño Castaño, [redacted], Andrés Antonio Gallego Quintero y Leónidas Cardona Giraldo.

169 Octavio de Jesús Gallego Hernández.

170 Juan Carlos Gallego Hernández.

171 Jaime Alonso Mejía Quintero, Orlando de Jesús Muñoz Castaño y Javier de Jesús Giraldo Giraldo.

montañosa en límites con las Veredas: Corales, San José y Boqueron, del Carmen de Viboral y las Veredas el Viao, Cucutal y San Vicente del Municipio de Cocorná; se encuentra distante 45 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Medellín.

### B. Presencia militar y paramilitar en la Vereda La Esperanza

Según el plan de creación de la FTA, las fuerzas armadas identificaron distintos "puntos críticos" –es decir, "zonas donde el enemigo incide en el cumplimiento de la misión"–, entre ellos la Vereda La Esperanza, por ser "el sector donde ha tenido asentamiento la cuadrilla Elkin Vásquez del ELN"[172]. Según se desprende del informe de admisibilidad y fondo de la CIDH,

> "De acuerdo con un informe de 25 de junio de 1996 del general Alfonso Manosalva Flores, Comandante de la IV Brigada, durante los meses de mayo y junio de dicho año "la situación de orden público a lo largo de la autopista Medellín-Bogotá se [vio] alterada gravemente por el incremento de actividades delincuenciales de las cuadrillas Narco-Terroristas Carlos Alirio Buitrago del UC-ELN y Elkin Gonzáles del EPL", por lo que a partir del 27 de junio de 1996 la IV Brigada estaría a cargo del control de la FTA a fin de adelantar operaciones de inteligencia, ofensivas de combate y de "acción psicológica" sobre la autopista Medellín-Bogotá. Manifestó que se agregarían dos pelotones a la FTA con el objetivo de "incrementar el poder de combate de la unidad"[173].

Por otra parte, existe abundante evidencia de la cual se desprende la incuestionable presencia de las AMM en la zona de la autopista Medellín-Bogotá y la base militar La Piñuela[174]. En este

---

172 *Cfr.,* CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO, *supra,* párr. 79 y anexo 17 del CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO (Plan No. 000969/BR4-BIOSP-S3-375 que emite el Comando del Batallón de Ingenieros No. Pedro Nel Ospina para el control de la autopista Medellín-Bogotá bajo responsabilidad de la Fuerza de Tarea Águila del 1 de febrero al 30 de abril de 1995, de 1 de febrero de 1995).

173 *Cfr.,* CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO, *supra,* párr. 80 y anexo 7 del CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO (Informe No. DIV1-BR4-B3-PO-375 del Comandante de la IV Brigada, Brigadier General Alfonso Manosalva Flores, de 25 de junio de 1996. Expediente No. 233 UNDH. Cuaderno No. 4.).

174 *Cfr.,* CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO, *supra,* párr. 82-84 y anexo 1 del CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO (Informe No. 032. Dirección Seccional Cuerpo Técnico de Investigación. Oficina Información Análisis y Apoyo Técnico de la Fiscalía General de la República. Informe de Inteligencia sobre grupo de autodefensas, de 28 de junio de 1996), anexo 21 del CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO (Informe No. 093 de la Oficina de Información y Análisis de la Dirección Seccional Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación., de fecha 19 de agosto de 1996. Expediente No. 233 UNDH. Cuaderno No. 1), anexo 29 del CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO (Declaración de Florinda de Jesús Gallego Hernández ante la Fiscalía General de la Nación, de 28 de noviembre de 2000), anexo 30 (Declaración de José Eliseo Gallego Quintero ante la Personería Municipal de El Carmen de Viboral, de 19 de julio de 1996), anexo 31 del CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO (Denuncia presentada por Florinda de Jesús Gallego Hernández ante la Personería Municipal del Municipio de Cocorná, de 11 de julio de 1996), anexo 23 (Declaración de pobladora de la Vereda La Esperanza), anexo 12 del CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO (Declaración de María Rocío Cardona ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía Regional, de 14 de abril de 1998. Expediente No. 233 UNDH. Cuaderno No. 2. Folios 192-194), anexo 24 del CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO (Declaración de Jhon Fredy Castaño Gallego ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, de fecha 8 de noviembre de 2004. Expediente No. 233 UNDH. Cuaderno No. 10. Folios 81-85), anexo 32 del CIDH. Informe No.

sentido, para las AMM, la Vereda La Esperanza era también un punto de atención; al respecto, Ramón Isaza refirió que:

> "A ver. Yo pienso, yo pienso que en ese sentido […] en ese sentido […] todos tenemos y los campesinos y todo el país debemos de ser eh […] debemos de ser considerados de que debemos sacar la cara por nuestra región y en el momento en que me hablan, me hablan de, de, de la vereda "la Esperanza", yo considero que el pueblo no se puede quedar quieto, que la región no se puede quedar quieta, que todos los ganaderos ha, han pedido o han pedio […] a todas las Fuerzas Armadas de que se les colabore en, en en el problema, en el problema de, de "la Esperanza", en el problema de […] de pongámole de San Luis, de San Luis a Marinilla donde ha habido secuestros, de secuestros […] ¡Cómo le digo yo! […] Eh […] algunos secuestros considerados en, en un […] dos o tres secuestros diarios o en un cinco, seis secuestros semanales, de […] los ganaderos, de comerciantes […]. Entonces la gente no se ha aguantado eso y a querido de que se le ponga la mano considerablemente a eso"[175].

### C. Listado de personas de la Comunidad de la Vereda la Esperanza

Los hechos fueron perpetrados en una acción conjunta entre la Fuerza Pública, a través de la FTA que operaba en la zona con la estructura paramilitar denominada Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio lideradas por el señor Ramón María Isaza Arango por medio del Grupo Los Hálcones, coordinado por su hijo Omar Isaza. Éste Jefe paramilitar reconoció ante los medios de comunicación y las autoridades judiciales, que recibió una lista de personas, -elaborada por la Inteligencia Militar-, señaladas de guerrilleros en la Vereda La Esperanza con el objeto "de que todos los que estaban en la lista los tumbaran" [176].

El compromiso fue acordado entre el General Alfonso Manosalva, Comandante de la 4ª Brigada del Ejército y el Mayor Hernández. En este sentido, Ramón Isaza destacó que:

> "MANOSALVA le dijo a OMAR que ellos eran los que hacían los que secuestraban y hacían los daños, entonces como ellos OMAR y los muchachos trabajaban con inteligencia del ejército y andaban la mayoría de las veces andaban siempre acompañados del ejército …. Todo el grupo de OMAR con el COSTEÑO trabajaron en conjunto no se con quienes ni con cuantos o con quien, pero trabajaron juntos con miembros del ejército es esos meses de las desapariciones y subieron hasta unos cerros altísimos donde había un campamento del EPL. En esos días también lo cierto es que, en esos días se inició la ruina del EPL y se

85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO (Diligencia de ampliación de Ramón Isaza Arango ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, de 15 de octubre de 2008).

175 *Cfr.,* CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO, *supra,* Anexo 6 del CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO (Transcripción de entrevista a Ramón Isaza de septiembre de 1997 por parte de la Fiscalía General de la República, de 10 de junio de 1998, pág. 5).

176 Diligencia de indagatoria de Ramón María Isaza Arango del 15 de octubre de 2008 ante la Fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos. Folios 233 – 239 Cuaderno No. 11 Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

> entregaron como 60 y punta al ejército, no sé a qué batallón, pero eso fue en el Carmen de Viboral"[177]

Además, ratificó que "Bajo [su] conocimiento en compañía del Mayor Hernández cogieron al Costeño y a la mujer, OMAR y los muchachos y el Mayor Hernández, porque el Mayor Hernández había detectado que él era guerrillero, cogieron al Costeño y a la señora no supe ni como se llamaba la señora, el Mayor Hernández lo entrego a Omar Isaza y ellos se los llevaron al Costeño y a la esposa"[178].

El motivo esgrimido para justificar y celebrar el acuerdo era que "en ese entonces todos los ganaderos y comerciantes se quejaban de esa autopista y habían secuestrados todos los días entonces los ganaderos y comerciantes hablaban con ese general MANOSALVA para que les pusiera ejército y les hiciera persecución a la guerrilla porque había secuestros y secuestros, era una autopista inandable […]"[179].

## D. Detención y desaparición forzada de Aníbal de Jesús Castaño Gallego y Oscar Hemel Zuluaga Marulanda

### 1. Antecedentes de Aníbal de Jesús Castaño Gallego

Aníbal de Jesús Castaño Gallego estaba casado con María Oveida Gallego Castaño, con quien había procreado a Santiago, y ésta se encontraba al momento de los hechos en embarazo de su hija Leydi Yohana Gallego Castaño[180]. Para el momento de los hechos tenían cinco años de casados, después de dos años de noviazgo. En la misma Vereda La Esperanza vivían sus padres Manuel Salvador y Laura Emilia. Sus hermanos son Bernabé, María Elvira, Heriberto, Ester Julia, María Brígida, Abelino, Rubén Antonio y Hernando. Los hermanos eran muy unidos, se visitaban entre ellos, y Aníbal le gustaba reunirse con su hermano Rubén para jugar ajedrez.

---

[177] Diligencia de indagatoria de Ramón María Isaza Arango del 15 de octubre de 2008 ante la Fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos. Folios 233 – 239 Cuaderno No. 11 Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

[178] Diligencia de indagatoria de Ramón María Isaza Arango del 15 de octubre de 2008 ante la Fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos. Folio 232, Cuaderno No. 11 Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

[179] Diligencia de indagatoria de Ramón María Isaza Arango del 15 de octubre de 2008 ante la Fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos. Folio 228 Cuaderno No. 11 Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP; "Ramón Isaza se confiesa. Periódico El Colombiano. Febrero 8 de 2006 pag 10A. Anexo 64 del CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO; Informe de inteligencia sobre grupo de autodefensa. No. 32. Junio 28 de 1996. Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación. Oficina Información análisis y apoyo operativo. Para el proceso Radicado No. 16. 734 de la Fiscalía Regional de Medellín. Folios 1 – 8. Cuaderno 5, Radicado 233 UNDH-DIH (Anexo 2 del ESAP). Expediente No. 008 – 1079998 Procuraduría delegada disciplinaria derechos humanos. Declaración con reserva de identidad VB -1 tomada ante la Fiscalía Regional de la UNDH. Abril 14 de 1998. Folios 190 – 191, Cuaderno No. 2, Radicado 233, UNDH – DIH (ANEXO 2 del ESAP). Oficio del 21 de octubre de 1996 dirigido por el Personero del Municipio de Cocorná al Defensor del Pueblo Regional Medellín. Folio 106, Cuaderno 3, Radicado 233 UNDH-DIH Expediente No. 008 – 1079998 Procuraduría delegada disciplinaria derechos humanos. ANEXO 2 del ESAP.

[180] Leidy Yohana Castaño Gallego, Nacida el 10-04-1997. Santiago Castaño Gallego, Nacido el 24-10-1994. ANEXO 1 del ESAP.

Aníbal de Jesús se dedicaba con uno de sus hermanos a la agricultura en un cafetal de su propiedad y trabajaba en una tienda de abarrotes que tenía instalada en su vivienda, conocida como "El Estanquillo"[181]. Con estas actividades lograba obtener el sustento de su familia e igualmente ayudarle a sus padres[182]. Aunque recibía buenos ingresos de la tienda vivía en casa arrendada, por lo cual soñaba con adquirir una vivienda propia para su familia. Para su mala fortuna, este tipo de tiendas eran vistas por los miembros de la Fuerza Pública como espacios de abastecimiento de la guerrilla y así era estigmatizada por el personal militar[183].

### 2. Antecedentes del menor Oscar Hemel Zuluaga Marulanda

Oscar Hemel Zuluaga Marulanda quien para el momento de la desaparición tenía 16 años[184] de edad era hijo de José Bernardo Zuluaga y María Romelia Marulanda, hermano de Omaira Lucia, Adolfo de Jesús, Daniel Antonio, María Nohelia, Gladys Elena, Aníbal Alonso, Jhon Arnilson, Bernardo Efrén, Blanca Orfilia, Luz Marina, Sandra Liliana y Arbey Esteban. Oscar Hemel, vivía en el Municipio de Santa Rosa de Lima en el departamento de Bolívar, donde laboraba en actividades del comercio con un hermano de Aníbal. Para el momento de los hechos se encontraba visitando a sus padres en el Municipio de Cocorná a donde había llegado una hermana suya procedente de España.[185]. Le gustaba mucho cantar y quería ser artista algún día.

### 3. Detención y Desaparición de Anibal y Oscar Hemel

Aníbal de Jesús Castaño Gallego y Oscar Hemel Zuluaga Marulanda fueron detenidos el viernes 21 de junio de 1996, a eso de las ocho de la noche. Ambos se encontraban en la casa de habitación de Anibal, con su esposa Maria Oveida, cuando tocaron la puerta. Como la tienda estaba cerrada, Aníbal abrió la puerta y encontró un grupo de hombres armados que entraron a la vivienda y revolcaron todo. Los hombres les obligaron a salir de la casa y se los llevaron en varios vehículos con destino desconocido. Los captores en estos mismos hechos hurtaron una

---

181 Entrevista con Florinda de Jesus Gallego Hernandez, Policia Judicial, 17 de noviembre de 2010. Folio 153, Cuaderno 13, Radicado 233 UNDH-DIH, ANEXO 2 del ESAP.

182 La señora María Oveida señala: "Él (Anibal) tenía un cafetalcito y se dedicaba a trabajar ahí en la vereda la esperanza y cultivaba tomate y ayudaba en la tienda. Folio 109, Cuaderno No. 10, Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

183 Declaración de Florinda de Jesús Gallego Hernández ante la Personería Municipal del Carmen de Viboral. Julio 19 de 1996. En ella se menciona sobre las amenazas del ejercito a los pobladores de la Vereda La Esperanza y particularmente a los que tuvieran tiendas donde según ellos compraba la guerrilla "…porque cuando cogieron al señor de la tienda ANIBAL CASTAÑO que fue uno de los primeros que se llevaron dijo el ejército que iban a acabar con todas las tiendas para que la guerrilla no tuviera donde comprar nada y le dijeron a la gente de la carretera que tenían que desocupar todo eso y por eso es que decimos que es el ejército es el de todo esto". Folio 35, Cuaderno No. 1 Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

184 Oscar Hemel Zuluaga Marulanda nacido el 11-02-1980. ANEXO 1 del ESAP.

185 Informe No. 84 Radicado. 21.005 Diligenciamiento de orden de trabajo No. 088. Dirigido al Dr. Iván De Jesús Duque Santa. De Nov. 27 de 1996. Folios 107 – 114, Cuaderno 1, Radicado 233 de la UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

motocicleta de propiedad de Anibal de Jesús. [186] A la fecha ambas personas se encuentran desaparecidas

Los vehículos utilizados por los perpetradores de las desapariciones forzadas de Anibal de Jesús y Oscar Hemel fueron identificados por los familiares como algunos de los que eran utilizados por los soldados que permanecían en la Vereda La Esperanza -una camioneta blanca y otra verde, así como taxis de color amarillo-[187]. La Fuerza Pública que tenía control sobre la Autopista Medellín – Bogotá y un Pelotón de la FTA en la propia Vereda La Esperanza, no desplegaron acción alguna encaminada a inmovilizar dichos automotores. Varias de esas camionetas y taxis fueron utilizados por los victimarios en las posteriores desapariciones forzadas[188].

El mismo día de las desapariciones forzadas de Aníbal de Jesús y de Oscar Hemel, personal militar hizo señalamientos y acusaciones abiertas en contra de los miembros de la comunidad de la Vereda La Esperanza por ser presuntos colaboradores de la guerrilla. Así fue establecido desde el inicio de las investigaciones penales y disciplinarias iniciadas por los hechos. Tal como fue señalado por un miembro de la comunidad:

> "[e]l mismo viernes que se llevaron a Aníbal los militares estuvieron por ahí observando todo, inclusive uno de ellos dijo: sigan con los guerrilleros que la próxima vez que vengamos y encontremos algo no dejamos nada, acabamos con todo y con todo por parejo, que había que

[186] Declaración de María Oveida Gallego Castaño. Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría. 31 de julio de 1996. Folios 88 – 90, Cuaderno 1, Radicado 233 de la UNDH-DIH. Expediente No. 008 – 1079998 Procuraduría delegada disciplinaria derechos humanos relata que se encontraba viendo televisión con su cónyuge y "con un amigo que vino de Cartagena y tocaron y todo estaba cerrado y entonces mi esposo fue a ver y le hicieron abrir la puerta y hasta ahí lo ví yo porque entraron unos señores armados y nos dijeron que nos saliéramos para afuera, listo nosotros nos salimos y ellos se sacaron la moto y revolcaron toda la casa buscando quien sabe que, tal vez armas, bueno como yo estaba a afuera me dijeron que fuera al carro, pero como estaba oscuro yo les dije yo no voy a salir porque sereno al niño porque apenas lo había levantado ….. luego ya me dijeron que me entrara para entro y cerrara porque más tarde venían más compañeros de ellos, listo yo me entré y me encerré". ANEXO 2 del ESAP.

[187] Declaración de María Oveida Castaño Gallego rendida el 31 de julio de 1996 ante la oficina de Investigaciones especiales de la Procuraduría seccional Antioquia. Folios 88 - 90 del Cuaderno No. 1. Expediente No. 008 – 1079998 Procuraduría delegada disciplinaria derechos. La testigo sostiene que "han visto subir soldados, las camionetas más conocidas son una blanca y otra roja pero he visto de otros colores, esa gente se moviliza en moto también y en taxis amarillos" y las ha visto también "como por ahí unas tres veces después de la desaparición de mi marido, con soldados vestidos de camuflado".

[188] Una camioneta verde fue usada también en las desapariciones forzadas de Juan Crisóstomo y Miguel Ancizar Cardona Quintero, de NN Fredy, su esposa y otro joven perpetradas al amanecer del día 22 de junio de 1996. Fls 190-191 Declaración con reserva de identidad ante la Fiscalía general de la Nación, dirección nacional de fiscalías, UNDH, 14 DE ABRIL 1998. También en la desaparición forzada de Juan Carlos Gallego Hernández, Jaime Mejía Quintero y el homicidio de Javier Giraldo Giraldo, entre las camionetas que se usaron se encuentra una de color blanca. Fl 204-205-206 Cuaderno No. 2 Declaración juramentada CARLOS ARTURO ESTRADA RAMIREZ dirección nacional de fiscalías UNDH, 15 de abril 1998. Los vehículos utilizados en la desaparición de Leónidas Cardona y de Andrés Gallego fueron una Camioneta blanca y otra verde, según Denuncia penal formulada por la señora María del Rocío Cardona Fernández el día 30 de diciembre de 1996 ante la Unidad Local de Fiscalías de Cocorná. Folios 1-2 Cuaderno No. 1. Radicado 22.317 de la Fiscalía Especializada delegada ante el GAULA Oriente.

pegar una barrida que incluida la casa de doña Edilma que porque ahí se mantenía la guerrilla"[189].

## *E.* Desaparición forzada de los menores Juan Crisóstomo y Miguel Ancizar Cardona Quintero, y de NN Fredy y su cónyuge o compañera permanente

### 1. Antecedentes de Juan Crisostomo y Miguel Ancizar Cardona Quintero

Juan Crisóstomo y Miguel Ancizar pertenecían a la familia Cardona Quintero, conformada por sus padres María Dioselina Quintero[190] y Miguel Ángel Cardona Franco[191], quienes habitaban en la Vereda La Esperanza, junto con sus otros hijos Héctor Hugo, Román Antonio, Diana Marcela, Clara Rosa, Jorge Enrique, Pedro Claver, Luis Alberto, Marta Lucia, Duvan Alexander, Leónidas y Luz Marina.

Para el momento en que fueron detenidos Juan Crisóstomo y Miguel Ancizar contaban con tan solo 12 y 16 años de edad, respectivamente[192]. A pesar de su corta edad, eran jóvenes muy trabajadores. Se desempeñaban en actividades agrícolas, propias de la Vereda La Esperanza, desyerbando la caña y cultivando plátano en el campo con el señor Berardo Castaño, también residente de la Vereda. Utilizaban sus ingresos para ayudar a su madre con el sustento de su hogar, debido a que su padre los había abandonado, tanto a ellos como a sus 10 hermanos[193].

### *2.* Antecedentes de NN Fredy y su cónyuge o compañera permanente

El mismo día en que desaparecieron a los dos niños anteriormente señalados, desaparecieron a NN FREDY y su esposa o compañera permanente, quienes eran procedentes de la región de Urabá[194], de donde habían llegado en calidad de desplazados[195] a la Vereda La Esperanza

---

189 Declaración de JUAN CARLOS GALLEGO HERNÁNDEZ ante la Personería del Municipio de Cocorná el día 30 de junio de 1996. Obrante a Folios 141 – 142, Cuaderno, No. 1 Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

190 María Dioselina Quintero falleció en el año 2008, en el hospital de Santuario. Según la Declaración Florinda de Jesús Gallego Hernández ante la Personeria de Carmen del Vivoral, en fecha 17 de noviembre de 2010. Folio 155, Cuaderno 13, Radicado 233 UNDH-DIH, ANEXO 2 del ESAP.

191 Miguel Ángel Cardona Franco falleció en el año 2001. Según la Declaración Florinda de Jesús Gallego Hernández ante la Personeria de Carmen del Vivoral, en fecha 17 de noviembre de 2010. Folio 155, Cuaderno 13, Radicado 233 UNDH-DIH, ANEXO 2 del ESAP.

192 Miguel Ancizar Cardona Quintero nacido el 03-08-1980, Juan Crisóstomo Cardona Quintero Nacido el 27-05-1984.ANEXO 1 del ESAP.

193 Acción de reparación directa instaurada por Maria Dioselina Quintero y otros ante el tribunal Administrativo de Antioquia. Radicado 2002-0527, Anexo incorporado en el DC5 "Sentencia Diocelina Quintero" del Informe de la CIDH del conjunto de CDs que acompañaron la notificación del caso.

194 Folio 89, Cuaderno No. 1, Radicado 233 UNDH – DIH. ANEXO 2 del ESAP. Ampliación de declaración de Andrés Gallego Castaño Oct. 25 de 1996 tomada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía en el municipio de Cocorná, "… esa gente hace más o menos un mes que los había visto por ahí, eran de esa gente de Urabá, ellos eran como tres, los cogieron a todos al otro lo cogieron con ese muchacho Cardona, él estaba enfermo y le pidió posada a Dioselina Quintero Castaño para dormir esa noche para no tener que subir para arriba esa noche". Folio 141, Cuaderno No. 1, Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP, declaración de Juan

[redacted] razón por la cual les fue arrendada una vivienda de propiedad del señor Orlando Quintero[197], donde llevaban viviendo desde unos 15 días antes de ser privados de la libertad.[198]

### 3. Detención y desaparición de los menores Juan Crisóstomo y Miguel Ancizar Cardona Quintero

La señora Dioselina señaló que una semana antes de la desaparición de sus hijos Miguel Ancizar y Juan Crisóstomo Cardona Quintero, "…estuvieron en [su] casa los soldados y les daban comida a los niños y después que se retiraron los soldados fue que vinieron ya por ellos" "Pero los soldados no se retiraban del todo los soldados estaban por el lado de donde don PASTOR por la entrada a Cocorná y eso me lo dijo ELVIA HERNANDEZ"[199].

Al amanecer del 22 de junio de 1996, aproximadamente a las cinco (5) de la mañana, incursionó un grupo de hombres armados a la vivienda donde residían Fredy y su esposa o compañera permanente, privándolos de la libertad. Estos mismos autores, ingresaron también a la vivienda habitada por la familia de la señora Dioselina Quintero, madre de los menores Miguel Ancizar y Juan Crisóstomo Cardona Quintero. En este inmueble también se encontraba un joven, cuyo nombre no se ha establecido. Estas casas de habitación se encuentran ubicadas, la primera a unos 50 metros y la segunda a unos 600 metros de la tienda de abarrotes y vivienda donde residía Aníbal de Jesús Castaño Gallego con su familia, el cual

---

Carlos Gallego Hernández ante la Personería de Cocorná. Junio 30 de 1996. "..es un muchacho que llaman Fredy, que es dizque de Urabá, eso he oído".

195 Folio 99-100, Cuaderno No. 3, Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP. Informe de misión de trabajo No. 01885 del 27 de agosto de 1998. Declaración EFRAIN DE JESUS GALLEGO HERNANDEZ ante funcionarios del CTI de la Fiscalía. Agosto 14 de 1998. Folio 101, Cuaderno No. 3, Radicado 233 UNDH-DIH. ANEXO 2 del ESAP.

[redacted]

197 Folio 89, Cuaderno No. 3, Radicado 233 UNDH – DIH. ANEXO 2 del ESAP. Informe de misión de trabajo No. 01885 del 27 de agosto de 1998. Declaración EFRAIN DE JESUS GALLEGO HERNANDEZ ante funcionarios del CTI de la Fiscalía. Agosto 14 de 1998. Folios 99-100, Cuaderno No. 3, Radicado 233 UNDH-DIH. ANEXO 2 del ESAP.

198 Escrito firmado por el Dr. Edgar Mario Alzate, Personero del Municipio de Cocorná, con sello de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación. Folio 140, Cuaderno No. 1, Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP. Este tiempo de permanencia en la Vereda La Esperanza (15 días antes de los hechos) por parte de Fredy y su esposa es corroborado a Folio 190, Cuaderno No. 1, Radicado 233 UNDH – DIH que recoge la declaración de la testigo ELVIA FERNANDEZ DE CARDONA, quien había declarado bajo reserva. Tal circunstancia es corroborada en la denuncia penal formulada por la señora Maria del Rocio Cardona Fernandez del 30 de diciembre de 1996, formulada ante la Unidad Local de Fiscalías de Cocorná. Folios 1-2 Cuaderno No. 1. Radicado 22.317 de la Fiscalía Especializada delegada ante el GAULA Oriente. Igualmente la presencia de Fredy y su familia en la Vereda La Esperanza, quince días antes de los hechos, es recogida a Folio 89. Cuaderno No. 3 Radicado 233 UNDH – DIH en el Informe de misión de trabajo No. 01885 del 27 de agosto de 1998 y en la Declaración EFRAIN DE JESUS GALLEGO HERNANDEZ ante funcionarios del CTI de la Fiscalía. Agosto 14 de 1998. Folios 99-100, Cuaderno No. 3. Radicado 233 UNDH DIH, ANEXO 2 del ESAP.

199 Declaración de Dioselina Quintero. Ante la Unidad Nacional de Fiscalías. Folios 99 -102, Cuaderno No. 10 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

había sido detenido la noche anterior junto con Oscar Hemel Zuluaga Marulanda. Los agresores, unos vestidos de civil y otros con camuflados, estacionaron en el Estanquillo[200] dos camionetas en las que se movilizaban por la autopista Medellín – Bogotá: una de color verde y la otra roja[201].



En estos hechos también fue utilizada una camioneta verde, que coincide con la que usaron los perpetradores de las desapariciones forzadas de Aníbal de Jesús y Oscar Hemel.[205] Entre los

[200] Así se le conoce a la Tienda que era administrada por Aníbal de Jesús Castaño Gallego y donde residía con su familia. En Declaración de María Obeida Castaño Gallego rendida el 31 de julio de 1996 ante la oficina de Investigaciones especiales de la Procuraduría seccional Antioquia relata la desaparición de la pareja, Juan Crisóstomo y Miguel Ancizar el 22 de junio a eso de las 5:30 de la mañana y aclara que "llegaron dos camionetas hasta la tienda". Folio 154 – 156, Cuaderno No. 1, Radicado 233 de la UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

[201] Folio 35, Cuaderno No. 6, Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP. Se consigna una comunicación anónima dirigida al Dr. José Díaz de investigaciones especiales de la Procuraduría donde se señala que los autores de las desapariciones forzadas en la Vereda la Esperanza se movilizaban en un Toyota Land Croiser 4.5 blanca, Toyota Land Croiser verde petróleo, Mitsubishi pajero azul, trooper color negro, trooper color gris, toyota cuatro puertas color rojo oscuro, tal como consta en el Acta diligencia de inspección judicial realizada por la Fiscalía que adelanta la investigación a la Oficina de la Procuraduría Delegada para los derechos humanos. Noviembre 17 de 2000. Esa comunicación anónima con la relación de los vehículos ya había sido incorporada al proceso penal y consta a folio 138 del cuaderno No. 1. Radicado 233 UNDH – DIH. ANEXO 2 del ESAP. En esta diligencia se inspecciona un oficio fechado el 27 de agosto de 1996 suscrito por la Técnico en criminalística Patricia Cabezas Yarce, que hace un estudio de los vehículos utilizados por los miembros del Batallón Héroes de Barbacoas que se movilizan por la autopista Medellín Bogotá, tales como: una camioneta Toyota de placas NIK 775, un Nissan de placas ITO 605, un Mitsubishi de placas CPH 599.

[202] Declaración con reserva de identidad, código VB-1, ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, de fecha 14 de abril de 1998. Declaración de Elvia Rosa Fernández de Cardona ante el Juzgado Civil municipal del Carmen de Viboral del día 12 de octubre de 2004. Esta declaración fue anexada al proceso penal y obra a Folios 299 – 301 del Cuaderno 10 del radicado 233 de la UNDH – DIH. ANEXO 2 del ESAP.

[203] Declaración de María Dioselina Quintero ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, de fecha 11 de noviembre de 1996. Folio 99, Cuaderno 10, Radicado 233 UNDH-DIH, ANEXO 2 del ESAP.

[204] Declaración del testigo bajo reserva de identidad V – B 1 tomado el 14 de abril de 1998 por la Fiscalía de la Unidad Nacional de derechos humanos. Folios 190 – 191, cuaderno 2, Radicado 233 de la UNDH – DIH. ANEXO 2 del ESAP.

[205] Folios 190-191, Cuaderno 2, Radicado 233 de la UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP. Declaración con reserva de identidad. Fiscalía General de la Nación, Dirección nacional de Fiscalías, UNDH, 14 DE ABRIL 1998. Y declaración de María Oveida Castaño Gallego rendida el 31 de julio de 1996 ante la oficina de Investigaciones especiales de la Procuraduría seccional Antioquia. Folio 154 – 156, Cuaderno 1, Radicado 233 de la UNDH – DIH. ANEXO 2 del ESAP.

captores fueron reconocidos "un soldado que acostumbraba permanecer en uno de los controles del ejercito situado a la entrada a Cocorná y a un policía de la Estación Cocorná"[206].

## F. Ataque a la vivienda de José Eliseo Gallego Quintero y su familia

### 1. Antecedentes del señor José Eliseo Gallego Quintero y su familia

La familia Gallego Hernández estaba compuesta por el señor José Eliseo Gallego y María Engracia Hernández, quienes residían en la Vereda La Esperanza junto con sus cinco hijos, María Aurora, Florinda de Jesús, María de los Ángeles, Octavio y Juan Carlos.

El señor José Eliseo tenía una finca en la Vereda La Esperanza, donde trabajaba como agricultor de café para el sustento de su familia[207]. A pesar de ser una familia humilde, el Sr. José Eliseo se esforzó por brindarles educación a sus hijos, especialmente a Juan Carlos, quien posteriormente se convertiría en promotor de salud de la comunidad[208].

La familia Gallego se caracterizaba por ser muy unida. Para 1996, a pesar de que todos sus hijos se habían casado e independizado con excepción de Juan Carlos, el señor José Eliseo y la señora María Engracia los recibían en su casa los fines de semana y mantenían una relación muy cercana. Esta relación tan armoniosa se mantuvo hasta que sus dos hijos, Octavio y Juan Carlos, fueron desaparecidos por fuerzas militares y paramilitares en la Vereda en julio de 1996.

### 2. Ataque a la vivienda del señor José Eliseo Gallego Quintero y su familia

El 25 de junio de 1996, se presentó en la Vereda La Esperanza un enfrentamiento entre la guerrilla y el ejército. Luego de este hecho, el personal militar detuvo por varios minutos a Juan Carlos Gallego Hernández y a su sobrino John Fredy Castaño Gallego, cuando caminaban por la Autopista – Medellín Bogotá. Les exigieron sus documentos de identificación y fueron acusados de ser colaboradores de la guerrilla[209], además les increpaban porque no

---

206 Declaración del testigo bajo reserva de identidad V – B 1 tomado el 14 de abril de 1998 por la Fiscalía de la Unidad Nacional de derechos humanos. Folios 190 – 191, Cuaderno 2, Radicado 233 de la UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

207 Declaración de JOSE ELISEO GALLEGO ante la Unidad Local de Cócorna de la Fiscalía General de la Nación. El 8 de julio de 1996. Cuaderno 1, Radicado 233 UNDH – DIH. ANEXO 2 del ESAP.

208 *Ibídem.*

209 Declaración de JHON FREDDY CASTAÑO GALLEGO, ante la Dirección Nacional de Fiscalías UNDH abril 15 de 1998. Folios 172-173-174, Cuaderno No. 2, Radicado 233 UNDH - DIH ANEXO 2 del ESAP. "[U]na vez para debajo de Rio (sic) yo bajaba con mi tío JUAN CARLOS GALLEGO días antes, como quince días antes de que a él se lo llevaran y el ejército estaba haciendo retenes porque había habido un enfrentamiento con la guerrilla cerca de la Vereda y nos requisaron, luego de esto más abajo nos volvieron a parar y nos pidieron papeles y mi tío les dijo que ya nos habían pedido papeles entonces que lo que pasaba es que ustedes son unos colaboradores de la guerrilla, y él les dijo que él no le colaboraba ni a la guerrilla ni al ejército, entonces un soldado le dijo al tío mío y a mí que no nos asustáramos cuando hicieran una barrida bien hijueputa y caigan ustedes ahí, nosotros seguimos el camino y como a los 15 días se llevaron a mi tío."

suministraban información al ejército sobre la presencia guerrillera[210]. Antes de dejarlos ir, uno de los soldados los amenazó diciendo "[…] sigan con los guerrilleros que la próxima vez que vengamos y encontremos algo no dejamos nada, acabamos con todo y con todos por parejo, hay que pegar una barrida"[211].

Al amanecer del 26 de junio de 1996, a las dos de la madrigada, un Pelotón de aproximadamente 54 soldados[212], pertenecientes a la Fuerza de Tarea Águila del Ejército, disparó sus armas de fuego de manera indiscriminada y lanzó granadas contra la vivienda en la que se encontraba durmiendo el señor José Eliseo Gallego, su esposa María Engracia y su hijo Juan Carlos.

Los soldados que atacaron la vivienda del señor José Eliseo Gallego estaban desarrollando la *"Operación Militar Rayo"*. La acción se prolongó por más de media hora[213], frente a lo cual no valieron las suplicas de auxilio para cesar la agresión. Juan Carlos Gallego posteriormente declaró lo siguiente:

> "Las balas se metieron al closet y traspasó todo lo que había, loza, libros, ropa, quedaron esquirlas en el chifonier, el muro casi lo tumban, el techo quedó vuelto colador, emparamándose totalmente, una hoja transparente quedó en pedazos, los bultos de sal y de cuido quedaron destrozados, el cuido se derramó todo, las lámparas caperuzas quedaron todas quebradas, las bombas de vidrio, los espejos, los cuadros, diplomas, todo quedó destrozado, todo lo de la cocina quedó destruido, la olla a presión nuevecita quedó traspasada, una guitarra que me había prestado de cien mil pesos quedó destrozada, la sagrada biblia que incluso tiene una bala incrustada. Además las cobijas y los libros que yo tenía del hospital, porque soy Promotor de salud quedaron destrozados, todos los libros y cuadernos que yo tenía quedaron vueltos en la nada" [214].

Cuando cesaron los disparos, los efectivos militares ingresaron a la vivienda del señor José Eliseo. Su hijo Juan Carlos, en vista del ataque desplegado por los soldados les reclamó los

---

210 Resolución de situación Jurídica que impone medida de aseguramiento a Ramón María Isaza Arango. Abril 3 de 2003. Folio. 272, Cuaderno xx, Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

211 La declaración de Juan Carlos Gallego Hernández fue recibida por la Personería Municipal de Cocorná el día 30 de junio de 1996. Es decir, 4 días después de ocurridos los hechos. Obrante a Folios 140 – 142, Cuaderno No. 1, Radicado 233 UNDH – DIH, Folio 32. Cuaderno 1. Expediente No. 008 – 1079998 Procuraduría delegada disciplinaria derechos humanos. Documento anexo en el CD4 "Proceso Disciplinario", folder "RAD0081079998", PDF "1-69"

212 Declaración de John Fredy Castaño Gallego, retomada por la Fiscalía en la resolución de Situación Jurídica que le impone medida de aseguramiento a Ramón María Isaza Arango. Folio 263, Cuaderno 9. Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

213 Declaración de María Engracia Hernández Quintero. UNDH – DIH, 15 de abril de 1998. Folio 201, Cuaderno 2. Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

214 La declaración de Juan Carlos Gallego Hernández fue recepcionada por la Personería Municipal de Cocorná el día 30 de junio de 1996. Es decir, 4 días después de ocurridos los hechos. Obrante a Folios 140 – 142. Cuaderno No. 1, Radicado 233 UNDH – DIH, y obrante a Folios 32 – 33, Cuaderno 1, Radicado 233 UNDH-DIH, Expediente No. 008 – 1079998 Procuraduría delegada disciplinaria derechos humanos. ANEXO 2 del ESAP.

daños causados, como consecuencia recibió un fuerte golpe en el rostro[215] y varias acusaciones de colaborar con la guerrilla[216].

Ante los disparos por parte del ejército que se escucharon en la zona. se hicieron presentes en la vivienda otros familiares de don José Eliseo Gallego, tales como John Fredy Castaño, Hernando de Jesús Castaño, Octavio de Jesús Gallego Hernández y María Florinda Gallego Hernández. Estas personas observaron el estado en que había quedado la vivienda debido a la agresión de los militares.

En dicha operación militar los uniformados se hicieron presentes con personas civiles: a uno lo tenían atado y encapuchado*[217]*. La persona que el Ejército conducía encapuchada o vendada en la Operación Rayo fue reconocida como "Fredy"[218], aquella quien había sido detenida desaparecida en los hechos del 22 de junio de 1996 en la Vereda La Esperanza. Los militares le pidieron a Fredy que comprobara la presencia de guerrilleros en la casa, debido que éste había pertenecido a las guerrillas, y acto seguido le quitaron la capucha para que identificara a las personas presentes. Al no señalar a nadie como guerrillero volvieron a taparlo. Sin embargo, los soldados permanecieron en la vivienda hasta las horas de la tarde de ese mismo día 26 de junio de 1996*[219].*

---

[215] Declaración de José Eliseo Gallego Quintero ante la Personería Municipal del Carmen de Viboral. Julio 19 de 1996. Sin foliar, Cuaderno 1, Expediente No. 008 – 1079998 Procuraduría delegada disciplinaria derechos humanos. Esta agresión fue corroborada por la señora María Engracia Hernández en declaración tomada el 15 de abril de 1998 ante la Fiscalía de la Unidad Nacional de Derechos Humanos que obra a Folio 201, Cuaderno No. 2, Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

[216] Declaración de Juan Carlos Gallego Hernández fue recibida por la Personería Municipal de Cocorná el día 30 de junio de 1996. Es decir, 4 días después de ocurridos los hechos. Obrante a Folios 140 – 142. Cuaderno No. 1 Radicado 233 UNDH – DIH. Folio 32. Cuaderno 1. Expediente No. 008 – 1079998 Procuraduría delegada disciplinaria derechos humanos. ANEXO 2 del ESAP.

[217]. Denuncia formulada por JOSE ELISEO GALLEGO QUINTERO ante la Unidad de Fiscalía Local de Cocorná. Julio 8 de 1996. Folios 12 – 15, Cuaderno 1, Radicado 233 de la UNDH – DIH. ANEXO 2 del ESAP. Los soldados "dijeron que eran los compas y entre uno de esos iba un guerrillero que hacía 15 días lo habían cogido, lo llevaban vendado. La señora María Engracia Hernández señala que "Los militares que nos abalearon la casa, (sic) a otra persona con la cara tapada, encapuchada. Lo destaparon y pronto lo volvieron y lo taparon; entonces el único que lo conoció fue Juan Carlos y dijo: Ah, con que sí, entonces está vivo Aníbal y todos esos otros que Ustedes se llevaron hace quince días; contestó uno de ellos al (sic) lo que dijo Juan Carlos, eso, entonces están vivos, los tienen vivos y que pesar esto lo dijo fue Juan Carlos y que pesar con el niño, que ese niño de pecho que estaba tan chiquito, que la única que lo había cogido era la hermana de él, ella con tantos niños. Él cuando Juan Carlos le dijo de los que se habían llevado y que estaban vivos, le contestó un soldado, dejémoslo así y pronto la mochó (cortó la conversación). Declaración de María Engracia Hernández Quintero. UNDH – DIH, 15 de abril de 1998. Folios 201, 202, Cuaderno 2, Radicado 233 UNDH – DIH. ANEXO 2 del ESAP

[218]. Declaración de Florinda de Jesús Gallego Hernández del 19 de julio de 1996 en la Personería Municipal del Carmen de Viboral. Folios 34 - 36, Cuaderno 1, Radicado 233 de la UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP. Denuncia formulada por JOSE ELISEO GALLEGO QUINTERO ante la Unidad de Fiscalía Local de Cocorná. Julio 8 de 1996. Folios 12 – 15, Cuaderno 1, Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP "Dijeron que eran los compas y entre uno de esos iba un guerrillero que hacía 15 días lo habían cogido, lo llevaban vendado". Declaración de MARIA ENGRACIA HERNADEZ QUINTERO, Dirección Nacional de Fiscalías UNDH. Abril 15 de 1998. Folios 200 – 203, Cuaderno 2, Radicado 233 de la UNDH – DIH. ANEXO 2 del ESAP.

[219]. Declaración rendida por JHON FREDY CASTAÑO GALLEGO, ante la UNDH de Fiscalías. Noviembre 10 de 2004. Folios 81 - 85, Cuaderno 10, Radicado 233 de la UNDH – DIH. ANEXO 2 del ESAP. John Fredy Castaño Gallego, nieto de los señores José Eliseo y María Engracia da certeza del ataque a la vivienda de sus abuelos por parte de los militares cuando responde a "la pregunta: "por qué razón afirma que las personas que se encontraban allí eran miembros del ejército RESPONDE: "porque estaban vestidos como militares, y sus botas y bolsas donde

A raíz del ataque perpetrado por el grupo FTA del ejército, la destrucción de la vivienda de la familia Gallego Quintero fue total[220]. Adicionalmente, el señor José Eliseo sufrió una herida en su brazo derecho a causa de los disparos indiscriminados por parte de los efectivos militares. El Informe médico legal practicado al Sr. Gallego señala:

> "[…] de 0,5 x 1 cm transversa con estigmas de área de limpieza y quemazón sin tatuaje ni bandeleta contusiva en cara externa ½ de brazo derecho con compromiso solo de tejido celular subcutaneo"; que de conformidad con el dictamen médico legal le fijaron una incapacidad provisional de 25 días y se determinó que "presenta claros signos de neurosis de ansiedad, acompañado de trastornos depresivos, sentimiento de pérdida y delirios de persecución producto de la violencia social que le ha tocado presenciar"[221].

Por estos hechos, el joven promotor de salud Juan Carlos Gallego Hernández formuló denuncia penal ante la Personería del Municipio de Cocorná el día 30 de junio de 1996 poniendo en conocimiento a las autoridades de los abusos de la Fuerza Pública. En igual sentido declararon el señor José Eliseo Gallego Quintero[222] y María Florinda Gallego Hernández[223].

Por las secuelas de lo sucedido, el Señor José Eliseo nunca recibió atención médica ni psicosocial. A raíz de esas lesiones y la perdida de sus dos hijos falleció de tristeza en la ciudad de Medellín el 20 de noviembre de 1997[224].

llevaban la comida eran enlatados marcados con el nombre del Ejercito Nacional, además manifestaron ser miembros del ejército, portaban armas largas, eran por ahí unos 50 o 60 hombres". El mismo testigo informa que el ejército había llegado "como a la una de la mañana y se fueron como a las 3 de la tarde del día siguiente, es decir amanecieron y a las 3 de la tarde aproximadamente se fueron."

220. Denuncia formulada por JOSE ELISEO GALLEGO QUINTERO ante la Unidad de Fiscalía Local de Cocorná. Julio 8 de 1996. Folios 12 – 15, Cuaderno 1, Radicado 233 de la UNDH – DIH. ANEXO 2 del ESAP.

221 Mediante oficio No. 115 del 8 de julio de 1996 Fiscalía Local de Cocorná ordena el dictamen médico legal a José Eliseo Gallego Quintero. Folios 16, Cuaderno 1, Radicado 233 de la UNDH – DIH. ANEXO 2 del ESAP Dictamen médico legal. Folio 66, Cuaderno 1, Radicado 233 de la UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

222 Denuncia formulada ante la Unidad de Fiscalía Local de Cocorná. Julio 8 de 1996. Folio 12, Cuaderno No. 1, Radicado 233 UNDH – DIH. ANEXO 2 del ESAP. Declaración de JOSE ELISEO GALLEGO QUINTERO ante la Personería Municipal del Carmen de Viboral. Julio 19 de 1996. Sin foliar. Cuaderno 1. Expediente No. 008 – 1079998 Procuraduría delegada disciplinaria derechos humanos. Ampliación de declaración del Señor José Eliseo Gallego el día 9 de agosto de 1996 ante la Oficina de Investigaciones especiales. Seccional Antioquia de la Procuraduría General de la Nación. Folio 166, Cuaderno No. 1, Radicado 233 de la UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

223 Declaración de Florinda de Jesús Gallego Hernández. Julio 19 de 1996, tomada ante la Personería Municipal de Cocorná. Folio 35, Cuaderno 1, Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

224 Informe No 02310 Unidad Nacional Policía Judicial. Derechos Humanos. Misión de trabajo No. 01813. Folios 77 – 79, Cuaderno 2, Radicado 233 de la UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

## G. Detención y desaparición forzada de Irene de Jesús Gallego Quintero

### 1. Antecedentes de Irene de Jesús Gallego Quintero

Irene de Jesús Gallego Quintero tenía 18 años en el momento de su desaparición[225], era hija de José Apolinar Gallego Quintero y Ester Julia Quintero de Gallego y hermana de Eladio, María Lucelly, Maria Luz Mery, Luz Mary del Socorro, Marleny y José Iván.

Era una joven alegre y feliz a quien le gustaban los vestidos con flores. Era la menor de los hermanos. Estudió en la escuela hasta tercero de primaria[226] y sus hermanos la recuerdan como una niña muy lista. Se dedicaba a labores agrícolas recogiendo café y limpiando potreros[227], y también cuidaba unos niños de la comunidad, colaborando con su madre cuando podía. Irene de Jesús vivía al momento de los hechos con su hermano Eladio, la esposa de este último y los hijos de la pareja, en la parte Alta de la Vereda La Esperanza, porque sus padres se habían ido a Carmen de Viboral con el resto de la familia.

### 2. Detención y Desaparición de Irene de Jesús Gallego Quintero

El 26 de junio de 1996, siendo las tres de la madrugada, al escuchar los disparos que se estaban presentando en la vivienda del Señor Jose Eliseo Gallego, Irene, su hermano, la esposa y los hijos se trasladaron hasta la vivienda de la señora Carmen Muñoz[228]. Eladio junto con su familia se devolvió para su vivienda como a las 7:00 de la mañana, pero Irene se quedó en la residencia de la señora Carmen Muñoz esperando el desayuno. A eso de las 8:00 o 9:00 de la mañana se hicieron presentes en la vivienda cuatro hombres del Ejército que se encontraban en desarrollando operativos en el marco de la Operación Rayo, ordenada por el Comandante de la FTA[229].

Los uniformados ingresaron violentamente y sin orden judicial a la vivienda de la señora Carmen Muñoz, requizaron y revolcaron todo con el pretexto de buscar elementos relacionados con los grupos insurgentes[230]. A Irene los uniformados "*le hicieron un disparo al lado donde ella estaba, a lado de la cama como para asustarla y le decían que dijera dónde estaba el fusil*"[231]. Posteriormente, la privaron de su libertad sin orden judicial, ni en situación de flagrancia con respecto a algún hecho delictivo, pues ni en el lugar, ni a ella personalmente le fueron encontrados elementos de delito que la comprometiera con actividades ilegales.

---

225 Fecha de nacimiento: 01-11-1977 ANEXO 1 del ESAP.

226 Declaraciones de La señora Ester Julia Quintero de Gallego, madre de Irene. Folio 86, Cuaderno No. 10, Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

227 Potrero: Terreno que se encuentra lleno de maleza.

228 Diligencia declaración jurada PEDRO PABLO MUÑOZ 6 de abril de 2005. Folios 192-199, Cuaderno No. 10, Radicado 233 UNDH – DIH. ANEXO 2 del ESAP.

229 Declaración de Carmen Muñoz Castaño. Agosto 4 de 1996. Ante la Personería Municipal de Cocorná. Folio 170 – 171, Cuaderno No. 1, Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

230 Ibídem.

231 Ibídem.

Los soldados salieron con Irene en calidad de detenida obligándola a conducirlos hacía un lugar al parecer destinado a ser un campamento de la guerrilla en la Parte Alta de la Vereda[232]. En horas de la tarde llegaron con ella a la vivienda del señor José Eliseo Gallego donde se encontraba el grueso de los militares que componían el Pelotón que desarrolló la Operación Rayo de la FTA. Irene se encontraba nerviosa y llorando según afirman testigos que la vieron[233].

Irene había permanecido con el Ejército desde el momento de su captura en horas de la mañana (8:00 – 9:00 am) hasta las tres o cuatro de la tarde, cuando fue llevada por los soldados a la vivienda del señor José Eliseo Gallego. Irene se encontraba vestida con la propia ropa con la que estaba al momento de su captura, sin embargo, fue obligada a cambiarse y usar prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares. El joven Fredy Castaño a quien le habían exigido traer la ropa de Irene de la casa donde ella vivía, informa que "*cuando traje la ropa se la entregué al ejército y le pusieron ropa de camuflado del ejército y se la llevaron hacia la autopista y de ahí para adelante ya no se más*"[234].

A Irene la desvistieron los soldados para cambiarle la ropa en medio del grupo de militares y personas que se encontraban en la vivienda del Señor José Eliseo Gallego[235]. Le quitaron su ropa de civil y le pusieron ropa del ejército, junto a un bolso camuflado[236]. El bolso tenía municiones y "asi se la llevaron para presentarla que era una guerrillera".[237]

El 28 de Junio de 1996, Irene fue puesta a disposición de la Fiscalía Seccional del Municipio de El Santuario por el propio Comandante de la FTA, acusándola del delito de rebelión[238].

Irene de Jesús fue formalmente dejada en libertad por la Fiscalía del Municipio de Santuario, según su testimonio y la certificación expedida por solicitud del Mayor del ejército que la puso a

---

232 Diligencia declaración jurada PEDRO PABLO MUÑOZ 6 de abril de 2005. Folios 192-199, Cuaderno No. 10, Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

233 Declaración juramentada MARIA ENGRACIA HERNADEZ QUINTERO, dirección nacional de fiscalías UNDH, 15 de abril de 1998. Folios 200- 201-202-203, Cuaderno No. 2, Radicado 233 UNDH – DIH. ANEXO 2 del ESAP "[D]urante el día algunos de esos militares fueron a andar, y después llegaron con IRENE, ella bajaba llorando, iba con su ropa de casa."

234 Declaración rendida por JHON FREDY CASTAÑO GALLEGO, ante la UNDH de Fiscalías. Abril 15 de 1998. Folios 172 – 174, Cuaderno 2, Radicado 233 de la UNDH – DIH. ANEXO 2 del ESAP.

235 Según declaración de JHON FREDY CASTAÑO GALLEGO, ante la UNDH de Fiscalías. Abril 15 de 1998. Folios 172 – 174, Cuaderno 2, Radicado 233 de la UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP. El grupo de militares eran unos 50 o 60 uniformados.

236 Declaración de FLORINDA DE JESUS GALLEGO HERNANDEZ. 28 de noviembre 2000. Fiscalía UNDH – DIH. Folios 168 – 176, Cuaderno No. 6, Radicado 233 UNDH-DIH, ANEXO 2 del ESAP.

237 Entrevista con Florinda de Jesus Gallego Hernandez, Policia Judicial, 17 de noviembre de 2010. Folio 158, Cuaderno 13, ANEXO 2 del ESAP.

238 Diligencia de Indagatoria del Mayor Carlos Alberto Guzmán Lombana. Febrero 13 de 2001. Folios 12 – 24, Cuaderno No. 8, radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP. "[E]l día 28 de junio en horas de la tarde, tipo dos o tres de la tarde yo entregue esa niña a la Fiscalía".

disposición de ese Despacho[239]. En los días posteriores varios testigos de la Vereda afirmaron que vieron a Irene nuevamente en custodia de militares.

La señora Elvia Rosa Fernandez Cardona asegura que "la vi[ó] con los soldados, en la autopista, el domingo 15 de julio de mil noveciente (sic) seis, y no volví a saber más de ella, y cuando vi solos a los soldados les pregunté por María Irene y me dijeron que se la habían entregado a los paramilitares […]"[240].

La señora Blanca Edilma Gómez Zuluaga manifestó en el mismo sentido que Irene "primero estuvo andando con la guerrilla y la cogieron el Ejército cuando por allá subieron a la finca de ellos y ya cuando la vieron en la Tienda La Cadavid con el Ejército y después se desapareció también"[241]. El Personero del Municipio de Cocorná Dr. Edgar Mario Alzate García señala sobre Irene Gallego Quintero que "después de haber sido presentada en la Fiscalía fue dejada nuevamente en poder de los militares, sin que hasta la fecha se sepa nada de ella por parte de su familia [...]"[242].

Una testigo que había declarado en la Fiscalía bajo reserva de identidad, afirmó que:

> "[L]a muchacha MARLENY GALLEGO QUINTERO, ella estaba con los soldados el día 15 de julio de 1996, ella se encontraba en el bordo de la autopista, al lado del estanquillo, vestida de civil con camisa floriada y jean desteñido y desde esa fecha no se ha vuelto a saber de ella. Quienes la vieron dicen que es blue jean no era de ella porque era muy ancho, Dicen que un soldado le dijo a un habitante de la región que a MARLENY la había entregado a los paramilitares ya que ellos tenían la lista y que como un paramilitar había ido con ellos cuando la cogieron, entonces la tenían que entregar, además dijo que ellos la habían entregado en la base de la Piñuela y ahí se la entregaron al paramilitar, eso fue lo que dijo el soldado más o menos entre los meses de agosto y septiembre cuando volvió a la región el ejército"[243].

Si bien en esta declaración nombra a la víctima como Marleny, lo cierto es que de la narrativa se desprende que se trata de las mismas circunstancias modales en que ocurrió la detención de Irene y adicionalmente, en la declaración de la testigo es clara en afirmar que se refería a Irene.

---

239 Constancia emitida por la Fiscal Encargada de la Fiscalía Seccional del Municipio de Santuario. Folios 162, cuaderno No. 2, Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

240 Declaración rendida ante el Juzgado Civil Municipal del Carmen de Viboral el 12 de octubre de 2004. Folios 299 – 301, Cuaderno No. 10, Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

241 Sin foliar, Cuaderno No. 10, Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

242. Declaración del Personero EDGAR MARIO ALZATE GARCIA tomada por el Fiscal Regional el 13 de mayo de 1997. Folios 214 – 216, Cuaderno No.1, Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

243 Declaración con reserva de identidad VB -1 tomada ante la Fiscalía Regional de la UNDH. Abril 14 de 1998. Folios 190 – 191, cuaderno No. 2, Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

## H. Desaparición de Juan Carlos Gallego Hernández, Jaime Alonso Mejia Quintero y el homicidio de Javier de Jesús Giraldo Giraldo:

### 1. Antecedentes de Juan Carlos Gallego Hernández

Juan Carlos era el hijo menor de la familia Gallego Hernández, tenía 23 años de edad[244] y vivía en la Vereda la Esperanza en un sitio conocido como la meseta, en frente del cerro Picacho en la casa de sus padres[245]. Desde temprana edad se esforzó por terminar sus estudios de bachiller, siendo la única persona en la Vereda La Esperanza en culminar satisfactoriamente sus estudios, por lo que tuvo la posibilidad de instruirse y llegar a ser promotor de salud de la comunidad[246]. Juan Carlos desempeñaba este cargo desde el año 1993 y estaba vinculado al Hospital San Juan de Dios del Municipio del Carmen de Viboral. Además de sus actividades como promotor de salud en la Vereda, Juan Carlos también era catequista en la Capilla Santa Cruz[247], se caracterizaba por ser una persona muy religiosa y compartir su fe con su familia y su comunidad.

Debido a su profesión, Juan Carlos atendía a cualquier persona que necesitara asistencia médica en Vereda. En vista de esto, fue detenido y cuestionado varias veces por miembros del Comando Militar que operaba en la zona de la Vereda sobre las actividades de la guerrilla. Siendo señalado y amenazado por los soldados de prestar colaboración a la guerrilla[248].

### 2. Antecedentes de Jaime Alonso Mejía Quintero

Jaime Alonso Mejía Quintero[249], tenía 38 años de edad, era hijo de María de Jesús Quintero Gallego y Manuel Salvador Mejía Gómez y hermano de Alba Rosa, Oliva del Socorro, Luz Dary, Marta Edilma, Elda Emilse, Ana Obeida, Consuelo de Jesús, Rubén de Jesús, Pedronel, Dolly, Amada, Luz Mery, Luis Alberto, Octavio y Edgar de Jesús. La mayoría de los hermanos vivían cerca y mantenían una relación cercana. Jaime Alonso se dedicaba a la labor agrícola pues poseía un terreno en la vereda la Esperanza donde cultivaba plátano y café, así mismo

---

244 Juan Carlos Gallego Hernández nació el 17 de agosto de 1973, ANEXO 1 del ESAP.

245 Declaración de Florinda de Jesús Gallego Hernández ante la Policia judicial, de fecha 17 de noviembre de 2010. Folio 154, Cuaderno 13, Radicado 233 UNDH-DIH, ANEXO 2 del ESAP.

246 Declaración de Juan Carlos Gallego Hernández fue recibida por la Personería Municipal de Cocorná el día 30 de junio de 1996. Es decir, 4 días después de ocurridos los hechos. Obrante a Folios 140 – 142, Cuaderno No. 1, Radicado 233 UNDH – DIH y Folio 32, Cuaderno No. 1, del Radicado 233 UNDH-DIH, ANEXO 2 del ESAP.

247 Declaración de Florinda de Jesús Gallego Hernández ante la Policia judicial, de fecha 17 de noviembre de 2010. Folio 154, Cuaderno 13, Radicado 233 del UNDH-DIH, ANEXO 2 del ESAP. Corporación Jurídica Libertad, *Video: Por lo menos sus nombres*, desaparecidos de la Vereda La Esperanza. Minuto 02:50. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=qajHSrHqYSo, ANEXO 3 del ESAP archivo del video titulado "Resistir en la Esperanza tras una década de impunidad (por lo menos sus nombres)".

248 Declaración de Juan Carlos Gallego Hernández fue recibida por la Personería Municipal de Cocorná el día 30 de junio de 1996. Es decir, 4 días después de ocurridos los hechos. Obrante a Folios 140 – 142, Cuaderno No. 1, Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP; Folio 33, Cuaderno No. 1, , Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP; Declaración de Jhon Freddy Castaño Gallego, ante la Dirección Nacional de Fiscalías UNDH 15 de abril de 1998. Folios 172-173-174, Cuaderno No. 2, Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

249 Fecha de nacimiento: 19-04-1958. ANEXO 1 del ESAP.

vendía chance[250] junto con el señor Horacio Gallego[251]. Era muy trabajador y ganaba bien y así colaboraba con la madre. Soñaba con algún día abrir una tienda o montar un pequeño negocio.

### 3. Antecedentes de Javier de Jesús Giraldo Giraldo

Javier de Jesús Giraldo Giraldo estaba casado con la Señora Nelly Soto con quien tuvo una hija Verónica Giraldo Soto, que tenía seis años, y residían en la Vereda El Tesoro del Municipio de Cocorná, ubicada sobre la Autopista Medellín - Bogotá. Tenía 36 años y llevaba 14 años casado con Nelly. Era hijo de Alejandrino y María Luz Mila. Era muy dedicado a su familia, y hacía todo para Verónica. Lo más importante para él era que ella estudiara, ya que él no había tenido esa oportunidad. También era padrastro de los hijos de Nelly, producto de las primeras nupcias de su esposa. A Javier le gustaba mucho el ciclismo, y ganaba medallas en competencias, mismas que Nelly aún conserva.

De profesión era agricultor y contratista en Pavicol, empresa encargada de reparaciones de la autopista Medellín Bogotá[252]. Igualmente, su esposa manifiesta que alquilaba "bestias[253]" para arreglar los derrumbes de la carretera[254]. También arreglaba bicicletas y motocicletas.

### 4. Detención y desaparición de Juan Carlos y Jaime Alonso, y ejecución de Javier de Jesús

El domingo 7 de Julio de 1996, a las tres de la tarde, Juan Carlos Gallego se encontraba en la Capilla Santa Cruz de la Vereda la Esperanza atendiendo a una reunión de mejoramiento de vivienda. Al salir de la reunión, un grupo de sujetos armados llegó a la Vereda en varios vehículos. Este grupo de sujetos se bajaron de los vehículos y sin mediar palabra capturaron a Juan Carlos Gallego Hernández; éste fue obligado a subir a una de los vehículos donde se movilizaban los agresores[255].

---

250 El chance es un juego de azar que la gente compra a fin de obtener un número ganador con una lotería.

251 Declaración de Nicanor Velasquez Martínez. Personería Municipal del Carmen de Viboral. 15 de julio de 1996. Sin foliar, Cuaderno 1, Expediente No. 008 – 1079998 Procuraduría delegada disciplinaria derechos humanos. ANEXO 2 del ESAP.

252 Folio 109, Cuaderno No. 1, radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

253 Nombre usado popularmente para referirse a animales domésticos usados para trabajo en el campo.

254 Folio 123, Cuaderno No. 10, radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

255 Declaración de Florinda de Jesús Gallego Hernández. Juzgado Penal Municipal de Cocorná. Julio 11 de 1996. Folio 4, Cuaderno 1, Radicado 233 UNDH-DIH ANEXO 2 del ESAP. Expediente No. 008 – 1079998 Procuraduría delegada disciplinaria derechos humanos. La señora Florinda señaló: "él estaba en la capilla de la Vereda La Esperanza en una reunión de mejoramiento de vivienda, cuando llegaron unos tipos armados, bien armados, vestidos de civil, usaban una camioneta, no sé cuántos tipos, llegaron directamente a la capilla, pero ya la reunión se había terminado, mi hermano se encontraba ahí afuera hablando con unos señores se llaman ARNOLDO HERNANDEZ y la esposa que se llama, corrijo, no era la esposa, era una de ahí de la vereda, ella se llama CONSUELO GIRALDO, él, mi hermano en ese preciso momento estaba hablando directamente con don ARNOLDO, de un contrato de una cafetera, entonces cuando llegaron los tipos de la camioneta y ahí mismo se fueron derecho a

El mismo día, Javier de Jesús Giraldo Giraldo estaba enseñándole a manejar motocicleta a Carlos Estrada. Javier había ido a Cocorná este domingo para hacer mercado y pensaba volver a tiempo para ir a misa con su esposa. Una vez allá el señor Estrada le pidió que le enseñara como manejar la moto que tenía y Javier disponía de una hora para hacerlo. En el camino se encontraron con los captores de Juan Carlos Gallego que transitaban por la autopista Bogotá-Medellín a la altura de la Vereda La Esperanza. Estos últimos impactaron deliberadamente a una motocicleta en que la se movilizaba Javier Giraldo provocándole varias lesiones[256]. En esas condiciones lo capturaron y lo subieron a uno de los vehículos. De igual manera se llevaron la moto que este estaba manejando[257].

No obstante a sus lesiones, Javier Giraldo intento escapar de sus captores. Carlos Estrada asegura en su declaración que:

> "Lo único que le digieron (sic) fue que con que corriendo mucho gran hijuetantas, (sic) entonces él les contestó , corriendo no le estoy enseñando a manejar a este muchacho, entonces le digieron (sic) venga para acá que lo necesitamos y lo cogieron dos tipos y lo montaron en el carro, ellos andaban en dos camperos y en una luv. Los sujetos eran más bien jóvenes con corte de pelo muy parecido al del ejército, portaban pistolas y estaban vestidos de civil […]"[258].

Posteriormente, Jaime Alonso Mejía Quintero, quien se encontraba en un salón jugando billar, fue igualmente sustraído de ese lugar y subido a uno de los carros. Con las tres personas capturadas, los vehículos continuaron su marcha en dirección al Magdalena Medio. En la Vereda San Vicente, sobre la autopista Medellín – Bogotá, asesinaron a Javier de Jesús Giraldo, dejando su cuerpo abandonado a un lado de la carretera, así como la motocicleta de

---

él, entonces sin preguntarle el nombre y sin decir nada, lo cogieron del cuello y lo tiraron dentro de la camioneta y una bicicleta que había ahí, que era de él, de mi hermano la cogieron y la tiraron por allá lejos, diciendo que en esas no se cuántas bicicletas era que se estaban transportando los guerrilleros, …. Luego que tiraron a mi hermano atravesaron la camioneta en la carretera y ahí mismo que venía un señor en una moto que se llama JAVIER no se el apellido lo hicieron estrellas (sic) y ahí mismo todo ensangrentado lo tiraron a la camioneta; enseguida ahí más abajito, en la quebrada de Vid (sic) [VIAO] paró un carro, un taxi y se quedó estacionado y ahí mismo llegó la camioneta donde llevaban al hermano y al señor JAVIER y paró rápido y se entraron a un jugadero de billar y se sacaron a JAIME MEJIA, el chancero de ahí de la Vereda y también lo tiraron a la camioneta"; Véase también Denuncia formulada por JOSE ELISEO GALLEGO QUINTERO ante la Unidad de Fiscalía Local de Cocorná. Julio 8 de 1996. Folio 12, Cuaderno No. 1, Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

256 Declaración de Carlos Estrada que obra en el informe No. 84 Radicado. 21.005 Diligenciamiento de orden de trabajo No. 088. Dirigido al Dr. Iván De Jesús Duque Santa. De Nov. 27 de 1996. Folio 107, Cuaderno No. 1, Radicado 233 UNDH-DIH. ANEXO 2 del ESAP. Declaración de Florinda de Jesús Gallego Hernández. Juzgado Penal Municipal de Cocorná. Julio 11 de 1996. Folio 4, Cuaderno 1, Anexo 2 del ESAP. Expediente No. 008 – 1079998 Procuraduría delegada disciplinaria derechos humanos. Declaración de Hernando de Jesús Castaño Castaño. Julio 8 de 1996. Personería Municipal de Cocorná. Folio 143, Cuaderno No. 1, Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

257 Declaración de Carlos Estrada que obra en el informe No. 84 Radicado. 21.005. Diligenciamiento de orden de trabajo No. 088. Dirigido al Dr. Iván De Jesús Duque Santa. De Nov. 27 de 1996. Folio. 107, Cuaderno No. 1, Radicado 233. Declaración de Florinda de Jesús Gallego Hernández. Juzgado Penal Municipal de Cocorná. Julio 11 de 1996. Folio 4, Cuaderno 1 (Anexo 2 del ESAP). Expediente No. 008 – 1079998 Procuraduría delegada disciplinaria derechos humanos

258 Declaración de Carlos Estrada que obra en el informe No. 84 Radicado. 21.005 Diligenciamiento de orden de trabajo No. 088. Dirigido al Dr. Iván De Jesús Duque Santa. De Nov. 27 de 1996. Folio. 107, Cuaderno No. 1, Radicado 233 del UNDH-DIH, ANEXO 2 del ESAP.

propiedad del señor Carlos Estrada que se habían hurtado. La multiplicidad de disparos de armas de fuego, no logró ninguna reacción de la Fuerza Pública que se encontraba en el área.

Nelly Soto de Castaño, cónyuge de Javier de Jesús, informó a las autoridades que "8 días antes ellos[ los soldados del Ejército] llegaron a su casa y le preguntaron que donde estaba su esposo, entonces ella les dijo que estaba trabajando en Cocorná[259]". Por su parte, Juan Carlos Gallego Hernández, además de haber denunciado el día 30 de junio de 1996 ante la Personería de Cocorná los hechos ocurridos en la casa de habitación donde convivía con sus padres contra personal militar, también recibió amenazas por parte del ejército. Su sobrino John Fredy Castaño Gallego asegura que:

> "[…] una vez para debajo de Rio (sic) yo bajaba con mi tío JUAN CARLOS GALLEGO días antes, como quince días antes de que a él se lo llevaran y el ejército estaba haciendo retenes porque había habido un enfrentamiento con la guerrilla cerca de la Vereda y nos requisaron, luego de esto más abajo nos volvieron a parar y nos pidieron papeles y mi tío les dijo que ya nos habían pedido papeles entonces que lo que pasaba es que ustedes son unos colaboradores de la guerrilla, y él les dijo que él no le colaboraba ni a la guerrilla ni al ejército, entonces un soldado le dijo al tío mío y a mí que no nos asustáramos cuando hicieran una barrida bien hijueputa y caigan ustedes ahí , nosotros seguimos el camino y como a los 15 días se llevaron a mi tío"[260].

## I. Desapariciones forzadas de Hernando de Jesús Castaño Castaño, Octavio de Jesús Gallego Hernández, [redacted] y Orlando de Jesús Muñoz Castaño

### 1. Antecedentes de Hernando de Jesús Castaño Castaño

Hernando de Jesús Castaño Castaño tenía 35 años de edad[261], era hijo de Francisco Antonio Castaño Alzate e Inés Castaño Ramírez y residía en la Vereda junto con sus padres y sus hermanos Héctor de Jesús, Berardo de Jesús, María Sofía, María Josefina, Blanca Inés, y Edilma de Jesús Castaño Castaño.

En su juventud conoció a su vecina la señora Florinda de Jesús Gallego Hernández, con quien mantuvo una relación de noviazgo durante casi 12 años y se casó el 22 de julio de 1989. Formaron una familia con 5 hijos: Claudia Yaneth, Wilder, Juan Diego, Celeni, Jazmín

---

259 Declaración de Nelly Soto obrante en el informe No. 84 Radicado. 21.005 Diligenciamiento de orden de trabajo No. 088. Dirigido al Dr. Iván De Jesús Duque Santa. De Nov. 27 de 1996. Folio 104, Cuaderno No. 1,. Radicado 233 del UNDH-DIH, ANEXO 2 del ESAP.

260 Declaración de JHON FREDDY CASTAÑO GALLEGO, ante la Dirección Nacional de Fiscalías UNDH abril 15 de 1998. Fl 172-173-174 Cuaderno No. 2. Radicado 233 UNDH – DIH ANEXO 2 del ESAP.

261 Fecha de nacimiento: 24-09-1961, ANEXO 1 del ESAP.

Lorena[262], esta última no tuvo la oportunidad de conocerlo, debido a que la señora Florinda tenía 2 meses de embarazo cuando su esposo fue desparecido. Además de los 5 hijos concebidos con la señora Florinda, Hernando era padre del joven John Freddy Castaño Gallego.

Hernando se dedicaba a las labores del campo en la finca de su propiedad en la Vereda La Esperanza, cultivaba el café con mucha dedicación para luego venderlo en la zona de la Vereda[263]; despeñando esta labor mantenía a su núcleo familiar. Su sueño era poner una cafetera y darles estudio a sus hijos.

En el contexto de conflicto que se vivía la Vereda la Esperanza, el señor Hernando Castaño fue objeto de amenazas por parte de los efectivos militares de la zona en las que fue acusado en más de una ocasión de ser colaborador de la guerrilla.

### 2. Antecedentes de Octavio de Jesús Gallego Hernández

Octavio de Jesús Gallego Hernández, tenía 30 años de edad[264], también pertenecía a la Familia Gallego Hernández, era hijo de la señora María Engracia Hernández y José Eliseo Gallego Quintero víctimas de la Operación Militar Rayo, y hermano de Juan Carlos Gallego quien fue desaparecido el 7 de julio de 1996 a las afueras de la Capilla Santa Cruz en la Vereda la Esperanza.

Octavio también residía en la Vereda la Esperanza junto con su esposa María Florinda Gallego, con quien tenía 3 hijas Yanet, Johana y Deicy Gallego Gallego. El señor Octavio de Jesús se dedicaba a las labores del campo, a la construcción de casas[265]. No obstante, su pasión era la carpintería, sus familiares elogiaban su habilidad para labrar la madera

### 3. Antecedentes de Orlando de Jesús Muñoz Castaño

Orlando de Jesús Muñoz Castaño[266] tenía 24 años de edad y convivía con Adriana González Quintero. Era hijo de Arcesio Muñoz y Cándida Rosa Castaño Gallego. Sus hermanos son Carlos Amador, Rubén Darío, Abelardo, Rosa María, María Aurora, Marco Aurelio, María Rubiela, Cruz Elena, Bertha Inés, Florinda de Jesús y Oscar Santiago Muñoz Castaño. Orlando siempre atendía a las eucaristías celebradas en la capilla de Santa Cruz.

---

262 Programa Televisivo Contravía. Video: *Los desaparecidos de la esperanza parte I.* Capítulo 177. Minuto 04:30. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=GUq8EVzDWBg, ANEXO 3 del ESAP.

263 Programa Televisivo Contravía. Video: *Los desaparecidos de la esperanza parte I.* Capítulo 177. Minuto 26:10. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=GUq8EVzDWBg , ANEXO 3 del ESAP.

264 Fecha de nacimiento: 06-03-1966. ANEXO 1 del ESAP.

265 Declaración de María Florinda Gallego ante la Personería de Carmen del Vivoral.. Folio 92, Cuaderno No.1, Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

266 Fecha de nacimiento: 21-03-1972. ANEXO 1 del ESAP.

El señor Orlando administraba una finca del Señor Ovidio Palacio y se dedicaba a trabajar en el campo las labores agrícolas[267]. Sembraba un poco de maíz en una tierrita que era una herencia de su mamá ya fallecida.

### 4. Detención y Desaparición de Hernando de Jesús, Octavio de Jesús y Orlando de Jesús.

El martes 9 de julio de 1996, Octavio De Jesús Gallego Hernández había salido de su vivienda ubicada en la Vereda La Esperanza hacia la casa de su hermana Aurora. Estos se iban a ir para Cocorná con el fin de averiguar la situación de su hermano Juan Carlos[268], a quien habían desaparecido dos días antes [269]. Al llegar a la vivienda ubicada en la Vereda San Vicente, subieron cuatro carros pequeños por la autopista Medellín – Bogotá. Del vehículo se bajaron dos personas fuertemente armadas y sin mediar palabra capturaron a Octavio Gallego[270].

John Fredy Castaño Gallego sobrino de Octavio, quien se encontraba con éste último al momento su desaparición, señaló en su declaración lo siguiente:

> "[P]araron cuatro carros, eso era como las tres y media de la tarde, se bajaron dos manes de los carros, los carros eran unos TOYOTAS, uno era de color gris, otro de color rojo y crema y otra de color negra, ellos se bajaron y cogieron a mi tío y lo suvieron al carro de color rojo y crema, lo único que le dijeron a mi tío fue amigo lo necesitamos a Usted […] cuando lo subieron al carro ellos arrancaron hacia la vía que conduce a Medellín"[271].

Vale destacar, que Octavio Gallego había estado presente en la vivienda de sus padres José Eliseo Gallego y María Engracia Hernández, el 26 de junio de ese mismo año, cuando fue atacada por los militares. En esa oportunidad, según lo manifiesta su esposa María Florinda Gallego Hernández, éstos recriminaron al personal de la FTA por la acción destructiva, que además de no ser reconocida como un grave comportamiento contra la población, se negaban a asumir la reparación de los daños ocasionados.[272]

---

267 Declaración de Adriana González Quintero. Folio 210, Cuaderno No. 1, Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

268 Declaración de María Florinda Gallego Hernández ante la Personería Municipal del Carmen de Viboral. 19 de julio de 1996. Sin foliar. Cuaderno 1. Expediente No. 008 – 1079998 Procuraduría delegada disciplinaria derechos humanos.

269 Declaración de Florinda De Jesús Gallego Hernández. Julio 31 de 1996 ante la Oficina de Investigaciones especiales de la Procuraduría. Folio 93. Cuaderno 1. Expediente No. 008 – 1079998 Procuraduría delegada disciplinaria derechos humanos.

270 Declaración de Héctor Manuel González Ramírez abril 15 de 1998 ante la Dirección nacional de fiscalías UNDH. Folios 197-198-199, Cuaderno No. 2, Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

271 Declaración Jhon Freddy Castaño Gallego, Dirección Nacional de Fiscalías UNDH. De fecha 15 de abril de 1998. Folio 172-173-174, Cuaderno No. 2, Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

272 Declaración de María Florinda Gallego Hernández. El folio donde figura la autoridad que tomó la declaración no se encuentra en el expediente. Sin embargo suscribe la diligencia un funcionario del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. Folios 91 – 92, Cuaderno No. 1, Radicado 233. UNDH – DIH.

Adicionalmente, Octavio fue amenazado por el personal militar con ser privarlo injusta y arbitrariamente de su libertad,[273] tal como había ocurrido con su prima Irene de Jesús capturada ilegalmente y con Fredy, a quien también habían detenido desde el día 22 de junio de ese mismo año y fuera utilizado como guía en la Operación Rayo por personal militar de la FTA.



Según el testimonio de los familiares de las víctimas, el Ejército había estado preguntando por el paradero del menor[275] en varios lugares de la Vereda la Esperanza.[276]. Así lo confirmó también el señor Andrés Antonio Gallego Castaño, quien, el día 27 de diciembre de 1996, sería detenido – desaparecido, en la misma Vereda.[277]

El 9 de julio de 1996, a las 3:30 de la tarde un grupo de hombres subieron caminando desde la autopista Medellín – Bogotá hacia la zona montañosa donde vivía la Familia de Hernando de Jesús.[278] Los captores llegaron preguntando por el menor hijo de Fredy y una vez lo encontraron en la vivienda se lo llevaron junto con el Señor Hernando Castaño.[279].

---

ANEXO 2 del ESAP. "El esposo mío con el hermano se pusieron a discutir con los soldados, les dijeron que porque llegaban así, que disparando sin haber nadie, que tenían que respetar y que los iban a demandar para que pagaran los daños, y que los soldados le contestaron que hágalo, que ustedes son los que pierden, y en esa semana se llevaron a Juan Carlos, ellos ya estaban haciendo las vueltas para demandarlos, luego al esposo mío."

273 Declaración de Florinda Gallego Hernández ante la Personería del Carmen de Viboral el 19 de julio de 1996. Folio 37, Cuaderno No. 1. Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP. Y sin foliar. Cuaderno 1. Expediente No. 008 – 1079998 Procuraduría delegada disciplinaria derechos humanos. "Me decía el ejército a mí que dice usted nos lo llevamos y yo les decía que como se los iban a llevar y yo llamaba a Octavio para que se entrara para adentro y él no me hacía caso y como a los ocho días fue que se lo llevaron."

274 Declaración de María Obeida Gallego Castaño ante la Oficina de investigaciones especiales de la Procuraduría. 31 de julio de 1996. Folio 154, Cuaderno 1, Radicado 233. UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

275 Declaración de Florinda de Jesús Gallego Hernández. Juzgado Penal Municipal Cocorná. Julio 11 de 1996. Folios 4 – 10. Cuaderno 1. ANEXO 2 del ESAP. Expediente No. 008 – 1079998 Procuraduría delegada disciplinaria derechos humanos. Afirma que "el ejército también estaba preguntando por el niño, pero no había llegado a venir aquí a la casa".

276 Declaración de Florinda de Jesús Gallego Hernández. Unidad Nacional de Fiscalías de derechos humanos. Abril 14 de 1998. Sin foliar Cuaderno 2. ANEXO 2 del ESAP Expediente No. 008 – 1079998 Procuraduría delegada disciplinaria derechos humanos. "las partes más seguras fue donde el señor JAIME CASTAÑO y en las casas que ahí (sic) sobre la autopista pero se en que casas eso sucedió en la misma semana después del ataque a la casa de mis padres".

277 Ampliación de declaración de Andrés Gallego Castaño. Octubre 25 de 1996 ante los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía en el municipio de Cocorná. Folios 89 – 90, Cuaderno No. 1, Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP ( "… ya se sabía que el ejército estaba averiguando por el niño".).

278 Declaración de Andrés Antonio Gallego Castaño. Juzgado penal municipal de Cocorná. Julio 11 de 1996. Folios 1 – 3. Cuaderno No. 1 (ANEXO 2 del ESAP). Expediente No. 008 – 1079998 Procuraduría delegada disciplinaria derechos humanos. La testigo dice que "me encontraba en la máquina de moler caña de unos vecinos, ahí estaba con tres trabajadores más, que se llaman JUAN GALLEGO un hermano mío, DIEGO MUÑOZ primo hermano mio y TOÑO QUINTERO, perdón MEJIA, TOÑO MEJIA, estabamos ahí los cuatro cuando vimos que subía

Los integrantes del grupo que produjo las desapariciones forzadas recriminaron a los miembros de la familia acusándolos de ser colaboradores de la guerrilla, haciendo señalamientos en el sentido de que en esa vivienda se estacionaba la insurgencia,[280] y sentenciaron que había que acabar con todos los colaboradores de la guerrilla.[281].

Estos hombres ordenaron a Florinda Gallego a empacar las cosas personales del menor y cuando esta les pregunto a donde llevarían al niño, los agresores mencionaron que éste iba a ser entregado a su padre, es decir a Fredy[282]. Asimismo, le dijeron a Hernando que se tenía que ir con ellos. Florinda trato de negociar con los hombres armados, suplicando que no se llevaran a su esposo debido a que ella no podía mantener a sus 4 hijos sola y alegando que para ese momento contaba con dos meses de embarazo[283]. En este sentido, también les pregunto porque no se enfrentaban a los guerrilleros quienes eran los sujetos de conflicto, que no se llevaran a su esposo que era tan solo un campesino[284].



una gente armada, venían vestidos de civil, eran como ocho o nueve, eran como ocho pero después bajaron nueve, porque ya llevaban al esposo de FLORINDA ….".

279 Declaración de Florinda de Jesús Gallego Hernández ante la Personería Municipal del Carmen de Viboral. Julio 19 de 1996. Folio 34. Cuaderno No. 1. Radicado 233. UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP. Y sin foliar. Cuaderno 1. Expediente No. 008 – 1079998 Procuraduría delegada disciplinaria derechos humanos. La testigo señala que "… mi esposo estaba sentado tomando agua de panela y dijo mi esposo que pasó y uno de ellos que tenía un radio teléfono le contestó, aquí es donde está el muchachito y mi esposo dijo si aquí es donde está el niñito, entonces ellos dijeron porque lo tienen aquí, quien lo trajo entonces cuando dijo eso llamó por el radiotelefono y dijo ya tenemos el objetivo tenemos el muchachito, entonces ya contesté yo, ustedes cuando cogieron esa pareja el niño se lo entregaron a un señor MIGUEL ALPIDIO y el salió y se fue ese día para otra parte y se lo entregó a una nuera y la nuera al otro día se iba también por todo lo que sucedía y entonces se fue a ver quién le recibía el niño y nadie quizá porque esa gente era muy peligrosa y los mataban o se los llevaban y no se quisieron hacer cargo del niño y yo les dije que ella llamaba HELENA, que no se el apellido y ya no vive por allí porque se fue al otro día y me dejó el niño que tenía por ahí unos dos meses, eso decía en el carne de vacunación y hacía más o menos 15 días que yo lo tenía ….".

280 Declaración de Florinda de Jesús Gallego Hernández ante la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría. Julio 19 de 1996. Folios 91 – 95. Cuaderno 1. Expediente No. 008 – 1079998 Procuraduría delegada disciplinaria derechos humanos. "que tenía el radiotelefono dijo que aquí se estacionaba la guerrilla y mi esposo dijo no, aquí no se estaciona la guerrilla que solamente los veía uno pasar de vez en cuando por el caminito y que de pronto si tenían sed les daban y siguen derecho y nunca se han detenido les dije yo …".

281 *Ibídem*. Dice la Testigo que Hernando les pidió "que se identificaran de que grupo eran y ellos se miraron de los unos a los otros y ya dijo uno de ellos lo que no les gustaba era que la gente le colaborara a la guerrilla porque si sucedía algún enfrentamiento o alguna cosa a ellos no les decían nada y que le preguntaban a alguna gente cosas de la guerrilla y nadie decía nada, que todos eran callados, dijo que había que acabar con todos esos colaboradores de la guerrilla".

282 *Ibídem*.

283 Programa Televisivo Contravía. Video: *Los desaparecidos de la esperanza parte I.* Capítulo 177. Minuto 20:50. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=GUq8EVzDWBg , ANEXO 3 del ESAP.

284 *Ibídem*.

285 Declaración de Florinda de Jesús Gallego Hernández ante la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría. Julio 19 de 1996. Folios 91 – 95 . Cuaderno 1. Expediente No. 008 – 1079998 Procuraduría delegada disciplinaria derechos humanos. *veía yo que cuando iban llegando a la autopista que se movían de un lado pa otro, entonces había un señor por allá todo escondido HERNANDO DE JESUS CASTAÑO CASTAÑO, entonces él vio*

A Hernando Castaño lo detuvieron en presencia de su esposa y sus hijos, quienes al ver que se llevaban a su padre comenzaron a llorar. Incluso uno de sus hijos, Wilder de 4 años, se aferró a su pierna para irse con él. Sin embargo, uno de los hombres armados golpeo al niño y le dijo que no los acompañaría[286].

Tal como había sucedido el 26 de junio de 1996, cuando personal de la FTA luego de salir de la vivienda del Señor José Eliseo Gallego, llevando detenida a Irene de Jesús y a Fredy, entraron a requisar sin orden judicial la vivienda de la Señora EDILMA MUÑOZ[287]; [redacted] a quien, los soldados habían señalado de auxiliadora de la guerrilla, justo el mismo día en que se produjo la desaparición forzada de Anibal de Jesús y Oscar Hemel.[289]

[redacted]

*que le quitaron el niño y lo tiraron y tiraron bocabajo a la camioneta, lo bajaron amarrado a la carretera lo tiraron a la camioneta.*

[286] Programa Televisivo Contravía. Video: *Los desaparecidos de la esperanza parte I.* Capítulo 177. Minuto 21:20. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=GUq8EVzDWBg , ANEXO 3 del ESAP.

[287] Según declaración de Florinda de Jesús Gallego Hernández ante la Fiscalía Local de Cocorná el día 11 de julio de 1996. Folio 10 Cuaderno No. 1. Radicado 233 UNDH – DIH. ANEXO 2 del ESAP. "El día que se llevaron a mi esposo con el niño esa gente entraron a la casa de EDILMA GOMEZ, pero esa casa ya estaba sola ya la gente se había ido, volvieron y requisaron eso allá otra vez, es que ya habían estado allá el día que se metieron a la casa de mis papás….".

[288] Declaración de Florinda de Jesús Gallego Hernández ante la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría. Julio 19 de 1996. Folios 91 – 95. Cuaderno 1. Expediente No. 008 – 1079998 Procuraduría delegada disciplinaria derechos humanos. "El día que se llevaron a mi esposo con el niño esa gente entraron a la casa de EDILMA GOMEZ, peso esa casa ya estaba sola ya la gente se había ido, volvieron y requisaron eso allá otra vez, es que ya habían estado allá el día que se metieron donde mis papás, entonces por eso yo vuelvo y digo que eso es el ejército…..".

[289] Declaración de JUAN CARLOS GALLEGO HERNÁNDEZ ante la Personería del Municipio de Cocorná el día 30 de junio de 1996. Obrante a Folios 141 – 142, cuaderno No. 1 Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP. "El mismo viernes que se llevaron a Aníbal los militares estuvieron por ahí observando todo, inclusive uno de ellos dijo: sigan con los guerrilleros que la próxima vez que vengamos y encontremos algo no dejamos nada, acabamos con todo y con todo por parejo, que había que pegar una barrida que incluida la casa de doña Edilma que porque ahí se mantenía la guerrilla".

[290] Información suministrada por el Estado de Colombia. Párr. 63 Escrito del Estado No. 20145010047281 del 22 de agosto de 2014.



## J. Desaparición forzada de Leónidas Cardona Giraldo y Andrés Antonio Gallego Castaño.

### 1. Antecedentes de Andrés Antonio Gallego Castaño

Andrés Antonio Gallego Castaño de 60 años de edad[293], vivió en la Vereda La Esperanza hasta el día de su desaparición. Tenía tres hermanos: Miguel Antonio, Juan Cristóbal y Juan de Jesús. El señor Andrés Gallego era muy conocido en la Vereda, se desempeñaba en el campo laboral como agricultor en una finca de su propiedad[294]. De esta forma mantenía a su núcleo familiar compuesto por María de la Cruz Hernández de Gallego su esposa y sus 8 hijos: Ricaurte Antonio, Eusebio, María Nubia, Lucelly, Omaira, Rosa Linda, Belarmina y María Florinda.

Vale destacar, que el señor Andrés había formulado denuncia ante el Juzgado Penal Municipal de Cocorná el día 11 de julio de 1996 y ratificado sus denuncias el 25 de octubre de ese mismo año[295], sobre los distintos acontecimientos que venían ocurriendo en la Vereda La Esperanza, en los que atribuía responsabilidad de los hechos a la Fuerza Pública. Asimismo, un hijo de la víctima se encontraba privado de la libertad en la Cárcel de Bellavista de la ciudad de Medellín acusado del delito de extorsión en hechos atribuidos a la guerrilla del EPL[296]. La casa de su hijo, donde vivía con Edilma Gómez había sido requisada por personal del Ejército[297] y por

---

291 Denuncia de María Aurora Muñoz de Ramírez, Dirección Seccional Cuerpo Técnico de Investigación Antioquía, 7 julio 2010, Folio 19, Cuaderno 14. ANEXO 2 del ESAP.

292 Declaración de ADRIANA GONZALEZ QUINTERO tomada en la Personería de Cocorna el 12 de julio de 1996, Folio 210, Cuaderno No. 1, Radicado 233. UNDH – DIH ANEXO 2 del ESAP.

293 Fecha de nacimiento: 25-02-1936, ANEXO 1 del ESAP.

294 Declaración de Lilia Yaneth Hernández Ramírez ante la Dirección Nacional de Fiscalías UNDH. De fecha 7 de abril de 2005. Folio 212, Cuaderno 10, Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

295 Ampliación de declaración de Andrés Gallego Castaño Octubre 25 de 1996 por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones en el Municipio de Cocorná. Folios 89 , 90 Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP

296 Folio 89, Cuaderno No. 3, Radicado 233 UNDH – DIH ANEXO 2 del ESAP. Informe de misión de trabajo No. 01885 del 27 de agosto de 1998. Declaración EFRAIN DE JESUS GALLEGO HERNANDEZ ante funcionarios del CTI de la Fiscalía. Agosto 14 de 1998. Folio 101. Cuaderno No. 3. Radicado 233 UNDH DIH. ANEXO 2 del ESAP.

297 Según declaración de Florinda de Jesús Gallego Hernández ante la Fiscalía Local de Cocorná el día 11 de julio de 1996. Folio 10 Cuaderno No. 1. Radicado 233 UNDH – DIH. ANEXO 2 del ESAP "El día que se llevaron a mi esposo con el niño esa gente entrearon a la casa de EDILMA GOMEZ, pero esa casa ya estaba sola ya la gente se

quienes detuvieron y desaparecieron a Hernando de Jesús Castaño Castaño el día 9 de julio de 1996.

## 2. Antecedentes de Leónidas Cardona Giraldo

Leónidas Cardona Giraldo[298], de 23 años de edad, estaba casado con María del Rocío Cardona Fernández con quien tuvo un hijo de nombre Yormarti Cardona Cardona que tenía ocho meses cuando su padre desapareció. Leónidas era un padre muy dedicado y quería que su hijo tuviera la oportunidad de estudiar. Le gustaba mucho el ciclismo y jugaba siempre con su hijo. Era hijo de la señora Cándida Rosa Giraldo y Reinaldo de Jesús Cardona Giraldo, hermano de Luz Dary, María Cemida, Aura Luz, María Isabel, Bernardo de Jesús, Elda Nury y Luz Marcela. Tenía una relación muy estrecha con las hermanas, porque vivía con ellas hasta que se independizo con su esposa.

El señor Leónidas trabajaba en un lavadero de carros de propiedad del Señor Octavio González. En su tiempo libre cultivaba una tierra que tenía arrendada en la Vereda, sembrando tomate, pepino, y frijol. Era una persona callada y seria, que quería salir adelante. En el momento de los hechos la familia de Leónidas solo llevaba veinte días viviendo en esta casa. La familia había ido a Barranquilla cuando comenzaron las desapariciones y Leónidas trabajaba con un hermano de María del Roció, solo regresaron a la Vereda porque el pequeño Yormarti se enfermó.[299]

## 3. Detención y desaparición de Leónidas y Andrés Antonio

El 27 de diciembre de 1996, en horas de la noche, un grupo de hombres armados que se movilizaban en dos camionetas llegaron a la vivienda habitada por María del Rocío, su cónyuge Leónidas y su hijo. Era un sábado y la familia estaba terminando de comer.[300] En ese momento le pidieron la identificación a Leónidas y lo interrogaron por una presunta actividad guerrillera.[301] Los hombres armados dijeron que eran paramilitares.[302] Uno de los hombre armados dijo que el nombre de Leónidas le sonaba pero la cara no, y Leónidas le rogó que verificara bien a quien

había ido, volvieron y requisaron eso allá otra vez, es que ya habían estado allá el día que se metieron a la casa de mis papás…."

[298] Fecha de nacimiento: 23-12-1973. ANEXO 1 del ESAP.

[299] Ampliación de denuncia de Maria del Rocio Cardona Fernandez, 23 de febrero 2009, Fiscalía 53 Especializada, destacada ante el Gaula. Folio 32, Cuaderno 13, Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

[300] Ampliación de denuncia de Maria del Rocio Cardona Fernandez, 23 de febrero 2009, Fiscalía 53 Especializada, destacada ante el Gaula. Folio 31. Cuaderno 13. ANEXO 2 del ESAP.

[301] Denuncia penal formulada por la señora Maria del Rocio Cardona Fernandez – Indocumentada. 30 de diciembre de 1996.formulada ante la Unidad Local de Fiscalías de Cocorná. Folios 1-2 Cuaderno No. 1. Radicado 22.317 de la Fiscalía Especializada delegada ante el GAULA Oriente. ANEXO 2 del ESAP.

[302] Denuncia formulada por María del Rocio Cardona Fernandez, 30 de diciembre de 1196. Folios 7. Cuaderno No. 13, Radicado 233 UNDH-DIH, ANEXO 2 del ESAP.

estaban buscando.[303] Destaparon a Fredy, quien hacía parte del grupo, para ver si le reconocía.[304] Los integrantes del grupo insistieron en que Leónidas debía colaborar con ellos y que sería trasladado a la Base Militar de la Piñuela.[305]

Mientras seguían discutiendo la identidad de Leonidas, algunos hombres del grupo fueron para donde Andrés Gallego. María del Rocío tenía a su bebé Yormarti y les ofreció café. Leónidas seguía insistiendo que no era guerrillero.[306] Cuando volvieron con Andrés Gallego, mandaron a Leónidas a cambiar de ropa,[307] porque estaba en pantaloneta. Dijeron a María del Rocío que solo tenían que llevarlo a la Piñuela para resolver el caso, que pensaban volver con Leónidas pronto[308], y que acostara al bebé. María del Rocío dijo sobre los autores de los hechos que "de esas caras que yo conocí habían tres que yo había visto vestidos de soldados […] los había visto hacia como 15 días patrullando seguido y los veía seguido"[309].

En ese mismo momento el grupo de victimarios se había dirigido a la vivienda habitada por el señor Andrés Antonio Gallego Castaño[310], quien se encontraba solo, pues su familia estaba desplazada, y al igual que a Leónidas, fue ingresado violentamente a una de las camionetas en las que se movilizaban los captores. Hasta la fecha se encuentran desaparecidos.[311]

---

303 Ampliación de denuncia de Maria del Rocio Cardona Fernandez, 23 de febrero 2009, Fiscalía 53 Especializada, destacada ante el Gaula. Folio 34. Cuaderno 13. ANEXO 2 del ESAP.

304 Denuncia penal formulada por la señora Maria del Rocio Cardona Fernandez – Indocumentada. 30 de diciembre de 1996. formulada ante la Unidad Local de Fiscalías de Cocorná. Folios 1-2 Cuaderno No. 1. Radicado 22.317 de la Fiscalía Especializada delegada ante el GAULA Oriente. Cuando la testigo se refiere a FREDY ella dice que "ese tal Fredy hacía como 15 días había alquilado una casita arriba del estanquillo de la Esperanza, a los 15 días el ejército se lo llevó a él y ahora parece que anda con los paramilitares de sapo llevándose la gente que no es culpable de nada".

305 Denuncia penal formulada por la señora Maria del Rocio Cardona Fernandez – Indocumentada. 30 de diciembre de 1996. formulada ante la Unidad Local de Fiscalías de Cocorná. Folios 1-2 Cuaderno No. 1. Radicado 22.317 de la Fiscalía Especializada delegada ante el GAULA Oriente. "…. luego contestó el secuestrado que vamos que en la Piñuela resolvemos el caso, yo le dije al secuestrado que no se lo llevaran que él estaba inocente, que Fredy estaba mintiendo entonces me dijeron que tranquila que de allá lo devolvían, que ellos no mataban la gente inocente, que si fuera para eso ya lo habían matado, que ellos necesitaban era que les colaborara y listo se lo llevaron …".

306 Denuncia formulada por Maria del Rocio Cardona Fernandez, 30 de diciembre de 1196. Folios 5-6. Cuaderno No. 13. Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

307 Ampliación de denuncia de Maria del Rocio Cardona Fernandez, 23 de febrero 2009, Fiscalía 53 Especializada, destacada ante el Gaula. Folio 34. Cuaderno 13 Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

308 Denuncia formulada por Maria del Rocio Cardona Fernandez, 30 de diciembre de 1196. Folios 5-6. Cuaderno No. 13. Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

309 Declaración de MARIA ROCIO CARDONA FERNANDEZ. Noviembre 11 de 2004. Folios 113 - 116. Cuaderno No. 10. Radicado 233. UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

310 Declaración de Gabriel de Jesus Cardona Fernandez. Personeria Municipal del Carmen de Viboral. 30 de diciembre 1996. Folio 10-11. Cuaderno 13. ANEXO 2 del ESAP.

311 Declaración de Gabriel de Jesús Cardona Fernández. Personería Municipal del Carmen de Viboral. 30 de diciembre de 1996. Folios 268-269, Cuaderno No. 3, Radicado 233 UNDH – DIH ANEXO 2 del ESAP. "[A] las siete de la noche llegaron varios hombres armados con armas de largo y corto alcance, vestían prendas civiles, tomando el camino hacia arriba, se dirigieron a la casa del señor ANDRES GALLEGO, el acababa de salir del trabajo, estaba en molienda, él llegaba a casa y no sé qué palabras dirían o en qué forma lo sacaron porque realmente se encontraba solo, se dirigieron nuevamente a la autopista, trayendo con ellos al señor mencionado, lo subieron a la camioneta color café, o un color distinguido a ser café, luego entraron donde estaba el joven LEONIDAS CARDONA

María del Rocio esperó unos minutos dentro de la casa con Jormarti, y cuando escuchó que las camionetas se iban salió. Vio "dos volquetas llenas de Ejercito detrás de las camionetas".[312]

La presencia de la Fuerza Pública en inmediaciones del lugar de las desapariciones forzadas de Leonidas y Andrés Antonio fue también esclarecida en la investigación penal, pues se supo que mientras sucedían los hechos, "a esa hora en que esos sujetos entraron y se llevaron a Leonidas la autopista quedo paralizada, es decir no paso ningún carro y por ahí a los tres minutos de haber arrancado con Leonidas y con Andrés Gallego fue que paso el ejército en volquetas, y me di cuenta de esto porque me fui a contarle a mi suegra y cuando vi fue dos volquetadas de ejército"[313].

### K. Daños a los familiares de las victimas

A raíz de la desaparición forzada de varios trabajadores campesinos y las ejecuciones extrajudiciales que tuvieron lugar en el año 1996, dentro del contexto del conflicto armado colombiano en la Vereda la Esperanza, esta comunidad se vio fuertemente afectada experimentando daños psicosociales a nivel colectivo, familiar y personal.

La Vereda la Esperanza se caracterizaba por ser una comunidad muy unida, la forma de producción e interacción social era el trabajo de la tierra. Desarrollaban actividades tradicionales como las mingas, festivales, romerías, bingos bailables, en el marco de la profesión de la religión católica.

Después de que se produjeron las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales de sus familiares, los habitantes de la Vereda sufrieron un cambio radical en su forma de interactuar y las dinámicas cotidianas. Muchas de las familias se vieron obligadas a desplazarse por miedo a ser víctimas de nuevas desapariciones forzadas, por parte de fuerzas militares y paramilitares que operaban en la zona. El modo de producción económico de la Vereda, tradicionalmente agrícola, se transformó totalmente, debido a que muchos campesinos disminuyeron sus cosechas a sembradíos más cercanos para no recorrer largas distancias por

GIRALDO y le hicieron algunas preguntas. Primera pregunta, conoce usted a la guerrilla, no la conozco. Segunda pregunta, si es verdad que usted no conoce a la guerrilla, voy a traer uno lo tenemos tapado, habla otro señor, se acuerda usted cuando me secuestraron en aquel sitio y fue señalado por el mismo, soy paramilitar y me suena su nombre, luego traen al que está tapado, se destapa su rostro y dice cierto usted vive en Cocorná, usted monta en la moto con DIEGO, responde el afectado, me están confundiendo, no conozco ni he montado en la moto con él y mucho menos he vivido en Cocorná, dice quien lo interrogó, usted se acuerda de quien vivió arriba del estanco, soy JHON FREDY, el afectado no conoce a Jhon Fredy, se sabe que Jhon Fredy era un guerrillero que fue capturado por ejército y paramilitar, luego le dicen a LEONIDAS colóquese la ropa que nos vamos dice él, el que nada debe nada teme, su esposa en confusión al saber que se lo llevaban, le dice a ellos que él es inocente de lo que lo acusan, dice no tranquila señora que él enseguida regresa, nosotros vamos con él y hablamos con quien nos manda en la PIÑUELA y él resolverá y en sus manos está si de allí lo devolvemos, es todo lo dicho. Se subieron a la camioneta…."

[312] Ampliación de denuncia de Maria del Rocio Cardona Fernandez, 23 de febrero 2009, Fiscalía 53 Especializada, destacada ante el Gaula. Folio 34. Cuaderno 13. ANEXO 2 del ESAP.

[313] Folio 113 – 116, Cuaderno 10, Radicado 233 UNDH-DIH, ANEXO 2 del ESAP. diligencia de declaración rendida por MARIA ROCIO CARDONA. 11 de Noviembre de 2004.

temor a ser atacados, o incluso se dedicaron a lavar carros en la autopista para no exponerse, alterando de esta forma el proyecto de vida tanto de adultos como de jóvenes[314].

Un habitante de la comunidad señaló que:

> "…los daños principales es que ya no somos la misma gente, ya la vida se cambió totalmente, ya no somos los mismos que éramos 15 años atrás, porque es un pensamiento que no se borra nunca, no se sale de nosotros el pensamiento de aquella gente no, nunca se nos borra, ni siquiera un minuto del pensamiento, de la mente de nosotros. Eso hace mucho daño…"[315]

La esfera familiar también se vio afectada en la Vereda la Esperanza. Muchas familias se desintegraron debido a las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, de sus hijos hermanos, y padres; en su mayoría de los hombres que representaban el sustento económico de su núcleo familiar, teniendo como consecuencia que muchas madres se trasladaran a otros pueblos en busca de empleo, dejando las cosechas y animales para cubrir las necesidades básicas de sus hijos. Incluso, algunos niños se vieron obligados a dejar sus estudios para trabajar o pedir limosna.

Los familiares de las víctimas han declarado que "Lo que se perdió fue mucho, […] se acabó la agricultura, se perdieron los animalitos, las cosas de las casas cuando nos tocó salir. Se perdió la tranquilidad, la unión, la armonía de la vereda […] por el temor no teníamos un día de felicidad, siempre pensábamos que nos iban a tocar la puerta."[316]

Los familiares de las víctimas han presentado síntomas de ansiedad, alteración en el sueño, re-experimentación de los hechos y depresión como consecuencia de la perdida de sus familiares[317].

La esposa de uno de los desparecidos manifiesta:

> "A mí hijo no le gusta hablar del papá porque es muy doloroso, no haberlo conocido es muy triste. Quisiera saber si está vivo o muerto y en este caso dónde está el cuerpo. A mí hijo le hace falta el cariño, el apoyo y la educación del padre. Sólo hasta los 10 años de edad mi hijo

---

314 En relación con este punto se ofrece como prueba testimonial la declaración de varios de los miembros de las familias de La Vereda La Esperanza, y un peritaje psicológico que profundizará sobre los daños causados a la comunidad y a cada familia.

315 Corporación Jurídica Libertad, *Caminando la Esperanza por Justicia y Dignidad*. Testimonio de familiar desaparecido(los nombres de omiten por razones de seguridad). Publicado en el año 2012. pág. 21. Anexo 17 del ESAP.

316 Corporación Jurídica Libertad, *Caminando la Esperanza por Justicia y Dignidad*. Testimonio de familiar desaparecido(los nombres de omiten por razones de seguridad). Publicado en el año 2012. pág. 28. Anexo 17 del ESAP

317 En relación con este punto se ofrece como prueba un peritaje psicológico que profundizará sobre los daños causados a la comunidad y a cada familia.

> comprendió lo que le paso al papá. No podemos olvidar porque necesitamos saber la verdad".[318]

En este sentido, la madre de los hermanos Cardona Quintero, Maria Dioselina Quintero declaró lo siguiente: "[…] yo no como sino pensando, yo los veo [en sueños], mis hijos y yo estoy toda contenta con ellos y los abrazo, me dan besos […] a penas uno tiene un sueño, que ya llegan […]"[319].

Asimismo, Verónica Giraldo, hija de Javier Giraldo quien fue ejecutado por miembros de grupos paramilitares asegura: "[…] Me quitaron un pedazo de mi corazón, porque mi papa para mí era todo"[320].

Las familias han narrado en varias oportunidades el inmenso dolor de perder a sus familiares y la angustia de no saber dónde se encuentran[321]. La comunidad de la Esperanza vivió una depresión generalizada. En los testimonios se narra no sólo el caso de las personas que murieron de pena moral[322] -como José Eliseo Gallego, padre de dos de los desparecidos-, sino la situación de muchos familiares que incluso se negaron a consumir alimentos[323].

Los daños narrados persisten en la actualidad, los familiares de las víctimas desparecidas no han encontrado justicia después de 19 años de lucha para conocer la verdad. La incertidumbre sobre lo ocurrido después de las detenciones ilegales y sobre el paradero actual de sus seres queridos hace imposible que los familiares puedan vivir un proceso de duelo. Así mismo, el desarrollo del proceso de justicia y paz con los paramilitares los ha dejado más tristes porque no les ofrece verdad, ni posibilidades de hallar a sus familiares.

---

318 Corporación Jurídica Libertad, *Caminando la Esperanza por Justicia y Dignidad*. Testimonio de familiar desaparecido(los nombres de omiten por razones de seguridad). Publicado en el año 2012. pág. 23. Anexo 17 del ESAP

319 Corporación Jurídica Libertad, *Video: Por lo menos sus nombres*, desaparecidos de la Vereda La Esperanza. Declaración de María Dioselina Quintero. Minuto 01:45. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=qajHSrHqYSo, ANEXO 3 del ESAP.

320 *Ídem*. Minuto 04:28.

321 Programa Televisivo Contravía. "*CONTRAVIA. Cap 177*. *Los desparecidos de la Esperanza parte I"*. Entrevista de Florinda de Jesús Gallego Hernández. Minuto 22:00. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=GUq8EVzDWBg . Programa Televisivo Contravía. "*CONTRAVÍA: Desaparecidos de La Esperanza I (3/3)"*. Entrevista de José Eliseo Gallego Hernández. Minuto 06:05. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=HKQxKQO5MtM ANEXO 3 del ESAP.

322 Programa Televisivo Contravía. "*¨Los Desaparecidos de La Esperanza II¨Parte1-CONTRAVÍA".*Entrevista de José Eliseo Gallego Hernández. Minuto 03:40. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=bnptjXGw7yI . ANEXO 3 del ESAP.

323 Corporación Jurídica Libertad, *Video: Por lo menos sus nombres*, desaparecidos de la Vereda La Esperanza. Declaración de María Dioselina Quintero. Minuto 01:45. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=qajHSrHqYSo . ANEXO 3 del ESAP. Corporación Jurídica Libertad, *Caminando la Esperanza por Justicia y Dignidad*. Testimonio de familiar desaparecido(los nombres de omiten por razones de seguridad). Publicado en el año 2012. pág. 24. Anexo 17 del ESAP.

## L. Proceso ante la jurisdicción ordinaria: RADICADO 233 de la UNDH – DIH

La investigación penal se adelanta ante la Fiscalía 80 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (en adelante UNDH – DIH), por las desapariciones forzadas de**:** 1.- Aníbal de Jesús Castaño; 2.- Oscar Hemel Zuluaga Marulanda; 3.- Juan Crisóstomo Cardona Quintero; 4.- Miguel Ancizar Cardona Quintero; 5. Fredy, 6. Su esposa, 7.- Juan Carlos Gallego Hernández; 8.- Jaime Mejía Gallego; 9.- Octavio De Jesús Gallego Hernández; 10.- Hernando De Jesús Castaño Castaño; 11.- Orlando de Jesús Muñoz Castaño; ;; 13.- Irene de Jesús Gallego Quintero, y el homicidio de 14.- Javier Giraldo Giraldo.

Al inicio de la investigación, la Personería del Municipio del Carmen de Viboral recepcionó las declaraciones de Florinda de Jesús Gallego Hernández[324], de María Florinda Gallego Hernández cónyuge de Octavio de Jesús Gallego Hernández[325], y de José Eliseo Gallego Quintero[326].

Por su parte la Personería del Municipio de Cocorná recibió primero la denuncia de Juan Carlos Gallego Hernández el 30 de junio de 1996[327], el 8 de julio la de Hernando De Jesús Castaño

---

[324] El día 19 de julio de 1996 Narra lo sucedido a su cónyuge Hernando Castaño Castaño y frente a los autores del hecho dice "ellos no dijeron nada ni tampoco se identificaron, nosotros si decimos que si eran del ejército porque ya los han visto en medio del ejército, el ejército por ahí y ellos caminando con ellos …" (Folio 35, Cuaderno 1, Radicado 233 UNDH-DIH, ANEXO 2 del ESAP). Menciona también la desaparición de Irene Gallego Quintero y narra cómo fue retenida por el ejército el día 26 de junio de 1996. Menciona también sobre las amenazas del ejército a los pobladores de la Vereda La Esperanza y particularmente a los que tuvieran tiendas donde según ellos compraba la guerrilla "…porque cuando cogieron al señor de la tienda ANIBAL CASTAÑO que fue uno de los primeros que se llevaron dijo el ejército que iban a acabar con todas las tiendas para que la guerrilla no tuviera donde comprar nada y le dijeron a la gente de la carretera que tenían que desocupar todo eso y por eso es que decimos que es el ejército es el de todo esto" (Folio 35, Cuaderno 1, Radicado 233 UNDH-DIH, ANEXO 2 del ESAP). Habla también de la utilización de una persona a quien el ejército llevaba vendada cuando ingresaron de forma violenta a la casa de habitación de los padres de JUAN CARLOS GALLEGO HERNANDEZ y aclara que era el papa del niño que quedo abandonado cuando se llevaron a sus padres. Folio 35, Cuaderno 1, Radicado 233 UNDH-DIH, ANEXO 2 del ESAP.

[325] Declaración tomada el 19 de julio de 1996. Narra la desaparición de su esposo y el antecedente de las discusiones que sostuvo Octavio con el ejército que ataco la vivienda de su padre José Eliseo Gallego "y me decía el ejército a mí que dice usted nos lo llevamos y yo les decía que como se los iban a llevar y yo llamaba a Octavio para que se entrara para adentro y él no me hacía caso y como a los ocho días fue que se lo llevaron". Folio 37. Cuaderno 1 Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

[326] Nuevamente relata la incursión violenta del ejército en su casa el día 26 de junio de 1996 y denuncia la detención de IRENE GALLEGO QUINTERO por parte del ejército "…. le echaron (sic) mano a ella y le dieron un tiro por el medio de las piernas y ya se la trajeron para la casa mía, ella llego llorando y a esa si le echaron (sic) ropa y le trajeron la ropa, mandaron a un soldado por la ropa y le trajeron la ropa para la casa mía y a ella la uniformaron de vestido negro y tapada la cara con otro trapo negro y así llego a mi casa …. y antesitos (sic) de las cuatro de la tarde salieron". Menciona como fueron amenazados en caso de que denunciaran y el hurto de varios artículos del hogar. Sobre los autores de los hechos de la Vereda dice "como que se revuelven donde hay un grupo de soldados hay de tres a cuatro civiles con armas y ellos cuando se encuentran con el ejército van pasando como si fueran hermanos y siguen". Folio 38 Cuaderno 1 Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

[327] Juan Carlos Gallego Hernández narra los hechos sucedidos en la vivienda donde vivía con sus padres en la Vereda La Esperanza señalando que "el miércoles 26 de esta semana a las 2 de la mañana estábamos durmiendo en mi casa ubicada en la vereda la Esperanza mi papá, mi mamá y yo y llegaron unos tipos llamando : Pedro, Pedro llegaron los compas y enseguida ¡ey¡ llegaron los compas, Pedro, luego me levante por una linterna y siguieron llamando, yo les contesté, esperen un momento que ya les voy a abrir, porque el lunes pasado fue el enfrentamiento en la autopista y por ahí andaba el ejército, yo abrí por la cocina; en ese momento un rafagazo contra la casa, yo tiré la puerta y me volví gateando para la pieza y ellos siguieron disparando contra la casa". Dice que los

Castaño[328], quien entre otros aspectos, denunció la desaparición forzada del primer denunciante y el 11 de julio recibió la denuncia de Florinda De Jesús Gallego Hernández[329] quien relató lo concerniente a la desaparición de su esposo Hernando De Jesús Castaño Castaño. Y finalmente recibió el 12 de julio la denuncia de Adriana Gonzalez Quintero[330] sobre la desaparición de su compañero permanente Orlando De Jesús Muñoz Castaño.

Asimismo, la Inspección municipal de Policía de Cocorná recibió la denuncia de la señora Carmen Muñoz Castaño el día 4 de agosto de 1996[331].

---

disparos a la casa eran de fusil, M60 y lanzaron granadas pero hacia otras direcciones.. Mencionada que todo en la casa quedó destruido, muebles, enseres, libros y documentos del centro de salud. Sobre los autores de los hechos dice que fueron 37 soldados contraguerrilla. "esos fue los que alcanzó a contar". A Juan Carlos le dieron una patada en la cabeza. A la familia la trataban de guerrilleros "que ahí estaba los guerrilleros". Uno de los comandantes dijo "que vea que a él lo habían secuestrado y que lo habían tenido hasta 20 días en esa casa. Todo mentira porque nunca ha ocurrido". Reconoce que el día anterior "pasaron unos tipos armados", pero que en su casa no habían estado guerrilleros ni antes ni después. "Salieron diciendo que quien había herido al capitán entonces; uno de ellos diciendo que habían disparado de adentro, otro que era desde el barranco y después que de otra parte; que el capitán había dicho: me hirieron y se fue para abajo, que por eso estaban disparando, lo cual es mentira porque ahí no había pasado nada ni había habido nadie, solamente nosotros. "con ellos andaba un muchacho que al que le dicen FREDY, de civil y le decían TRES PATAS , lo tenía enmascarado y me dijeron: compruébenos que aquí no hay guerrilleros y le destaparon la cara y yo ahí mismo lo reconocía, es un muchacho que llaman FREDY , que es dizque de Urabá, eso he oído, ese es el de la parejita, porque fue una pareja que se llevaron; yo lo había a ese muchacho en la autopista, en una casa de donde lo sacaron ahí junto a la autopista, arribita del estanco" . Cuando había visto usted a Fredy? Contesto: en esos días porque era una pareja que llegaron nuevos y ellos mismos lo identificaron diciendo cuando lo destaparon: vea este es un eleno dijo el mismo comandante ….. no hizo nada, estaba serio y a la vez muy asustado. Ellos lo volvieron a tapar……. Fue sacado de una casita junto a la autopista arriba del estanquillo" A Fredy lo sacan "fue sacado con la muchacha con que vivía la compañera y el niño por ahí está rodando; Aníbal que fue el día anterior con el muchacho y según comentario que escuché otro muchacho y de donde Dioselina Quintero dos pelaos hijos". Folio 141 Cuaderno No. 1 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

328 La declaración fue recibida el 8 de julio de 1996. En ella Informa sobre la desaparición de Juan Carlos Gallego Hernández, de Jaime Mejía Quintero y de Javier Giraldo ocurridos el 7 de junio de 1996 como a las 2:00 p.m. en la autopista Medellín – Bogotá. Cuaderno 1 Folio 143 radicado 233 de la UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.



330 En la declaración se narra que Orlando de Jesús Muñoz había salido de su casa en la Vereda San Vicente a eso de las 4:00 p.m. para la casa de su hermano Carlos Muñoz en la Vereda La Esperanza y de allí volvió a salir como a las 4:30 de la tarde. Se lo llevaron al parecer en una camioneta azul o verde. Que se lo habían llevado porque a esa hora que el bajaba por el camino habían unos carros parqueados en el Puente del Río Cocorná. Y dice que testigos de los hechos fueron CEMIDA y la esposa de EFRAIN. Describe como estaba vestido el día de su desaparición. Folio 210. Cuaderno No. 1 Radicado 233 UNDH, ANEXO 2 del ESAP.

331 De la declaración se extrae que el martes por la noche "le dieron candela a la casa de don Eliseo Gallego" como a las 3:00 de la mañana llegaron a la casa de nosotros IRENE con la cuñada y el hermano ANIRO pidiendo posada ya que estaban dando candela y les daba miedo que los mataran. Como a las 7:00 de la mañana les di tragos a todos y se fueron nuevamente para su casa. Pero Irene se quedó como esperando desayuno y como a las 8:00 o 9:00 de la mañana llegaron cuatro soldados, "estaban vestidos de soldados de color verde de pintas negras y no tenían distintivos" Los soldados le dijeron a Irene que entregara el fusil y a nosotros también "y ella únicamente

De igual manera, la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, seccional Antioquia recibió las declaraciones de María Oveida Gallego Castaño[332] el 31 de julio de 1996, ese mismo día recibió a Florinda De Jesús Gallego Hernandez[333]**.** El día 9 de agosto le toma declaración a los señores José Eliseo Gallego Quintero[334] y a Héctor Manuel González Ramírez[335]**.**

El 8 de julio de 1996, la Unidad de Fiscalía Local del Municipio de Cocorná recibió la denuncia del señor José Eliseo Gallego Quintero quien narra los hechos sucedidos en su vivienda el día 26 de junio de 1996 a eso de las dos de la mañana por parte del Ejército. En el marco de la Operación Rayo dispararon indiscriminadamente a la vivienda produciendo su destrucción. Adicionalmente, las autoridades agredieron a su hijo, Juan Carlos Gallego Hernández y manifiesta haber sufrido una herida en el antebrazo derecho ese día, producto de la balacera. Igualmente, menciona que los soldados "[…] dijeron que eran los compas y entre uno de esos iba un guerrillero que hacía 15 días lo habían cogido, lo llevaban vendado".

En este sentido, el señor José Eliseo denunció la desaparición forzada de su hijo Juan Carlos Gallego Hernández el 7 de julio de 1996 cuando fue retenido en la capilla de la Vereda La Esperanza ubicada en la autopista Medellín Bogotá en momentos en que se encontraba en una

---

iba con la ropa puesta y ella de donde fúsil y revolcaron toda la casa y encontraron una mecha de escopeta de mi papá. Irene al momento de su detención no tenía armas, ni estaba uniformada con prendas que la identificaran con alguna organización insurgente. A Irene le hicieron un disparo al lado donde ella estaba cerca de la casa como para asustarla y le decían que dijera dónde estaba el fusil. Irene salió de la casa de Carmen tranquila y se dirigieron con ella como en dirección a la casa de los padres de Irene. El inspector deja constancia de que la declarante se encontraba muy nerviosa y ella dice que "la cosa es grave de todas maneras porque a nosotros nos pueden matar por eso afortunadamente nunca nos han molestado los soldados únicamente ese día que aparecieron ellos en la casa. Folios 170-171, Cuaderno 1, radicado 233 de la UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

[332] En la declaración menciona lo relativo a la desaparición de su cónyuge Aníbal de Jesús Castaño y del menor Oscar Hemel Zuluaga Marulanda. Narra que el niño de la pareja se quedó solo cuando se llevaron a sus padres. Menciona que en la desaparición de la pareja, Juan Crisóstomo y Miguel Ancizar el 22 de junio a eso de las 5:30 de la mañana "llegaron dos camionetas hasta la tienda" . Esa camionetas "si las he visto subir con soldados las camionetas más conocidas son una blanca y otra roja, pero he visto de otros colores, esa gente se moviliza en moto también y en taxis amarillos". Las camionetas con personal del ejército las ha visto "como por ahí tres veces después de las desapariciones de mi marido, con soldados vestidos de camuflado". Las camionetas las ha visto en las Veredas La esperanza y Cruces que quedan ubicadas sobre la autopista Medellín - Bogotá. Folio 154 Cuaderno No. 1 Radicado 233 UNDH, ANEXO 2 del ESAP.

[333] En la declaración narra lo concerniente a cómo cinco hombres armados preguntaron por el muchachito, uno de ellos tenía un radio teléfono. Las personas que llegaron a la vivienda, entraron a la misma y desordenaron todo. Sacaron unas fotografías. Tomaron al niño y le dijeron a Hernando que se tenía que ir con ellos. Narra la detención de Juan Carlos Gallego su hermano. Cuenta también la detención de Octavio Gallego su otro hermano. Cuando salieron de la casa de Hernando y Florinda los hombres se entraron a la vivienda de EDILMA GOMEZ y la requisaron. Entraron donde otro vecino pero no requisaron la casa. Cuenta que llevo al niño el jueves anterior a las desapariciones de su esposo y el niño al médico y le dieron una formula. Cuenta que ese día se llevaron a ORLANDO MUÑOZ Hace una descripción física de varios de los hombres que desaparecieron a su esposo y al niño. Folio 157 – 161. Cuaderno No. 1 Radicado 233 UNDH, ANEXO 2 del ESAP.

[334] En la declaración Informa que su casa en la Vereda La Esperanza fue saqueada, le hurtaron artículos varios de la casa y de Juan Carlos. Y relata sobre la desaparición de sus hijos Juan Carlos, Octavio y de su yerno Hernando. Folio 166 Cuaderno No. 1 Radicado 233 UNDH, ANEXO 2 del ESAP.

[335] Narra la detención de Octavio. Subieron cuatro carros pequeños por la autopista Medellín – Bogotá. Y se bajaron dos personas fuertemente armados y le echaron mano del cuello a Octavio. …. Al domingo, yo bajaba por la autopista que venía de Cocorná … y vi las dos personas que se lo llevaron a él uniformados de soldados. "eran todos dos morenos, eran de estatura media, carilargos, bien motilados, los que nosotros llamamos tusos, no me acuerdo el color de los ojos, no tenían marcas ni cicatrices, más bien acuerpados que flacos". Folio 167 Cuaderno No. 1 Radicado 233 UNDH, ANEXO 2 del ESAP.

reunión de mejoramiento de vivienda. También mencionó otras desapariciones forzadas ocurridas en la Vereda[336]. Dicha denuncia fue remitida a la Fiscalía seccional del Carmen el 8 de Julio de 1996[337].

En el Juzgado Penal Municipal de Cocorná el 11 de julio de 1996 se recibieron las denuncias del señor Andrés Antonio Gallego Castaño[338] y de Florinda de Jesús Gallego Hernández[339] sobre las desapariciones forzadas ocurridas en la Vereda La Esperanza desde el 21 de junio de 1996. El Juzgado ordenó remitir las denuncias a la Fiscalía Seccional del Municipio del Carmen de Viboral[340], quien era la autoridad judicial competente para investigar las conductas delictivas puestas en conocimiento.

El 17 de Julio de 1996, la Dirección de Fiscalías de Antioquia, unidad del Carmen de Viboral, da apertura a las diligencias de investigación previa[341] y ordenó la realización de varias pruebas. Entre ellas, la declaración de sobrino John Fredy Castaño Gallego, quien era Inspectora Departamental de Policía de la vereda La Esperanza[342]. Se recibió información del Personero del Carmen de Viboral el 18 de julio de 1996, en la que detalla las identidades de las

---

336 Cuaderno 1 Folio 12 radicado 233 de la UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

337 Cuaderno 1 Folio 17 radicado 233 de la UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

338 Cuaderno No. 1 Folio 4 Radicado 233 de la UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP. En la denuncia manifestó que en la cual expresa que "el motivo es que el ejército nacional se ha venido llevando a la gente de la Vereda La Esperanza diciendo que son guerrilleros"; "el ejército ha pasado por las casas averiguando muchas cosas antes de que empezaran a suceder estos hechos …. averiguaban sobre quienes le colaboraba a la guerrilla" Este denunciante seria desaparecido el día 27 de diciembre de 1996 en el marco de las desapariciones forzadas de campesinos que había denunciado.

339 Folios 5-11, Cuaderno 1, radicado 233 UNDH DIH, ANEXO 2 del ESAP. La declarante quien detalla sobre las detenciones de sus hermanos JUAN CARLOS GALLEGO HERNANDEZ y OCTAVIO DE JESUS GALLEGO HERNANDEZ, la retención de JAIME MEJIA, el homicidio de JAVIER GIRALDO GIRALDO y precisa con detenimiento lo relativo a la desaparición de su cónyuge HERNANDO DE JESUS CASTAÑO CASTAÑO, y del menor de dos meses de nacido, narrando los diálogos con las personas que fueron hasta su vivienda el día 9 de julio. También denunció los hechos que corresponden a las retenciones ocurridas en la Vereda los días 21 y 22 de junio de 1996. dice "…. entonces el mandón le dijo a mi esposo que en esa vereda todo mundo le colaboraba a la guerrilla que atacaban a los soldados y a nosotros es decir él dijo "atan a los soldados y nos atacan a nosotros y nadie dice nada." En su declaración también menciona los hechos del 26 de junio de 1996 en donde el ejército atacó la casa de la familia del Promotor de salud y la retención de IRENE GALLEGO. Igualmente menciona la utilización que el ejército hizo del papá del niño cuando se lo mostraron a JUAN CARLOS. Dice también que "el día que se llevaron a mi esposo, eso lo hicieron delante del ejército, es que el ejército está por toda la vereda, como a unos cien metros de distancia del ejército y nadie hizo nada…".

340 Resolución del 11 de julio de 1996 obra a Folios 4 del cuaderno 1 Radicado 233 de la UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

341 Folio 3 cuaderno 1 Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

342 Declaración de María Edilma Giraldo Castaño. Julio 19 de 1996. Narra sobre su conocimiento sobre los hechos sucedidos en la Vereda (21 – 22 de junio, 7 y 9 de Julio de 1996) los cuales ha sabido por comentarios de los habitantes de la Vereda. Dio informes verbales de estos hechos al Coordinador de Inspecciones del Departamento de Antioquia, el Dr. Fernando Calle. Dice también que por el secretario de la inspección también estaban preguntando los captores el día 9 de julio de 1996 "Nosotros permanecíamos ahí hasta el 9 de julio, que dijeron que esa gente de esos carros estaban preguntando por él, por el Secretario y de allá mismo de la Gobernación lo llamaron y le dijeron que fuera inmediatamente, no sé en la gobernación como se dieron cuenta…."; "Nadie en concreto dice, resulta el chisme, pero nadie en concreto dice que vio, puede ser por miedo, temor de la gente. Folio 19, Cuaderno No. 1, Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

personas desaparecidas[343] y anexa unas declaraciones recibidas en su Despacho con respecto a los hechos investigados por la Fiscalía[344]. También, se recibió oficio procedente de la Alcaldía municipal del Carmen de Viboral donde se informa sobre las desapariciones e indicó que puso en conocimiento del Comité de Vigilancia y la REDIS de la Secretaria de Gobierno de la Gobernación de Antioquia y enteró personalmente el día 10 de julio de 1996 al Gobernador de Antioquia en el marco de una reunión con los Alcaldes y Personeros de los Municipios de Granada, Cocorná y El Carmen de Viboral[345].

El 30 de julio de 1996 la Fiscalía Seccional del Carmen de Viboral ordena la remisión de la investigación a la Unidad de Fiscalías Regionales de Medellín[346]. Allí se radica con el No. 21.005 y le es asignada a la Fiscalía Regional Tercera. Luego sería reasignada a la Fiscalía destacada ante el UNASE RURAL[347] el día 5 de agosto de 1996[348]. El 8 de agosto de 1996 la Fiscalía delegada ante el UNASE RURAL procedió a abrir nuevamente indagación preliminar *"por el punible de Secuestro, siendo ofendidos ANIBAL DE JESUS CASTAÑO y 12 personas más"*[349].

El 25 de septiembre de 1996 la indagación preliminar fue nuevamente reasignada a la Fiscalía delegada ante el Juez Regional de Medellín, la cual el 9 de octubre de 1996 avocó

---

343 Oficio No. 059 del Personero Municipal del Carmen de Viboral. En respuesta al oficio No. 647 del 17 de julio de 1996 de la Fiscalía Seccional del Carmen de Viboral sobre los hechos sucedidos en la Vereda La Esperanza. El personero discrimina una lista de 16 personas desaparecidas en la zona. Entre las persona que establece menciona los nombre de JULIO CESAR MORALES HERNANDEZ y JEOVANY ABAD MORALES CARDONA (quienes son parte de la Cooperativa de transportes COOTRACARMEN los cuales viajaban el 12 de julio de 1996 por la autopista Medellín Bogotá con destino al Municipio del Cocorná y fueron desaparecidos) pero ellos no residían en la vereda La Esperanza, sino en el casco urbano del Municipio del Carmen de Viboral. Informa también que mediante Oficio No. 056 del 15 de julio de 1996 puso en conocimiento de la Oficina de Investigaciones especiales de la Procuraduría los hechos materia de investigación. Y anexa las declaraciones de: María Edilma Giraldo Castaño, Nicanor Velásquez Martínez (Secretario de la Inspección departamental, copia del oficio 056 del 15 de julio 1996) y la declaración del Dr. Javier Fox Quintana gerente del Hospital San Juan de Dios. Folios 21 – 23 Cuaderno No. 1 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

344 Las declaraciones recibidas por la Personería del Municipio de El Carmen de Viboral fueron las del Dr. Javier Fox Quintana gerente del hospital San Juan de Dios, el día 8 de julio de 1996, en la que menciona que se enteró de la desaparición de Juan Carlos Gallego Hernández ocurrida el 7 de julio de 1996 y que éste le había comentado lo sucedido en su vivienda el día 26 de junio de 1996 cuando fue atacada a bala las paredes de su vivienda y los enseres. Folio 27 cuaderno 1 Radicado 233 UNDH – DIH. Y la declaración el día 15 de julio de 1996 del señor Nicanor Velásquez Martínez, Secretario de la Inspección departamental, quien comenta los hechos de la Vereda La Esperanza pero advierte que los sabe por comentarios. Folio 24 cuaderno 1 Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

345 Oficio DAM 307 del 19 de julio de 1996. Folios 31 - 32 cuaderno 1 Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

346 Folio 43 cuaderno 1 Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP. Las fiscalías regionales se encontraban contempladas en el artículo 126 del decreto 2700 de 1991, y eran encargadas de investigar, calificar, y acusar ante los jueces regionales quienes conocían de delitos relacionados con estupefacientes, delitos contra la existencia y seguridad del estado, así como delitos de secuestro.

347 Unidad Nacional Antiextorsión y Secuestro, Creada en virtud de la ley 40 de 1993, o estatuto antisecuestro.

348 Folios 46 Cuaderno No. 1 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

349 Folios 47 Cuaderno No. 1 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

conocimiento y ordenó la práctica de pruebas[350] y para el efecto comisionó al Cuerpo Técnico de Investigaciones Regional de Medellín.

El Cuerpo Técnico de investigaciones de la Fiscalía Regional le tomó declaraciones a Andrés Antonio Gallego Castaño[351] a María Florinda Gallego Hernández[352] y rindió un informe en el cual detalla las labores investigativas realizadas de acuerdo con la orden de trabajo emanada del Fiscal que adelantaba en ese momento la investigación penal[353].

---

350 Las pruebas que ordena practicas fueron: Recibir declaraciones a Diego Muñoz, Antonio Mejía, Arnoldo Hernández, Consuelo Giraldo, Argiro Quintero, Juan Ramírez, Mariam Engracia Hernández, Ernilda Quintero, Alfredo N, John Fredy Castaño, Miguel Alpidio N. Ampliar declaraciones a Andres Antonio Gallego Castaño, Florinda de Jesus Gallego Hernández, Jose Eliseo Gallego Quintero, Maria Edilma Giraldo Castaño, Florinda gallego Hernández, Imelda de Jesus Cardona Quintero, Gildardo de Jesús Giraldo Lopez, Jheny Adriana Garcia Piedrahita. Averiguaciones sobre los investigadores del CTI que se encuentran en la municipalidad para que averigüen sobre. 1) Por las diligencias adelantadas por las muertes de ALIRIO DE JESUS GALLEGO HERNANDEZ, GERARDO GALLEGO y JAVIER GIRALDO. 2) Por el secuestro de IRENE GALLEGO. Folios 51 – 53 Cuaderno No. 1 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

351 La declaración es tomada el 25 de Octubre de 1996 en el municipio de Cocorná. En ella el testigo hace referencia a la participación del ejército en los hechos de la vereda La Esperanza. Relata lo sucedido en la casa de ELISEO GALLEGO (padre de Juan Carlos Gallego Hernández). Luego sobre la desaparición de Juan Carlos Gallego y de Jaime Mejía, el homicidio de Javier Giraldo, Octavio Gallego Hernández, Hernando Castaño, relata la suerte del niño hijo de las personas desaparecidas que eran provenientes de Urabá. Relata que el ejército había estado averiguando por el niño con anterioridad a su detención que ocurrió el 9 de julio de 1996. "… ya se sabía que el ejército estaba averiguando por el niño. Relata también sobre la detención de los padres del niño, de otro joven que había venido de Urabá con ellos y de los hijos de Dioselina Quintero (JUAN CRISOSTOMO y MIGUEL ANCIZAR). Folios 89 - 90 Cuaderno No. 1 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

352 . Relata la desaparición de su esposo OCTAVIO DE JESUS GALLEGO HERNANDEZ. Dice que uno de los testigos fue John Fredy (sobrino de Octavio). Sobre los Vehículos en los que se llevaron a OCTAVIO se señalan dos taxis. Testigo; John Fredy (sobrino). Cuando le preguntan sobre los responsables de la desaparición del esposo narra el antecedente en la casa de Juan Carlos donde el ejército atacó la casa y dice que "el esposo mío con el hermano se pusieron a discutir con los soldados, les dijeron que porque llegaban así, que disparando sin haber nadie, que tenían que respetar y que los iban a demandar para que pagaran los daños, y que los soldados le contestaron que hágalo, que ustedes son los que pierden, y en esa semana se llevaron a Juan Carlos, ellos ya estaban haciendo las vueltas para demandarlos, luego al esposo mío". Narra la detención de IRENE: a ella se la llevaron de la casa del promotor, el ejército se la llevó, yo la ví cuando se la llevaron, se la llevaron dizque por guerrillera, pero no se nada porque ella estuvo un tiempo desaparecida de la región y después llego donde los papas, el ejército, a ella le tenían la foto de ella misma que la cogieron en la casa y dijeron que era una guerrillera, de la casa de los papás la sacaron uniformada de verde y con cachucha, botas, vestido del ejército, se la llevaron para la casa de don Eliseo y a las cuatro de la tarde se fueron con ella, nunca más volví a saber de ella ……." Folios 90 Cuaderno No. 1 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

353 Informe No. 84 del 27 de Noviembre de 1996 dentro del Radicado. 21.005 en atención al diligenciamiento de la orden de trabajo No. 088. Dirigido al Dr. Iván De Jesús Duque Santa. Del De dicho informe se extrae la siguiente información: 1) La investigación por el homicidio de Alirio de Jesús Gallego Hernández se adelanta con el Radicado Nro. P 951 ocurrió el 3 de abril de 1996 en la Carretera que de Cocorná conduce al Municipio de El Santuario. Dentro del radicado 951 por la muerte de Alirio obra constancia del Mayor CARLOS ALBERTO GUZMAN LOMBANA del 28 de junio de 1996 que certifica que "sostuvieron un combate con bandoleros del EPL en la Vereda La Esperanza, después del combate y al hacer un registro del área encontraron a IRENE DE JESUS GALLEGO QUINTERO, esta persona les dijo que había pertenecido al EPL y debido a su estado de embarazo, la sacaron del grupo y temía por su vida, por lo tanto optaron por protegerla y sacarla del lugar". Obra también declaración de Irene de Jesús Gallego ratificando lo manifestado por el My Guzmán Lombana y dice que cuando el ejército la recuperó ella se encontraba sola en la casa de su hermano ELADIO y los testigos fueron: Eliseo Gallego, María Engracia y sus primos OCTAVIO y JUAN CARLOS. 2) Radicado No. 1030 por el homicidio de Javier de Jesús Giraldo Giraldo ocurrido el 7 de julio de 1996. Practicó la diligencia de levantamiento del cadáver la Inspección Municipal de Policía de Cocorná en la autopista Medellín – Bogotá en la vereda San Vicente. Posteriormente se remitió el proceso a la Fiscalía Seccional de El Santuario donde se abrió investigación previa con el radicado No. 1030 el día 20 de marzo de 1998. Según la necropsia el cadáver presentaba 19 orificios de entrada en distintas partes del cuerpo, producidos

por arma de fuego y "múltiples laceraciones en hipocondrio derecho, falange medio tercer dedo mano derecha, labio superior e inferior en comisura derecha". Por las vainillas recuperadas en el lugar de los hechos y en el cuerpo de la víctima las heridas se produjeron con pistola o subametralladora calibre 9 mm. En el lugar de los hechos se encontraba personal del ejército, los señores BERTO SOTO QUINTERO y NELLY SOTO (esposa de Javier). Según declaración de Nelly Soto comenta que se llegó al lugar donde se encontraba muerto su esposo donde había personal del ejército y comenta refiriéndose al ejército que "8 días antes ellos llegaron a su casa y le preguntaron que donde estaba su esposo, entonces ella les dijo que estaba trabajando en Cocorná" (Fl 104). Declaración de Carlos Estrada: …. Entonces a Javier lo cogieron ahí mismo y lo tiraron a uno de los carros que ellos tenían y entonces le quitaron la moto y se la llevaron. Donde a él lo mataron estaba la moto chocada. Eso ocurrió más o menos a las tres de la tarde cerca de la capilla, el ejército estaba más arriba de la capilla por hay (sic) a 200 o 300 metros de donde lo cogieron a él y donde lo mataron estaban por ahí a 2 Kms. Lo único que le dijeron (Sic) fue que con que corriente mucho gran hijueputas (sic) ….. ellos andaban en dos camperos y en una luv. Los sujetos eran más bien jóvenes con corte de pelo muy parecido al del ejército, portaban pistolas y estaban vestidos de civil….. El 16 de enero de 1997 la Fiscalía suspendió la indagación preliminar y archivó provisionalmente las actuaciones. 3) El informe comenta que se solicitó a la oficina de investigaciones especiales de la procuraduría General de la Nación de Medellín mediante oficio No. 0651 copia del informe de las investigaciones adelantadas por ese despacho en relación con las desapariciones forzadas y se entrevistaron con JOSE DIAZ MONCADA Jefe de esa oficina quien informo que elaboraría un informes para la Procuraduría. 4) El Personero de Cocorná informó que realizaron una inspección a la vivienda de JOSE ELISEO GALLEGO donde recogieron vainillas de munición para fusil, bolsas de menaje utilizado por el ejército marcadas con sus logotipos, y otras evidencias y un vídeo que realizaron de dicha inspección. QUE ESTAN EN PODER DE LA OFICINA DE INVESTIGACIONES ESPECIALES DE LA PROCURADURÍA. 5) Solicitaron mediante oficio No. 0649-044-039 del 21 de octubre al jefe de oficina de información y análisis del CTI copia del informe No. 93 de agosto 10 de 1996, el citado informe se anexa al proceso. 6) Este informe aclara que se desplazaron con funcionarios de la alcaldía del Carmen de Viboral a la Vereda La Esperanza a buscar una fosa común. Pero no hallaron nada. 7) Recibieron entrevistas a: MARIA LUCELLY RAMIREZ GOMEZ (profesora de la Escuela de la Vereda La Esperanza) habla de la deserción escolar en la fecha de las desapariciones. De 95 alumnos quedaron 60. Pero a la fecha de la entrevista (oct 96) ya estaban regresando. MARIA ELCY (Directora de la Escuela) relata lo mismo que la profesora. ISMENIA GALLEGO (Cuñada de Anibal Gallego) menciona sobre el desplazamiento de la comunidad, pero que ya estaba regresando. ROMELIA CASTAÑO MUÑOZ, ANIBAL DE JESUS CASTAÑO se refieren al desplazamiento de la comunidad de la vereda. ANTONIO MILAN GOMEZ no conoció de los hechos ni de los responsables. Madre Superiora del hogar infantil LAS PALOMAS de Cocorná SOR CARMEN ALVAREZ informó que la hermana de OSCAR HEMEL ZULUAGA (desaparecido el 21 de junio de 1996) que también es religiosa y vive en España la llamo al teléfono 866 66 18 y le manifestó que "su hermano estaba bien" DANIEL ANTONIO ZULUAGA informó que él y Oscar Hemel habían ido a Cocorná a visitar a su hermana Sor Omaira que había regresado de España que desde hacia 8 años no veían y que él se regresó a la Guajira el viernes y Oscar se iba a regresar el Lunes. Informa que una persona lo llamó y le dijo que "el tenía autoridad para informarle que su hermano se encontraba bien, pero que no le podía decir nada más, pero la verdad es que no se sabe absolutamente nada sobre su hermano" 8) En el informe se menciona de una reunión que la comunidad tuvo con la Corporación Jurídica Libertad y el Personero de Cocorná donde se programó para el 16 de noviembre de 1996 un acto cultural, artístico y misa en la Vereda, el cual se realizó y que contó con disturbios que fueron de público conocimiento y donde la FFPP presuntamente hizo unos disparos. Mientras se daba la reunión del 25 de octubre los funcionarios del CTI se entrevistaron con: JOSE ELISEO GALLEGO padre de Juan Carlos y Octavio quien dijo que los responsables de la destrucción de su vivienda fueron soldados del ejército y que le habían dicho a su esposa que fuera a reclamar a la Cuarta brigada. HECTOR GONZALEZ quien manifestó que vio cuando se llevaron a OCTAVIO GALLEGO "llegaron cinco vehículos de los cuales se bajaron dos hombres los cuales portaban armas de largo alcance estos individuos le dijeron a OCTAVIO "venga usted que lo necesitamos" lo subieron en una camioneta luv de color rojo y partieron con rumbo a la ciudad de Medellín. El entrevistado manifiesta haber vuelto a ver a estas personas ya uniformadas de soldados a los ocho días por los lados de la autopista y se encuentra en capacidad de reconocerlos". Este testigo informa que ALPIDIO QUINTERO fue quien le arrendó la casa de habitación a la pareja procedente de Chigorodó. MARIA FLORINDA GALLEGO HERNANDEZ esta testigo relata lo mismo que había dicho en su testimonio obrante a folios 91 y 92 en relación con la desaparición de su esposo OCTAVIO y sobre IRENE dice que "vio cuando el ejército se la llevó uniformada de verde con cachucha y botas, el ejército se la llevó dizque (sic) por guerrillera". La entrevistada aseguró haberle visto a IRENE en su casa una fotografía con prendas similares a las que usan los guerrilleros y con un arma de fuego" fl 113. [redacted] El informe del CTI especula "que se hace muy extraño es que según las personas que conocieron al niño dicen que este era de raza negra igual que su padre, por lo tanto no parece corresponder a las características del niño que aparece en la fotografía del dicho periódico " refiriéndose al periódico El Tiempo del 15 de septiembre de 1996. Este periódico también dice que "la madre regresó a la vereda La Esperanza por su hijo, cuatro días después de haberse desaparecido, lo anterior fue desvirtuado tanto por Florinda de Jesús Gallego como

La Fiscalía ordenó y practicó el 10 de diciembre de 1996 una inspección judicial al expediente seguido por la muerte de Adolfo Hernán Cardona Quintero alias Otoniel, Tercer Comandante del Frente Elkin González del EPL, ocurrida el 21 de julio de 1996 y por el delito de rebelión en contra de: Jorge Alberto Moreno Serna, Gerente de la Cooperativa COOTRASCARMEN; Francisco Zuluaga Orozco, accionista de la Flota El Carmen; y Luz Marina Zuluaga, Gerente de la Flota el Carmen[354].

El 11 de diciembre de 1996, se llevó a cabo otra Inspección judicial a la investigación adelantada por la Oficina de investigaciones especiales de la Procuraduría[355]. Al expediente se presentó un anónimo que da información sobre las posibles causas de las desapariciones forzadas en la Vereda La Esperanza[356].

El día 31 de febrero de 1997 el Mayor Carlos Alberto Guzmán Lombana[357] rinde declaración juramentada.

El 12 de marzo de 1997 la Fiscalía profiere una resolución ordenando una serie de pruebas[358]. Mediante una comunicación dirigida a la Unidad Nacional de derechos Humanos de la Fiscalía,

---

por las demás personas presentes en el lugar. Por lo tanto, señala el informe del CTI, la credibilidad dada a este artículo resulta bastante dudosa, haciendo creer que los responsables de estos hechos son los PARAMILITARES" 9) Periódico El Carmelitano que recoge informe de la Personería de ese municipio dice sobre los responsables que "se trata de un grupo armado militar paramilitar que se desplaza en varios vehículos". 10) Se informa del homicidio del Dr. HELI GOMEZ el 26 de noviembre de 1996 investigación Radicada No. 665. 11) Se informa sobre reportes de TV donde el Personero acusaba a grupos paramilitares y personal del ejército como responsables de las desapariciones forzadas ocurridas entre junio y julio. Folios 107 – 114 Cuaderno 1 No. radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

354 La Fiscalía declara una ruptura de la unidad procesal y envía las diligencias por la muerte de ADOLFO CARDONA a la Jurisdicción penal militar considerando que la muerte del presunto comandante de la guerrilla se dio en el marco de un combate, según informe del Teniente José Antonio Correa Mendéz y continuo contra los otros procesados por el delito de rebelión. Folios 118 – 120 Cuaderno No. 1 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

355 La Inspección judicial se realizó el día 11 de diciembre de 1996 sobre el expediente radicado con el No. 5382 de la Procuraduría seguido por las desapariciones forzadas de la Vereda La Esperanza. De las diligencias se extrae copia alusiva a 1) El personero del Carmen de Viboral mediante oficios Nro. 612 y 045 informa que en ese municipio opera un grupo permanente ilegalmente armado. 2) Apertura de indagación preliminar por el Director Nacional de Investigaciones especiales, 3) Informe de visita al Carmen de Viboral 4) Oficio 050 de la Personería de Cocorná informando de nuevas desapariciones forzadas.6) Se allegan testimonios tomados por los Personeros del Carmen de Viboral y de Cocorná. 7) Acta de visita especial a la IV Brigada del ejército, al batallón Pedro Nel Ospina se anexan INSITOP, al Batallón Héroes de barbacoas, a la Base de la Piñuela y 8) se solicitan copias de lo actuado por la Procuraduría. Folios 125 - 128 Cuaderno No. 1 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

356 Se aporta a través de un escrito anónimo la descripción de unos vehículos que son utilizados en los hechos y se relaciona la causa de las desapariciones forzadas, entre ellas el enfrentamiento entre el ejército y la guerrilla y el secuestro de LEON ALBERTO RAMIREZ por guerrilleros quien es hombre adinerado y negociante del Magdalena Medio. Folios 138-139 Cuaderno No.1 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

357 En la declaración dice que fue Comandante de la FTA desde el 1º de diciembre de 1994 y le entregó al My ABONDANO MIKAN y así cada tres meses. Relata lo concerniente a una operación militar adelantada en la parte alta de la vereda La Esperanza "donde quedo herido el capitán, las unidades continuaron y en horas de la mañana encontraron en la parte alta un campamento donde ubicaban a todos los secuestrados" (…) "se siguió y más arriba se encontró el campamento donde se encontraba el comandante MARCOS del EPL (…), más arriba se encontró esta niña, (Irene) en una casa la cual ella nos dijo que ella había pertenecido al grupo y que más o menos dos meses ella se había retirado del grupo…" Folios 7 – 10 Cuaderno No. 4 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

358 1) Averiguar si en la Fiscalía obra investigación en contra de Irene Gallego Quintero. 2) Solicita información sobre el My Carlos Alberto Guzmán Lombana sobre en la fecha y desde cuando, a que Unidad pertenece el Mayor

la Corporación Jurídica Libertad solicita la reasignación de la investigación a la Unidad Nacional de derechos humanos de la Fiscalía[359].

El 13 de mayo de 1997, el Dr. Edgar Mario Alzate Personero del Municipio de Cocorná rinde declaración ante la Fiscalía Regional que adelantaba la investigación penal[360]. Mediante resolución del 14 de mayo de 1997, el Fiscal instructor ordena la práctica de otras pruebas[361].

Mediante resolución No. 018789 del 17 de junio de 1997 expedida por la Dirección Nacional de Fiscalías se asignó la actuación penal a la UNDH – DIH por las desapariciones de Fredy N, Aníbal De Jesús Castaño Gallego, Oscar Hemel Zuluaga Marulanda, Juan Crisóstomo Cardona Quintero, Miguel Ancizar Cardona Quintero, Juan Carlos Gallego Hernández, Hernando De Jesús Castaño Castaño, Orlando De Jesús Muñoz Castaño, Julio Cesar Morales Hernández, Giovany Morales Cardona, Irene Gallego Quintero, [redacted] y el homicidio de Javier Giraldo Giraldo. En la definición de las víctimas conforme habían sucedido los hechos, la Fiscalía omitió la determinación como víctima de la compañera de Fredy N que fue retenida el 22 de junio de 1996 junto con él y otro joven NN; tampoco se mencionan las desapariciones de JAIME ALONSO MEJÍA QUINTERO, de OCTAVIO DE JESUS GALLEGO HERNANDEZ y se incluyen las desapariciones del señor Julio Cesar Morales Hernández y de su hijo Giovany Morales Cardona, que ocurrieron fuera del contexto de los campesinos de la Vereda La Esperanza[362].

---

CARLOS ALBERTO GUZMAN LOMBANA, quien en el mes de Junio de 1996 se encontraba en el municipio de Cocorná como COMANDANTE DE LA FUERZA TAREA AGUILA. 2) Ordenó inspección judicial al proceso seguido por el homicidio del personero Heli Gómez Osorio 4) Recibir declaración al Personero del Municipio de Cocorná. Folios 173 - 174 Cuaderno No. 1 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

359 Septiembre 4 de 1996. Folios 197 - 203 Cuaderno No. 1 radicado 233 UNDH – DIH. Esta comunicación vuelve a estar foliada en el cuaderno 4, Folios 197 – 198 UNDH –DIH, ANEXO 2 del ESAP.

360 En la declaración se informa que tuvo conocimiento por PASCAR JEQUIER de la Cruz Roja Internacional que a los desaparecidos los habían matado, salvo al menor y a su padre conocido como FREDY. Dice que a las víctimas las acusaban de ser guerrilleros o auxiliadores. Esta información también se le suministro al periodista HOLMAN MORRIS de AM PM quien se entrevistó con el jefe del grupo del magdalena Medio Ramón Isaza. Menciona las desapariciones de ANDRES GALLEGO y LEONIDAS CARDONA el 27 de diciembre de 1996. Sobre IRENE GALLEGO QUINTERO informa que "después de haber sido presentada en la Fiscalía fue dejada nuevamente en poder de los militares, sin que hasta la fecha se sepa nada de ella por parte de su familia..." De los autores dice que según información de los familiares de las víctimas los hechos fueron cometidos por militares y paramilitares. Dice que alias FREDY si era guerrillero del EPL y que se encuentra vinculado a los paramilitares según el Noticiero AM Pm. De Irene Gallego Quintero dicen personas de la Vereda que también era guerrillera. Dice que de las víctimas eran menores de edad JUAN CRISOSTOMO, MIGUEL ANCIZAR CARDONA QUINTERO y OSCAR HEMEL ZULUAGA. Dice que no ha recibido amenazas por la investigación de estos hechos y que tampoco sabe sobre las causas de la muerte violenta de HELI GOMEZ personero del Carmen de Viboral. Folios 214 - 216 Cuaderno No. 1 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

361 1) Pedir respuesta del oficio No 625 del 14 de marzo de 1997, que aun no se había respondido. 2) Averiguar por las investigaciones penales por las desapariciones de Andrés Gallego y Leonidas Quintero. [redacted]

362 Folios 237-235, Cuaderno No. 1, radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

Entre el mes de julio de 1997 y el mes de marzo de 1998, la UNDH – DIH de la Fiscalía asignada para conocer de la investigación dispuso varias diligencias probatorias[363] sin que estas aportaran ningún resultado sustantivo.

El 26 de marzo de 1998, se recibe una declaración del Mayor del Ejército Carlos Alberto Guzmán Lombana, quien para la época de las desapariciones forzadas era el Comandante de la Fuerza de Tarea Águila de ejército[364].

---

[363] **Diligencias del 31 de Julio de 1997:** 1) Reactivar la comisión a la Fiscalía de Florencia para tomar declaración al mayor Guzmán Lombana. 2) Agregar a la investigación la tarjeta decadactilar de Ramón o Ramiro Isaza, de 57 años, natural de Argelia Antioquia. 3) Inspección judicial a la investigación de la Oficina de investigaciones de la Procuraduría para averiguar información actualizada de los hechos de que trata esta investigación. 4) Alleguese copia del video de AM PM que recoge entrevista a Ramon Isaza. 5) Allegar información de la Fiscalía de Antioquia acerca de todas las investigaciones referentes a los hechos acá investigados y se solicitara el envío de todos los expedientes a este radicado. Folios 247 - 248 Cuaderno No. 1 radicado 233 UNDH – DIH. **Diligencias del 11 de aosto de 1997**: 1) Declaraciones a Andrés Antonio Gallego (quien había sido desaparecido el día 27 de diciembre de 1996. A Florinda de Jesús Gallego, José Eliseo Gallego, María Edilma Giraldo, Nicanor Velásquez, Javier Enrique Fox, Florinda Gallego, Imelda Cardona, Gildardo de Jesús Giraldo, Eduardo Giraldo, Jeny Adriana García, Maria Elcy Montoya Gomez, Andres gallego Castano, Hector Gonzalez, Uriel Hernandez, Carmen Muñoz y Edgar Mario Alzate. 2) Ratificar la inspección judicial a la investigación que se adelanta en la Oficina de Investigaciones Especiales de la procuraduría. 3) Solicitar investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía. 4) averiguar investigaciones contra Ramón o Ramiro Isaza que se adelanten en la Fiscalía de Antioquia. 5) Reiteró la solicitud de averiguación sobre las investigaciones donde son víctimas las personas desaparecidas de la Vereda La Esperanza.6) averiguar investigaciones u órdenes de captura contra Ramón o Ramiro Isaza que se adelanten en el DAS. Folios 256 - 257 Cuaderno No. 1 radicado 233 UNDH – DIH. **Diligencias del 7 de octubre de 1997:** 1) Solicita la asignación de un investigador del CTI para que evacue las pruebas ordenadas desde agosto 11 de 1997. 2) Decreta tomar otras declaraciones a Consuelo Giraldo, María Engracia Hernandez, Miguel Alpidio Quintero, Dioselina Quintero, Carlos Estrada, Alfonso Gomez, Alvaro Valencia, Jesus Gallego Hernandez, Luis Eleazar Gallego Castano, John Fredy Castano, Ernilda Quintero, Juan Ramirez, Argiro Quintero. 3) Solicito reactivar el despacho comisorio No. 276 que disponía el testimonio del My Carlos Alberto Guzmán Lombana y reactivar los oficios Nros. 2649 y 2650. Folios 266 - 267 Cuaderno No. 1 radicado 233 UNDH – DIH. **Diligencias del 6 de marzo de 1998:** 1) Inspección judicial en el comando de la Cuarta brigada y en la sección E1 del ejército nacional. Con el fin de traer al expediente el listado completo del personal integrante de la fuerza de tarea AGUILA. 2) Oficiar a la Oficina de Investigaciones Especiales de la procuraduría general de la nación, con el objeto de informar el estado de la investigación 3282. 3) Recíbase los testimonios de FLORINDA DE JESUS GALLEGO HERNANDEZ, MARIA ENGRACIA HERNANDEZ, IMELDA DE JESUS GIRALDO LOPEZ , HECTOR GONZALEZ, CARLOS ESTRADA, ELVIA GALLEGO, MARIA ROCIO CARDONA Y MARIA EDILMA GIRALDDO CASTAÑO Y EDGAR MARIO ALZATE GARCIA. 4) Recibir declaración de la fiscal SONIA Gil a quien según se afirma en diligencias se le dejó en disposición a IRENE GALLEGO por un miembro del ejército. 5) Recibir declaración de IVAN DUQUE personero de Cocorná, 6) Ordena Inspección judicial del expediente 1202 de la Fiscalía 108 del municipio de Santuario. Folios 99 -100 Cuaderno No. 2 radicado 233 UNDH – DIH. ANEXO 2 del ESAP.

[364] Consta en el acta a la pregunta: si estuvo comandando la fuerza de tarea águila RESPONDE si. A partir del primero de enero de diciembre de 1994 y cada tres meses se iban relevando con otros oficiales (…) hasta el día cinco de julio o junio de 1996(no recuerda bien). Indica los nombres de los oficiales del ejército que se relevaron el cargo: El mayor GARCIA recibe en diciembre de 1994 , el mayor ABONDANO MIKAN HUGO, HURTADO ALOYA JAIRO, y el último fue el mayor ROJAS ESPINOSA quien no duro más de un mes en el año 96 (según GARCIA). Realiza una relación de las personas que el conocía de la fuerza de tarea águila pertenecientes al BARBULA : CAPITAN JARAMILLO VARGAS CARLOS MARIO , teniente PEREZ RODRIGO, teniente RESTREPO ,teniente FLOREZ, por el batallón 42 Héroes de Barbacoa estuvo el capitán GONZALEZ Herido en combate el día 25 de junio. Indica que la fuerza de tareas llego a operar con agregados de del Batallón PALAGUAS No 14 , Batallón CALIVIO , el Batallón RAFAEL REYES o BOMBONA, inclusive se encontraron combatiendo en la zona las fuerzas especiales del ejército. La composición de estas fuerzas especiales es: una compañía de un batallón de más o menos 80 hombres con sus comandantes respectivos agregados operacionalmente a la cuarta brigada que queda en Tolemaida. Indica la existencia de dos controles uno permanente y directo vía radio y otro con los comandantes directos en el sitio. Señala además la composición de la fuerza de tarea: “como la jurisdicción de las brigadas se establecida en el puente del río calderas, en el río calderas hacia Medellín le correspondía a la 4ta brigada y de calderas hacia puerto Boyacá le correspondía al batallón Barbúlas incluyendo el municipio de San Luis”(…) las

El 14 de abril de 1998, se le recibe una declaración bajo reserva de identidad a un testigo que fue designado con código VB-1[365]. Ese mismo día declararon María Rocío Cardona Fernández[366] y Héctor Manuel González Ramírez[367]. Al día siguiente se tomaron los

---

cantidades del batallón Barbúlas eran 156 hombres , aproximadamente 18 cuadros orgánicos, dos pelotones más del mismo batallón que eran 80 hombres, del batallón 42 era aproximadamente 130 hombres que ya eran soldados voluntarios(…). Para finales de mayo y principios de junio estuvo agregado el batallón Palagua 14 con más o menos 80 hombres. Para los primeros días del mes de mayo se hizo una operación con el batallón 42 Barbacoas y las fuerzas especiales 80 hombres aproximadamente. A la pregunta si la vereda La Esperanza del municipio de Cocorná formaba parte del área bajo su control como comandante de la fuerza de tarea responde: "que si nosotros estuvimos por esas áreas si estuvimos combatiendo y no solo allí, estuvimos en el Carmen combatiendo también ,estuvimos en san Francisco, en la Loma del Rejo combatiendo también estuvimos en varias veredas de Cocorná (...) en el tiempo en que yo fui comandante del 94 al 96 aproximadamente 30 combates, de pronto mas, donde los subversivos del ELN corrían hacia esas montañas , porque cada montaña es una vereda así tenga tres casas (…)nosotros estuvimos en estas veredas y en la Esperanza también combatiendo" A la pregunta si las personas que habitaban esos territorios tenían vínculos con los grupos subversivos y que conocimiento tenía RESPONDE: "el conocimiento que yo tuve era sobre la inteligencia que se tenía de quienes eran auxiliadores simpatizantes o miembros de los grupos que desde allí delinquían(…) teníamos nosotros el orden de batalla especialmente del ELN nos ubicaban algunos miembros que pertenecían activamente al grupo o eran informantes de ellos, y en qué le colaboraban al grupo estos eran los que decían todos los movimientos que hacíamos nosotros en la autopista". Preguntan: si hubo alguna captura en los enfrentamientos de guerrilleros o auxiliadores. Responde: refiriendo combates que comienzan cerca a un punto llamado la Y de Cocorná, combates donde resulta herido el capitán GONZALES con dos tiros en el brazo derecho y dos en la caja torácica costado derecho, se llegó tras combates esporádicos a un sector, una casita de por allá en La Esperanza "y allí como la gente iba preguntando en las diferentes casas , encontramos a una niña aproximadamente de 17 a 18 años la cual nos confesó de que ella si pertenecía al grupo del comandante MARCOS del EPL , ella respondía al nombre de IRENE GALLEGO" más adelante( 3 días después) relata una entrega a la Fiscalía y afirma haber recibido de IRENE GALLEGO "unas fotografías donde estaba ella con unos fusiles y documentos de interés militar". Describe actividad dentro de la Fuerza de Tarea Águila, deja constancia después de unos enfrentamientos de la captura de IRENE GALLEGO. Anota refiriéndose a las desapariciones de la vereda La Esperanza "el EPL, ELN y FARC peleaban por territorio especialmente por el sector de la Gallinita del Viao que era donde ellos hacían los secuestros, asesinatos(…) y como peleaban por esa zona me imagino que ellos mismos se mataron o los desaparecieron no se inclusive le estaban echando la culpa a los Paramilitares que les echaban la culpa eran los que venían de Doradal que estaban al mando del sujeto RAMON ISAZA, para ellos poder llegar al lugar donde están los desaparecidos tenían que librar más de 8 retenes en un tramo de unos 100 kilómetros." E insiste más adelante "la conclusión que se sacó (…) fue por la lucha por la zona o control de la autopista, por tal motivo entre ellos mismos tenían problemas, enfrentamientos ellos y se mataban entre ellos mismos (…) en cuestión de desaparecidos me imagino que ellos también tienen que ver con esto". Folios 118 - 134 Cuaderno No. 2 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

[365] Relata que el día 22 de junio de 1996, más o menos a las 6 am un campesino vio en el camino que conduce a la autopista dos camionetas una de color verde y otra de color rojo, que tenían alrededor gente de civil armada y de camuflado, al lado de donde está la camioneta hay una casa de donde sacaron una pareja que había venido ahí hace más o menos quince días, manifiesta que transcurrido un tiempo llegaron otras tres personas, dos de ellos eran MIGUEL ANCISAR CARDONA QUINTERO y JUAN CRISOSTOMO CARDONA QUINTERO, al tercero nadie lo conocía, los dos primeros tenían 12 y 14 años , a los 5 los subieron a la camioneta verde dicen que la camioneta partió hacia la Piñuela, La Piñuela es un caserío que queda sobre la autopista y la base militar queda arriba del caserío. El jueves 27 de junio es visto uno de los que se llevó a los 5 desaparecidos el 22 de junio, se dice que es un policía de Cocorná y que además con este andaba un soldado que también participo en el hecho, a los 20 días aproximadamente ocurrió una balacera en la granja santa Teresita días después se contaba que habían matado a un muchacho de unos quince años de edad. Otro caso referido en el expediente es el de MARLENY GALLEGO QUINTERO (acaso IRENE?) se indica que ella se encontraba con los soldados el día 15 de julio de 1996 , ella se encontraba al bordo de la autopista (…) luego se refiere al dicho de un habitante de la región según el cual " a MARLENY la habían entregado a los paramilitares ya que ellos tenían la lista y que como un paramilitar había ido con ellos cuando la cogieron entonces la tenían que entregar, además dijo que ellos la habían entregado en la base de la Piñuela. Folios 190 – 191. Cuaderno No. 2 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

[366] Se pronuncia sobre la desaparición de su cónyuge LEONIDAS CARDONA GIRALDO, relata los hechos en los que aproximadamente 10 hombres en dos camionetas una blanca y una roja "guardiaron" a la casa en la cual se encontraban, algunos hombres se quedaron con ellos mientras los otros subían por el señor ANDRES GALLEGO. Durante ese tiempo le dice a LEONIDAS le pregunto uno de los paramilitares si el nombre de LEONIDAS le sonaba, al insinuarle que podría estar equivocado que Leonidas había muchos, el paramilitar respondió que había

testimonios de Jhon Freddy Castaño Gallego[368], María Engracia Hernández Quintero[369], Carlos Arturo Estrada Ramírez[370], Miguel Apidio Quintero González[371], Florinda De Jesús Gallego Hernández[372].

---

traído dos "pintas" de la vereda y le voy a mostrar uno de ellos, a los diez minutos aparece FREDY que se habían llevado hacia un año, se habían llevado la parejita con el bebe, FREDY afirma conocerle. Acto seguido afirma uno de los paramilitares "no se haga el bobo, que todos en esta vereda son guerrilleros" luego le ordena cambiarse el pantalón y añade "que en la piñuela resolveremos el caso". Al preguntársela que entendía por la piñuela? Contesto: yo entendí que lo iban a llevar la Base militar de La Piñuela. Un soldado (referido más adelante como William) me estuvo ayudando en la búsqueda de él, es del Batallón Águila y me dijo que lo que cogía RAMON ISAZA no se volvía a ver. Adicionalmente narra un caso que al parecer le cuenta este soldado sobre hechos ocurridos a la entrada de Cocorná , donde una "muchacha le entrega una carta al cabo, que le había mandado el jefe de la Piñuela y que en esta carta decía que desocuparan inmediatamente la zona" cuando ellos salieron ingresaron los paramilitares y sacaron 5 hombres del pueblo de Cocorná. Al otro día los cinco hombres aparecieron muertos en un sitio llamado La Mayoría, de Santuario. Indica el soldado (William) que el sabía que estaban en Doradal, que los paramilitares estaban en Doradal, al preguntarle por ANIBAL Y JAIME que sabía de ellos respondió "que ANIBAL hace rato estaba podrido y que JAIME también. Al indagársele por FREDY indica que lo conoció el día que se llevaron a LEONIDAS, que había oído mencionar que él había venido del Urabá, vivía en una casa arrendada , hasta que se lo llevaron presuntamente los paramilitares junto a MIGUEL ANCIZAR, JUAN CRISOSTOMO y otro joven que se encontraba esa noche con ellos. Esa vez se llevaron también a la mujer que vivía con FREDY, tenía un bebe de dos meses. Folios 192 - 194. Cuaderno No. 2 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

[367] Se pronuncia sobre la desaparición de OCTAVIO GALLEGO HERNADEZ , sucedió el 9 de julio de 1996, en la vereda de San Vicente. La desaparición se produjo cuando estaban esperando carro al borde de la autopista Medellín – Bogotá, cuando pasaron 4 automóviles, del carro del medio, que paro donde estaba OCTAVIO, se botaron dos hombres con armas de largo alcance vestidos de civil y lo montaron a uno de los carros(…) Siguieron con el de para arriba hacia Medellín. "Ese día a dos cuadras más abajito había ejército en el estanco, estaban los soldados ahí y vi a los dos que se llevaron a OCTAVIO, ya estaban uniformados. Afirma, "la idea que teníamos es que el ejército hace esas cosas con los paramilitares , el día que se llevaron a OCTAVIO había ejército en la zona porque a las dos y media cuando iba para mi casa y vi ejército en el Ramal a la entrada de Cocorná. Folios 197 – 199 Cuaderno No. 2 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

[368] Pronunciándose sobre los hechos del año 1996 cuando IRENE GALLEGO fue abordada por desconocidos y posteriormente desaparecida Refiere: "Sucedió en el sitio conocido como la MESETA, yo estaba como a las tres de la tarde para donde mi abuelo , cuando llegue se encontraba lleno de ejército, ellos estaban en toda la casa de mi abuelo JOSE ELISEO GALLEGO, después llegaron los del ejército con IRENE y el ejército me dijo que fuera a la casa de ella a traerle ropa" El hermano de ella (ELADIO GALLEGO) ya sabía que a ella se la había llevado el ejército, y que a ella la tenían donde el abuelo mío, cuando traje la ropa se la entregue al ejército y le pusieron ropa de camuflado del ejército y se la llevaron hacia la autopista. A la pregunta: por que razón afirma que las personas que se encontraban allí eran miembros del ejército RESPONDE: "porque estaban vestidos como militares, y sus botas y bolsas donde llevaban la comida eran enlatados marcados con el nombre del Ejército Nacional, además manifestaron ser miembros del ejército, portaban armas largas ,eran por ahí unos 50 o 60 hombres. Afirma desconocer la causa por la cual se llevaron a IRENE , "pero ellos preguntaban muchas cosas de la guerrilla , como de que si estaban por aquí, lo único que yo oi fue que le preguntaron a IRENE si ella era guerrillera. Anota -a IRENE la trajeron de la casa de PABLO MUÑOZ- Afirma haber recibido amenazas por parte del ejército e indica que días antes de que se llevaran a su tío JUAN CARLOS GALLEGO, en un retén militar cuando les paró el ejército y les pidieron papeles "ellos le dijeron que lo que pasaba es que ustedes son unos colaboradores de la guerrilla, y el les dijo que el no le colaboraba ni a la guerrilla ni al ejército, entonces un soldado le dijo al tío mío y a mí que no nos asustáramos cuando hicieran una barrida bien hijueputa y caigan ustedes ahí, nosotros seguimos el camino y como a los 15 días se llevaron a mi tío. Sobre la desaparición del señor OCTAVIO GALLEGO relata que ocurrió dos días después de la desaparición de JUAN CARLOS en vereda San Vicente cuando él se encontraba en la casa de su madre, cuando aproximadamente a las cuatro y media de la tarde pararon cuatro carro se bajaron dos hombres y se llevaron a OCTAVIO GALLEGO, "arrancaron hacia la vía que conduce a Medellín". Folios 172 – 174 Cuaderno No. 2 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

[369] Narra los hechos que rodearon la desaparición de su hijo JUAN CARLOS GALLEGO, refiere que varias veces había sido amenazado el mismo ejército. Esto ocurrió antes de antes "de que fueran a balear la casa a las dos y media de la mañana, 15 días antes de llevárselo a JUAN CARLOS "los del ejército revueltos con gente de civil, estuvieron dándole bala a la casa durante media hora". Indica más adelante "durante el día algunos de esos militares fueron a andar, y después llegaron con IRENE, ella bajaba llorando, iba con su ropa de casa, OCTAVIO fue el que patente le toco verla, porque a él lo mandaron por la ropa de IRENE a la casa. Yo la vi fue ya casi a las cuatro de la

El 17 de julio de 1998, se recibe la declaración al Mayor del Ejército JAIRO HURTADO OLAYA, quien fue ejecutivo y segundo comandante del batallón de ingenieros Pedro Nel Ospina con sede en Medellín, que controlaba la FTA del ejército[373].

El 31 de julio de 1998, se le toma el testimonio al Mayor HUGO ALFONSO DEL MILAGRO ABONDANO MIKAN, quien se desempeñaba para la época de las desapariciones forzada como Comandante del Batallón No. 42 Héroes de Barbacoas de la IV Brigada del Ejército desde el 28 de mayo de 1995 hasta el diciembre de 1996, con mando en la FTA[374].

El 20 de octubre de 1998, fue reasignada a otra Fiscalía la investigación penal por las desapariciones forzadas de la Vereda La Esperanza. El nuevo Despacho avoca conocimiento

---

tarde. Ya estaba vestida de soldado y con el buso ese que usan los soldados." Refiere la señora María Engracia que los militares que abalearon su casa llevaban otra persona con ellos que tenía el rostro cubierto, cuando le destaparon el único que el reconoció fue JUAN CARLOS quien dijo" ah, ven que si, entonces está vivo ANIBAL y todos esos otros que ustedes se llevaron hace quince días. Al preguntársele si tiene conocimiento de otros hechos delictivos relata los ocurridos el día 9 de julio de 1996 donde uno de los trabajadores de la empresa PAVICOL que se encontraba realizando una obra en la autopista relata a la hija de la relatante que se habían llevado a un compañero de el que trabajaba en la autopista, que lo cogieron y lo tiraron en el carro donde llevaban a OCTAVIO y a HERNANDO. Folios 200 - 203 Cuaderno No. 2 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

370 Relata los hechos relacionados con la muerte de JAVIER GIRALDO, "desde el sitio de donde cogieron a JAVIER, vi también que los mismos carros (uno rojo rayado negro, una camioneta blanca, y el otro amarillo) que se devolvieron desde el sitio donde cogieron a JAVIER, pararon en el puente La Cadavid, cerca del estanquillo, y vi que montaron otras dos personas que no supe en ese momento quienes eran" después se supo que esas personas eran JAIME MEJIA y JUAN CARLOS GALLEGO. Folios 204 - 206 Cuaderno No. 2 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

371 La declaración se centra en la identificación y destino de los arrendadores de ORLANDO QUINTERO hijo del declarante, que eran la pareja procedente de Urabá, padres del menor que quedó abandona y luego retenido por los paramilitares. Y menciona la desaparición de ANIBAL CASTAÑO a quien le tenía arrendada la tienda. Folios 207 – 208 Cuaderno No. 2 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

[redacted] Relata los hechos sobre el hostigamiento a la casa de sus padres en el momento en que se encontraba su hermano JUAN CARLOS GALLEGO y como allí este se percató que el ejército llevaba a Freddy amarrado del cuello vestido como personal del ejército. Narra como JUAN CARLOS GALLEGO denuncio estos hechos ante la personería de Cocorná y puso el denuncio donde se llevaron elementos dejados por el ejército como fueron elementos que de comida que decían GRUPO AGUILA cuarta brigada cartuchos de diferentes armas. indica que los paramilitares se movilizaban en TOYOTAS y en camionetas cuatro puerta manifiesta haber visto a una Toyota roja y también una camioneta cuatro puertas negra en la que iba el ejército en compañía de gente civil armada. Folios 210 - 213 Cuaderno No. 2 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

373 En la declaración explica el funcionamiento de la Fuerza de Tarea Águila, los nombres de los Comandantes de la misma, precisando algunas fechas de mando de algunos de ellos. Sin certeza menciona sobre la desintegración de esa Unidad táctica del Ejército, señalando que fue entre junio y julio de 1996. Folios 47 – 52 Cuaderno No. 3 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

374 En su declaración menciona sobre las formas de vinculación de la población civil a acciones de la guerrilla contra la fuerza pública. Dijo conocer de las denuncias sobre desapariciones forzadas en el área de la FTA porque la Fiscalía está investigando y por el reporte del periódico El Tiempo. Recuerda la realización de un censo de la población a finales del año 1995 por parte del My HURTADO como comandante de la FTA. Da a conocer que entre los meses de junio o julio de 1996 el Capitán Cárdenas González orgánico del Batallón Héroes de Barbacoas, fue herido en la parte Alta de la Vereda La Esperanza y fue evacuado a la ciudad de Medellín y luego a Bogotá. Más adelante señala que recibió el control de la autopista Medellín – Bogotá en la parte de la IV Brigada del ejército desde más o menos el 15 de julio y que quien quedó al mando fue el Capitán Cárdenas González. Folios 65 - 84 Cuaderno No. 3 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

de la indagación preliminar y dispuso la práctica de otras pruebas[375]. El Cuerpo Técnico de Investigación comisionado para evacuarlas rinde el informe No.00248 del 1 de febrero de 1999[376].

---

[375] 1) Inspección judicial a los sitios donde ocurrieron los hechos. 2) Conocer a través de qué actos administrativos se creó la Fuerza De Tarea Águila. 3) Fecha de vigencia y acto administrativo que dispuso su desintegración de la FTA, qué unidad la reemplazo, que batallones la componían. A qué brigada pertenecían. 4) Nombres de los oficiales que componían la FTA y elaboración de álbum fotográfico de los comandantes. 5) Obtener los INSITOP, actualización de dispositivo , cartilla de caso táctico, perfil vial , plano de planta de jurisdicción, censo de los retenes y ubicación, censo de la población y comunicados de prensa. De cada una de las unidades que integraban la fuerza de tarea. Para los días 21 22 26 27 de junio y julio 7 y 9. 6) Ordena realizar inspección judicial a: los expedientes 3282 de la oficina de investigaciones especiales, Proceso que ha de cursar por el secuestro de ALBERTO RAMIREZ, PROCESO 2100 de la dirección regional de fiscalías Medellín por la muerte del menos ANDRES FELIPE FERNANDEZ GARCIA, PROCESO 21-005-20 por el secuestro de los señores ANDRES ANTONIO GALLEGO CASTAÑO y LEONIDAS CARDONA. 7) Ordena ubicar a la señora FLORINDA DE JESUS GALLEGO HERNANDEZ 8) Obtener el registro civil de IRENE GALLEGO.. 9) Busca establecer la real existencia de la organización denominada "TOM ROGER" y averiguar si la misma tuvo participación en los hechos que aquí son materia de investigación. 10) A fin de recepcionar testimonio se ordena establecer si a quien se conoce a través de testimonios como "la mona" responde al nombre de MARTHA CECILIA IRAL. 11) Ordena recibir testimonio a la señora ELVIA HERNANDEZ, 12) establecer la ubicación del soldado ARLEY DE JESUS ARANGO, a fin de que amplié la información concerniente a la existencia de una base paramilitar ubicada en Cocorná Antioquia. 13) Establecer en que lugar se pueden localizar los soldados voluntarios que pertenecieron a la fuerza de Tarea Aguila, en particular aquellos que responden al nombre de MEJIA JIMENEZ WILLIAM ,AGUDELO MARIN WILLIAM y VALDEZ MORALES WILLIAM, 14) Establecer con las centrales de inteligencia del ejército y DAS si las víctimas de las desapariciones forzadas presentan antecedentes o vínculos con grupos subversivos 15) Obtener pruebas que informan sobre las heridas sufridas por el capitán GONZALEZ. . Folios 128 – 142 Cuaderno No. 3 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

[376] Se elabora una toma sectorizada de la vereda La Esperanza y el sector donde se encontraba localizada la base la piñuela, donde operaba la FTA. Establece que la FTA se creó mediante directiva 0061 de 1994 emanada del comando del Ejército. Respecto a las razones que llevaron a la creación de la FTA se alude a que surgió para combatir la situación delincuencial que se presenta en la Autopista Medellín Bogotá. No fue posible determinar en la inspección judicial en los archivos de la IV Brigada la fecha hasta la cual tuvo vigencia la FTA. Sin embargo se estableció que esta se encontraba conformada por una compañía de contraguerrillas de soldados voluntarios del batallón Héroes de Barbacoas con indicativo Honduras y una compañía de soldados regulares del batallón de infantería No 3 Bárbula con indicativo Coyote, con puesto de mando en la base militar la piñuela, con un pelotón del Batallón Pedro Nel Ospina con indicativo Bujia y un puesto de mando alterno en la base militar de San Luis, con un pelotón del Batallón Bárbula con indicativo Tigre. Según la información recaudada en esta inspección se determinó que dichos batallones pertenecían a las brigadas IV y XIV con sede en Antioquia. Obra en el informe concepto sobre las exhumaciones de 22 cadáveres realizadas por funcionarios de la Procuraduría en el cementerio de Cocorná que en oficio 0029-1 emitido por estos se anexa el acta de las exhumaciones donde consta que ninguno de los cuerpos ha podido ser identificado. Anota el informe que teniendo en cuenta la fecha en la que se realizó la exhumación (26 de julio) y los datos suministrados en las actas de la inhumación con fecha de mayo 20 y 21 de 1992, agosto 3 de 1995, noviembre 11 de 1993 y febrero 12 de 1994. Se descarta la posibilidad de que correspondan a las personas desaparecidas objeto de la diligencia. Indican la no existencia de proceso alguno con causa del secuestro de ALBERTO RAMIREZ. En inspección judicial indagando por la muerte del menor ANDRES FELIPE HERNANDEZ GARCIA ocurrida el 7 de agosto de 1996 se halló en el SIGA el radicado No 21180 expediente remitido a la dirección regional de fiscalías de Medellín. Respecto a los secuestros de los señores LEONIDAS CARDONA GIRALDO y ANDRES ANTONIO GALLEGO CASTAÑO se halló que cursaba proceso en No. 22.317 en la Fiscalía regional delegada No. 54 ante el GAULA. Al indagar por la existencia del grupo denominado "TOM ROGER" hacen referencia al radicado 27.415 en donde aparecen vinculados un gran número de miembros tanto del ejército como la policía, junto a presuntos miembros de grupos de limpieza social, sin lograr determinar si pertenecían o no a tal grupo u otro diferente. Se destaca aquí la referencia a la existencia de un informe de la oficina de investigaciones especiales de la Procuraduría General de la Nación donde aporta nombres del personal de fuerzas armadas vinculadas a organizaciones delictivas que operan en el nororiente antioqueño, con su centro de operaciones en la Ceja y Rionegro con cobertura de los municipios del Carmen de Viboral, Santuario y Cocorná. No existen referencias a la identificación de "la mona" como MARTHA CECILIA VELEZ IRAL. Refiere la ubicación del soldado ARANGO ARLEY DE JESUS en el batallón patriotas, Honda Tolima. En cuanto a la ubicación de los soldados voluntarios que pertenecieran a la FTA en especial los soldados MEJIA JIMENEZ WILLIAM, AGUDELO MARIN WILLIAM ,y

Casi un año más tarde, el 3 de septiembre de 1999, la Fiscalía dispone la práctica de otras pruebas[377] y ordena la ruptura de la unidad procesal respecto de las desapariciones forzadas de los señores Julio Cesar Morales y Giovanny Morales Cardona remitiendo en consecuencia las diligencias a la Fiscalías delegada ante los jueces penales de circuito especializados de Medellín[378].

El 2 de mayo de 2000, la Fiscalía abre la instrucción ordena la vinculación mediante diligencia de indagatoria del jefe paramilitar del Magdalena Medio, Ramón María Isaza Arango, y del Mayor del Ejército Carlos Alberto Guzmán Lombana y la práctica de pruebas[379]. Se presentó la demanda de constitución de parte civil en representación de los familiares de Hernando de Jesús Castaño Castaño, la cual fue admitida el 15 de agosto de 2000[380]. El 6 de septiembre de 2000, la Fiscalía declara persona ausente al procesado Ramón María Isaza Arango[381].

El 8 de noviembre de 2000 se reasigna nuevamente la investigación a otra Fiscalía de la UNDH – DIH quien avoca conocimiento y ordena la práctica de otras pruebas[382].

---

VALDEZ MORALES WILLIAM. No se relaciona información. En inspección judicial dan traslado de lo pertinente a la investigación relacionado al proceso radicado No. 22317 que se sigue por el secuestro de los señores LEONIDAS CARDONA GIRALDO y ANDRES ANTONIO GALLEGO CASTAÑO. Folios 157 – 169 Cuaderno No. 3 radicado 233 UNDH – DIH ANEXO 2 del ESAP.

377 Recolectar las hojas de vida del General ALFONSO MANOSALVA FLOREZ, de los Mayores del ejército HUGO ALFONSO DEL MILAGRO ABONDANO, JAIRO HURTADO OLAYA, CARLOS ALBERTO GUZMAN LOMBANA, del sargento Segundo PARRA MARTINEZ PEDRO, de los Cabos Segundos VARON DIEGO FERNANDO, PINZON GALLEG JUAN CARLOS, BARRERO MARTINEZ RUZ, del Capitán ALBERTO LUS MANCILLA SILVA. 2) Con base en esta prueba practicar inspección judicial en la Registraduría, a fin de obtener tarjetas decadactilares. 3) Inspección judicial a la Primera División del ejército para solicitar la información acerca de la Operación Emperador. Folios 33 – 35 Cuaderno No. 5 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

378 Oficio 4148 UNDH – DIH del 10 de septiembre de 1999. Folios 48 Cuaderno No. 5 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

379 1) Dar con la ubicación del señor ARLEY DE JESUS ARANGO. 2) Remitir copias a la fiscalía seccional del Municipio de El Santuario del proceso que allí se cursa por el homicidio de JAVIER DE JESUS ARROYAVE CASTAÑO. 3) Requerir personal del Batallón Pedro Nel Ospina del ejército que se encontraban en la base La Piñuela durante los meses de junio y julio. Folios 141 – 149 Cuaderno No. 5 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

380 Folios 222 – 237 Cuaderno No. 5 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

381 Folios 257 – 258 Cuaderno No. 5 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

382 1) Inspección judicial a los batallones del ejército Pedro Nel Ospina, No 42 Héroes de Barbacoas, Granaderos, Juan del Corral, Bárbula, Rafael Reyes, Bombona, Calibio, y No 14 Palaguas. 2) Establecer que personal hizo parte del operativo realizado en la vereda La Esperanza del 26 de junio de 1996. 3) Recaudar los nombres de oficiales, suboficiales y soldados que hicieron parte de la FTA en los meses de mayo junio y julio de 1996. 4) Establecer si los batallones Juan del Corral , Granaderos y No 42 Barbacoas participaron en operaciones conjuntas. 5) Recopilar los órdenes de batalla del EPL, ELN que existiera en los batallones relacionados en el proceso. 6) Recaudar INSITOP de los batallones RAFAEL REYES , BOMBONA, CG No 14 PALAGUAS, entre el 19 de junio y 15 de julio de 1996. BARBACOAS, BIOSPDEL 20 AL 30 DE JUNIODE 1996. 7) Establecer quien es Oscar Cárdenas Gutiérrez. 8) Establecer el nombre de los informantes. 9) Practicar inspección de topógrafo y planimetrista a los sitios donde sucedieron los hechos materia de investigación. 10) Librar misión de trabajo para: Establecer paradero de LUIS FERNANDO GUERRERO BURBANO Realizar entrevistas con miembros capturados o desmovilizados del EPL.. Establecer nombre completo del My ROJAS ESPINOSA y ubicación actual. Aportar tarjetas decadactilares de las víctimas de la desaparición forzada de la Vereda La Esperanza. Practicar diligencia judicial y obtener las hojas de vida de los Soldados voluntarios WILLIAM MEJIA JIMENEZ, WILLIAM AGUDELO MARIN y WILLIAM VALDES MORALES. Obtener historia clínica CARDENAS GONZALEZ CESAR. Practicar diligencia de inspección judicial al radicado No. 008 -010799-98 de la procuraduría delegada para los DH. Y elaborar un mapa donde conste la ubicación de las tropas del ejército para los meses de junio y julio. 11) Escuchar

El 16 de noviembre de 2000, se le recibió declaración en la Cárcel de máxima seguridad de la ciudad de Medellín al soldado Ferney Alberto Cardona Acevedo[383]**.** El 28 del mismo mes le reciben declaración a Florinda De Jesús Gallego Hernández[384].

La Parte civil aporta el 4 de diciembre de 2000 a la investigación un video que contiene una entrevista al jefe paramilitar del Magdalena Medio Ramón Isaza Arango realizada por el Periodista Hollman Morris del noticiero de televisión AM PM[385].

El 13 de febrero de 2001 la Fiscalía recibió la indagatoria del Mayor del Ejército Carlos Alberto Guzmán Lombana, Comandante de la FTA en la época de ocurrencia de las desapariciones forzadas de la Vereda La Esperanza[386]. El 15 de febrero de 2001 se le recepciona declaración

---

en diligencia indagatoria a CARLOS ALBERTO GUZMAN LOMBANA. Folios 8 - 13 Cuaderno No. 6 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

383 Este soldado se había desempeñado como radio operador del batallón GRANADEROS de la IV Brigada del ejército al mando del Mayor JESUS MARIA CLAVIJO CLAVIJO y era como subalterno CARLOS MARIO ESCUDERO CANO. Señala que por no permitir la realización de ningún trabajo sucio por parte de la tropa del ejército lo separaron del grupo para que no se enterara de lo que estaba sucediendo. Indica que en cada lugar donde el batallón operaba demandaban al señor CLAVIJO por desapariciones y homicidios, relata una ocasión en la cual " el comandante del ejército GENERAL MORA RANGEL mando a llamar al soldado ESCUDERO al despacho en Santa Fe de Bogotá mediante un radiograma o telegrama militar y el soldado ESCUDERO cuando regreso de Bogotá me dijo personalmente que se había reunido con el general MORA y el mayor CLAVIJO hoy coronel detenido, que se reunió con ellos a hablar sobre las denuncias y quienes habían sido los denunciantes en contra del mayor CLAVIJO y le ofrecieron al señor ESCUDERO un viaje al exterior para que no dijera nada si en un futuro le llegaran a preguntar esas cosas…". Folios 59 – 60 Cuaderno No. 6 radicado 233 UNDH – DIH., ANEXO 2 del ESAP.

384 Relata en la diligencia como después de que se llevaron a IRENE a su esposo lo encerraron junto a otras personas en la casa de su padre, allí se encontraban: HERNANDO CASTAÑO, JUAN CARLOS y OCTAVIO, FLORINDA la esposa de OCTAVIO, a la esposa de ELADIO que se llama ERLINDA CASTAÑO junto con sus hijos, a JHON FREDY CASTAÑO el hijo de su esposo, ELISEO GALLEGO su padre , y a MARIA ENGRACIA HERNANDEZ su madre. Relata que ellos vieron por los huecos de la casa cuando desvistieron a IRENE de su ropa de civil y le pusieron ropa del ejército, junto a un bolso camuflado. Menciona haber dado las placas que tenía anotadas de los vehículos que participaron en las desapariciones a la defensoría del pueblo. Y se le solicita en la diligencia la ubicación de algunos puntos sobre un mapa: casas de ELISEO GALLEGO , OCTAVIO GALLEGO, AURORA GALLEGO,JAIME MEJIA, ANIBAL DE JESUS CASTAÑO,DIOSELINA QUINTERO , la tienda la Cadavid , el estanquillo, la capilla, la casa de dónde sacaron a FREDY N. Y procede la señora FLORINDA a realizar una descripción de las personas involucradas en los hechos. Folios 168 – 176 Cuaderno No. 6 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

385 Folios 228 Cuaderno No. 6 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

386 Brinda su Versión de los hechos y dice recordar su fecha de salida de la FTA el día 27 de junio de 1996, dice haber obtenido esta información de los archivos del batallón Bárbula que el mismo consultó en el año 2000, guiado por la minuta de guardia en la que se cita la salida del batallón en un vehículo con el conductor de apellido AGUDELO. Indica que "Cuando sucedió el hecho del 26 a las 2 de la mañana, se desenvolvieron los hechos en el sentido de encontrar esta niña, el 27 yo ya le entregue la fuerza de Tarea a él y viaje al batallón". Informa que "cuando yo estaba de comandante el mando de operación lo tenía la cuarta brigada, cuando había intercambio de información lo hacían de comando a comando o sea de brigada a brigada, con el BIOSP, lo hacía a través del My ABONDANO. Señala que nunca durante el tiempo que estuvo allí (la piñuela) recibió informantes de nadie ni que los hayan mandado de ningún batallón, solamente hizo referencia a los señores que me llegaron un día los secuestrados que afianzaron en mi la confianza para realizar la operación del día 25 de junio en la noche…" Y la otra es de un soldado del mismo batallón 42 que se infiltro en un grupo de subversivos…" Añade por último que "a mis operaciones realizadas nunca reitero nunca lleve un informante para que me dirigiera una patrulla o me llevara al sitio donde se encontrara el grupo que fuésemos a combatir "Aduce las razones por las que supuestamente nunca llevaron un informante destaca esta ""primero por seguridad de la persona, segundo por cautela ya que en este sector de los campesinos que viven por estos sitios hay varios familiares que integran esta cuadrilla de la Carlos Alirio Buitrago. Y afirma que "en el operativo del 25 y 26 de junio solamente participo la Fuerza de tarea águila, solamente mis hombres estuvieron ahí bajo el mando del capitán CARDENAS, el comando ese operativo hasta que

bajo la gravedad del juramento al Coronel Luis Fernando Rojas Espinoza**,** quien para la época de los hechos era Mayor del ejército adscrito a la Brigada 14º y había sido designado Comandante de la FTA en reemplazo del Mayor Guzmán Lombana para los meses de julio o agosto de 1996[387]. El 16 de febrero de 2001 se toma declaración al soldado Luis Fernando Guerrero Burbano[388], quien había denunciado los nexos de la Fuerza Pública con el jefe paramilitar Ramón Isaza Arango, ante la Oficina de investigaciones especiales de la Procuraduría General de la Nación los días 16 y 17 de noviembre de 1995[389]. El 19 de febrero de ese año se le recepcionó declaración al Mayor Cesar Augusto Cárdenas González, quien era Capitán en la FTA en los tiempos de ocurrencia de las desapariciones forzadas de la Vereda La Esperanza[390]. Y se continuó el 20 de febrero con la diligencia de indagatoria de

---

lo hirieron, ellos salieron de la base la piñuela y yo tuve contacto permanente por radio con ellos, a ese grupo fue al que se le entrego voluntariamente IRENE. Folios 12 – 24 Cuaderno No. 8 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

387 Informa frente al periodo en el cual recibió el mando de la FTA que "la entrega del mayor GUZMAN hacia mí fue como en julio o agosto de 1996,(…) lo que si estoy seguro es que fue después del 20 de julio que yo recibí la fuerza de tarea antes del 20 de julo yo estuve en el batallón Bárbula porque yo estuve entrenando los soldados". A la pregunta ¿Quién ejercía como oficial S3 en junio y julio del 96'. responde: Mi mayor GUZMAN que era al tiempo comandante de la FTA y yo como agregado maneje la parte de instrucción y entrenamiento, posiblemente las operaciones realizadas las ejecutaban el comandante del batallón y mi mayor GUZMAN. Folios 124 – 129 Cuaderno No. 8 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

388 Al preguntársela por su trayecto militar señala: en junio de 1995 se fundó el batallón No. 42 Héroes de Barbacoas, relata que le asignaron la vía hasta más arriba de la piñuela. Indica "lo que se es el que el mayor Abondano y mi mayor Hernández ellos mandaban a desplegar las tropas para que hicieran incursiones, tenían comunicación directa y personal entre ellos en el batallón y la base. Anota que los informes de inteligencia eran manejados por los comandantes, o sea el mayor Abondano y el mayor Hernandez. Ratifica la versión de Alias Bladimir según la cual siempre que se desarrollan operaciones de grupos paramilitares debe coordinarse con los comandantes de las fuerzas militares de las zonas en donde pretenden operar. Menciona amenazas recibidas por parte del mayor Abondano. Folios 258 – 263 Cuaderno No. 8 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

389 En el momento de la denuncia era integrante del batallón No 42 Héroes De Barbacoas. Prestó servicios en la base militar La Piñuela con jurisdicción de Puente Caldera hasta la entrada de Cocorná, y fue comandante del pelotón de la compañía Ecuador. A la pregunta si en la zona en la que el operaba había presencia de paramilitares, RESPONDE:" yo una vez no más los vi, yo no tuve enfrentamiento porque ellos hablaban ahí con mi Mayor HERNANDEZ, a la Piñuela. Cuando le preguntan si conoce o a oído hablar de RAMON ISAZA asevera haberle conocido la noche que los paramilitares se dirigían a la base de La piñuela esa noche iban en tres carros una Trooper negra o azul ( probablemente azul oscura) un automóvil Mazda y un campero Suzuki. Afirma no haber visto nunca al capitán VERA reunirse con paramilitares pero afirma haber escuchado de los rumores entre los soldados según los cuales incluso se reunían en un estadero debajo de la base, indica que en muchas ocasiones se les dio la orden de "recogerse" es decir que iban los paramilitares a hacer trabajos, al día siguiente –comenta-, se enteraba que los paramilitares habían transportado gente en los baúles de los carros y que los habían tirado al río Samaná. Estos hechos ocurrieron de mayo a diciembre de 1994 luego el sargento fue trasladado a la entrada del municipio de Cocorná. En el mes de marzo el mayor HERNANDEZ hizo entrega del puesto de la piñuela al mayor ABONDANO quien dio la orden al teniente BLANDON que hiciera el contacto con los paramilitares para hacer operaciones de inteligencia, indica que desde la fecha andaba el teniente BLANDON con un paramilitar del cual no recuerda bien si le llamaban ELKIN o FREDDY. En el relato narra los asesinatos de soldados que conocían información cometidos por parte del capitán VERA en el año 1993. Hizo referencia a un grupo especial de soldados que tenía el capitán VERA a órdenes del coronel BAUTISTA "eran más o menos 6 los mandaba a operar de civil, le ponía carros y los mandaba a Barbosa, y a la Piñuela,(…) fue en Barbosa donde me di cuenta de ese grupo especial". Folios 295 - 301 Cuaderno No. 3 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

390 Informa haber estado adscrito a la FTA en 1996 como agregado del BCG N 42 Barbacoas. Narra los hechos del 26 de junio de 1996 donde dice que resulto herido "…se inició la operación y a la altura, recuerdo que habíamos ascendido bastante un cerro y llegamos a una casa y fue donde me dieron , a mí me dispararon de la casa , yo caí herido , yo salí caminando, a raíz de que el brazo estaba colgando lo guarde en el bolsillo y el abdomen también lo tenía mal y salí caminando hasta que llegue a la autopista Medellín Bogotá, ese día estaba lloviendo(…)" indica haber sido herido con munición 762 y de allí haberse dirigido al hospital de Santuario. Señala además no

Guzmán Lombana[391], que había sido suspendida. La defensa del señor Carlos Alberto Guzmán Lombana presenta el día 26 de febrero de 2001 un escrito donde anexa en fotocopias varios documentos para la investigación y solicita la práctica de pruebas[392].

Mediante resolución del 26 de julio de 2002, la Fiscalía accede a la práctica de las pruebas solicitadas por la Defensa[393].

El 31 de enero de 2003 se le recebe nuevamente declaración bajo la gravedad del juramento al Coronel Luis Fernando Rojas Espinosa[394].

El 30 de abril de 2003 la UNDH – DIH resuelve la situación jurídica de las personas que habían sido vinculadas como autores o participes de las desapariciones forzadas de la Vereda La

---

acostumbrar a utilizar guías en los operativos, cuando llego a la autopista cogió nuevos hombres-según indica-eran soldados profesionales del batallón de contraguerrillas No. 42. Respecto a los informantes dice: a mí no se me presentaron informantes en esa época para trabajar o servir de guía. Todas operaciones se hicieron con personal del ejército y siempre se trabajó con el mismo personal. Su recuperación duro un año, parte en el hospital militar y parte en su casa. Folios 181 – 186 Cuaderno No. 8 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

391 En ella afirma que no haber sabido quienes de las personas habitantes de la zona eran miembros simpatizantes o auxiliadores de grupos guerrilleros. Al preguntársele que hizo con IRENE GALLEGO los tres o dos días que estuvieron en compañía de ella . RESPONDE: "en horas de la tarde tipo 4 o 5 ella quedo con la tropa , y paso ese día al día siguiente el 27 en la noche llegaron ellos las patrullas y el 28 en la mañana y yo la entregue tipo 2 o 3 PM. Apunta más adelante "yo no iba o no permitía ese momento (SIC) que bajara poco personal a traer a esa niña por que estaría exponiendo a los que venían con ella como a los que se quedaban y en ningún momento yo iba a dividir la tropa en el área. Indica frente al caso del 28 de junio, la entrega de IRENE GALLEGO, fue el único caso que cuando yo estuve en la autopista yo maneje personalmente, lo hice personalmente porque fue el único caso que se me presento. Relaciona nuevamente hallazgo de un campamento durante la operación en la que resulto herido el capitán CARDENAS. Indica en "…yo tenía más otras informaciones de los comandantes más lo que se presentó en esos días y la confirmación de que al sector donde se tenía dirigida la operación por dos señores que fueron llevados por el comandante de la brigada 14 CORONEL VARGAS , quienes fueron secuestrados," Sostiene que " al salir yo el día 27 de junio de 1996 para el batallón Bárbula porque me citaron allá el mayor quedo encargado (…)el 28 ya cuando se encontraban las tropas que estaban en la operación, el comando del batallón me envió a entregar a esta niña IRENE. Indica haber compartido información de inteligencia con el My ABONDANO. Indica haber conocido al teniente BLANDON , como orgánico del batallón BARBULA y haber trabajado con el en la autopista desde noviembre 26 del 94 hasta mediados de junio del 95. Reitera frente a las contradicciones con la versión del My ABONDANO que el era el comandante de la operación y alega que el 21 y 22 de junio no estaban en operaciones en el sector de La Esperanza. Folios 187 – 200 Cuaderno No. 8 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

392 Hace entrega de 1) un manuscrito donde consta que el My. Guzmán Lombana hace entrega del puesto de mando de la FTA al My. ROJAS ESPINOSA. 2) Fotocopia de las páginas 116 y 117 del libro de control de vehículos militares del batallón Bárbula del ejército, donde aparece que el día 28 de junio de 1996 salía del batallón. Copia de un radiograma 24 de junio de 1996. 3) Copia radiograma número 30 con fecha 24 de junio de 1996 donde el comandante del Bárbula informa del hallazgo de un vehículo abandonado en la vía en la quebrada la Cadavid y presume que corresponde al secuestro de un civil con base en información anterior y con base en esta se organiza la orden de operaciones RAYO, desde el 25 de junio de 1996. Folios 271 – 276 Cuaderno No. 8 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

393 Recepcionar las declaraciones de CARLOS SUAREZ BUSTAMANTE, JAIRO LEGUIZAMON, CARLOS MARIO JARAMILLO VARGAS y JOSE LUIS AGUDELO JAIMES. Folios 116. Cuaderno No. 9 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

394 Después de conversar mientras se encontraba desempeñando el cargo de ayudante en el comando del ejército con el mayor GUZMAN LOMBANA que se encontraba en la misma dependencia, dice haber recibido de este unos documentos en donde constaba que la fecha de entrega de la FTA fue en junio. Indica que cuando la FTA se cancelaba se encontraba el mayor GUZMAN LOMBANA al mando de la parte operacional. Añade al final de la declaración "si hay algún documento escrito y firmado por mi donde recibo la fuerza de tarea águila, no tuve ni mando ni control sobre ella por que se dio la circunstancia de que para esa misma época la Fuerza de Tarea dejo de existir…" Folios 207 – 220. Cuaderno No. 9 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

Esperanza. En la resolución resuelve abstenerse de imponer medida de aseguramiento en favor del mayor Carlos Alberto Guzmán Lombana, no acceder a la solicitud de preclusión de la investigación solicitada por la defensa de éste; imponer medida de aseguramiento a Ramón María Isaza Arango, reiterar orden de captura en su contra[395].

El 19 de abril de 2004 se ordena la práctica de las pruebas solicitadas por la Parte Civil[396] y niega la solicitud de la defensa de Guzman Lombana de cerrar la investigación.

Del 8 al 12 de noviembre de 2004, la Fiscalía recabó los testimonios de Diosdado Quintero Giraldo[397], Héctor Manuel González Ramírez[398], Jhon Fredy Castaño Gallego[399], María Dioselina Quintero[400], Aurora Gallego Hernández[401], María Oveida Gallego Castaño[402], María Rocío Cardona Fernández[403] Y María Engracia Hernández De Gallego[404].

---

395 Folios 251 - 302 Cuaderno No. 9 radicado 233 UNDH – DIH Anterior a esta orden, el 15 de diciembre de 1994 el director del DAS de Antioquia, solicita orden de captura contra Ramón Isaza Folios 257 y 258. Cuaderno No. 3 radicado 233 UNDH – DIH. El 15 de enero de 1998, el Fiscal regional delegado de Medeín, solicita orden de captura contra Ramón Isaza. Folios 292-294. Cuaderno No. 3 radicado 233 UNDH – DIH El 13 de agosto de 1998, la Fiscalía regional delegada, define la situación jurídica del implicado, y resuelve imponer medida de aseguramiento de detención preventiva. Folios 135-148. Cuaderno No. 4 radicado 233 UNDH – DIH . La UND-DIH expide orden de captura número 093 contra Isaza, el 9 de mayo de 2000. Folios 156-157. Cuaderno No. 5 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

396 1) Indagar en la fiscalía del Carmen de Viboral si se adelanta investigación penal por la muerte de ALIRIO DE JESUS GALLEGO HERNANDEZ y el homicidio de GERARDO GALLEGO. 2) Llamar a declarar a HECTOR MANUEL GONZALEZ, JHON FREDY CASTAÑO, AURORA GALLEGO, ERNILDA QUINTERO , PEDRO PABLO MUÑOZ , MIGUEL ALPIDIO , DIOSELINA QUINTERO. 3) Ubicar familiares de JAIME ALONSO MEJIA QUINTERO. 5) Localizar a DIEGO MUÑOZ. 6) Practicar diligencia de inspección judicial al proceso N 008-10799 98 adelantado por la procuraduría delegada disciplinaria para los derechos humanos. Folios 41 – 45 Cuaderno No. 10 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

397 Es un testigo de referencia de los hechos, comenta que llego a saber de IRENE GALLEGO que “fue desaparecida, después de que hubo unos combates entre la guerrilla y el ejército y cuando venían de regreso se la encontraron las autodefensas y se la llevaron. a Irene se la llevaron hacia la autopista la subieron a una camioneta y no se volvió a saber nada Folios 64 – 70 Cuaderno No. 10 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

398 Indica que las tropas permanecían, una en la entrada de Cocorná y otro en la Chaguana después de la entrada a Cocorná sobre la autopista. Aclara que al señor Octavio Gallego se lo llevaron de la casa de él. Indica “ al señor OCTAVIO GALLEGO HERNANDEZ se lo llevaron dos señores vestidos de civiles armados y se lo llevaron a la fuerza , tenían armas de largo y corto alcance no sé si metras o fusiles, eran de de esas que carga el ejército, los volví a ver a los tres días después de que desaparecieron a OCTAVIO , los vi en “el estanco” , los cuales estaban vestidos de ejército, o sea con camuflados , tenían insignias como el ejército , y ellos estaban ahí parados con toda la tropa, más o menos unos 15 “Folios 76 – 80 Cuaderno No. 10 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

399 A la pregunta que actividades realizaron los miembros de ejército mientras se encontraban en la casa de habitación de su abuelo José Eliseo Gallego Quintero “…ellos llegaron como a la una de la mañana y se fueron como a las 3 de la tarde del día siguiente, es decir amanecieron y a las 3 de la tarde aproximadamente se fueron”. Folios 81 - 85 Cuaderno No. 10 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

400 “Una semana antes de la desaparición de sus hijos MIGUEL ANCIZAR y JUAN CRISOSTOMO CARDONA QUIENTERO “…estuvieron en mi casa los soldados y les daban comida a los niños y después que se retiraron los soldados fue que vinieron ya por ellos” “Pero los soldados no se retiraban del todo los soldados estaban por el lado de donde don PASTOR por la entrada a Cocorná y eso me lo dijo ELVIA HERNANDEZ.” Al ingresar a su vivienda los hombres armados le preguntan “donde tenían las armas, donde tenía las armas el tío”. Folios 99 -102 Cuaderno No. 10 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

401 Manifiesta que OCTAVIO había recibido amenazas del ejército nacional por vivir en las partes altas, “y las amenazas era que cuando atacaron la casa de mi papa JOSE ELISEO GALLEGO, (…) que para hacer una barrida cuando menos lo pensaran y se cumplió la barrida”. Menciona alrededor de los hechos donde murió JAVIER GIRALDO que el señor CARLOS ESTRADA se dio cuenta de quién era la persona que se había llevado la moto de

El 29 de marzo de 2005 la Fiscalía decreta la práctica de otras pruebas[405] y niega la solicitud de cierre de la investigación formulada por el abogado defensor de Carlos Alberto Guzman Lombana quien se encontraba vinculado al proceso penal. Se reciben los testimonios de Pablo Antonio Quintero[406], Berto De Jesús Soto Quintero[407], Pedro Pablo Muñoz[408] los días 5 y 6 de abril de 2005.

---

JAVIER el día de su homicidio por que era el amante de una señora de nombre ALBA a quien mataron luego, "el – refiriéndose a Carlos Estrada- se dio cuenta que era soldado porque lo mantenían viendo en la autopista". Folios 104 -106 Cuaderno No. 10 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

[402] Informa que a las 8 y 20 de noche llegaron personas armadas a la tienda de Aníbal, su cónyuge, donde se encontraba OSCAR HEMEL. Al preguntársele sobre FREDY y sus actividades indica "el llego a la vereda tres meses antes del 21 de junio de 1996,"(-…)" que yo le viera un trabajo en especial no, no sembraba. Él se llevaba muy bien con los hijos de DIOSELINA que se llevaron también" Al preguntarle sobre la presencia del ejército en la zona refiere" por ahí si había ejército, por el lado del rio Cocorná por ahí por la hundida en ese espacio. Antes de que desaparecieran a ANIBAL pasaban los del ejército normal por la tienda. Cuando se le pregunta si usted volvió a ver las personas que observó que participaron en los hechos indica: "yo volvi a ver las camionetas, (…) ellos subían bajaban , se veían muy seguido y ellos se comunicaban con el ejército". A la entrada de Cocorná había un puesto de control y las camionetas siempre llegaban allí. Folios 107 -112 Cuaderno No. 10 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

[403] Hace referencia a dichos de los hombres armados que el 27 de diciembre de 1996 se llevaron a su cónyuge LEONIDAS CARDONA y dijo "que en la piñuela arreglamos el caso" y "ahí en la piñuela el comandante resuelve el caso" Le dijeron a Leonidas "este cabrón que está viviendo aquí por que no va a saber de la guerrilla y los soldados que yo vi ese día estaban vestidos de civil, y le dijeron para comprobar le vamos a mostrar dos pintas de esta vereda, cuando entraron con un muchacho llamado FREDY " Añade más adelante respecto a las personas que irrumpieron en su casa " de esas caras que yo conocí habían tres que yo había visto vestidos de soldados"(…) "los había visto hacia como 15 días patrullando seguido y los veía seguido" Y agrega que las personas que ingresaron a la casa preguntaron por DIEGO y EFRAIN manifiesta la testigo que "en esos momentos ellos estaban en la cárcel, ellos eran unos muchachos conocidos de la zona y uno de ellos era EFRAIN era hijo del señor ANDRES, este último también fue desaparecido. Agrega que "a esa hora en que esos sujetos entraron y se llevaron a LEONIDAS la autopista quedo paralizada, es decir no paso ningún carro y por ahí a los tres minutos de haber arrancado con LEONIDAS y con ANDRES GALLEGO fue que paso el ejército en volquetas, y me di cuenta de esto por que me fui a contarle a mi suegra y cuando vi fue dos volquetadas de ejército". Folios 113 -116 Cuaderno No. 10 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

[404] En su testimonio señala: "cuando vino un soldado y llamo al comandante que estaba parado al lado de un cementado grande y el soldado dijo venga mi comandante quien estaba conversando con otros soldados, " sobre el comandante indica, "el comandante tenía un vestido color crema, no tenía vestido como los otros, pero el resto si estaban de camuflados". Posteriormente menciona:" arrimo uno de ellos y saco unas fotos," y en las fotos vi las fotografías de mi hijo OCTAVIO, la nuera MARIA FLORINDA y las niñas, y dije ellas no son guerrilleras, y habían otras fotos de personas de la misma vereda que no me acuerdo quienes eran y yo les dije al soldado que no eran guerrilleros. Folios 117 -122 Cuaderno No. 10 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

[405] 1) Testimoniales a EDILMA GOMEZ, OLIMPO GIL GOMEZ, ROMELIA MARULANDA, CARLOS MUÑOZ, BLANCA ESTELA LOPEZ, ELADIO GALLEGO, CARLOS ARTURO ESTRADA, ANTONIO MEJIA, PEDRO PABLO MUÑOZ y NORBERTO SOTO QUINTERO. 2) Indagar en CTI, DAS, DIJIN por información referida a grupos paramilitares del Magdalena Medio. En especial por alias MAGIVER. 3) Establecer si para el año 1996 laboro un agente de policía de apellido VIAÑE (SIC) en el municipio de Cocorná. 4) Tomar declaración de FERNEY ALBERTO CARDONA. Folios 185 -186 Cuaderno No. 10 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

[406] Informa sobre los hechos alrededor de la desaparición de JUAN CARLOS GALLEGO y el homicidio de JAVIER GIRALDO. Dice que la camioneta que se llevó a JUAN CARLOS tomo rumbo sobre la Medellín-BOGOTA hacia Bogotá y luego subieron otras dos camionetas "como a la media hora" indica "y también vi esto y también cogieron al señor JAVIER a él le quebraron un pie allá arriba, cuando cogieron a JAIME MEJIA lo cogieron a empujones. Folios 190 -191 Cuaderno No. 10 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

[407] Folios 200-201, Cuaderno No. 10 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

[408] Dice que a IRENE la capturó el ejército en la mañana en su vivienda a donde había llegado con su hermano ARGIRO, su esposa y sus hijos. Comenta que sobre Irene se decía que era guerrillera. Él no la llegó a ver pero eso era lo que se decía. Da a entender que IRENE según cuentan le informó al ejército de un campamento de

El 22 de mayo de 2005, se anexa a la investigación un informe del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía que cumplía una misión de trabajo ordenada por la Fiscalía[409].

El 13 de febrero de 2006 la Fiscalía suspendió la orden de captura que existía en contra del paramilitar Ramón María Isaza Arango[410], atendiendo su calidad de representante de las Autodefensas Unidas de Colombia[411] (en adelante AUC), que se encontraban en un proceso de negociación con el Gobierno de Colombia. También dispuso citar a diligencia de indagatoria a Ramón Isaza Arango, quien se había desmovilizado el 7 de febrero de 2006[412]. El abogado defensor del desmovilizado paramilitar le solicita a la Fiscalía realizar la declaración en el corregimiento Las Mercedes del Municipio de Puerto Triunfo, lugar de domicilio del procesado[413].

Por otro lado, la Parte Civil insiste en que la diligencia de indagatoria de Ramón Isaza se lleve a cabo en la sede de la Fiscalía de la UNDH – DIH en la ciudad de Bogotá, que adelante la investigación y que el gobierno adopte las medidas de seguridad para su traslado. Igualmente, que se cite para la práctica de dicha diligencia.

El día 7 de abril de 2006 mediante Resolución de la Fiscalía se dispuso la realización de la indagatoria en el municipio de Puerto Triunfo en la sede de la Fiscalía[414].

---

la guerrilla. Menciona también que "en la casa de OCTAVIO si me toco ver siempre guerrilleros, pero uno no podía decir nada, ahí se la pasaban, ya a OCTAVIO después lo sapiaron y también desaparecieron, en cambio JUAN CARLOS nunca estuvo con guerrilleros, los días que se perdía era en el Carmen con lo de la salud y cuando venía para acá era a recoger café, era un muchacho que no se metía con los guerrilleros...." Folios 192 -199 Cuaderno No. 10 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

409 informe FGN-CTI-UNDH Y DIH No. 228113 donde dan cuenta de las diligencias de investigación ordenada en el despacho comisorio se destaca: 1) Solicitaron a las autoridades de policía e investigación mediante oficios Nros. 225872, 225873, 225875, y 225877 la información sobre grupos paramilitares. 2) La fiscalía de Santuario confirmó que no adelanta investigación en contra de MaGiver. 3) Oficiaron a la Fiscalía de Puerto Triunfo averiguando por investigaciones en contra de MaGiver. 4) En la Fiscalía especializada no encontraron investigaciones penales en contra del paramilitarismo en 1996. 5) El jefe de personal de la policía informa que nadie ha sido vinculado con el apellido VIAÑE. Finalmente se logró establecer que en los municipios del oriente trabajo como agente de la policía MANUEL ANTONIO VIAÑA MORENO c.c. No. 73.118.971 y le figura como domicilio Calle Real 24-03 barrio La Manga de Cartagena. 6) Se identificó a Magiver como hijo de Luis Zuluaga e Isabel Arcila de Zuluga, que es natural de San Francisco y es casado con una hija de RAMON ISAZA. Se anexan los datos de los hijos de la pareja citada obteniéndose los siguientes nombres: JOSE LUIS, MARCO AURELIO (muerto), OMAR DE JESUS, ORLANDO, LUIS EDUARDO, ALIRIO DE JESUS ZULUAGA ARCILA. El marcado con subrayas y negrillas es alias Magiver y es identificado con la c.c. No. 71.480.933. 7) Se anexo registro civil de nacimiento de OSCAR EMEL ZULUAGA MARULANDA Folios 214 - 238 Cuaderno No. 10 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

410 Folios 251, Cuaderno No. 10, radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

411 Resolución 172 de 2005 expedida por el Ministerio del Interior y de Justicia. Por medio de la cual se reconoce a una persona la calidad de miembro representante de las autodefensas unidas de Colombia AUC Folios 246 -248 Cuaderno No. 10 radicado 233 UNDH – DIH. Resolución 343 del 19 de diciembre de 2005 del Ministerio del Interior y de Justicia en al cual se relaciona personas a quienes se les prorroga la calidad de miembros representantes de las AUC y solicita suspender órdenes de captura. Folios 249 -250 Cuaderno No. 10 radicado 233 UNDH – DIH ANEXO 2 del ESAP.

412 Folios 251-252, Cuaderno No. 10, radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

413 Folios 259-258, Cuaderno No. 10, radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

414 Folio 261, Cuaderno No. 10, radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

Mediante diversos memoriales la defensa el procesado, Ramón María Isaza Arango solicitó el aplazamiento de la diligencia de indagatoria, unas por razones de salud[415] y otras hasta tanto no se conociera la decisión final sobre la constitucionalidad de la Ley 975 de 2005, que debía resolver la Corte Constitucional[416].

La Parte Civil alegó el día 11 de agosto de 2006 al expediente como prueba documental copia de la declaración de la señora Elvia Rosa Fernández Cardona[417] y solicitó el levantamiento de la reserva de identidad del testimonio rotulado con la clave VB-1 que fue rendido por una persona a quien se le quiso proteger su vida e integridad[418].

Un poco más de un año de haber sido citado Ramón María Isaza Arango para ser escuchado en indagatoria[419], el 23 de abril de 2007, se llevó a cabo dicha diligencia en la sede la UNDH -

---

415 Memoriales de abril 11, 24, 27 de 2006.

416 Memoriales de Mayo 23 y 30 de 2006.

417 La declaración fue tomada en un proceso contencioso administrativo seguido por la desaparición forzada de los menores JUAN CRISOSTOMO y MIGUEL ANCIZAR CARDONA QUINTERO y en ella declara sobre hechos ocurridos a ellos. Así como haber visto a IRENE GALLEGO el 15 de julio de 1996 en compañía de soldados. Al preguntársele por que recuerda con precisión el día en que vio a MARIA IRENE con los soldados, Responde"por que era un día de la virgen del Carmen y yo venía de Cocorná y me baje ahí. Folios 298 – 301 Cuaderno No. 10 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

418 Dicha declaración tomada el 14 de abril de 1998 está consagrada en el Folios 190 – 191. Cuaderno No. 2 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

419 En ella señala: Nació el 30 de septiembre de 1940 en Argelia Antioquia. . Relata lo referente al inicio del grupo paramilitar en 1977. Fueron a Puerto Berrio a la Brigada del Ejército. Hablaron con un Coronel y les dijo que "nos armáramos y nos defendiéramos porque tenía personal para meterse a combatir a la subversión en el área". Fueron también y hablaron con un comandante de brigada en Bogotá quien también nos dijo que nos armáramos y nos defendiéramos. En la base Militar de Guazimal (ahora es el batallón Bárbula) un capitán BOHORQUEZ nos vendió 8 escopetas calibre 12 con 500 cartuchos. Referencia la relación que tuvo en 1985 con las autodefensas en Puerto Boyacá a cargo de HENRY PEREZ y se unió con 15 ganaderos de la región para liberar a GONZALO PEREZ (padre) quien había sido secuestrado por la guerrilla. Ramón Isaza unió fuerzas con Henry Pérez y le entregó en mando de las autodefensas del Magdalena Medio. Con la muerte de Henry Pérez en 1989 quedó con el mando ARIEL OTERO. Después de la lucha contra el narcotraficante Pablo Escobar. Esa guerra empezó a principios de 1990 y termino con la muerte de Pablo. Ramón Isaza salió bien librado de la guerra contra Pablo y recuperó muchos fusiles, y armamento y metieron mucha gente de la región al grupo "y ya metimos gente del Tolima, Caldas, parte de Antioquia, san Luis, continuamos trabajando así hasta el 2000, en el 2000 yo ya no era capaz de manejar la gente que tenía, ya por enfermo por muchas novedades, entonces le entregué, dividí la región en áreas y le entregue a los muchachos en áreas. Le pregunta si operó en la autopista Medellín Bogotá en el municipio del Carmen de Viboral para los meses de junio – julio de 1996: "no me acuerdo la fecha ni el año porque no le paré muchas bolas a eso, eso fue en junio o julio de 1996 y un día cualquiera el hijo mío de nombre OMAR ISAZA apodado El teniente, el había pagado servicio militar y se hizo muy amigo quien sabe de cuantos militares en Medellín, un día cualquiera bajó y me dijo que había hablado con el General MANOSLVA no se el nombre de ese señor, ni lo conocí, en ese entonces todos los ganaderos y comerciantes se quejaban de esa autopista y habían secuestrados todos los días entonces los ganaderos y comerciantes hablaban con ese general MANOSALVA para que les pusiera ejército y les hiciera persecución a la guerrilla porque había secuestros y secuestros, era una autopista inandable….. debido a eso el TENIENTE o sea OMAR ISAZA cuando hablo con el General, él me contó que el General le había dado una lista de guerrilleros de esa autopista que vivían a la orilla de la autopista, hacían los secuestros, le entregaban a la guerrilla arriba volvían y bajaban y se quedaban viviendo en sus casas…..entonces OMAR o sea el TENIENTE baja una vez y me mostró la lista que yo no quise leer porque yo no meto en esa autopista porque en esa autopista no me meto en nada……. Yo al TENIENTE a OMAR lo aconsejé mucho, que no se metiera en la autopista, porque para pelear con la guerrilla nos metíamos a las montañas, conseguíamos los campamentos de ellos sin necesidad de exponernos en la autopista, más sin embargo él me contesto que había hecho un compromiso con el señor, con el general MANOSALVA y que iba a ver hasta donde lo cumplía y que para eso él tenía la lista que era de la inteligencia del ejército, OMAR andaba como con 8 muchachos y andaba con dos carros y él me pedía la bendición, papá écheme la bendición que me voy, después era que veía en la prensa que muertos que desaparecidos y OMAR

ISAZA trabajó por su cuenta la autopista, no sé y después fue que resultó lo de la Vereda La Esperanza, resultó afectada la Vereda La Esperanza, en los supuestos campesinos que hablaban de la vereda La Esperanza. Después que eso pasó allá en la Vereda La esperanza yo lo cité a una reunión con todos sus muchachos a OMAR al TENIENTE ya andaba cuando lo cité a esa reunión, ya andaba con un muchacho que le decían EL COSTEÑO… (la reunión fue después de la Misa que Monseñor (Flavio Calle) hizo en la Vereda La Esperanza). y empecé a preguntarles que había pasado por allá porque a mí no me había hecho ningún comentario ellos de lo que estaba sucediendo la contesta que me dio el TENIENTE era que todos eran colaboradores de los guerrilleros y otros guerrilleros netos refiriéndose a los desaparecidos que habían en la Vereda, le pregunté al COSTEÑO que él que era de allá y vivía allá en la Vereda la Esperanza y si sabían lo que estaban haciendo me contesto señor yo sé que lo que hemos hecho no está mal hecho, porque yo también era guerrillero igual que mí mujer….. que toda la gente que estaba desaparecida o muerta en la carretera según ellos, eran compañeros de él, que por eso los había entregado….que él se había vinculado a las autodefensas y que por lo tanto tenía que cumplir con su labor de matar, combatir y entregar a los guerrilleros…. que mientras yo supiera que eran todos pertenecientes a los antes mencionadas no se me disgustaban las cosas…. entonces ellos me contestaron que estaban trabajando con la información directa de el general MANOSALVA y que él les había dado la orden de que todos los que estaba en la lista la tumbaran, pero a mí me disgustó fue que los hubieran desaparecido, porque la orden que yo le tenía a todos los comandantes era que si era un guerrillero donde lo tumbaran lo dejaran…. que las dejaran tiradas donde las mataran para que les hicieran el levantamiento.” . Sobre los motivos del General MANOSALVA para entregar la lista de personas a OMAR dijo “… entiendo que había habido unas emboscadas en ese trayecto y no habían sido capaz de dar con las personas que estaban haciendo esas emboscadas, en esos días le habían metido una carga de dinamita a un camión del ejército dejando como saldo de muertos un capitán y 4 o 5 soldados, no recuerdo bien la cantidad de hombres muertos y me contaba OMAR que era un capitán de los que más quería el General, ellos le metieron ejército a eso hicieron unas búsquedas muy grandes intensivas, entonces fue cuando mandaron a inteligencia encontrando que todos los que estaban haciendo los daños en la autopista, vivían sobre la autopista, eso me lo contó OMAR que eran los mismos habitantes y en ese momento la gente que veían haciendo daño en ese lado era un grupo del EPL que habían venido de URABA y que se habían instalado en ese contorno y que MANOSALVA le dijo a OMAR que ellos eran los que hacían los que secuestraban y hacían los daños, entonces como ellos OMAR y los muchachos trabajaban con inteligencia del ejército y andaban la mayoría de las veces andaban siempre acompañados del ejército. Yo me preocupaba de que un momento a otro se le volteara la torta y me mataran los muchachos, o sea que el ejército se les voltiara a ellos y los matara, porque eso ha sucedido muchas veces. Otros militares con los que OMAR se relacionaba “Yo sé que él hablaba mucho con un MAYOR HERNANDEZ que manejaba la base de la Piñuela para la fecha en que ocurrió lo de la Vereda La Esperanza y el manejaba la Piñuela y él manejaba la Piñuela y manejaba desde Samaná hasta Rionegro era una fuerza de tarea que había en ese momento, la fuerza de tarea era de GRANADEROS y un batallón que había en Rionegro y en este momento no recuerdo el nombre” Tampoco recuerda el nombre del mayor porque dice que no lo conoció. Omar conoció al Mayor HERNANDEZ cuando prestó servicio militar pues era su comandante de Compañía. Al referirse al Mayor HERNANDEZ dice que “se voló de Sonson Argelia, de una carretera donde hay un cristo rey, eso hace ya bastante tiempo por ahí en el 98 y se fue para donde JORGE 40 para las autodefensas, hasta ahí supe yo del My Hernandez”. Sobre la detención de alias el COSTEÑO, su esposa: dijo: “Bajo mi conocimiento en compañía del Mayor HERNANDEZ cogieron al COSTEÑO y a la mujer, OMAR y los muchachos y el Mayor HERNANDEZ porque el Mayor HERNANDEZ había detectado que él era guerrillero, cogieron al COSTEÑO y a la señora no supe ni como se llamaba la señora, el Mayor HERNANDEZ lo entrego a OMAR ISAZA y ellos se los llevaron al COSTEÑO y a la esposa, yo tuve oportunidad de hablar con la señora , porque desde que se los llevaron el COSTEÑO y la señora dijeron a OMAR que no los fueran a matar que ellos sabían cómo estaba constituida la fuerza del EPL en esa región, o sea él era del EPL venido de Urabá, al otro día después de que se los llevaron a OMAR me recogió y me llevó a hablar con ellos, en donde contaron todo lo que había en la zona como estaba organizado todo quienes eran los que hacían los secuestros, todo y mostraron las casas y todo, ellos mostraban las casas y la gente que estaba vinculada en esa guerrilla (se puede inferir que Ramón Isaza estuvo en la Vereda viendo las casas y la gente). La mujer madre del menor según Ramón Isaza le insistió que la dejara ir a recoger el niño que había quedado abandona, lo convenció y ella se fue con un número de teléfono para llamar al Costeño. y a los dos días llamó y le pasó al COSTEÑO a uno de los comandantes del EPL quien le increpara que regresara a la guerrilla a cambio de no mataran a su esposa. (……..) El rescate del niño dijo “… ese día subieron hasta la casa que quedaba como a un kilómetro de lejos de la autopista, se lo llevaron para el Doradal, a ver, después de eso, fueron varias veces no recuerdo si dos veces, no recuerdo quien era el que iba, fueron de CARACOL, creo que de RCN no sé, y una vez que bajaron se entrevistaron conmigo y yo fui y los lleve donde estaba el niño, o sea que el COSTEÑO se lo entregó a una hija mía para que lo criara …. el niño no estaba secuestrado, que la guerrilla había matado a la mamá y que el papá le había entregado a MARIA DELFA ISAZA para que lo acabara de criar …. no sé si después le haría papeles el papá del niño a la hija mía…. yo le dije a la hija mía que hiciera un papeleo a una fiscalía pero no sé si lo hicieron o no lo hicieron para que no tuvieran problemas. Sobre la localización exacta del bebe hijo del COSTEÑO dijo: “que habían averiguado en varias partes y no se habían dado cuenta de nada. Y en la orilla de la autopista habían

DIH en la ciudad de Bogotá y no en el área donde durante más de 30 años dominó como Comandante de la estructura paramilitar denominada Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio. El 11 de abril de 2008 la Fiscalía de la UNDH – DIH ordena la práctica de pruebas[420].

El 15 de octubre de 2008, el sindicado Ramón María Isaza Arango participa en diligencia de ampliación de indagatoria[421] y la Parte Civil mediante escrito del 20 de noviembre de 2008, radicado el 26 del mismo mes y año, agrega al expediente pruebas documentales[422].

El 22 de abril de 2009, el Tribunal Superior de Justicia y Paz ordena a la Fiscalía de la UNDH – DIH que suspenda la investigación por las desapariciones forzadas de la Vereda La Esperanza con respecto al imputado Ramón María Isaza Arango que se encuentra Postulado a los beneficios jurídicos de la Ley 975 de 2005 en el marco del proceso de desmovilización paramilitar[423].

A través del oficio 322 del 27 de julio de 2009, la Fiscalía Delegada ante el Gaula Rural del Oriente Antiqueño solicitó a la Fiscalía de la UNDH – DIH que adelante la investigación por las desapariciones forzadas de la Vereda La Esperanza ocurridas entre el 21 de junio y el 9 de julio de 1996, así como también determinar si los hechos relativos a las desapariciones de LEONIDAS CARDONA Y ANDRES ANTONIO GALLEGO ocurridas el 27 de diciembre del

---

encontrado un muchacho que era del EPL , entonces se bajaron y le hecharon mano y él fue el que les contó donde estaba el pelado, y ese hace parte de los desaparecidos porque también lo hecharon al agua, o sea que ese día se llevaron el muchacho y el niño. Donde se encuentran las personas desaparecidas: el comentario que me hizo OMAR "… que la mayoría los habían hechado al río CALDERA, que es un río subiendo para entrar al área de Cocorná, los ultimaron y los hecharon a ese río Caldera y que otros los llevaron para el magdalena y los ultimaron y los hecharon en ese río del Magdalena…. también me dijo que a otros los habían hechado al río Samaná que queda abajito de San Luis, o sea que no quedó para rescatar nada Cuando los arrojaron a los ríos: yo creo que eso era de inmediato, porque era una carretera la autopista Medellín Bogotá custodiada por el ejército y quien se iba a quedar con 4 o 5 rtendidos. Yo creo que los mataron y los arrojaron al río de una vez. Sobre el ataque a la casa de Juan Carlos Gallego Hernández, pero le preguntan si sabe de qué el Costeño participara en acciones con el ejército CONTESTO Después de que Mayor HERNANDEZ lo entregó al COSTEÑO y a la mujer a OMAR, de ahí en adelante trabajaron unidos OMAR, el COSTEÑO y los muchachos de OMAR y el ejército ……. Todo el grupo de OMAR con el COSTEÑO trabajaron en conjunto no se con quienes ni con cuantos o con quien, pero trabajaron juntos con miembros del ejército es esos meses de las desapariciones y subieron hasta unos cerros altísimos donde había un campamento del EPL. En esos días también lo cierto es que, en esos días se inició la ruina del EPL y se entregaron como 60 y punta al ejército, no se a qué batallón, pero eso fue en el Carmen de Viboral. Después de la Misa que dio Monseñor Ramón Isaza lo llamó y se reunió con él en el corregimiento de DORADAL y estuvo con OMAR y el COSTEÑO. Folios 233 – 239 Cuaderno No. 11 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

[420] 1) La plena identificación de OMAR ISAZA. 2) Indagar en que batallones presto servicio el precitado quienes eran sus jefes inmediatos. 3) Averiguar identidad del mayor HERNADEZ 4) Averiguar en DAS SIJIN CTI, información referida a OMAR ISAZA. 5) Determinar quién era el obispo de Rionegro. 6) Averiguar en qué época prestó servicio un general del ejército de apellido MANOSALVA en el departamento de Antioquia durante el año 1996. 7) Anexar documentación sobre la entrega de personal del EPL en 1996 en la población del Carmen de Viboral . Folios 7 Cuaderno No. 12 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

[421] En esta versión afirma haber conocido la lista de personas a asesinar, en versión anterior niega haberla visto, aporta el número de personas en la lista: 78. Afirma que el nombre del costeño es ALFONSO GUISAO SUAREZ . Informa que alias el COSTEÑO llega al grupo de OMAR en razón de la entrega que le hace de este el comandante de la Piñuela. Folios 123 – 132 Cuaderno No. 12 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

[422] Oficio N 30 -2-000001514 del 14 de noviembre de 2008 del hospital San Juan de Dios del municipio de Santuario informando que el Capitán del Ejército CESAR CARDENAS GONZALEZ no fue internado en dicho centro hospitalario por hechos violentos ocurridos el 26 de junio de 1996. También se aporta copia del derecho de petición empleado para solicitar información. Folios 157 Cuaderno No. 12, radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

[423] Folios 206 – 207, Cuaderno No. 12, radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

mismo año en la Vereda, eran conexos con estos[424]. La petición de conexidad fue reiterada el 5 de noviembre de 2009 a fin de no duplicar esfuerzos investigativos[425]. La Parte Civil, mediante escrito del 05 de mayo de 2010, insiste en la conexidad pedida por la Fiscalía del Oriente[426].

El 22 de junio 2010 la UNDH – DIH dispuso devolver las diligencias al despacho originario y propuso conflicto negativo de competencias[427].

El 28 de abril de 2010, la parte civil reitera solicitud de levantamiento de reserva de testigo[428]. Y el 14 de julio de 2009 la UNDH – DIH de la Fiscalía accedió a dicha petición y ordenó otras pruebas[429]. El 17 de agosto, decretó recibió los testimonios de los familiares de las víctimas, quienes en diversas oportunidades ya había declarado en la investigación[430].

Luego de ser solicitada por el Tribunal Superior de Justicia y Paz[431], la Fiscalía de la UNDH – DIH suspendió la investigación con respecto al procesado Ramón María Isaza Arango por estar postulado al procedimiento especial establecido en la Ley 975 de 2005[432].

El día 07 de septiembre de 2009 la Parte civil solicitó la readecuación típica de la conducta penal investigada por el delito de desaparición forzada[433] pues se había iniciado por el delito de secuestro simple[434].

Sin resolver dicha petición, el día 25 de marzo de 2011, la Fiscalía de la UNDH – DIH cerró parcialmente la investigación respecto del procesado Carlos Alberto Guzmán Lombana[435]. Es de anotar que desde el 5 de marzo de 2001, la investigación le había sido reasignada a otra Fiscalía dentro de la UNDH – DIH[436].

---

424 Folios 228, Cuaderno No. 12, radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

425 Folios 2, Cuaderno No. 13, radicado 233 UNDH – DIH ANEXO 2 del ESAP, ANEXO 2 del ESAP.

426 Folios 93 - 94 Cuaderno No. 13 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

427 Folios 101 – 102 Cuaderno No. 13 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

428 Folios 105 Cuaderno No. 13 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

429 Ordena recibir versiones a WALTER OCHOA GUISAO alias el Gurre, y ALVARO MURILLO FLORES, quienes son desmovilizados de la estructura paramilitar del Magdalena Medio. Folios 110 Cuaderno No. 13 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

430 1) Establecer en el municipio del Carmen de Viboral la ubicación de DIOSELINA QUINTERO, Familiares de ANIBAL DE JESUS CASTAÑO, de FREDY SUAREZ. 2) Solictar sus respectivos registros y filiaciones de las víctimas. 3) Ubicar a familiares de IRENE GALLEGO, JUAN CARLOS GALLEGO HERNANDEZ,HERNANDO DE JESUS CASTAÑO CASTAÑO, OCTAVIO DE JESUS GALLEGO HERNADEZ. . Folios 122 – 124 Cuaderno No. 13 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

431 Oficios Nros. 2206 del 22 de junio de 2010 y 4200 del 18 de julio de 2010 del Tribunal Superior de Justicia y Paz. Folios 129 – 131 Cuaderno No. 13 radicado 233 UNDH – DIH ANEXO, 2 del ESAP.

432 Folios 133 Cuaderno No. 13 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

433 Folios 233 - 254 Cuaderno No. 12 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

434 Medida de aseguramiento impuesta el 30 de abril de 2003

435 Folios 166, Cuaderno No. 13 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

436 Folios 3, Cuaderno No. 9 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

La Parte Civil mediante escrito del 20 de mayo de 2011 solicitó revocar la decisión de cierre de la investigación[437], insistiendo en que se resolviera la petición de readecuación de la conducta punible por el delito de desaparición forzada y el levantamiento de la reserva de identidad solicitada desde el 11 de agosto de 2006. El 1º de junio de 2011 la UNDH – DIH de la Fiscalía accede a las peticiones de la Parte civil[438].

El 21 de junio 21 de 2011 la UNDH – DIH ordenó el levantamiento de la reserva del testimonio que fue cobijado con la reserva de identidad y dispuso la práctica de pruebas[439]. El 13 de julio 2011 se realiza dicha diligencia, confirmándose que la identidad reservada correspondía a la señora Elvia Rosa Fernández Cardona[440].

El 11 de octubre de 2011 la Fiscalía dispuso recibir el testimonio de Ramón María Isaza Arango y citar para ampliación de indagatoria a Carlos Alberto Guzmán Lombana[441]. Con respecto al primero se llevó a cabo la diligencia el día 6 de agosto de 2012 y con del segundo se recibió el día 5 de diciembre de 2011[442]

---

437 El día 25 de mayo de 2011 el despacho del fiscal 80 decreta el cierre de la investigación, la parte civil indica: "dicha providencia no fue notificada personalmente tal como lo exige el artículo 176 del código de procedimiento penal. La notificación personal frente a una decisión de cierre de investigación es imperativa de acuerdo a la norma citada y lo reseñado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional en Sentencia C-836 del año 2002 donde estableció que: "La notificación es el mecanismo mediante el cual se pone en conocimiento de los interesados el contenido de las providencias que se produzcan dentro de un proceso y tiene como finalidad garantizar los derechos de defensa y de contradicción como nociones integrantes del concepto de debido proceso a que se refiere el artículo 29 de la Constitución Política..." … teniendo en cuenta que la parte civil no fue notificada de forma personal como lo exige la Ley y ha solicitado en diversas oportunidades que se readecue la tipificación de las conductas punibles y se practiquen unas pruebas solicitadas y reiteradas, entre ellas el levantamiento de la reserva del testigo con reserva de identidad y frente a lo cual no ha habido pronunciamiento del Despacho" Folios 190-191 Cuaderno No. 13 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

438 Folios 190 – 191 Cuaderno No. 13 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

439 1) Averiguar por la ubicación de varios integrantes de la Fuerza Pública tales como: JAIRO HERNANDEZ, HUGO ALFONSO DEL MILAGRO ABUNDANO MICAN, NELSON VERA SALAMANCA, JAIRO ENRIQUE HERNANDEZ ALONSO, GONZALO BAUTISTA SANDOVAL. 2) Determinar los militares que se encontraban bajo el mando del mayor JAIRO ENRIQUE HERNANDEZ ALONSO en la base militar de la Piñuela. 3) Allegar cartilla decadactilar de ALFONSO GUIZADO SUAREZ a. EL COSTEÑO. 4) Verificar la veracidad de la versión de la muerte de OMAR ISAZA a. EL TENIENTE. 5) Entrevistar a los postulados WALTER OCHOA GUISAO y ALVARO MURILLO FLOREZ. Folios 206 – 208 Cuaderno No. 13 radicado 233 UNDH – DIH ANEXO 2 del ESAP

440 Folios 216 Cuaderno No. 13 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

441 Folios 227 Cuaderno No. 13 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

442 Entre los aspectos que menciona en la indagatoria se tiene que indicar, refiriéndose a los hechos del 26 de junio de 1996, que "la tropa hizo tomo dispositivo del sitio donde había sucedido el hecho y continuo en la mañana, cuando yo digo continuar dentro del argot militar es hacer registros". Indica que "la operación inicia a las 11 de la noche del 25 de junio tipo 2 o 3 de la tarde tal vez llego a la base militar un helicóptero donde me presentaron dos personas que habían sido secuestrados" (…) "Yo recibía órdenes y directrices desde la décimo cuarta brigada" La operación concluye cuando yo regreso al sitio donde determina el comandante, y en ese momento yo era el comandante…" A Irene gallego la recibo yo el 28 de junio y voy y la entrego mientras hacemos el desplazamiento desde donde la recibo y la entrego a la fiscal de Santuario, salimos en vehículo particular en un bus de servicio público…" (…) "Por que no tenemos vehículos asignado en la fuerza de tarea, por que en años anteriores un capitán de la base la piñuela "murió en un atentado, en el caso mío la decimocuarta brigada jamás puso vehículo ahí, nunca". Al preguntársele por la presencia de comandantes de la cuarta o décimo cuarta brigada en la zona donde se desarrollaban las labores de la FTA , indica: en el año 95 la presencia la hizo el general MORA RANGEL de la cuarta brigada, y la décimo cuarta brigada hizo presencia el general VARGAS en el 96 cuando llego el helicóptero con esas dos personas que habían dicho estaban secuestradas en sobre cierto sitio. Ellos llegaron en helicóptero (los informantes) a la base de la piñuela y estuvo mi general VARGAS que fue la única vez que el hizo

[redacted]

El 3 de diciembre de 2012 un investigador judicial informa[444] al Fiscal del conocimiento acerca del desarrollo de varias labores investigativas ordenadas por ese Despacho[445].

El 7 de febrero de 2013 se recibe oficio de la Coordinadora del grupo investigativo señalando que en cumplimiento de la solicitud de la Directora Nacional de Derechos Humanos, se nombraron un grupo de funcionarios de policía judicial. Sin embargo, debió el Fiscal del caso, solicitar el 13 de agosto de 2013 al Jefe de Policía Judicial la asignación de investigadores para impulsar la actividad probatoria ordenada por el Despacho[446].

El 14 de febrero de 2013, se recibe solicitud de Edison Blanco Arocha en su calidad de Ejecutivo y del comandante del S2 del Grupo de Caballería Mecanizado No. 4 "Juan del Corral", dirigida a la Coordinadora del grupo de Derechos Humanos de la Fiscalía de Antioquia solicitando información sobre si en dicho despacho se adelantó investigación por los hechos de la Esperanza[447].

El 20 de mayo de 2013 se allegó al proceso copia de un vídeo de la versión libre rendida en Justicia y Paz por Ramón Isaza donde relaciona los hechos de la Vereda la Esperanza. .[448]

---

presencia allá porque entre otras llevaba como seis meses en el comando de la brigada y era la primera vez que tenia el mando de la fuerza de tarea y así como llegaron se fueron en helicópteros. Folios 270 – 286 Cuaderno No. 13 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

443 Folio 1 cuaderno número 14 radicado 233 UNDH-DIH. ANEXO 2 del ESAP.

444 Folio 2 al 25 cuaderno 14 radicado 233 UNDH-DIH. ANEXO 2 del ESAP.

445 Entrevista a Walter Ochoa, y Luis Eduardo Zuluaga. Folios 2 – 25, Cuaderno 14, radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP. Los declarantes al hablar sobre los hechos de la Esperanza afirman que hubo un intento de retención a Alias Teniente por parte del EPL en la vereda la esperanza, y esto fue lo que motivó las desapariciones de algunos de los pobladores de la vereda. Se dirigió solicitud la fiscalía 47 de justicia y paz para aportar copia de versiones de Walter Ochoa Guisao y Luis Eduardo Zuluaga Arcila. Se solicitó al Ejército Nacional el listado de los militares que se encontraban al mando del Coronel Jairo Enrique Hernández Alonso en la Base militar de La Piñuela en mayo y junio de 1996. En la respuesta del ejército se obtuvo información sobre nombres y direcciones de residencia de militares que habían sido señalados en su momento por el SS. Luis Fernando Guerrero Burbano por sus nexos con los paramilitares de Ramón Isaza. Frente a la Base militar de La Piñuela se estableció que al parecer pertenecía al Batallón Pedro Nel Ospina, Dentro del funcionaba el Batallón de contraguerrillas Barbacoas No. 42, m que fue agregado al Batallón Móvil No. 4. Se obtuvo que el Coronel José Rafael Martínez Herrera, se desempeñaba como comandante del Batallón de Ingenieros No 4 Pedro Nel Ospina para el año 1996. Mediante inspección judicial a la Fiscalía del Santuario Antioquia, se obtuvo copia de las denuncias elaboradas por el Mayor Carlos Alberto Guzmán Lombana, en su calidad de comandante de Fuerza de Tarea Conjunta.

[redacted]

446 Folio 31 cuaderno número 14 radicado 233 UNDH-DIH, ANEXO 2 del ESAP.

447 Folio 29 cuaderno 14 radicado 233 UNDH-DIH, ANEXO 2 del ESAP.

448 Oficio del Coordinador del Grupo Investigativo de Derechos Humanos del Cuerpo Técnico Folio 25 a 27 cuaderno 14 radicado 233 UNDH-DIH, ANEXO 2 del ESAP.

El 13 de agosto de 2013 la Fiscalía emite resolución de sustanciación[449] mediante la cual ordena la práctica de algunas pruebas[450] orientadas a indagar sobre las versiones de paramilitares desmovilizados del Grupo de Ramón Isaza Arango. La parte civil ya había anexado al expediente las versiones libres rendidas por Luis Eduardo Zuluaga Arcila, Walter Ocho Guisao y Camilo de Jesús Zuluaga Zuluaga[451].

El 4 de octubre de 2013, el representante de las víctimas solicita nuevamente la práctica de pruebas que había solicitado desde el 9 de octubre del año 2012[452], tendientes a verificar las aseveraciones dadas por el Mayor del Ejército Carlos Alberto Guzmán Lombana, Comandante de la FTA sobre los preparativos de la Operación Rayo ordenada el 25 de junio de 1996, entre otros aspectos. La Fiscalía 80 Especializada, mediante resolución del 30 de octubre de 2013, ordena la práctica varias pruebas[453], pero omite pronunciarse por la solicitud impetrada por la Parte civil.

El 15 de noviembre de 2013 la investigadora coordinadora del grupo investigativo de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario informa sobre el cumplimiento de las órdenes de trabajo del 13 y 30 de agosto del año 2013[454]. En este momento del proceso, la Fiscalía empieza a buscar el apoyo de analistas que examinen la actuación judicial y se oriente una línea de investigación, pasados ya más de 17 años de iniciada la investigación.

El 21 de noviembre de 2013, el abogado defensor de Carlos Alberto Guzmán Lombana solicita la práctica de algunas pruebas y aporta denuncias penales que el mayor Guzmán Lombana del Ejército Nacional formuló ante el Fiscal Seccional del municipio de Santurio en contra de integrantes del ELN por quema de vehículos, hurtos, entre otros delitos; aporta transcripción hecha por la defensa de las versiones libre que Ramón Isaza Arango rindió ante Justicia y paz y en las cuales hizo referencia a los hechos de la Esperanza[455].

El 17 de diciembre de 2013 el fiscal 80 Especializado respondió un oficio del Fiscal 2 delegado ante el Tribunal de Justicia y Paz, informando sobre la situación jurídica de las personas investigadas en el proceso por las desapariciones forzadas de la Vereda La Esperanza. En el se informa que Ramón Isaza tiene medida de aseguramiento de detención preventiva del 30 de

---

449 Folio 32-33 cuaderno 14 radicado 233 UNDH-DIH, ANEXO 2 del ESAP.

450 1) Solicitar copias de versiones libres de Luis Eduardo Zuluaga. 2) Solicitar copias de versiones libres de Walter Ochoa Guisao 3) Oficiar a la Unidad Nacional de Justicia y Paz para determinar qué postulados han hecho referencia al caso de la Esperanza. 4) Solicitar un grupo de policía judicial para hacer un análisis pormenorizado y digitalización del expediente.

451 Versiones libres conjuntas de Ramón Isaza Arango, Walter Ochoa Guisao, Luis Eduardo Zuluaga Arcila, Ovidio Suaza, Edgar de Jesús Cataño y Camilo de Jesús Zuluaga Zuluaga. Fiscalía de Justicia y Paz. Diciembre 4 y 5 de 2014. Folios 155 – 220. Cuaderno No. 19. Radicado 233 UNDH - DIH. ANEXO 2 del ESAP

452 Folio 34 cuaderno número 14 radicado 233 UNDH-DIH, ANEXO 2 del ESAP.

453 Folio 153-165 cuaderno número 14 radicado 233 UNDH-DIH, ANEXO 2 del ESAP.

454 En el informe de Policía Judicial, los investigadores relacionan que: 1) Se obtuvo en CD las versiones libres rendidas ante la Unidad de Justicia y Paz por Luis Eduardo Zuluaga Arcila y Walter Ochoa Guisao y en la cual confiesan su participación en los hechos de la Esperanza 2) Se digitalizó el expediente en formato de pdf y 3) Se solicitó al grupo de analistas de DH-DIH realizar un análisis del caso y se está en espera de respuesta. Folio 135 a 149 cuaderno número 14 radicado 233 UNDH-DIH. ANEXO 2 del ESAP.

455 Folio 37-134 cuaderno número 14 radicado 233 UNDH-DIH. ANEXO 2 del ESAP.

abril de 2003 y que el 18 de noviembre de 2010 se suspendió la actuación con respecto a Isaza. Al Mayor Guzmán Lombana se abstuvieron de decretar medida de aseguramiento[456].

El 17 de enero de 2014, el investigador de la policía judicial solicita prorroga de 60 días para dar cumplimiento a la orden de trabajo donde se solicita realizar análisis del caso[457].

El 12 de febrero de 2014, la Fiscalía ordena vincular como coautores del delito de Desaparición Forzada y Homicidio Agravado a Luis Eduardo Zuluaga Arcila y Walter Ochoa Guisao y para el efecto, se programan diligencias de indagatoria[458].

El 17 de febrero de 2014, el Fiscal deja constancia de la asistencia a indagatoria de Zuluaga Zuluaga[459], Ochoa Guisao[460] y de Zuluaga Zuluaga[461]. Las diligencias fueron realizadas y se fijaron en sistema de audio y video.

---

456 Folio 150-152 cuaderno número 14 radicado 233 UNDH-DIH. ANEXO 2 del ESAP.

457 Folio 164 cuaderno número 14 radicado 233 UNDH-DIH. ANEXO 2 del ESAP.

458 Folio 166 cuaderno número 14 radicado 233 UNDH-DIH. ANEXO 2 del ESAP.

459 En su diligencia de indagatoria rendida el día 17 de febrero de 2014 ante la Fiscalía 80 de la UNDH – DIH sobre el detonante de las desapariciones forzadas afirma (en el minuto 16.58 del DVD 1) que con la operación en la Vereda La Esperanza buscaban el "rescate del carro porque era una pesca milagrosa" de acuerdo al monto económico del carro eran las pretensiones de los guerrilleros. Esta afirmación también la hizo en la diligencia de versión libre del 19 de diciembre de 2011 (Minuto 10:16:21) cuando afirma que cuando venía de Medellín alias Teniente hijo de Ramón Isaza. se presentó un reten de la guerrilla y se llevaron a un conductor civil a raíz de eso es que ya comienza a dar el desenlace (10:18:15) en esa Vereda La Esperanza y en ese sector de la Piñuela hasta el Alto de Santuario en un lapso de 6 a 7 meses "donde viene al otro día el pago de la extorsión o exigencia económica que hizo ese grupo por el rescate del conductor y el carro (10:18:40) a no el carro se lo dejaron traer (lo confirma Ochoa Guisao) y ellos van al otro día y se traen una pareja. En la indagatoria relaciona que los hechos se inician por una cantidad de acciones del EPL entre Chagualá y el Alto de Santuario. Relata el reten por parte de los guerrilleros de un vehículo donde venían alias Teniente, alias Cucuyo, alias Gurre y el conductor. En el minuto 16.58 Mc Giver dice que los guerrilleros dejaron retenido al dejaron al conductor por **"rescate del carro porque era una pesca milagrosa"** de acuerdo al monto económico del carro eran las pretensiones de los guerrilleros. Que a raíz de ese hecho organizaron el operativo "y se traen a unos menores o algo así". (17:34), pero que él no participo en esa acción. En un segundo operativo con alias Teniente que **tenía un grupo especial**, que es "donde se traen a un muchacho que le dicen Fredy que en las autodefensas se le puso el alias de el costeño y a la señora de fredy" (17:45 - 18:08 hasta 18:15). Y dice que en éste hecho si participó y que "don Ramón le da la oportunidad que vaya por el niño". Sobre el Rescate del niño: Participó como conductor. Dice que hubo confrontación con la guerrilla. Con el niño se "traían a las personas que Usted menciona ahí" **Una si no estoy mal se dejó en el Silencio**, las otras se trajeron y se les dio dió muerte en la parte de Puerto Triunfo" (20:18 y 20:28). Admite que t**ambién participó** como conductor en el hecho del Promotor de salud. ese día hubo tres señores. Uno de ellos se dejó, los otros se trajeron y al otro día se les dio muerte. (22:02 – 22:25). Los entregábamos en Doradal y los comandantes encargados ya ordenaban (22:45). No pasaban con vida más de ocho días. Acepta participación pero como conductor. Admite también que en la autopista hacían "operaciones esporádicas de acuerdo a las informaciones que obteníamos de algunos pobladores (26:05) Sobre el Grupo de los **halcones:** (26:10 y ss) dice que estaba al mando de alias teniente y lo integraban: Julian, Chaco, Bayron, Puño, Cuxuyo, participo en algunas ocasiones, y otros que no los tiene presentes. Dijo que era un Grupo móvil para neutralizar las acciones de la guerrilla en la autopista, y en San Luis, San Francisco, Puerto Triunfo, Puerto Nare y bajo Sonson. Se le pregunta por la relación con los militares y menciona a un teniente y un cabo. Más 28:42 y ss) "yo puedo hablar que de pronto algunos de nosotros con el Mayor HERNANDEZ si tuvimos alguna relación en esa zona, el My HERNANDEZ era el comandante de ese ejército ahí pues y que yo que haya conocido de operaciones ahí en la autopista de ellos no, conozco que haya estado yo en calidad de guía en ese sector de San Francisco y en esa parte aledaña a Cocorná pero en la Esperanza yo no tengo conocimiento de que se haya participado el ejército directamente" (29:07). Retoma al Mayor HERNANDEZ (a 26:30 2da parte 1 DVD). Era del batallón Pedro Nel. Luego paso a las autodefensas porque después tuve la oportunidad de saludarlo. Lo conoció en el año 1995 o mediados del 95 o 96 que estuve yo en esa base que me estuvieron dando una inducción ".... el estuvo mucho tiempo en ese sector" se refiere a la Base de la Piñuela. (28:16 2da parte 1 DVD) "cuando yo fui a buscar apoyo para operar hacia San Francisco el era el comandante".. Relaciona también el Secuestro de un mayor del ejército, diciendo que se lo llevó el EPL y del ELN (1.53 2 DVD) y por eso retuvieron a

doña LETICIA. En este hecho participó Ramón Isaza. No se obtuvo la libertad del Mayor y la Sra murió. Dice que ha servido de Guía del ejército: (30:00 y acaba en 30:21). Y termina en 1:05 de la segunda parte DVD 1) Después que matan a su hermano en marzo de 1994, busco la forma de llegar a la base de la Piñuela porque consiguió unas informaciones de la guerrilla estaba por San Francisco. En esa base les dieron orientaciones en operaciones, prácticas de tiro, e hicieron un operativo grande pero no hubo resultados en ese sector. Hace referencia a una **base paramilitar en San Juan o Canadá:** Corregimiento de la Danta, Sonsón, parcelación La Esperanza, 5 Km de Doradal 4:24 – 4:51 2 parte 1 DVD). A esas personas fueron llevadas al río Magdalena.(6:30 2 parte 1 DVD). NO VIO LAS MUERTES. Es solo la versión de otros paramilitares. No tiene conocimiento sobre las desapariciones de **Ánibal y Oscar Hemel n**i participa en ellas. Dice que no participó en las desapariciones del **22 de junio de los Dos menores, Fredy, esposa pero que sabe que** los llevaron a las Mercedes, Base la Guayavera. 11:20 y ss). Conoció a Fredy el día que fueron por el niño. Sobre **María Irene gallego Quintero** No conoce de ese hecho. Sobre **Juan Carlos, Jaime y Javier**: (14:40 y 17:48) Si participó en este hecho. Acusa a los lavadores de carros. Dice que ese día una de las víctimas estaba en una piedra y salio a correr. El Sr. de la moto, lo cogieron y lo mataron porque no tenían espacio en los carros.. Precisa que el **1º operativo fue de rescate del Sr. secuestrado:** (20:46 2da parte 1 DVD) pregunta la fiscal por el conductor que fue retenido por la guerrilla. Respuesta: (21:04 2da parte 1 DVD). 20:57 "La verdad yo tengo entendido, que al otro día, como ellos llegaron allá, es que ese día que cogieron, ese día escuche yo la versión, es que la verdad, Ochoa es que puede hacer claridad a eso, eh estos señores estaban porque ellos llegaron con el fin de darle la plata, fue como una quartada que utilizaron también para engañarlos pero lo que llevaban era una operación y ese día tengo entendido que rescataron a ese señor el conductor que no tengo presente quien es y cogieron los muchachos esos con unas armas donde hablan de uno o dos menores de edad (termina en 20:33 2da parte 1 DVD) Solo reconoce participación en los hechos del 7 y del 9 de julio de 1996 22:20 y ss 2da parte 1 DVD. Y confirma que **Ramón Isaza participó en los hechos del niño (19:12 – 19:20 2 DVD). 10:20 2 DVD. 12.15 2 DVD si estaba don Ramón. 12:45 2 DVD SE LE TOMA JURAMENTO**. Niega que se hicieran pasar como integrantes del DOS. Informa que alias Cucuyo fue militar. Soldado profesional. El EPL no tenía tanto tiempo en esa zona. 16:00 2 DVD. Folio 167-170 cuaderno número 14 radicado 233 UNDH-DIH. ANEXO 2 del ESAP.

460 Dice que era el escolta de alias Teniente, Que Omar Isaza estuvo 9 meses hospitalizado en el San Vicente de Paul y le dieron salida para fuera a pasear. Salió del hospital como a las 4.30 o 5 de la tarde y llegando a Cocorná como a las 6 pasaditas, nos cogió un reten de la guerrilla pasando el puente después de la entrada de Cocorná. Dice que se quedó en el retén el conductor del vehículo que los movilizaba a ellos. Señala que hubo otro señor de otro carro, que también dejaron secuestrado. Dice que el Comandante de la guerrilla era MARCOS. Ahí arranca lo de los desaparecidos de la Vereda La Esperanza. Que se van para donde Ramón Isaza y le comentan lo sucedido. Ramón Isaza llama a Pedrucho. Iban a dejar para el otro día la reacción, pero deciden hacerlo el mismo día. **"esa misma noche llegamos ahí"** y llegaron a las casas donde presumían que había guerrilla a la primera que llegaron fue a la de la pareja donde cogieron al costeño a su mujer. Dice que no se encartaron con el niño. El costeño comenzó a hablar y confesó que eran del EPL. Le atribuyó a los menores que habían secuestrado a un Sr. Gordo. Y que el costeño les comentó que iba a llegar otro guerrillero que estaba enfermo como a las 7:00 de la noche. Y lo fueron a buscar a la casa. A un pelado de los que participo en el secuestro del Sr. Gordo, lo habían acabado de traer enyesado del hospital. Reconoce su participación en la desaparición de los dos menores, del otro guerrillero, de Fredy y su esposa. Pedrucho se llevó esa gente. Sobre el **rescate del niño** "Yo no participé en la cogida, no participe en la cogida, cuando fueron a capturar cuando fueron a meterle ese operativo a la guerrilla y ahí fue cuando bajaron con el niño, siempre lo recuperaron ..." Reconoce **que** capturaron al Promotor, a un man que estaba en una piedra, y un man que venía en una cicla o en una moto. A todos los acusa de ser guerrillero. No reconoce la desaparición de Aníbal ni de Oscar Hemel (aunque había dicho un principio, que la supuesta reacción ante el secuestro, había sido esa misma noche). No participo en la recuperación del niño y niega el secuestro del niño hijo del Costeño. Sobre la **organización de uno de los operativos dice que:** En la base de las Mercedes. Ramón Isaza dice que mañana miramos si organizamos un operativo. Llamaron a Pedrucho y ahí se organizó la primera incursión. Los PM luego del retén se fueron para las Mercedes. Llegaron a las 9:00 a las Mercedes y llegaron a las casas en la madrugada. Subieron solos los PM se metieron a la brava solos. No se comunicaron con el ejército Admite que Ramón Isaza hizo algunas subidas a la Vereda después. Sostiene que alias Teniente ordenó que les dieran de muerte a las víctimas, pero él no sabe qué pasó con ellas víctimas. Niega que los militares hubieran participado en los hechos, y que en las ocasiones que participó ni vio retenes del ejército. Sobre la Operación del 26 de junio, dice que no participó. Dice que él después de la retención de Fredy, volvió a Medellín y volvió a subir cuando lo de Juan Carlos. Paso en Medellín hasta la recuperación de alias Teniente (Minuto 13:46). Es claro que **omite** el suceso en que FREDY a quien llama el Costeño, fue conducido por el EJERCITO el día 26 de junio a la vivienda del Promotor de salud, día en que también fue retenida por el ejército, la joven IRENE DE JESUS GALLEGO QUINTERO. Los paramilitares tampoco reconocen tener en su poder o haber participado en la desaparición de Irene. Dice que el solo participa en la desaparición de Juan Carlos, los otros que fueron retenidos ese día. NO SABE del homicidio de las otras personas. En el carro de Alias Gurre montaron a Juan Carlos. Pero no recuerda que si se lo llevaron a la base o a donde.(20:45) Sobre la **relación de los paramilitares con los militares**: Menciona al Mayor Hernández. Estuvo en la base de la Piñuela 15 o 20 días cuando el My. Hernández

El 21 de febrero de 2014, se emite resolución que ordena práctica de pruebas[462], que se orientan a obtener la plena identificación de las víctimas, información ya establecida con antelación en el proceso; salvo la de alias Fredy, su esposa y el otro NN desaparecido. Con una copia de una cédula de ciudadanía que aportó Walter Ochoa al proceso con respecto a alias El Costeño se ordena realizar labores para su identificación. Se ordena individualizar a otros paramilitares que participaron en las desapariciones forzadas de la Vereda La Esperanza, con base en la información suministrada por los indagados. En esa misma resolución, la Fiscalía ordenó ubicar a algunos familiares para toma muestras de sangre para posteriores pruebas de ADN, sin diseñar previamente un plan metodológico de busca de personas desaparecidas. También dispuso la ubicación de la base paramilitar de San Juan e Indagar en los municipios ribereños a los ríos Calderas y Samaná, por el número de cadáveres que se hubieran encontrado entre junio y septiembre de 1996. Esta última diligencia, con anterioridad ya había sido ordenada por la Fiscalía.

Para la práctica de estas pruebas, el 24 de febrero 2014, la Fiscalía solicitó al Jefe del Grupo de Policía Judicial la designación de un grupo de policía judicial con el fin de adelantar la resolución de práctica de pruebas en el término de 60 días[463].

El 7 de marzo de 2014, se informa a la Fiscalía sobre la designación de agente especial de la Procuraduría General de la Nación para el caso.[464], sin embargo, el 7 de abril de 2014 se dé el nombramiento de un nuevo representante del Ministerio Público, asumiendo esta labor en adelante la Procuradora 24 Judicial II Penal[465].

El 14 de marzo solicita información el Mayor Barrientos Urrea (Ejecutivo del Grupo de Caballería Juan del Corral) sobre el estado actual de la investigación radicado bajo el número 233 en cuanto a militares vinculados.

---

estuvo en la Piñuela. lo entrenaron como guía en unas operaciones que se hicieron de San Francisco para adentro. (22:05). No recuerda fechas. Cree que fue antes de los hechos. Los soldados creían que eran campesinos. Era el comandante de la Piñuela. (21:00 – a 24:00). No conoce a los militares que le mencionaron, salvo a un My. Hernández. (delgadito más bien flaco). No conoce la relación Manosalva y Alias teniente y niega la lista que le fue entregada por Manosalva a teniente. (29:00). Sobre el Grupo **Los Halcones dice que** fueron dos carros que se dispusieron para trabajar en otras zonas. Empezó a operar 3:30 2 dvd). Participó por ser escolta de Alias Teniente, pero no participó en todos los casos porque era más escolta. No cree que participó en las desapariciones de la Vereda La Esperanza. La época de operación del grupo la hace coincidir con la desaparición de Juan Diego en Sonsón, que fue funcionario público. Cargaban unas chapas del DOS DE LA BRIGADA y las consiguió CUCUYO. No sabe con quien más además del Mayor hablaba. (8:05 2do dvd). **Menciona a Mc. Giver** que participó manejando un carro cuando desaparecieron a JUAN CARLOS GALLEGO HERNANDEZ, a JAIME MEJIA y la muerte de JAVIER GIRALDO. (14.40 2 DVD). Niega haber participado en el rescate del niño, pues estaba en Medellín (15:10 2 DVD). Reconoce la participación de Ramón Isaza  Y dice que la **identidad de alias el COSTEÑO** corresponde a LUIS ALBERTO OCAMPO BRICEÑO. (Cancelada por doble cedulación) (0:29 (2DVD 2da parte), Folio 167-170 cuaderno número 14 radicado 233 UNDH-DIH. ANEXO 2 del ESAP.

461 Su versión radica en informar que el se encontraba en la Base paramilitar de San Juan a donde fueron llevados el costeño, su esposa, dos menores y un barbado. Allí los cuidó por cuatro días hasta que se los entregó a alias Pedrucho.

462 Folio 171-174 cuaderno número 14 radicado 233 UNDH-DIH. ANEXO 2 del ESAP.

463 Folio 175 cuaderno número 14 radicado 233 UNDH-DIH. ANEXO 2 del ESAP.

464 Folio 178 cuaderno número 14 radicado 233 UNDH-DIH. ANEXO 2 del ESAP.

465 Folio 191 cuaderno número 14 radicado 233 UNDH-DIH. ANEXO 2 del ESAP.

La Fiscalía emite resolución respondiendo que se encuentra en etapa sumarial y están vinculados 4 integrantes del bloque paramilitar del Magdalena Medio y el Mayor Guzmán Lombana[466].

El 1 de abril de 2014, se presentó solicitud de información del Fiscal 29 Especializado de la Unidad de desplazamiento forzado de Medellín indagando sí en el radicado 233 se investigan las desapariciones forzadas de Leonidas Cardona y Andrés Gallego. Se responde que dichas investigaciones son adelantadas por la Fiscalía destacada ante el Gaula Rural del Oriente Antioqueño, bajo el radicado 752,065.[467]

Se informa además que la investigación contra Ramón Isaza fue suspendida el dos de abril de 2009 por disposición del Tribunal de Justicia y Paz, en dicha investigación no se incluyen los hechos de Leonidas Cardona ni de Andrés Gallego, dado que la imputación fáctica no recayó sobre esos hechos.

La Fiscalía recibe el 6 de mayo de 2014, una solicitud del investigador judicial de ampliación de los términos de la orden de trabajo para la policía judicial por 30 días más[468], para informar sobre las labores investigativas encomendadas.

Mediante oficio No. 1098 del 7 de marzo de 2014, la fiscalía 47 delegada ante el Tribunal de Justicia y Paz solicita al Fiscal ordinario que adelanta la investigación información sobre si los postulados Zuluaga Arcila y Ochoa Guisao, hicieron señalamientos contra el señor Ramón Isaza, y si en razón de ello lo han vinculado a la investigación. También, pide conocer si se resolvió la situación jurídica de los postulados, con el fin de solicitar la suspensión de la actuación ordinaria con respecto a estos Postulados, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la ley 1592. La representación de las víctimas de las desapariciones forzadas de la Vereda La Esperanza ya había señalado en Justicia y Paz que estos Postulados habían efectuado imputaciones bajo la gravedad del juramento contra el Sr. Isaza Arango, y en consecuencia manifestaba su preocupación por las contradicciones evidentes en las versiones rendidas ante ese Despacho por el Postulado Ramón Isaza.[469]

La Fiscalía 80 de la UNDH – DIH informa al Fiscal de Justicia y Paz haber recibido indagatorias el 17 y 18 de febrero de 2014 a los señores Walter Ochoa Guisao, Luis Eduardo Zuluaga Arcila y a Camilo de Jesús Zuluaga Zuluaga. En ese momento no había resuelto situación jurídica a ninguno de ellos. Así mismo indicó que con relación a Ramón Isaza la investigación se encontraba suspendida.

Nuevamente, la Fiscal Segunda Especializada de Justicia y Paz solicita que se informe el estado actual de la investigación 233 en contra de Camilo Zuluaga Zuluaga. La Fiscal 80

---

466 Folio 188-190 cuaderno número 14 radicado 233 UNDH-DIH. ANEXO 2 del ESAP.

467 Folio 182 -186 cuaderno número 14 radicado 233 UNDH-DIH. ANEXO 2 del ESAP.

468 Folio 192 cuaderno número 14 radicado 233 UNDH-DIH. ANEXO 2 del ESAP.

469 Escrito del apoderado de las víctimas a la Fiscalía de Justicia y Paz dentro del proceso seguido por las víctimas de la Vereda La Esperanza. Oficio 1094 D 47 J y P del 7 de mayo de 2014. Respuesta a oficio sin fecha Aporte de Información. Ramón María Isaza. Masacre de la Esperanza. ANEXO 5 del ESAP.

Especializada informa que Zuluaga Zuluaga fue vinculado a la investigación mediante indagatoria rendida el 18 de febrero de 2014[470].

La Policía Judicial rindió un informe el 6 de junio de 2014 sobre las labores investigativas desplegadas en cumplimiento de las resoluciones del 24 de febrero y el 9 de marzo de 2014. La mayoría de las actividades aún esperan respuesta[471]. Entre las labores investigativas que se lograron realizar se aporta la hoja de vida del Mayor Jairo Enrique Hernández Alonso[472]. Frente a los cotejos de identidad de las huellas de Aldrin Javier Rincón Montes, con respecto a las de Luis Alberto Briceño Ocampo[473], de quien se había señalado corresponderían a las de Fredy o el Costeño, no arrojo resultados positivos. Se aportó también unas de las listas de los miembros del EPL que se desmovilizaron el 30 de septiembre de 1996[474].

De igual manera, se informa que en las labores investigativas que alias el Pitufo puede ser Oscar Mauricio Betancourt Osorio, integrante del Frente Suroeste de las autodefensas unidas de Colombia; y la identificación del sujeto que conoce con el alias de Cocuyo puede corresponder a Oscar Armando Pereañes Gonez, o a Pedro Alberto Pérez Quiroz, o a Abelardo de Jesús Galeano.

La Fiscalía dentro del proceso ordinario emite una nueva resolución de pruebas el 22 de junio de 2014[475] y otras el 7 de julio de 2014 el fiscal emite resolución, donde ordena realizar un examen a las versiones libres de los Postulados Ramón Isaza, Luis Eduardo Zuluaga y Walter Ochoa[476]. Para la práctica de estas pruebas la Fiscalía solicitó al Director de Policía Judicial el nombramiento de dos investigadores[477].

En razón de la anterior solicitud, el 21 de julio de 2014 los investigadores aportan extractos minuto a minuto, de las distintas diligencias de versión libre de postulados de las Autodefensas del Magdalena apreciándose en ellas contradicciones[478].

---

470 Folio 193-196 cuaderno número 14 radicado 233 UNDH-DIH. ANEXO 2 del ESAP.

471 Folio 199-207 cuaderno número 14 radicado 233 UNDH-DIH. ANEXO 2 del ESAP.

472 Folio 265 cuaderno número 14 radicado 233 UNDH-DIH. ANEXO 2 del ESAP.

473 Folio 276 cuaderno número 14 radicado 233 UNDH-DIH. ANEXO 2 del ESAP.

474 En Folio 291y 292 cuaderno número 14 radicado 233 UNDH-DIH. ANEXO 2 del ESAP.



477 Folio 79 Cuaderno 15 Radicado 233 Unidad Nacional de DH y DIH. ANEXO 2 del ESAP.

478 Folio 79 -94 Cuaderno 15 Radicado 233 Unidad Nacional de DH y DIH, ANEXO 2 del ESAP. Mientras **Ramón Isaza** afirma que las listas de las personas que iban a ser desaparecidas en la vereda la Esperanza fue entregada días antes por el mayor del Ejército Manosalva, Zuluaga Arcila señala que el móvil de los hechos fue la realización de una pesca milagrosa por guerrilleros del EPL en cabeza de Gonzalo Perdomo donde es secuestrado el conductor del vehículo en el que se movilizaban alias Gurre y teniente, en este sentido también expresa que el EPL en la entrada de Cocorná secuestró (no indica fecha) a un mayor del ejército, y que por ello habían secuestrado a la señora María Leticia Guarín, para presionar la liberación del Mayor. Estas ordenes las habría dado el Mayor Hernandez a Cocuyo y Teniente; **Ramón Isaza** afirma que Teniente le señalo que los cuerpos fueron arrojados al

El 22 de julio de 1014 una vez más, la parte civil solicitó que se diera trámite a la solicitud de práctica de pruebas del 9 de octubre de 2012[479]. Las que solo fueron decretadas el 25 de julio de 2014[480]. Nuevamente, la Fiscalía ordena inspeccionar la oficina de investigaciones especiales de la Procuraduría para indagar por procesos disciplinarios que se adelanten o se hubieren adelantado por el caso de la Esperanza, aún existiendo constancia en el expediente, que ya esa unidad de la Procuraduría no existe, y que el proceso se encontraba en la Procuraduría delegada Disciplinaria para la defensa de los derechos humanos, Así como otras pruebas tan genéricas como oficiar a la fiscalía 47 delegada de justicia transicional para que aporte en el esclarecimiento del caso.

En memorial entregado a la Fiscalía, el 4 de agosto de 2014, la representante de la Parte civil designa abogado suplente y solicita se decrete la práctica de pruebas[481]. Entre ellas, obtener la historia clínica de Omar Isaza, quien según el indagado Walter Ochoa Guisao, el día que empiezan las desapariciones forzadas en la Vereda La Esperanza, aquel había obtenido un permiso de su médico del Hospital San Vicented de Paul, para salir del centro hospitalario.

Con fecha 6 de agosto de 2014, aparece el informe de Policía Judicial sobre orden de trabajo No. 39055 del 10 de junio de 2014[482]. En él se reportan varias actividades de búsqueda de información tendientes a identificar otros paramilitares vinculados con las desapariciones forzadas, realizando indagaciones con respecto a las disputas entre dos bloques paramilitares, tales como el Cacique Nutibara y el Bloque Metro. Todo ello, ampliando de una manera exagerada la base de la investigación, y perdiéndose la viabilidad de concretar el compromiso penal de quienes están siendo investigados en el Radicado 233 de la UNDH – DIH. La línea de explorar el compromiso penal del Mayor del Ejército Carlos Alberto Guzmán Lombana, hasta aquí se encuentra abandonada por la Fiscalía.

río Calderas, Samaná y Magdalena, sin embargo **Zuluaga Arcila** expresa que los desaparecidos deben estar en fosas, o enterrados como NN en Santuario, a su vez **Ramón Isaza** cambia la versión que ya había dado previamente en relación a los cadáveres de las personas desaparecidas, dice que algunos los arrojaron al río Magdalena, otros fueron incinerados, otros "los arrojaron a la manada" **Ochoa Guisao** Señala que los hermanos Cardona Quintero, quienes eran miembros del EPL acorde a su relato, fueron entregados a Pedrucho quien los llevó a la base de San Juan, sin embargo **Camilo Zuluaga** expresa en su declaración la versión de que fueron llevados a la base de San Juan, a los dos niños y al señor barbado, les dieron de baja en el río (No se indica cual)

479 Folio 97-100 Cuaderno 15 Radicado 233 Unidad Nacional de DH y DIH. ANEXO 2 del ESAP.

480 Entre las pruebas decretadas se encuentran: 1) Allegar copia de la versión libre de alias Mc Giver y alias Gurre. 2) Indagar por nombres de sujetos que se quejaron de los secuestros en la autopista Medellín Bogotá, y nombres de los militares que participaron en las desapariciones de la esperanza. 3) Aclarar la responsabilidad de alias Mc Guiver en los hechos. 4) Recibir declaración del Brigadier General Carlos Vargas Forero. 5) Realizar inspección al comando de la brigada 14 para averiguar la fecha en que Carlos Vargas Forero se trasladó a la base militar de la piñuela, cuantas personas viajaban con él, quienes. Folio 102 a 103 Cuaderno 15 Radicado 233 Unidad Nacional de DH y DIH. ANEXO 2 del ESAP.

481 Folio 107-109 Cuaderno 15 Radicado 233 Unidad Nacional de DH y DIH. ANEXO 2 del ESAP.

482 Se anexa un mapa es ilegible. En folios 122 a 125 se hace una sinopsis histórica de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio Y se encuentran múltiples registros de los paramilitares alias Pitufo, alias Jota, alias Cocuyo. Se informa que no se encuentran registros de Gerardo Vallejo Martínez. Se hizo un contexto de la guerra entre el bloque Metro y el Cacique Nutibara. Así mismo se informó que la base de San Juan no se encuentra georeferenciada Folio 120-137 cuaderno 19 radicado 233 Unidad Nacional DH y DIH. ANEXO 2 del ESAP.

El 19 de agosto de 2014 los investigadores de la Fiscal 80 Especializada solicitan apoyo a la Dirección de inteligencia Policial, para desplegar las labores investigativas señaladas[483]. También se encuentra solicitud de apoyo dirigida el 19 de agosto de 2014 por los investigadores de la Fiscalía 80 Especializada a la Dirección de Inteligencia y Contra Inteligencia Militar del Ejército, para desplegar las labores investigativas señaladas[484].



Aparece en el proceso una solicitud del 20 de agosto de 2014 del director de Policía judicial al Fiscal 47 de Justicia Transicional, ante quien han rendido versiones libres los procesados que han reconocido los hechos de la Vereda La Esperanza, pidiendo información sobre los miembros del grupo Los Halcones, su identificación, los miembros del ejército que hubiesen podido participar en las desapariciones, los nombres de ganaderos o comerciantes que se hubieren quejado por los secuestros en la autopista, la información e identificación de Irene y las demás víctimas, y un contexto de orden público de la zona para el año 1996[487]. Ese mismo día se formuló una solicitud a la Sección de análisis criminal, con el fin de que obtener apoyo para desplegar labores investigativas encomendadas[488].



483 Folio 214-216 Cuaderno 17 Radicado 233 Unidad Nacional de DH y DIH. ANEXO 2 del ESAP.

484 Folio 217-219 Cuaderno 17 Radicado 233 Unidad Nacional de DH y DIH. ANEXO 2 del ESAP.

485 Folio 135-155 Cuaderno 15 Radicado 233 Unidad Nacional de DH y DIH. ANEXO 2 del ESAP.

486 Folio 156-166 Cuaderno 15 Radicado 233 Unidad Nacional de DH y DIH. ANEXO 2 del ESAP.

487 Folio 193 a 195, cuaderno 17 radicado 233 Unidad Nacional DH y DIH. ANEXO 2 del ESAP.

488 Folio 212-213 cuaderno 17 radicado 233 Unidad Nacional DH y DIH. ANEXO 2 del ESAP.

489 Se obtienen copias de los siguientes documentos: Informe de policía judicial del 07 de julio de 2009 que realiza análisis de los hechos. Formulación parcial de cargos al postulado Ramón María Isaza Arango. Entrevista realizada a Ramón Isaza el 07 de febrero de 2006 en teleantioquia[489]. Confesión del Homicidio de Heli Gómez Osorio por parte de Ricardo López Lora. Señala que la información y la orden de matarlo provino de Vicente Castaño, versión del 30 de septiembre de 2009 y del 22 de noviembre de 2011, Escrito donde Walter Ochoa Guisao informa de algunos hechos en los que participó, se refiere al caso de la Esperanza como muerte de guerrilleros, milicianos y auxiliadores. Escrito de Acusación imputado a Ramón María Isaza Arango, 1 de abril de 2009.

El 27 y 28 de agosto de 2014, se llevó a cabo diligencia de inspección judicial practicada en la XIV Brigada en el municipio de Puerto Berrio Antioquia. El fin de la misma es "averiguar la fecha y hora de la cual se trasladó el Brigadier General Carlos Vargas Forero a la Base militar La Piñuela, al parecer el 25 de junio de 1996, indicando cuántas personas viajaron con él, sus identidades, la hora de retorno, y el número de personas que regresaron[490].

El 27 de agosto de 2014, se solicitó a la XIV Brigada de Puerto Berrio copia del libro o soportes de ingreso de persona, vehículos durante los días del 23 al 27 de junio de 2006. En especial el desplazamiento del coronel Vargas Forero, el 25 de junio especificando las personas que viajaron y regresaron con él. Se solicita también copia del Insitop del mismo periodo de tiempo[491].

---

Continuación del escrito de Acusación imputado Ramón María Isaza Arango. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley, caso Jobani Morales. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley y otros documentos relativos al caso Julio Cesar Morales. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley, caso Andres Gallego. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley y otros documentos relativos al caso Anibal Castaño. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley y otros documentos relativos al caso Leonidas Cardona. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley y otros documentos relativos al caso hermanos Cardona Quintero. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley y otros documentos relativos al caso Javier Giraldo. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley y otros documentos relativos al caso de la vereda la Esperanza, entrevista a Florinda de Jesús Gallego Hernández. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley y otros documentos relativos al caso de Irene Gallego. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley y otros documentos relativos al caso de Jaime Mejía. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley y otros documentos relativos al caso de Orlando Muñoz Castaño. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley y otros documentos relativos al caso de Oscar Hemel Zuluaga. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley y otros documentos relativos al caso de Luis Gonzaga Jiménez, Hijo de Ester Julia Jiménez[489]Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley y otros documentos relativos al caso Arciades de Jesús Gallego Quintero (Desaparición forzada en el año 2000). Entrevista a Amanda Gallego Quintero 16 de octubre de 2008. Informe de inteligencia del 13 de noviembre de 1996 que intentaba constatar los malos tratos efectuados por miembros del Batallón Barbacoas del ejército en el Carmen de Viboral, vereda la Chapa. Declaración de Alonso de Jesús Vaquero Agudelo en Palmira valle, el 11/12/1996. Se le pregunta por Ramón Isaza y las ACMM, no por el caso concreto de la Esperanza. Informe de policía judicial del 15/08/1996. Se describe la situación de orden público de la autopista Medellín-Bogotá a la altura de la Vereda la Esperanza. Se listan las víctimas tanto del caso concreto (Desapariciones) como de otros crímenes. Señala como posibles causas de las desapariciones, el secuestro de un paramilitar del grupo de Isaza. Indica que uno de los secuestrados posiblemente por la guerrilla es el Fiscal Seccional de Girardota Juan Carlos Murillo, no se indica la fecha. Entrevista del 19 de julio de 2007 a Gladys Stella Arias Jiménez, cónyuge de Jobani Abad Morales y carta de comunicación de la aceptación de Ramón Isaza en los casos de Jobani y Julio Cesar Morales. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley y otros documentos relativos al caso de Helí Gómez Osorio. Informe del 31/12/2013, dirigido a la jefe de la unidad de fiscalías de Justicia y paz, que contiene el avance del proceso de justicia y paz adelantado en relación con los hechos de la Vereda La Esperanza. Listado de las víctimas con sus familiares. Informe ejecutivo del 22 de enero de 2014 del radicado 752065 adelantado por la desaparición de Leonidas Cardona y Andrés Gallego. Informe sin fecha firmado por el investigador Willans Dario Guzmán Osorio. En éste se narran los hechos de la desaparición de la Vereda La Esperanza. Señala que la esposa de Fredy se llama o tiene el alias de Irma( el informe no aclara si es nombre o alias). En cuanto a Fredy se habla de que ha usado los nombres de Aldrin Javiar Rincón Montes, y Luis Alfonso Guisao Suarez; en labores de verificación se le reconoce decadactialarmente como Luis Alberto Briceño Ocampo. Oficio sin fecha suscrito por el director de Fiscalía Nacionales Especializada de Justicia Transicional donde se informa del estado del proceso de justicia y paz en el caso de la esperanza. Informe del caso de la Vereda la Esperanza, fechado el 26 de mayo de 2014. Elaborado por la fiscal 60 especializada DFENJYP. Folio 197, cuaderno 16, radicado 233 Unidad Nacional DH y DIH. ANEXO 2 del ESAP.

490 Folios 233 a 236, cuaderno 17 radicado 233 Unidad Nacional DH y DIH. ANEXO 2 del ESAP.

491 Folio 253, cuaderno 17 radicado 233 Unidad Nacional DH y DIH. ANEXO 2 del ESAP.

El 3 de septiembre de 2014, la Fiscalía emite resolución de práctica de pruebas[492], las que amplían el espectro de averiguaciones de ésta, que si bien pueden estar encaminadas a la individualización de los militares que pudieran estar comprometidos en las desapariciones forzadas, no estaban dirigidas a investigar el compromiso penal del Mayor Carlos Alberto Guzmán Lombana en los hechos, único militar vinculado a los mismos desde el año 2000:

El 3 de septiembre de 2014, se emite resolución que resuelve situación jurídica a los procesados Luis Eduardo Zuluaga Arcila, Camilo de Jesús Zuluaga Zuluaga, y Walter Ochoa Guisao. Decreta medida de aseguramiento consistente en detención preventiva por los delitos de secuestro simple que mutó en desaparición forzada, y homicidio agravado[493].

El 4 de septiembre de 2014 se presentó un informe de Policía Judicial dando cuenta del avance de las pruebas decretadas el 25 de julio de 2014, en las cuales se logró obtener[494] información en el sentido de que no existen versiones de desmovilizados que refieran al caso distintas a las que reposan en la investigación. No se menciona el tema de comerciantes y ganaderos que se quejaran. Frente a miembros de la fuerza pública se tiene relación conforme a las versiones únicamente del General Alfonso Manosalva, y del Mayor Hernández. Se hizo una relación de la historia de las ACMM, haciendo referencia a Fredy y se dice que se trata de Luis Alfonso Guisao Suarez, quien utilizó como segunda identidad el nombre de Luis Alberto Briceño Ocampo. Asimismo, se identificaron los miembros del grupo Los Halcones.

Los días 3, 4 y 9 de septiembre 2014 se llevó a cabo diligencia de inspección judicial[495] a las instalaciones del archivo de la Procuraduría General de la Nación en Bogotá, con el fin de encontrar información de procesos disciplinarios adelantados con ocasión a los hechos de La Esperanza, para que sean trasladadas como prueba al proceso 233 las decisiones y pruebas pertinentes. Se inspeccionó el proceso 00810799-98 y se tomaron copias de los folios pertinentes.

El 4 de septiembre de 2014, el investigador adscrito al despacho de la Fiscalía 47 de la dirección de Fiscalías de Justicia Transicional presentó un informede la orden de trabajo No.

---

492 1) Identificar y ubicar a los militares que hacían parte de la compañía Jaguar del Batallón Barbacoas, obteniendo el extracto de su hoja de vida y allegar la calidad militar. 2) Identificar y ubicar a los policías que prestaban sus servicios para la época de los hechos en el Carmen de Viboral y Cocorná, para ser escuchados en versión libre. 3) Determinar la situación actual del Mayor Jairo Enrique Hernández Alons. 4) Escuchar en versión libre a Luis Eduardo Zuluaga, Camilo Zuluaga, y Walter Ochoa Guisao, para que hablen de integrantes de la fuerza pública que participaron en los hechos.5) Ubicar a los miembros de la policía: Subintendente Álvaro Gómez de los Ríos, Jesús Enrique Leal Osorio, Edilberto Bolaños Ardila, Jorge Sarmiento Mejía, Jonnier Hoyos Bucheli, para ser escuchados en versión voluntaria. 6) Ubicar al personal de cuadros asignados para la fuerza de tarea águila para que sean escuchados en versión voluntaria. 7) Insistir en la identificación plena de los señalados miembros de las Auto defensa campesinas del magdalena medio que hacían parte del grupo los halcones. 8) Esclarecer los motivos por los cuales se entregó la orden del mérito militar Antonio Nariño ( 05/08/1996) al Mayor Guzmán Lombana y La medalla CR Atanasio de Girardot (diciembre de 1996) al Mayor Jairo Hurtado. Además 30 días de descanso por felicitación al capitán Luis Alberto Mancilla Silva, Folios 175-177 cuaderno 15 Radicado 233 Unidad Nacional de DH y DIH. ANEXO 2 del ESAP.

493 Folio 178- 259 Cuaderno 15 Radicado 233 Unidad Nacional de DH y DIH. ANEXO 2 del ESAP.

494 Folio 260-276 Cuaderno 15 Radicado 233 Unidad Nacional de DH y DIH. ANEXO 2 del ESAP.

495 Folios 254-256, cuaderno 17, radicado 233 Unidad Nacional DH y DIH. ANEXO 2 del ESAP.

28599 del 1 de septiembre de 2014[496]. En este sentido, reportó idénticas labores investigativas que las desplegadas por los investigadores adscritos al Despacho del Fiscal de la Unidad Nacional de derechos humanos. Sin embargo, se mantiene la confusión en el sentido de que Irene de Jesús Gallego Quintero -detenida por el Ejército el 26 de junio de 1996- es la cónyuge o compañera permanente de Fredy.

El día 7 de septiembre de 2014, la defensa de Luis Eduardo Zuluaga y Camilo Zuluaga interpuso un recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la resolución de la Fiscalía que resolvió la situación jurídica de los procesados e impuso medida de aseguramiento interpuesta en su contra[497]. El 6 de octubre de 2014 fue notificada la resolución que impone medida de aseguramiento a la defensa del procesado Walter Ochoa Guisao[498].

El 20 de septiembre de 2014 los investigadores de policía judicial presentaron informe de cumplimiento de la orden de trabajo No. 22959. Se reportaron como actividades realizadas el análisis de la información obtenida para el desarrollo de las labores investigativas que obran en folios anteriores. Se envió una contextualización de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y un listado de algunas de las personas que integran esta organización que deben ser identificadas[499].

Se agregó al expediente una comunicación dirigida el 22 de septiembre de 2014 a la Ministra de Relaciones Exteriores por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando al Estado realizar una propuesta de reparación integral, y señalar cronograma de trabajo para la búsqueda de los restos de las víctimas, informar de los avances en las investigaciones[500].

El 29 de septiembre de 2014, la Fiscalía dictó una resolución que comisiona a Policía Judicial para el cumplimiento de la práctica de pruebas que fue ordenada el 3 de septiembre de ese mismo año[501]. El 8 de octubre de 2014 se concedió un plazo adicional a los investigadores para la práctica de labores investigativas[502].

A través de las resoluciones del 10 y 17 de octubre de 2014 la Fiscalía de la UNDH – DIH cita a versión libre a los postulados Walter Ochoa Guisao, Luis Eduardo Zuluaga Arcila y Camilo Zuluaga Zuluaga[503], extrañamente, pues ya habían sido indagados y se les había resuelto situación jurídica.

---

496 Folios 196-211, cuaderno 17, radicado 233 Unidad Nacional DH y DIH. ANEXO 2 del ESAP.

497 Folios 15-23, cuaderno 16, del radicado 233 de la Unidad de DH y DIH. ANEXO 2 del ESAP.

498 Folio 3-14, cuaderno 16, del radicado 233 Unidad de DH y DIH. ANEXO 2 del ESAP.

499 Folios 224-229 cuaderno 17, radicado 233 Unidad Nacional DH y DIH. ANEXO 2 del ESAP.

500 Folio 296-298 Cuaderno 15, Radicado 233 Unidad Nacional de DH y DIH. ANEXO 2 del ESAP.

501 Folio 1, cuaderno 16 del radicado 233 Unidad de DH y DIH. ANEXO 2 del ESAP.

502 Folio 24-26, cuaderno 16 del radicado 233 de la Unidad de DH y DIH. ANEXO 2 del ESAP.

503 Folio 27-30, cuaderno 16 del radicado 233 de la Unidad de DH y DIH. ANEXO 2 del ESAP.

La Fiscalía mediante decisión de 24 de octubre de 2014 el Fiscal 80 resolvió no reponer la resolución de Imposición de Medida de Aseguramiento solicitada por la defensa, y se concede el Recurso de Apelación que había sido interpuesto como subsidiario[504].

A través de Resolución de fecha 27 de octubre de 2014 se ordenó la práctica de pruebas tendientes a identificar autores intelectuales y materiales de los hechos, ubicación e identificación de los restos óseos que se puedan encontrar. En esta dirección investigativa de la Fiscalía se observa un afán por evidenciar una actividad proactiva en las labores de búsqueda de las personas desaparecidas. Sin embargo, lejos de prever un programa metodológico acorde con los estándares internacionales para realizar dicha labor, se delegó nuevamente en los mismos investigadores de policía judicial, una serie de cuestiones, que por sus propias competencia no pueden desarrollar, tal es el caso de la creación de un grupo de tareas especializadas, interdisciplinario, la realización de estudios técnicos, para la identificación de los desaparecidos, entre otras.[505]

El Fiscal 80 Especializado el 4 de noviembre de 2014 comisiona a los investigadores de policía judicial para el cumplimiento de la anterior resolución que ordena práctica de pruebas. El día para el que se había programado unas diligencias con los procesados Zuluaga Arcila y Ochoa Guisao no se llevaron a cabo. Y se dejó constancia el 10 de noviembre de 2014 reprogramándose dichas diligencias para el 19 de enero de 2015[506].

El 11 de noviembre de 2014 la Fiscalía ordenó la práctica de pruebas con relación a las versiones de los paramilitares vinculados al proceso penal, pero no tiene aún una línea de acción frente al procesado Mayor Carlos Alberto Guzmán Lombana, quien está siendo investigado por las desapariciones de la Vereda La Esperanza desde el año 2000[507].

---

504 Folio 41-50, cuaderno 16 del radicado 233 de la Unidad de DH y DIH. ANEXO 2 del ESAP.

505 1) Crear un grupo de tareas especializadas o interdisciplinario. 2) Recolección de información respecto a las víctimas y victimarios, con el fin de indagar por patrones de macrocriminalidad.3) Escuchar en entrevistas, versiones libres y declaraciones a miembros de las ACMM, líderes, pobladores, sepultureros y comunidad en general. 4) Escuchar en entrevistas a los familiares para que aporten información de tiempo modo y lugar de los hechos. Además de las características físicas de las víctimas.5) Practicar inspección en hospitales y cementerios en búsqueda de restos. 6) Realizar labores de verificación y análisis para el pleno esclarecimiento de los hechos, (inspecciones judiciales, visita al lugar de los hechos, labores de vecindario, entrevistas, etc) 7) Solicitar a la UARIV la inclusión en el RUV de las víctimas.8) Determinar ruta de los desaparecidos con ubicación del destino final de estos. 9) Allegar información registrada en sistemas de información (Sirdec y sicomain), para ubicar e identificar información de las víctimas relacionadas con el caso, especialmente muestras de ADN. 10) Solicitar apoyo a la comisión nacional de búsqueda de personas para ubicar los desaparecidos 11) Realizar estudios técnicos científicos para la identificación de las víctimas, aportar al proceso fotografías, cartas dentales, imágenes dactilares, historias clínicas y realizar los pertinentes cotejos de ADN 12) Proveer información constante a las víctimas. 13) En lo que resulte pertinente observar el protocolo de Estambul y Minesota, para el desarrollo de la presente investigación 14) Practicar exhumaciones cuando correspondan.15) las demás pruebas que se desprendan. Folio 59-60, cuaderno 16, del radicado 233 de la Unidad de DH y DIH; Folio 51-53 cuaderno 16 del radicado 233 de la Unidad de DH y DIH. ANEXO 2 del ESAP.

506 Folios 62-67, cuaderno 16 del radicado 233 de la Unidad de DH y DIH. ANEXO 2 del ESAP.



Ese mismo 11 de noviembre de 2014 la Fiscalía se emitió una resolución que decreta práctica de pruebas dirigidas a la investigación de los hechos de Leonidas Cardona y Andrés Gallego[508]. Para el efecto, comisionó a los mismos investigadores judiciales[509].

El 25 de noviembre de 2014 se remitió a la Dirección de Fiscalías delegadas ante Tribunal Superior de Bogotá el proceso para resolver recurso de apelación interpuesto por los defensores de los procesados[510]. Los investigadores de Policía judicial rindieron Informe con fecha del 25 de noviembre de 2014 dando cuenta de las comisiones ordenadas por el Fiscal en resoluciones del 3 y del 11 de septiembre y del 2 de octubre de 2014.[511]

Los investigadores judiciales rindieron un Informe con fecha del 10 de diciembre de 2014 en el cual informan sobre las labores adelantadas en cumplimiento de las solicitudes probatorias de la Fiscalía del 22 y 25 de julio de 2014[512].

---

508 Folio 70-72, cuaderno 16 del radicado 233 de la Unidad de DH y DIH. ANEXO 2 del ESAP.

509 Folio 73-78, cuaderno 16 del radicado 233 de la Unidad de DH y DIH. ANEXO 2 del ESAP.

510 Folio 79-80, cuaderno 16 del radicado 233 de la Unidad de DH y DIH. ANEXO 2 del ESAP.

511 Se solicitó la información de los miembros de la compañía jaguar, se espera respuesta parcial, se obtuvo algunas direcciones. Se solicitó información de los policías que prestaban servicios en el Carmen de Viboral, se espera respuesta. La estación de Cocorná tenía la jurisdicción del municipio del Carmen de Viboral, se solicitó la información de los policías de dicha estación, se espera respuesta. Se obtiene copia de las hojas de vida del intendente jefe Jorge Humberto Sarmiento Mejía, Jesús Enrique Real Osorio, Yomier Hoyos Buchely. Se solicitaron las hojas de vida de los suboficiales de la fuerza de tarea águila para junio y julio de 1996, se espera respuesta. Se espera respuesta de los demás puntos. Se programó diligencia de versión libre el 5 y 6 de diciembre de los postulados. El 20 de noviembre de 2014 se aportan las tarjetas decadactilares y registros de defunción de los miembros de la compañía jaguar y otros relacionados en la lista del FL 57 del presente cuaderno, total 51 personas. Con fecha del 25 de noviembre de 2014 se anexa informe de policía judicial donde solicitan apoyo en la realización de algunas labores investigativas. El 28 de noviembre de 2014 se solicita a la Registraduría del Estado Civil las tarjetas decadactilares y registros de defunción de un grupo de 25 personas a identificar. Se aportaron los siguientes: José Alberto Martínez Salazar, Elkin Ledis Perez Acosta, Osman de Jesús Montoya Marín, Osman de Jesús Montoya Marín, José Gabriel González Castillo, Abelardo Galeano, Pedro Pablo González Velásquez, Jorge Arturo Roldan Hernández, Yerly Yances Ruiz Arevalo, Esparco de Jesús Sánchez, Jairo Alberto Arango Isaza y Jesús Antonio Bustamante Triana, José Abelardo Giraldo González, Pedro Ángel Quintero Isaza, John Fernando Lopera Gil, Helmer Antonio Henao Castrillón, César Julio Ruíz Arévalo, Ramón Gómez Priolo, Luis Hernando Quintero Isaza, Héctor Antonio Restrepo Villa, Cesar Julio Ruiz Acevedo, Nelson Piedrahita Londoño, Miguel Ángel Davila Valencia y Eric Jorge Perilla Valencia . Con fecha 4 de diciembre de 2014 aparece la transliteración de audiencia de versión libre conjunta anteriormente mencionada. Oficio del 9 de diciembre de 2014 de la dirección de talento humano de la policía nacional indicando información de distintos agentes, [redacted] Identifican a Freddy como Luis Alfonso Suárez con cédula de ciudadanía 8.111.627, Se allegaron copias de las versiones de Luis Eduardo Zuluaga y Walter Ochoa Guisao donde confesaron la participación en los hechos de la Esperanza. Se obtuvo que no existen versiones diferentes de desmovilizados que refieran el caso de la esperanza en Justicia y Paz. Se localizó al Brigadier General Carlos Vargas Forero para posteriormente recibir declaración. El 27 y 28 de agosto se realizó inspección judicial en la XIV brigada en Puerto Berrío, se obtuvo 16 folios, no se ha obtenido la información de las personas que viajaron el 25 de junio con el brigadier Vargas Forero. Los días 3, 4, y 9 de septiembre se realizó inspección judicial en el archivo central de la procuraduría. Se extraen varios folios, que se relacionarán en los anexos. Se obtuvo por parte de la Fiscal 47 de la Dirección de Justicia Transicional, informe de la situación de orden publico que se vivía en 1996 en la vereda la Esperanza Se aporta cuadro donde se relacionan los sujetos del grupo de hombres que hacían parte

Al día siguiente, se presentó otro Informe de Policía Judicial[513] en cumplimiento de la orden de trabajo del 02 de septiembre de 2014, la cual tenía como objeto la identificación de miembros del grupo los halcones y personas mencionadas por postulados en versiones sobre el caso de La Esperanza.[514]

Se anexan las copias del proceso disciplinario adelantado por la Procuraduría General de la Nación bajo el radicado 008-10799-98 por los hechos ocurridos en el Carmen de Viboral el 21 de junio de 1996. Copias de actuaciones judiciales, inspecciones judiciales y testimonios que ya obraban en la investigación penal por las desapariciones forzadas de la Vereda La Esperanza

El 29 de diciembre de 2014 a parece otro Informe de policía judicial sobre orden de trabajo No. 23120 que versa en obtener información sobre varias personas identificadas por sus alias sobre las que no se obtienen resultados[515].

Se agregó al expediente un oficio de la personería de Puerto Triunfo, que remite oficio de la parroquia san Juan María Vianey, indicando que no se encuentran registros de inhumaciones de cadáveres para 1995 en la parroquia de esa municipalidad[516].



15 de enero de 2015, se dictó oficio de la Fiscalía 47 especializadas de Justicia Transicional indicando lo mencionado por postulados de las ACMM que señalan la posibilidad de que algunas víctimas hubiesen sido inhumanas en terrenos aledaños a la Base de San Juan ubicada en Sonsón, se dan indicaciones sobre la misma, se ubica a 8 kilómetros de Doradal. Acorde a esto se solicitó intervención de la subunidad de exhumaciones de la misma dirección

del grupo los Halcones identificados en los folios 183 a 192, se ingresa la información de todas las fuentes consultadas ubicando nombre, alias y otra información relevante. El 10 y 16 de diciembre de 2014 la Registraduría del Estado Civil remite la información solicitada por la Fiscalía General de la Nación.

513 Folio 1-14 cuaderno 18 radicado 233 de la Unidad Nacional DH y DIH. ANEXO 2 del ESAP.

514 Jairo Alberto Arango Isaza, Alias Calimán desmovilizado del Frente José Luis Zuluaga, patrullero, subordinado de Mcgiver. Jesús Antonio Gómez Bedoya, alias Corozo, miembro de los urabeños del magdalena medio. Procesado por tráfico fabricación o porte de estupefacientes, concierto para delinquir, calumnia. Nelson Piedrahita Londoño, Alias Pirringo. Relacionado con las autodefensas de Fresno Tolima, al parecer trasladado a Marquetalia Caldas. Osman de Jesús Marín Montoya, alias Pirringo o Mauricio. Comandante de un grupo que delinquen en las margaritas de manzanare, procesado por homicidio. José Gabriel González Alias Campeón, Miembro de las ACMM. Comandante de patrulla, mismo nivel que alias teniente según organigrama en el FL 8. Pedro Ángel Quintero, alias Pedrucho. Miembro de las ACMM, comandante en Guaduas y Cambao Cundinamarca. Helmer Antonio Henao, Alias Cota, Miembro de las ACMM. Comandante de patrulla, mismo nivel que alias teniente según organigrama en el FL 8. César Julio Ruíz Arévalo, considerado lugarteniente de Ramón Isaza, Cabo del Ejército Erick Perilla, Alias Álvaro. Miembro de las ACMM en la Unión. Muerto en 08/12/2006 ya estando desmovilizado.

515 Folio 138-140 cuaderno 19 radicado 233 Unidad Nacional DH y DIH. ANEXO 2 del ESAP.

516 Folio 141-142 cuaderno19 radicado 233 Unidad Nacional DH y DIH. ANEXO 2 del ESAP.

517 Folio 241-244 cuaderno 18 radicado 233 Unidad Nacional DH y DIH. ANEXO 2 del ESAP.

para que se disponga una labor de prospección y exhumación de posibles restos[518]. El Fiscal Coordinador del grupo de exhumaciones informó al Despacho mediante oficio del 2 de febrero de 2015 que se realizaran labores investigativas para verificar la información obtenida sobre la ubicación de la base paramilitar de San Juan[519].

El 19 de enero de 2015 se aporta el acta de Diligencia de versión libre de Camilo Zuluaga Zuluaga. Manifiesta no haber participado en la desaparición de las personas de la Esperanza, dice solo haberlos cuidado en la base San Juan[520]. Se anexan al expediente el Acta aportada el 19 de enero de 2015 de la diligencia de versión libre de Walter Ochoa Guisao, quien confesó haber participado de la incursión en la que se retiene a Fredy y Juan Carlos. Dice no saber de vínculos con la fuerza pública[521].



El Fiscal coordinador del grupo de exhumaciones informa al Despacho mediante oficio del 2 de febrero de 2015 que se realizaran labores investigativas para verificar la información obtenida sobre la ubicación de la base paramilitar de San Juan[524].

El 20 de febrero de 2015 se solicitó la creación de un grupo de tareas especializadas conformada por antropólogos, odontólogos, fotógrafos y topógrafos para apoyar la investigación.



518 Folio 221-223 cuaderno19 radicado 233 Unidad Nacional DH y DIH. ANEXO 2 del ESAP.

519 Folio 224 cuaderno19 radicado 233 Unidad Nacional DH y DIH.

520 Folio 245-247 y 251 cuaderno 18 radicado 233 Unidad Nacional DH y DIH.

521 Folio 248-250 cuaderno 18 radicado 233 Unidad Nacional DH y DIH.

522 Folio 144 cuaderno19 radicado 233 Unidad Nacional DH y DIH. ANEXO 2 del ESAP.

523 Folio 254-255 cuaderno 18 radicado 233 Unidad Nacional DH y DIH. ANEXO 2 del ESAP.

524 Folio 224 cuaderno19 radicado 233 Unidad Nacional DH y DIH. ANEXO 2 del ESAP.

525 Folio 260-261 cuaderno 18 radicado 233 Unidad Nacional DH y DIH. ANEXO 2 del ESAP.

[redacted]

El 23 de febrero de 2015 se deja constancia de citación telefónica al señor Carlos Arturo Valbuena para que comparezca el 27 de febrero de 2015 en la Fiscalía 80[527]

La Fiscalía ordena nuevas pruebas mediante Resolución expedida el 25 de febrero de 2015 resultantes de la información ofrecida por la testigo Delfa Isaza en su declaración ante la Fiscalía[528].

Se allega al expediente Oficio del 26 de febrero de 2015 mediante el cual se hace entrega de información relevante sobre los militares que operaron en la zona de la Fuerza de Tarea Aguila.[529]

Aparecen en la foliatura un oficio en respuesta técnicos investigadores del CTI indicando que no se tiene información de cuerpos sin vida recuperados en el río Magdalena[530].También, se informó que por parte de distintas autoridades estatales que no tienen información sobre los desmovilizados del EPL en 1996 en el Carmen de Viboral[531]

[redacted]

La Fiscalía de Justicia y Paz remite Oficio con fecha 27 de febrero de 2015 aportando información sobre las versiones libres rendidas por los Postulados Luis Eduardo Zuluaga, Walter Ochoa Guisao, Camilo Zuluaga, Ramón Isaza, Ovidio Suaza y Edgar de Jesús Cataño rendidas los días 54 y 5 de diciembre de 2014.

Nuevamente, el Ejecutivo y segundo comandante del grupo Juan del Corral del Ejército solicito al Fiscal del caso, información sobre el estado de la investigación 233 por las desapariciones forzadas de la Vereda La Esperanza. El Fiscal 80 indica que dicho proceso cuenta con reserva sumarial[533].

Finalmente, se presentó un oficio dirigido el 9 de marzo de 2015 al fiscal 47 de la fiscalía de Justicia Transicional indicando que el 11 de noviembre de 2014. Igualmente, se solicitó por

526 Folio 262-263 cuaderno 18 radicado 233 Unidad Nacional DH y DIH. ANEXO 2 del ESAP.

527 Folio 266 – 268 cuaderno 18 radicado 233 Unidad Nacional DH y DIH. ANEXO 2 del ESAP.

528 1) Escuchar en declaración a Carlos Arturo Valbuena. 2) Identificar plenamente a Mónica Arismendi para escucharla en declaración. 3) Identificar a Cielo Ramírez y Eumelia Espinal, señaladas por María Delfa como testigos, para que depongan sobre los hechos de la presente resolución.

529 Folio 1 cuaderno19 radicado 233 Unidad Nacional DH y DIH. ANEXO 2 del ESAP.

530 Folio 114-115 cuaderno19 radicado 233 Unidad Nacional DH y DIH. ANEXO 2 del ESAP.

531 Folio 116-119 cuaderno19 radicado 233 Unidad Nacional DH y DIH. ANEXO 2 del ESAP.

532 Folio 146-147 cuaderno19 radicado 233 Unidad Nacional DH y DIH. ANEXO 2 del ESAP.

533 Folio 227-288 cuaderno19 radicado 233 Unidad Nacional DH y DIH. ANEXO 2 del ESAP.

parte del fiscal 80 de la UNDH la creación de un grupo interdisciplinario para el caso. Se solicita su apoyo al caso[534]

### M. RADICADO 22.317 de la Fiscalía 53 Delegada ante Jueces del Circuito Especializado, destacada ente el GAULA Rural.

Este proceso es actualmente adelantado por la Fiscalía 29 Especializada de la Unidad de Desplazamiento Forzado y Desaparición forzada.

Lo primero es señalar la Fiscalía 80 que adelanta la investigación radicada con el No.233 de la UNDH – DIH ordenó mediante resolución del 11 de noviembre de 2014, una serie de pruebas entre las que dispone que "Finalmente, por conexidad se ordena acumular la averiguación respecto de la desaparición del señor Leónidas Cardona, a la presente investigación, la cual se atribuye por la señora Luz Dary Cardona Giraldo a las autodefensas del Magdalena Medio lideradas por Ramón Isaza"[535]. Sin embargo, a la fecha no se ha solicitado a la Fiscalía que tiene a su cargo la investigación el envío de la misma.

De la actuación adelantada en la Fiscalía por la investigación por la desaparición forzada de Leónidas Cardona y Andrés Antonio Gallego se tiene que se inició con la denuncia presentada por la señora María del Rocío Cardona Fernández, esposa de Leónidas Cardona Gallego, ella señala cómo fue desaparecido su esposo el 27 de diciembre de 1996, indicando la forma en que paramilitares llegan a su casa y preguntan por el señor Leónidas, inclusive solicitan su cédula de ciudadanía. Así mismo, la señora María del Rocío, señala cómo el señor FREDY, es quien señala a su esposo de vivir en Cocorná y de ser cercano a un presunto guerrillero llamado Diego[536]. Ese mismo día, es formulada denuncia por parte de la señora María De La Cruz Hernández Gallego, esposa de Andrés Antonio Gallego Castaño, ella relata sucintamente como ella se entera de la desaparición de su esposo sucedida el 27 de diciembre de 1996, y señala que a la fecha de los hechos no se encontraba en la vereda. A Andrés, señala su esposa en la declaración, se lo llevaron hombres armados, presuntamente paramilitares.[537]

El proceso se envía el 31 de diciembre de 1996 a la Fiscalía regional en Medellín, el 13 de enero de 1997 es radicado ante la unidad tercera de dicha Fiscalía, donde se le asignó el número 22.317. Posteriormente el 17 de enero del mismo año, fue asignado a la Fiscalía delegada ante el GAULA rural.

El 2 de enero de 1997, la personera del Carmen de Viboral, remite el testimonio del señor Gabriel De Jesús Cardona Fernández, quien manifiesta que es común que se realicen

---

534 Folio 226 cuaderno19 radicado 233 Unidad Nacional DH y DIH. ANEXO 2 del ESAP.

535 Folio 68 al 69. Cuaderno 16. Radicado 233 de la UNDH - DIH ANEXO 2 del ESAP.

536 Folios 1-2 Radicado 22.317 Fiscalía 53 Delegada ante Jueces del Circuito Especializado, destacada ente el GAULA Rural.

537 Folio 3 Radicado 22.317 Fiscalía 53 Delegada ante Jueces del Circuito Especializado, destacada ente el GAULA Rural.

incursiones paramilitares en complicidad con las fuerzas militares ya que al mismo tiempo que los paramilitares ingresan a la vereda la tropa del ejército es retirada del lugar de la toma[538]

En los folios 15 a 20, el CTI intenta recaudar información sobre el caso indagando al Procurador Regional de Antioquia, al Defensor del Pueblo de Antioquia, al comandante del Batallón Barbacoas, al Fiscal coordinador de la unidad de Fiscalía seccional del Santuario, al Fiscal coordinador de la unidad de Fiscalía local de Cocorná, y al Fiscal antisecuestro de Rionegro. De dicha búsqueda de información cabe resaltar la respuesta obtenida por el Defensor del Pueblo quien adjunta copias del informe rendido por la sección de investigaciones especiales del CIT regional sobre la situación del municipio del Carmen de Viboral Rad 5212-J. De igual manera, se remitió copia de los oficios 4 de julio 08 de 1996 y 21 de octubre del mismo año que confirma la presencia de grupos paramilitares en Cocorná, Rad 7462-J[539].

El 28 de septiembre de 2001, se remitió la investigación a la Fiscalía especializada ante el GAULA de oriente, siendo la tercera vez que se cambia de Fiscalía sin ningún avance significativo en el proceso, y sólo hasta el 10 de enero de 2003 la Fiscalía 53 especializada ante el GAULA del oriente Antioqueño asume la investigación. El 27 de marzo de 2003, el jefe de la unidad de fiscalías especializadas ordena suspender la investigación[540]. La investigación dura suspendida hasta el 24 de febrero de 2009 cuando la misma Fiscalía 53 ordena reactivar el expediente y en un término de 40 días dispone la práctica de distintas pruebas, entre las cuales se incluye ampliación de denuncia de las señoras María del Rocío Cardona y María de la Cruz Hernández, las cuales reposan en los folios 60-65 y 86-95 respectivamente.

[redacted]

En oficio del 27 de Julio de 2009, se solicita que se unifiquen las actuaciones del presente proceso y del proceso 233 que se adelanta ante la UNDH, manifestando que se trata de hechos similares con los mismos materiales probatorios, que han ocurrido en el mismo contexto y posiblemente sean los mismos responsables. Esta petición es reiterada el 5 de noviembre de 2009, es respaldada por la parte civil mediante escrito del 05 de mayo de 2010, el 22 de julio de 2010 es rechazada la petición por parte de la fiscal 80, quien argumenta que no existen las causales para que se acumulen los procesos, debido a que los sucesos del

[538] Folios 11-13 Radicado 22.317 Fiscalía 53 Delegada ante Jueces del Circuito Especializado, destacada ente el GAULA Rural.

[539] Folios 25-32 Radicado 22.317 Fiscalía 53 Delegada ante Jueces del Circuito Especializado, destacada ente el GAULA Rural.

[540] Folios 42-43- Radicado 22.317 Fiscalía 53 Delegada ante Jueces del Circuito Especializado, destacada ente el GAULA Rural.

proceso 233 son independientes de los del 22.317 ya que los del primero tuvieron lugar en Julio de 1996 mientras que los del segundo tuvieron lugar en diciembre del mismo año[541].

La investigación penal pasó a la Fiscalía 29 Especializada de la Unidad de desplazamiento forzado y desaparición forzada de la ciudad de Medellín.

### A. Procedimiento de la Ley 975 de 2007 denominado Justicia y Paz: Fiscalía 47 de la Unidad de Justicia transicional delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá. Sala de Justicia y Paz:

El 7 de febrero de 2006, en el marco del proceso de negociación con las estructuras paramilitares, se produjo la desmovilización del grupo paramilitar comandado por Ramón María Isaza Arango, denominado autodefensas campesinas del magdalena medio. En dicha desmovilización se entregan 990 hombres y mujeres, de los cuales 786 fueron cobijados con las medidas del decreto 128 de 2003, con ello luego de rendir versión libre obtuvieron beneficios jurídicos que implicaron total impunidad. En cuanto al procedimiento de la ley 975 de 2005, ley de Justicia y Paz, se postularon 204 personas, entre ellas el señor Ramón María Isaza Arango.

La actuación judicial empieza, según la Carpeta que fue entregada al representante de las víctimas de las desapariciones forzadas de la Vereda La Esperanza, con la recolección de varios registros de hechos delictivos de víctimas que señalaban a esa esa agrupación ilegal como responsable de sus afectaciones, pero que no se correspondían con los hechos ligados con las desapariciones forzadas de la Vereda La Esperanza.[542]

El día 16 de octubre de 2008 se llevó a cabo la primera diligencia de versión libre al postulado Ramón María Isaza Arango, que tuvo la participación de los familiares de las víctimas. El Señor Isaza, su Defensor, el Ministerio Público y la Fiscalía se encontraban en la ciudad de Bogotá y los familiares en una sede habilitada para la transmisión de la audiencia en la ciudad de Medellín, junto con sus representantes. Ese mismo día, la Fiscalía tomó los registros de víctimas a los familiares de Andrés Gallego,[543] Aníbal Gallego[544], Leonidas Cardona[545], los niños Juan Crisóstomo y Miguel Ancizar Cardona Quintero, [546]Javier Giraldo Giraldo[547]. También en esa misma oportunidad recibió entrevistas a Maria del Rocío Cardona Fernandez,

---

541 Folios 101-101 Cuaderno No. 13 radicado 233 UNDH – DIH. ANEXO 2 del ESAP.

542 A folios 1 al 50 Documentación relativa a los casos de Geovani y Héctor Morales: Entrevistas, Registro de hechos atribuibles a grupos organizados, fotocopias de cédulas y registros civiles, constancias de investigaciones penales "ordinarias". Folios 168 – 185 Documentación relativa al caso de Luis Gonzaga Fernandez Jimenez y Arciades de Jesús Gallego Quintero. Folios 400 – 406 Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley, en la muerte de Otoniel de Jesús Gallego Quintero

543 Folios 51 – 55 Carpeta No. 201536 UNJYP, ANEXO 5 del ESAP.

544 Folios 56 – 67 Carpeta No. 201536 UNJYP, ANEXO 5 del ESAP.

545 Folios 82 - 96 Carpeta No. 201536 UNJYP, ANEXO 5 del ESAP.

546 Folios 97 – 101 Carpeta No. 201536 UNJYP, ANEXO 5 del ESAP.

547 Folios 102 – 103 Carpeta No. 201536 UNJYP, ANEXO 5 del ESAP.

Diana Marcela Quintero, María de la Cruz Hernandez de Gallego sobre la desaparición de Andrés Gallego, Florinda de Jesús Gallego Hernandez, Eladio Gallego Quintero, Oliva del Socorro Mejía de Gallego, Carlos Amador Muñoz Muñoz, María Nohelia Zuluaga Marulanda[548].

En la diligencia de versión libre, el procesado reconoció la planificación de las desapariciones forzadas por parte del General Manosalva, el Mayor Hernández y su hijo Omar Isaza, alias Teniente. En esa diligencia estableció que

> "la existencia de una lista que fue entregada a Alias Teniente "[…] Entonces el hombre eso hizo le mandaron un Teniente y el Teniente fue hasta el Doradal. En el Doradal se vinieron en dos carros de la organización, dos carros que mantenían al Teniente para arriba y para abajo, fueron hasta Bogotá, hasta Medellín, perdón y hablaron con el General. Fue así como el General le explicó la situación al hijo mio y le entregó una lista de gente que habitaban a los lados de la autopista" **FISCAL** El entonces Mayor le entregó a su hijo Teniente una lista. POSTULADO: No, directamente el General, se la entregó y le dijo vea, esta lista está hecha por la inteligencia de la Brigada y el Coronel Ospina, toda esa gente son guerrilleros, la mayoría son venidos de Urabá y están ahí y cuando la guerrilla hace paro, las casas de ellos son las casas de la guerrilla, nadie se les puede meter a las casas porque hay familia, hay de todo. Entonces que por favor le limpiara esa autopista en ese sentido, pero únicamente lo que fuera dentro de la lista […][549]" Esa lista estaba conformada por entre 74 y 78 personas. Afirma además que "[...] pero eso fue una cuestión planeada con una gente muy grande [...][550]"

A la carpeta que contiene la información recabada por la Fiscalía de Justicia y paz se allegaron una serie de documentos, informes, declaraciones, fotografías, mapasa, etc, que reposaban en el proceso penal ordinario seguido por las desapariciones forzadas de la Vereda La Esperanza[551] y que servirían e base a la Fiscalía de Justicia y Paz para apoyar la construcción de su narrativa para la formulación de cargos al Postulado.[552]

---

548 Folios 107 - 167 Carpeta No. 201536 UNJYP, ANEXO 5 del ESAP.

549 Cuaderno No. 14 Folios 34. Radicado 233 UNDH – DIH ANEXO 2 del ESAP.

550 Cuaderno No. 14 Folios 34. Radicado 233 UNDH – DIH ANEXO 2 del ESAP.

551 Informe evaluativo del 17 de julio de 1996 de los hechos de las desapariciones, elaborado por la dirección de investigaciones de la procuraduría general de la nación. Resolución que avoca conocimiento y decreta práctica de pruebas por parte del fiscal Regional de Medellín del y mapa del Cármen de Viboral. Oficio de la Personería del Carmen de Viboral dirigida a la Alcaldía del mismo municipio denunciando los hechos de la Esperanza. Artículos de prensa relativos al caso Y declaraciones, inspecciones, registros civiles, fotografías, informes de policía judicial, informes del estado del orden público de la zona, informes de la conformación de grupos al margen de la ley, resoluciones que ordenan práctica de pruebas. Folios 194 – 399 Carpeta No. 201536 UNJYP, ANEXO 5 del ESAP.

552 Informe del 13 de noviembre de 1996 de investigador del CTI que relaciona las siguientes entrevistas: Declaración de Javier de Jesús Quintero Martínez, quien expone maltratos del ejército en la vereda la Chapa, Carmen de Viboral, el 24 de mayo de 1996 Declaración de Fabio de Jesús Ramírez Alzate quien expone maltratos del ejército en la vereda la Chapa, Carmen de Viboral, el 25 de mayo de 1996. Informe del 27 de noviembre de 1996 suscrito por técnico judicial. Se cita el radicado 951 y da cuenta de entrevista con el padre de Alirio de Jesús Gallego Hernández. En dicho expediente se encuentra la constancia de la retención de Irene por parte de miembros del ejército. Informe evaluativo del 19 de diciembre de 1996, elaborado por la procuraduría indicando que el expediente del caso de la esperanza debe ser remitido a la procuraduría delegada para los Derechos Humanos. Oficio de la

La Fiscalía de Justicia y Paz, el 8 de junio de 2009 remitió a la Unidad Nacional de Justicia y Paz la una información que sustrae de la diligencia de versión libre del Postulado Ramón Isaza contra el General Manosalva y el Mayor Hernández[553], tomando como base un informe que realizaron al respecto investigadores de esa Unidad de fiscalía[554], para efectos de compulsar copias para abrir una investigación contra éstos. Esa información no fue adjuntada al Proceso ordinario seguido por las desapariciones forzadas, y no se conoce que haya avanzado la investigación iniciada a raíz de la citada compulsa de copias contra el personal militar referenciado.

El 21 de enero de 2009, la Fiscalía presenta una imputación parcial de los hechos de la Vereda La Esperanza al Postulado Ramón Isaza y califica la conducta como secuestro extorsivo, homicidio agravado en calidad de determinador; salvo con respecto al homicidio del Personero del Carmen de Viboral que le atribuye responsabilidad de mando, por ser el Jefe del grupo paramilitar del Magdalena Medio antioqueño.[555] [redacted] El Magistrado de Control de Garantías que conoció de la audiencia insistió en la calificación de los hechos como un genocidio[556].

---

fiscalía delegada ante el juzgado penal municipal de cocorná del 17 de abril de 1997, indicando que en dicho municipio no se adelantaron denuncias ni diligencias por los hechos de la esperanza. Oficio de la personería de cocorná 18 de abril de 1997, donde indica la lista de desaparecidos de la Esperanza. Resolución del 20 de octubre de 1997 que decreta pruebas dentro de proceso penal 233. Resolución que ordena pruebas dentro del radicado 233, del 1 de diciembre de 1997. Declaración de Alonso de Jesús Baquero, quien manifiesta haber conocido a Ramón Isaza, como jefe paramilitar del 11 de diciembre de 1997. Informe de investigador judicial sobre la elaboración de álbum fotográfico del 18 de diciembre de 1997. Resolución que reporta actividad judicial tendiente a la identificación de Ramón Isaza, y ordena la captura del mismo del 15 de enero de 1998. Informe de policía judicial que remite informe de inteligencia sobre las ACMM. Acta de inspección judicial realizada en la Registraduría, se obtiene cédula de Ramón Isaza del 23 de enero de 1998. Informe de investigador judicial del 2 de diciembre de 1996 sobre la masacre del 29 de noviembre de 1996 en el Municipio de Sonsón Antioquia. Informe de policía judicial del 24 de abril de 1998, donde se reciben testimonios de varias testigos del caso de la Esperanza. [redacted] Informe de policía judicial del 1 de febrero de 1999. Inspección judicial al lugar de los hechos. Informe confidencial sin fecha sobre las ACMM. Resolución que decreta la apertura de la instrucción en el radicado 233, ordenando vincular a Isaza y al mayor Guzmán Lombana por medio de indagatoria. Se decreta práctica de pruebas del 2 de mayo de 2000. Resolución que admite la demanda de parte civil del 15 de agosto de 2000. Informe sobre el frente Carlos Alirio Buitrago del ELN, sin fecha. Cédulas de Fredy Abad Galeano, Omar Alonso Galeano. Recorte de prensa, La violencia sacude al Cármen de Viboral. Transcripción de entrevista a Ramón Isaza y Fredy del 12 de diciembre de 2000. 25 de febrero de 2003 Nota de prensa de Tolima 7 Días. Identificación de 4 cuerpos en Mariquita Tolima. Declaración de Héctor Alonso Hernández Zuluaga, menor que apoya lo manifestado en la anteriormente mencionada declaración Denuncia del 4 de septiembre de 1996 de la CJL, suscrita por Jorge Molano. Se enuncian todos los hechos relacionados al caso. Folios 194 – 399 y Folios 423 – 582 Carpeta No. 201536 UNJYP, ANEXO 5 del ESAP.

553 Folio 583 Carpeta No. 201536 UNJYP, ANEXO 5 del ESAP.

554 Folio 584 – 588 Carpeta No. 201536 UNJYP, ANEXO 5 del ESAP.

555 Folio 605 – 644 Carpeta No. 201536 UNJYP, ANEXO 5 del ESAP.

556 El 06 de diciembre de 2011 se allega nota de prensa del portal verdad abierta: ¿Masacre o genocidio en la esperanza?. La cual hace referencia a solicitud de magistrado de justicia y paz, que en la formulación de cargos contra Ramón Isaza solicitó a la fiscalía definir si los hechos de la esperanza fueron una masacre o un genocidio. http://www.verdadabierta.com/component/content/article/83-juicios/3736-imasacre-o-genocidio/ ANEXO 6 del ESAP.

La Fiscalía elabora escrito de acusación con el caso No. 557, el 1 de abril de 2009, sobre la masacre de la Esperanza en el cual se le imputa la desaparición de 17 personas y la muerte de 3 más. A Isaza se le imputan a título de coautor los delitos de Secuestro extorsivo agravado y desaparición forzada agravada, en concurso con homicidio agravado, tortura, y hurto calificado y agravado.

El representante de las víctimas aporta el 26 de junio de 2009 a la actuación judicial un Video que contiene la entrevista dada por Ramón Isaza a una periodista de Teleantioquia del día de su desmovilización el 6 de febrero de 2006, en la cual señala la responsabilidad de militares en los hechos de la Esperanza[557]. Esa entrevista fue transcrita por el Despacho. [558]

El 28 de septiembre de 2009, se incorpora a la Carpeta la versión libre del paramilitar Ricardo López Lora, alias el Marrano, quien se atribuye el homicidio del Dr. Heli Gómez Osorio[559]. Y el 5 de diciembre de 2011 se incorpora también la ampliación de indagatoria rendida por Carlos Alberto Guzman Lombana dentro del proceso ordinario, radicado 233 de la UNDH - DIH[560].

El 16 de diciembre el representante de las víctimas envía al Fiscal del conocimiento un cuestionario con preguntas para ser absueltas por los Postulados Ramón Isaza Arango, Luis Eduardo Zuluaga Arcila, Walter Ocho Guisao y Camilo Zuluaga a quienes les programaron una versión libre conjunta[561].

La audiencia conjunta de los Postulados mencionados se llevó a cabo el día 19 de diciembre de 2011 en la ciudad de Bogotá. Ese día, y pasados 5 años después de haberse desmovilizado y encontrarse en el proceso de justicia y paz, los Postulados Luis Eduardo Zuluaga Arcila[562],

---

557 Folios 687 Carpeta No. 201536 UNJYP, ANEXO 5 del ESAP.

558 Folios 688 – 690 Carpeta No. 201536 UNJYP, ANEXO 5 del ESAP.

559 Folios 723-752 Carpeta No. 201536 UNJYP, ANEXO 5 del ESAP.

560 Folios 759-774 Carpeta No. 201536 UNJYP, ANEXO 5 del ESAP.

561 Folio 775-776 Carpeta No. 201536 UNJYP, ANEXO 5 del ESAP.

562 En su diligencia de versión libre rendida el 19 de diciembre de 2011 sostiene lo siguiente frente a las desapariciones forzadas de la Vereda La Esperanza: Sobre el detonante de las DESAPARICIONES: 10:16:21 Cuando venía de Medellín alias Teniente hijo de RI. Se presentó un reten de la guerrilla y se llevaron a un conductor civil a raíz de eso es que ya comienza a dar el desenlace (10:18:15) en esa Vereda La Esperanza y en ese sector de la Piñuela hasta el Alto de Santuario en un lapso de 6 a 7 meses "donde viene al otro día el pago de la extorsión o exigencia económica que hizo ese grupo por el rescate del conductor y el carro (10:18:40) a no el carro se lo dejaron traer (lo confirma Ochoa Guisao) y ellos van al otro día y se traen una pareja. Con rescate del menor: 10:19:30 "nosotros nos vamos en dos carros acompañando al costeño yo hice parte de ese acompañamiento y llegamos allá a las casas donde había dejado el niño ya no había nadie, esas casas estaban desocupadas todas. Subimos (10:19:49) a una quebrada que se llama la hundida y ahí nos encontramos a un señor que el costeño conocía y se bajó de una y dijo vea hermano el hijo mío lo tenía donde la señora no me acuerdo el nombre de esa señora ……. " " ya nosotros nos devolvimos en los carros y nos metimos por el río arriba cuando íbamos subiendo a las casas esas (10:20:10) dentramos en choque con la guerrilla comenzamos una confrontación con ellos y la guerrilla obviamente estaña en ventaja y nosotros íbamos en desventaja porque era una parte alta, más sin embargo, comenzamos a maniobrar y la guerrilla se retiró de ahí, entramos a la casa y ahí estaba el niño de costeño (10:20:32) "…. él se trajo el hijo y volvimos y nos desplazamos hacia la parte de Doradal". Sobre la retención de un muchacho: 10:26:26 "ahi un muchacho ahi que yo escuché dentro de los relatos que Ustedes tienen que nosotros nos lo trajimos, ese muchacho iba con nosotros un domingo subiendo en un patrullaje de rutina cuando estaba en el intermedio de la entrada de Cocorná y la Vereda La Esperanza y estaba en una piedra tenía un radio, entonces ahí mismo nos tiramos el salio corriendo más sin embargo lo cogimos y nos lo trajimos, pero a ese muchacho si le dimos de muerte más abajo de la Vereda Chagualá (10:27:00). De la relación de los Paramilitares con los militares: 10:10:11 y ss

Walter Ocho Guisao[563] y Camilo Zuluaga[564], admiten haber participado en los hechos de la Vereda La Esperanza. Y Ramón Isaza, mantiene su versión de involucrar a los militares que en

---

Cucuyo empieza a hacer el acercamiento con el Mayor HERNANDEZ en mayo de 28 de 1994 cuando matan a José Luis Zuluaga Arcila y el My HERNANDEZ. En el minuto 10:14 y ss cita una reunión con el My. HERNANDEZ y otros oficiales, entre ellos el Cabo HERNANDEZ, que en las ACMM se llamó con el alias de CAZADOR. ARPON, era un teniente que pasó a Capitán. "por problemas que a ellos se les desataron a raíz de todas estas operaciones de allá del Carmen de Viboral pasaron a ser parte de las autodefensas" Y el Cabo ERIC PERILLA que se conoció en las autodefensas como ALVARO. 10:15 Ellos nos proponen hacer unos trabajos en la autopista "porque a ellos les habían metido una bomba a los del ejército ahí en ese intermedio de la Mañosa a la entrada de Cocorná y habían matado varios soldados y ahí que actuábamos con ERIC PERILLA como agente de civil del DOS …" Referencia un Ataque a los soldados en la Mañosa: 11:01:39 JOSE EVARISTO CASTAÑO DAZA "este señor estaba involucrado con una bomba que le metieron al ejército en la Mañosa donde mataron varios oficiales y se le llevaron el armamento" 11:02:50 También habla de una retención de un MAYOR de civil: 10:35:20 "A raíz de esto a nosotros HERNANDEZ nos dice, cosa que se la dicen, le dicen a Teniente y a Cucuyo de que se habían llevado al Mayor y que había que hacer presión para ver como entregaban a ese mayor: Había una señora en la Vereda La Granja ….. la mamá de tres guerrilleros del ELN …. esa señora nosotros nos la trajimos con el fin de hacer un intercambio por el Mayor (10:36:20) pero no se logró nada porque la señora se murió de repente" 10:36:37 La señora se llamaba LETICIA. 10:59:17 María Leticia García Guarín la fecha de la retención fue 1994 – 04 – 16 de la Vereda La Veta. 10:30 y ss Dice que los primeros contactos con el My HERNANDEZ son a través de CUCUYO.

[563] **En la versión libre rendida por este postulado ante Justicia y Paz el día 19 de diciembre de 2011** da cuenta de la existencia de un **Reten de la guerrilla, al respect dice que s**e encuentraba en Medellín con alias TENIENTE: **10:37:33** "estando en Medellín, el médico, porque el tenía una lesión grave …. duramos como un lapso de 8 meses en Medellín …. en una bajada de esas como a las seis de la tarde más o menos **(10:38:22),** ya estábamos llegando al cruce de Cocorná, al pasar el puente de Cocorná, hay una curva y nosotros visualizamos un retén …. " **Menciona que** El conductor se bajo para ayudar al Comandante de la guerrilla hacer una llamada por celular que llevaban **10:41:25** "bajan a una persona a un gordo de contextura gorda ----" Y vio a dos peladitos con dos adultos bajar al Sr. Gordo. **10:42:45** Narra el momento en que el Comandante de la guerrilla decidió dejar al conductor retenido y dejarlos a ellos seguir el camino. **Sobre el desencadenamiento de las Desapariciones Forzadas dice que** Teniente llama a Pedrucho, Cucuyo, le informan al **viejo.** A Cucuyo lo mandaron **esa misma noche** a conseguir información "como a las cinco de la tarde nos trajo informaciones concisas "que eran milicianos del EPL, que esta gente mantenía en lavaderos de carros, que tenían fachadas de lavar carros, de tener tiendas, pues se tomó la determinación, ya había la información de una pareja netamente guerrillera ….." **(10:45:37)** "Arrrancamos de las Mercedes por ahí a las seis m{as o menos de la tarde ….." NARRA LA RETENCION DE LA PAREJA "llegamos a las Mercedes poco más o menos de las diez y media de la noche....." **(10:47:20). Al minute ¡10:48:50** Narra que se devolvieron y con la información del costeño capturaron a los dos menores, casi en horas de la madrugada. (**10:49:20)** Y en esa misma casa se cogió a otro guerrillero que se iba a hacer una cirugía de una hernia. Dice que los menores y en joven enfermo "ellos tres, o sea los dos, habían sacado al conductor esa misma noche, ellos sacaron al conductor porque hablando con el conductor tenía un parecido a alguien que trabajaba para la empresa de Rio Claro que manejaba el transporte allá que le decían MEMO …. creo que el hombre en alguna ocasión por ende se le montaría a la guerrilla le obligaría a cargarlo entonces lo que dijo el hombre fue no no no le vamos a hacer nada a este porque este hombre es servicial y nos ha cargado, este es MEMO el de Rio Claro, entonces el hombre se la cogío ….. simplemente le dijeron sí tenía 300.000 pesos ahí te dejamos ir, entonces listo, …. y lo sacaron a la autopista a esa hora …. que efectivamente esos pelados, ese guerrillero lo habían sacado a él a la autopista". Dice que la guerrilla tuvo al conductor **10:52:00** "desde ese día a las seis paso el otro día el día todo y nosotros subimos a las seis de la tarde y a él lo habían soltado a las siete de la noche de ese otro día" **10:52:55** Dice que "las primeras personas que se retuvieron de esta Vereda fueron éstas" **Menciona que** después de estas primeras desapariciones ALIAS GURRE se devuelve para Medellín con alias TENIENTE **(10:53:08) Sobre la retención del Promotor de salud: 10:53:08** "sali nuevamente con costeño y ahí fue donde capturamos al promotor que al verlo entrando a la capilla el costeño dijo miren miren ese es otro miliciano …. se retuvo esa persona y también fue entregado a Pedrucho de ahí hasta ahí es mi participación en estos hechos. Video que contiene la audiencia de version libre.

[564] Versión libre Dic. 19 de 2011 Sobre la permanencia de las víctimas en la Base PM de San Juan: 11:37:37 "… Pedrucho llegó con los señores, o sea con la Pareja que fue el costeño y la señora, los dos menores de edad y otro señor, uno barbado él" (11:37:52) "… *ahí los tuvimos por medio de 4 días a todos* al grupo ese" HABLA EL FISCAL y contesta "si si a los cinco esos … a los dos menores de edad, al barbado ese y a la pareja allá entonces Pedrucho le entregó esa gente a PITUFO que era el encargado ahí de la base ahí… ". Pedrucho llegó con la gente de él 11:38:56 "a la señora que yo me di cuenta la dejaron ir que para que fuera a reclamar el niño si me entiende y a los otros tres muchachos, a los dos menores de edad y al barbado se los llevaron porque al costeño si lo dejaron le

todas sus versiones se ha mantenido en señalar como determinadores de las desapariciones forzadas.[565]

El 22 de noviembre de 20011 Oficio de Walter Ochoa Guisao donde aporta información de distintos casos entre estos el de la Vereda La Esperanza[566]. Y el 19 de diciembre de 2011 se emite el informe de versión libre desarrollada ese mismo día

El representante de las víctimas solicita al Fiscal copia de los audios donde Luis Eduardo Zuluaga y Walter Ochoa Guisao reconocen su participación en los hechos victimizantes contra los miembros de la vereda la Esperanza ocurridos entre los meses de junio a diciembre del año 1996 y se aporta copia de la sentencia emitida por la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo donde se condena al Estado por estos hechos[567].

El representante de víctimas entrega al Despacho de justicia y paz escrito donde anexa las diligencias de indagatoria de los procesados Luis Eduardo Zuluaga, Walter Ochoa y Camilo Zuluaga rendidas ante la Fiscalía 80 de la UNDH – DIH en las cuales bajo la gravedad del juramento señalan como autor material y directo en las desapariciones forzadas a Ramón Isaza Arango, lo que evidencia las contradicciones que se han desarrollado a lo largo del proceso de justicia y paz. El Fiscal, mediante escrito del 14 de mayo de 2014 se pronuncia, informándole a la Parte civil que realizará labores de verificación para establecer si el postulado Ramón Isaza ha incurrido en faltas a la verdad que puedan ameritar la solicitud a la magistratura de su exclusión de justicia y paz.

Durante los días 4 y 5 de diciembre de 2014, se llevó a cabo otra audiencia de versiones libres con los Postulados Ramón Isaza, Luis Eduardo Zuluaga, Walter Ochoa, Camilo Zuluaga, Ovidio Daza y Edgar de Jesús Castaño, quienes se mantienen en sus posturas de fraccionamiento de sus comportamientos en relación con cada una de las desaparición forzada en la Vereda La Esperanza, niegan otras, sustraen de responsabilidad a los militares en los hechos, salvo el Postulado Isaza Arango que se mantiene en su versión. Sin embargo, esta situación, lejos de inspirar en la Fiscalía de Justicia y Paz un plan serio de verificación y constatación, se mantiene en realizar una audiencia de formulación de cargos parciales, dentro del mismo contexto de las desapariciones de la Vereda La Esperanza a los Postulados Zuluaga Arcila, Ochoa Guisao y Zuluaga Zuluaga, y "corregir y adicionar el contenido de la imputación hecha

---

dieron la oportunidad hasta donde yo sé a ellos se los llevaron y les dieron baja allá en el río". Sobre quienes le dieron muerte a las víctimas: CALI, MATAPERRO, COROZO, PIRRINGO (Grupo de Pedrucho). En relación con la retención de cuatro personas y uno se les fugó: 11:42:40 dice que él mismo mató a uno de ellos.

565 En ella dijo que Ganaderos y comerciantes afectados por la guerrilla en la autopista: 11:44:20 Buscaban que las autodefensas le metieran mano dura a esto. Pero no da nombres "nadie dio plata, simplemente nos daban información." Sobre la Lista de personas que entregó el Gr. Manosalva 11:53:16 ratifica que Teniente le mostró una lista que le entregó el Gr. Manosalva para limpiar la autopista. Esa fue la limpieza que cuenta Mac Giver y Gurre 11:54:25 "porque yo también dio digo más adelante que visto visto tanto muerto en la autopista lo que hice fue cambiarlo sacarlo de allá porque esa gente estaba caliente ya que el ejército y ya la policía estaban en contra de ellos, entonces los saqué y los metí para Caldas y la Dorada. Sobre el My. HERNANDEZ: ratifica que fue el que mataron en la Costa. Y Sobre la suerte de las víctimas: 12:02:46 Se le pregunta si acepta responsabilidad por el homicidio y dice que si todos fueron muertos "…unos los habían echado candela, otros los habían metido al Samaná y los otros los habían llevado para allá a investigarlos pero que habían ido a dar al Magdalena, al río Magdalena " "la finalidad era ultimarlos"

566 Folios 780 – 781 Carpeta No. 201536 UNJYP, ANEXO 5 del ESAP.

567 Folios 758 – 801 Carpeta No. 201536 UNJYP, ANEXO 5 del ESAP.

en su momento (14 de Abril de 2009) al señor Ramón Isaza ajustándola a las aceptaciones de responsabilidad consolidadas en la pasada versión del mes de diciembre /14[568]

### B. Jurisdicción Penal Militar:

El Juzgado 108 de Instrucción penal militar inicio investigación previa con ocasión de la denuncia presentada por el Personero del Municipio del Carmen de Viboral por las desapariciones forzadas ocurridas en la Vereda La Esperanza y el 8 de septiembre de 1997 profirió auto inhibitorio "al establecer que el personal militar era ajeno a los hechos denunciados, tomando en cuenta además informes de medios de prensa en los que se señalaba que las desapariciones investigadas ocurridas en la Vereda La Esperanza fueron cometidas por el comando de autodefensas campesinas liderado por Ramón María Isaza Arango, quien directamente en declaraciones transmitidas por un noticiero de televisión nacional reconoció públicamente ser el autor de los hechos que respondían al hecho de considerar a los campesinos desaparecidos colaboradores de la guerrilla"[569]

El 19 de mayo de 1999 el Comandante de la IV Brigada del ejército profiere auto de apertura investigación por las presuntas faltas contra el honor militar en hechos relacionados con acusaciones realizadas por los soldados a campesinos de la región de ser auxiliadores de la guerrilla sembrando temor por miedo a retaliaciones, investiga también hechos ocurridos en los primeros días del mes de junio donde presuntamente tropas de la FTA atacaron una vivienda, y otros hechos relacionados en el auto. Por los hechos relacionados resuelve el comando abstenerse de abrir investigación formal disciplinaria ordena el archivo definitivo.[570]

### C. Proceso disciplinario

El 10 de junio de 1995 el personero del Municipio del Carmen de Viboral Helí Gomez Osorio, (hoy desaparecido) mediante Comunicado No. PM- 069[571] le informa a la Procuraduría Provincial del Municipio de Rionegro la desaparición forzada de 2 campesinos a la localidad. El 19 de febrero de 1996, el mismo funcionario le informa a la Procuraduría Provincial la existencia de un grupo armado que realizó la mal llamada limpieza social y que son responsables del homicidio de varias personas con antecedentes judiciales[572]. En igual sentido, el 13 de abril de 1996 denuncia la detención y torturas de varios campesinos de la Vereda La Honda, por parte de soldados del Batallón Granaderos, del Ejército Nacional. También denunció que el 24 de mayo 24 de 1996 personal del Batallón Barbacoas en su recorrido por la

---

568 Oficio No. 0217 del 27/02/15 de la Fiscalía 47 delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá. Folio 151. Cuaderno No. 19 Radicado 233 UNDH – DIH ANEXO 2 del ESAP.

569 Escrito del Estado Colombiano del 7 de junio de 2000.

570 Folios 78 – 81 Cuaderno No. 4 radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

571 Folio 22 Cuaderno No.1 Expediente No. 008-10799-98 Procuraduría delegada disciplinaria de Derechos Humanos, en CD notificado por la Corte IDH CD4 denominado "Proceso Disciplinario", folder "RAD0081079998".

572 Folio 21 Cuaderno No.1 Expediente No. 008-10799-98 Procuraduría delegada disciplinaria de Derechos Humanos, en CD notificado por la Corte IDH CD4 denominado "Proceso Disciplinario", folder "RAD0081079998".

vereda la Chapa ingresó a varias viviendas y trató de abusar de unas menores de edad y atropello físicamente a varios campesinos, acusándoles de ser colaboradores o auxiliadores de la guerrilla y no suministrar información sobre dichos grupos armados.

El 12 de junio de 1996, el Coordinador de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría Seccional de Antioquia puso en conocimiento de la Procuraduría Permanente para la defensa de los Derechos Humanos[573] la existencia de un grupo ilegalmente armado que operaba en el Oriente Antioqueño y las actuaciones irregulares de tropas del Ejército colombiano en esa misma región antioqueña. El 24 de junio de ese mismo año, mediante auto No. 503, el Director Nacional de la Oficina de Investigaciones Especiales comisionó a la Seccional de Antioquia para adelantar la indagación preliminar y se dispuso realizar una visita al municipio del Carmen de Viboral. De dicha visita se rindió informe del el día 17 de julio de 1996[574] en el cual se relacionan las denuncias de la población campesina y de algunas autoridades del Municipio[575].

El 14 de agosto de 1996, se ordena la práctica de pruebas[576] y el investigador Carlos Mario Mejía Munera, Profesional Universitario de la Dirección Nacional de investigaciones Especiales de la Seccional Antioquia, rinde el mencionado informe del 17 de julio de 1996[577.] Y el 21 de agosto del año citado, dispusieron remitir la indagación a la Dirección nacional de Investigaciones Especiales Unidad de Derechos Humanos recomendado remitir lo actuado a la Procuraduría delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, con el fin de dar apertura a la investigación disciplinaria correspondiente, dado que ella es la competente para conocer de faltas gravísimas contra el derecho internacional humanitario y el régimen disciplinario interno.

La Procuraduría Delegada disciplinaria para los derechos humanos avoca conocimiento el 24 de junio de 2004 radicando la investigación bajo el Nro. 008 – 10799 – 98 y casi dos años más tarde, esto es, el 19 de junio de 1998 ordenó la práctica de diligencias probatorias y aclaratorias578. Luego de recibir las respuestas a las solicitudes de pruebas ordenadas, el 11

---

573 Mediante oficio PM-045 del 12 de junio de 1996.

574 Oficio D.N.I.E. 914-1 Folios 7-9 Cuaderno No.1 Expediente No. 008-10799-98 Procuraduría delegada disciplinaria de Derechos Humanos, en CD notificado por la Corte IDH CD4 denominado “Proceso Disciplinario”, folder “RAD0081079998”.

575 Se recogieron las denuncias instauradas en las Personerías de el CARMEN DE VIBORAL y de COCORNÁ, de las cuales se desprende la desaparición de 16 personas de la vereda La Esperanza, perteneciente al municipio del Carmen de Viboral, en extrañas circunstancias y posiblemente como retaliación del secuestro en dicha zona del señor ALBERTO RAMIREZ, presunto jefe paramilitar del Magdalena Medio. Se deja constancia de que el conflicto armado en la zona es latente, la presencia de grupos subversivos que tienen como base financiera el secuestro y la reacción de un grupo armado paramilitar en contra de la población civil han llevado a que la vereda en mención prácticamente haya sido desocupada.

576 Mediante auto Nº. 0699 del 14 de agosto de 1996.

577 En el informe del investigador se concluye que con base en el acervo probatorio allegado existen indicios que comprometen a miembros del Ejército Nacional, constituyendo falta gravísima contra el Derecho Internacional Humanitario, así como violación al régimen disciplinario interno.

578 Entre las pruebas solicita 1) información a diferentes autoridades encargadas de las investigaciones penales. 2) Devuelve unos los INSITOP aportados al proceso, al funcionario investigador Dr. Carlos Mejía Múnera para que amplíe su informe evaluativo y precise dicha información militar ya que es poco clara. 3) al Ministerio del Interior, al comando de las Fuerza Militares, a la Dirección General de la Policía Nacional y a la Dirección del DAS certificación sobre las acciones tomadas para erradicar y evitar estos síntomas de violencia. 4) a la Fiscalía General

de septiembre del año 2000, decidió archivar provisionalmente la actuación ya que no existen suficientes elementos probatorios sobre quienes pudieran ser los responsables.

El 30 de noviembre 2000 se reasigno la investigación al abogado Edgar Orlando Pinilla, para que realice inspección al expediente penal, una vez realizada, el 29 de enero de 2003, mediante escrito dirigido a Gabriel Jaime Tobón Naranjo, procurador delegado disciplinario en derechos humanos, la asesora G-22 Isabel Durán Murillo[579] manifiesta la necesidad de esperar la desición de la fiscalía en el proceso penal, ya que sobre la investigación del Mayor Carlos Alberto Guzmán Guevara, no hay aún una decisión, y por ello no hay suficientes elementos de juicio para decidir sobre la reapertura del proceso disciplinario[580].

Finalmente en escrito del 2 de septiembre de 2003 el procurador delegado para derechos humanos resuelve mantener el archivo del proceso disciplinario argumentando que el auto del 11 de septiembre de 2000 que se había proveído tiene calidad de cosa juzgada frente a funcionarios públicos, y que al ser el Ramón Isaza el presunto responsable, y se esté un particular y no un funcionario público no es competencia de la procuraduría, descartando seguir la investigación con respecto a funcionarios públicos que se viesen implicados en la masacre de la vereda La Esperanza [581]

### D. Proceso contencioso administrativo

En relación con la acción de reparación en el orden interno, la Nación - Ministerio de Defensa fueron declarados administrativamente responsables por las desapariciones forzadas de Aníbal de Jesús Castaño Gallego, el menor Oscar Hemel Zuluaga Marulanda, la jóven IRENE DE JESUS GALLEGO, Juan Carlos Gallego Hernández, Jaime Alonso Quintero, Hernando de Jesús Castaño Castaño, Octavio de Jesús Gallego Hernández y Orlando de Jesús Muñoz. Dicha sentencia fue reconocida a los familiares demandantes mediante Resolución No. 2265 del 23 de abril de 2012[582].

La demanda de reparación por la desaparición forzada de los menores Juan Crisostomo y Miguel Ancizar Quintero se encuentra desde 22 de mayo de 2007 en apelación ante el Consejo de Estado interpuesta por los demandantes ante la negación de las pretensiones en primera instancia,

El único caso en el que no se inició acción de reparación directa es en el caso del Homicidio del señor Javier De Jesús Giraldo Girado, así como por otros de los familiares de las víctimas de desaparición forzada que no demandaron por la situación de temor a que se vieron sometidos

---

de la Nación que informe sobre el estado de los diferentes procesos que se adelantan por los hechos motivo de investigación en ese despacho e informar la vinculación de servidores estatales como responsables de los mismos.

[579] Folios 452-454 Cuaderno No.1 Expediente No. 008-10799-98 Procuraduría delegada disciplinaria de Derechos Humanos.

[580] Folio 21 Cuaderno No.1 Expediente No. 008-10799-98 Procuraduría delegada disciplinaria de Derechos Humanos.

[581] Folios 457-461 Cuaderno No.1 Expediente No. 008-10799-98 Procuraduría delegada disciplinaria de Derechos Humanos.

[582] Ministerio de Defensa Nacional, Resolución No. 2265 del 23 de abril de 2012, ANEXO 34 del ESAP,

durante muchos años por el dominio que dentro de la región del oriente antioqueño tuvieron distintos grupos armados.

El día 24 de enero de 2002 se presentaron demandas de reparación directa por las desapariciones forzadas de los campesinos de la Vereda La Esperanza contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional ante el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Los procesos fueron los siguientes: 2002-00528, acumulado con el 2003-0284, 2002-00500, 2002-00488, 2002-00487 (este último acumulado con 2002-00483, 2002-00484, 2002-00485, 2002-00486, 2002-00529. En auto del 16 de mayo de 2007, se decidió acumular los procesos de la siguiente manera: los radicados 2003 - 02084, 2002-00500, 2002-00488, 2002-00487 (este último acumulado con 2002-00483, 2002-00484, 2002-00485, 2002-00486, 2002-00529), fueron acumulados con el proceso 2002-00528, tomando éste último como principal. El tribunal administrativo de Antioquia profiere sentencia el 15 de junio de 2010[583].

El proceso 2002-00527 (llevado por la desaparición de Juan Crisóstomo y Miguel Ancisar Quintero) no se acumuló con los 10 señalados, y actualmente, como ya se mencionó se encuentra en segunda instancia.

1. Radicado No. 2002 - 00483

Víctima: JUAN CARLOS GALLEGO HERNANDEZ

Demandantes:

MARIA ENGRACIA HERNANDEZ QUINTERO madre

AURORA GALLEGO HERNANDEZ hermana

MARIA DE LOS ANGELES GALLEGO HERNANDEZ hermana

FLORINDA DE JESUS GALLEGO HERNANDEZ hermana

La demanda fue presentada el 19 de julio de 2002 admitida el 16 de abril de 2002, el 13 de agosto de 2003 se comunica por estados auto que abre a pruebas el proceso.

El 5 de octubre de 2006 se pasa el expediente, a la oficina del oficial mayor, con oficio 1,260 mediante el cual se pide acumulación, el 5 de diciembre de 2006 regresa al magistrado ponente con oficio 1819, no se acumuló. El 7 de marzo de 2007 se reitera la petición.

El 13 de marzo de 2007 se pone en conocimiento la comisión de los testimonios realizada en el Carmen de Viboral.

El 20 de abril de 2007 sin resolver la solicitud de la acumulación de procesos se profirió auto dando traslado para presentar alegatos de conclusión. En auto del 16 de mayo de 2007, se acumulan los 10 procesos ya mencionados.

El 20 de octubre de 2008 se entregan alegatos de conclusión. El 9 de julio de 2010 se comunica por edicto sentencia del 15 de junio de 2010.

583 Esta sentencia se encuentra en los documentos notificados por la Corte IDH en el CD3 denominado "Sentencia Proceso Admvo", en PDF "sentencia la esperanza 1."

El 15 de julio de 2010 se interpone recurso de apelación. El 3 de agosto de 2010 se profiere estado que comunica la decisión de conceder el recurso. 28 de junio de 2011 auto que comunica que el Consejo de Estado resolvió no darle tramite al recurso de apelación interpuesto por las partes. El 20 de septiembre de 2011 pasa archivo

2. Radicado: 2002 – 00484

Víctima OSCAR HEMEL ZULUAGA MARULANDA

Demandantes:

MARIA ROMELIA MARULANDA DE ZULUAGA Madre

JOSE BERNARDO ZULUAGA ARISTIZABAL Padre

LUZ MARINA ZULUAGA MARULANDA Hermana

DANIEL ANTONIO ZULUAGA MARULANDA Hermano

BLANCA ORFILIA ZULUAGA MARULANDA Hermana

BERNANDO EFREN ZULUAGA MARULANDA Hermano

ARBEY ESTEBAN ZULUGA MARULANDA Hermano

SANDRA LILIANA ZULUAGA MARULANDA Hermana

MARIA NOHELIA ZULUAGA MARULANDA Hermana

GLADYS HELENA ZULUAGA MARULANDA Hermana

ADOLFO DE JESÚS ZULUAGA MARULANDA Hermano

Los hermanos de la víctima que no presentaron demanda de reparación en el orden interno fueron Omaira Lucia Zuluaga Marulanda, Jhon Arnilson Zuluaga Marulanda Y Anibal Alonso Zuluaga Marulanda.

Se presenta la demanda el 22 de junio de 2002, es admitida el 26 de agosto del 2002 y se comunica por estrados el 30 del mismo mes y año. El 27 de enero de 2003, es proferido auto que abre pruebas. El 28 de julio de 2005 se remite el proceso al despacho del Jairo Jiménez Aristizabal para resolver acumulación con el proceso 2002-0528. El 16 de mayo de 2007 se deciden acumular 10 de los procesos.

El 20 de octubre de 2008 se entregan alegatos de conclusión. Pasa el 23 de octubre de 2008 al despacho para fallo. El 9 de julio de 2010 se comunica por edicto sentencia del 25 de junio de 2010. El 15 de julio de se instaura recurso de apelación y el 3 de agosto de 2010 consejo de estado comunica la decisión de conceder el recurso, sin embargo, el 28 de junio de 2011 se expide auto que comunica que el Consejo de Estado resolvió no darle tramite al recurso de apelación interpuesto por las partes. Finalmente el 20 de septiembre de 2011 es archivado.

3. Radicado: No. 2002 – 0485

Víctima: ANIBAL DE JESUS CASTAÑO GALLEGO

Demandantes:

MARIA OVEIDA GALLEGO CASTAÑO Cónyuge

LEIDY YOHANA CASTAÑO GALLEGO Hija

SANTIAGO CASTAÑO GALLEGO Hijo

HERNANDO CASTAÑO GALLEGO Hermano

ABELINO CASTAÑO GALLEGO Hermano

BERNABE CATAÑO GALLEGO Hermano

RUBEN ANTONIO CASTAÑO GALLEGO Hermano

Los hermanos de la víctima que no presentaron demanda de reparación en el orden interno fueron María Brigida Castaño Gallego, Ester Julia Castaño Gallego, Heriberto Antonio Castaño Gallego y María Elvira Castaño Gallego.

Se presenta la demanda el 19 de julio de 2002, el 20 de agosto se comunica por estados auto que inadmite la de demanda aduciendo error en los nombres de los demandantes. El 11 de febrero de 2003 se expide auto de trámite que pide aportar prueba de aparición de la víctima o sentencia ejecutoriada. El 9 de septiembre de 2003 se comunica la reposición del auto del 3 febrero de 2003, y finalmente se admite la demanda.

El 30 de agosto de 2005 se remite el proceso al despacho de Jairo Jiménez Aristizabal para resolver acumulación con el proceso 2002-0487. El 3 de julio de 2007 auto que decreta pruebas. El 11 de diciembre de 2007 se pone en conocimiento la comisión de los testimonios realizados en el Carmen de Viboral.

Posteriormente, el 3 de octubre de 2008 se da el traslado para alegar. El 20 de octubre de 2008 se entrega alegatos de conclusión, para pasar el 23 de octubre de 2008 al despacho para fallo, el cual es proferido el 25 de junio de 2010.

El 15 de julio se instaura recurso de apelación, el 3 de agosto de 2010 se concede el recurso, al cual el Consejo de Estado resuelve no dar trámite mediante auto del 28 de junio de 2011. Finalmente el 20 de septiembre de 2011 pasa a archivo.

4. Radicado No. 2002 - 00486

Víctima: ANDRÉS ANTONIO GALLEGO CASTAÑO

Demandantes:

MARIA DE LA CRUZ HERNANDEZ DE GALLEGO cónyuge

RICAURTE ANTONIO GALLEGO HERNANDEZ Hijo

EUSEBIO GALLEGO HERNANDEZ Hijo

MARIA NUBIA GALLEGO HERNANDEZ Hija

LUCELLY GALLEGO HERNANDEZ Hija

OMAIRA GALLEGO HERNANDEZ Hija

ROSA LINDA GALLEGO HERNANDEZ Hija

BELARMINA GALLEGO HERNANDEZ Hija

MARIA FLORINDA GALLEGO HERNANDEZ hija

Otros familiares de la víctima que no presentaron demanda de reparación en el orden interno fueron Miguel Antonio Gallego Castaño, Juan De Jesus Gallego Castaño Y Cristóbal Gallego Castaño hermanos de la víctima.

Se presenta la demanda el 24 de enero 2002 y es admitida el 22 de agosto de 2002. El 18 de febrero se comunica por estados auto que abre pruebas en el proceso. El 13 de junio de 2005 pasa a oficial mayor. Luego el 1 de marzo de 2005 se comunica por estados la comisión de los testimonios.

El 27 de junio de 2005 se envía a la secretaría para estudio de la acumulación y el 18 de mayo de 2007 se acepta la acumulación de los procesos. El 20 de octubre de 2008 se entrega alegatos de conclusión.

Finalmente, el 9 de julio de 2010 se comunica por edicto sentencia del 25 de junio de 2010, el 15 de julio se instaura recurso de apelación que es negado el 28 de junio de 2011 en auto que comunica que el Consejo de Estado resolvió no darle tramite al recurso de apelación interpuesto por las partes. Finalmente el 20 de septiembre de 2011 pasa archivo.

5. Radicado No. 2002 – 0487

Víctima: OCTAVIO DE JESUS GALLEGO HERNANDEZ

Demandantes:

MARIA FLORINDA GALLEGO HERNANDEZ cónyuge

YANETH GALLEGO GALLEGO hija

DEICY GALLEGO GALLEGO hija

JOHANA GALLEGO GALLEGO MARIA hija

MARIA ENGRACIA HERNANDEZ QUINTERO madre

AURORA GALLEGO HERNANDEZ hermana

MARIA DE LOS ANGELES GALLEGO HERNANDEZ hermana

FLORINDA DE JESUS GALLEGO HERNANDEZ hermana

Se presenta la demanda el 4 de julio de 2002, el 5 de julio de 2002 es admitida.

El 28 de mayo de 2002 se comunica que abre el proceso a pruebas, mientras que el 26 de junio de 2003 se tramitan exhortos y se comisiona al juzgado civil municipal del Carmen de Viboral para la recepción de testimonios.

El 20 de abril de 2005 se comunica por estado el auto que resuelve programar sorteo para asignar magistrado para tramitar de acumulación para el 21 de abril de 2005 hora 9:00 a.m. El 27 de abril de 2005 se comunica por estado auto que solicita la remisión de expedientes para decidir sobre la acumulación. El 8 de marzo de 2006 se comunica por estado auto que decreta acumulación al presente proceso (2002 – 00487) los procesos con radicado 2002 - 00483 (acumulado al 2002 - 00529), 2002 - 00486, 2002 - 00485, y 2002 - 00484. El 26 de abril de

2006 pasa a Procuraduría Judicial 30 para agencia especial y el 16 de mayo de 2006 regresa de la Procuraduría.

El 6 de septiembre de 2006 se profiere estado que comunica auto, ordenando oficiar a los despachos del Dr. Omar Enrique Cadavid Morales y Rafael Dario Restrepo Quijano solicitando expedientes para decidir sobre la acumulación. Posteriormente, el 29 de noviembre de 2006 estado que comunica auto que niega la acumulación.

El 24 de abril de 2007 se profiere auto que ordena remitir al despacho del Dr. Omar Enrique Cadavid Morales, fin decidir posible acumulación. 24 de abril de 2007 informe secretarial que envía el cuaderno principal (éste) con los acumulados: 2002-0483, 02-0529, 02-0486, 02-0485 y 02-0484, para posible acumulación al radicado 2002-0528 del despacho del magistrado Omar Enrique Cadavid Morales, con oficio 967.

Una vez acumulados los procesos, el 20 de octubre de 2008 se entregan alegatos de conclusión y el 23 de octubre de 2008 pasa al despacho para fallo. Finalmente el 9 de julio de 2010 se comunica por edicto sentencia del 25 de junio de 2010. Ante ella se instaura recurso de apelación el 15 de julio, el 28 de junio de 2011 se decreta auto que comunica que el Consejo de Estado resolvió no darle tramite al recurso de apelación interpuesto por las partes. Finalmente el 20 de septiembre de 2011 pasa archivo.

6. Radicado No. 2002 - 00488

Víctima: HERNANDO DE JESÚS CASTAÑO CASTAÑO

Demandantes:

FLORINDA DE JESUS GALLEGO HERNANDEZ cónyuge

JAZMÍN LORENA CASTAÑO GALLEGO hija

CELENI CASTAÑO GALLEGO hija

JUAN DIEGO CASTAÑO GALLEGO hijo

CLAUDIA YANETH CASTAÑO GALLEGO hija

WILDER CASTAÑO GALLEGO hijo

FREDY CASTAÑO GALLEGO hijo

Se presenta la demanda el 19 de julio de 2002 y es admitida el 26 de agosto de 2002. El 11 de agosto de 2003 estado que comunica el auto que abre a pruebas el proceso.

El 5 de octubre de 2006 se pasa el expediente a la oficina de la señora oficial mayor, con oficio 1.260 mediante el cual se pide acumulación, el 10 de octubre de 2006 se profiere auto que resuelve enviar a secretaría para posible acumulación. El 2 de noviembre de 2006 se da informe secretarial que pasa el proceso al despacho del magistrado Jairo Jiménez Aristizábal, para eventual acumulación al radicado 2002 0487, el 5 de diciembre de 2006 regresa al magistrado ponente, y se decidió no acumular.

El 13 de marzo de 2007 se pone en conocimiento la comisión de los testimonios realizada en el Carmen de Viboral. El 20 de abril de 2007 estado que comunica traslado para alegar, se interpone recurso de Reposición contra el auto que da traslado para alegar, y el 4 de mayo de

2007 se profiere auto que repone y deja sin efectos el auto que corrió traslado para alegar, ordenando a la secretaría que remita oficio a la Procuraduría treinta y dos (32) en lo judicial.

El 20 de octubre de 2008 se entregan los alegatos de conclusión. El 23 de octubre de 2008 pasa al despacho para fallo y el 9 de julio de 2010 se comunica por edicto sentencia del 25 de junio de 2010. Frente a ésta se instaura el 15 de julio de recurso de apelación y el 28 de junio de 2011 se profiere auto que comunica que el Consejo de Estado resolvió no darle tramite al recurso de apelación interpuesto por las partes. Finalmente el 20 de septiembre de 2011 pasa archivo

7. Radicado: 2002-0500

Víctima: JAIME ALONSO MEJÍA QUINTERO

Demandantes:

ALBA ROSA MEJÍA QUINTERO

OLIVA DEL SOCORO MEJÍA

LUZ DARY MEJÍA QUINTERO

MARTA EDILMA MEJÍA QUINTERO

ELDA EMILSE MEJÍA QUINTERO

Los hermanos de la víctima que no presentaron demanda de reparación en el orden interno fueron OCTAVIO MEJIA QUINTERO, PEDRONEL MEJIA QUINTERO, ANA OBEIDA MEJIA QUINTERO, CONSUELO DE JESUS MEJIA QUINTERO, RUBEN DE JESUS MEJIA QUINTERO, DOLLY AMADA MEJIA QUINTERO, LUZ MERY MEJIA QUINTERO LUIS ALBEIRO MEJIA QUINTERO y EDGAR DE JESUS MEJIA QUINTERO.

Se presenta la demanda el 28 de junio de 2002, el 2 de julio de 2002 se comunica el auto admisorio de la demanda.

El 9 de mayo de 2007 se comunica el auto que ordena remitir expediente al despacho del magistrado Omar Enrique Cadavid Morales, fin decidir posible acumulación. El 15 de mayo de 2007 se remite con oficio 1280 al despacho del magistrado Omar Enrique Cadavid Morales, para posible acumulación al radicado 2002-0528.

El 20 de octubre de 2008 se entregan alegatos de conclusión. El 23 de octubre de 2008 al despacho para fallo y el 9 de julio de 2010 se comunica por edicto sentencia del 25 de junio de 2010. Ante ella el 15 de julio se interpone de recurso de apelación. El 28 de junio de 2011 se profiere auto que comunica que el Consejo de Estado resolvió no darle trámite al recurso de apelación interpuesto por las partes. Finalmente el 20 de septiembre de 2011 pasa archivo.

8. Radicado: 2002-00483

Víctima: ORLANDO DE JESUS MUÑOZ CASTAÑO

Demandantes: CARLOS AMADOR MUÑOZ MUÑOZ Hermano

RUBEN MUÑOZ CASTAÑO

ABELARDO MUÑOZ CASTAÑO

Los familiares de la víctima que no presentaron demanda de reparación en el orden interno fueron Arcesio Muñoz Garcia (Padre) Y Los Hermanos Rosa Maria Muñoz Muñoz, Maria Aurora Muñoz Muñoz, Marco Aurelio Muñoz Muñoz, Maria Rubiela Muñoz Castaño, Luz Elena Muñoz Castaño, Berta Ines Muñoz Castaño y Florinda Muñoz Castaño.

La demanda es presentada el 19 de julio de 2002 y el 14 de marzo de 2002 es admitida. El 6 diciembre de 2002 se profiere auto decretando pruebas, el 16 enero de 2003 pasa al oficial mayor para trámite, el 24 enero 2003 se exigen requisitos para la acumulación de los procesos. El 23 de septiembre de 2005 se pasa el expediente al despacho del doctor Jairo Ramírez Aristizabal para estudiar acumulación con el proceso 2002-0487.

El 8 de marzo de 2006, se comunica por estado auto que decreta acumulación del proceso 2002 – 00487 con los procesos con radicado 2002 - 00483 (acumulado al 2002 - 00529), 2002 - 00486, 2002 - 00485, y 2002 - 00484. El 26 de abril de 2006 pasa a LA Procuraduría judicial 30 para agencia especial y el 16 de mayo de 2006 regresa de la Procuraduría.

El 6 de septiembre de 2006 se profiere estado que comunica auto, que ordena oficiar los despachos del Dr. Omar Enrique Cadavid Morales y Rafael Dario Restrepo Quijano solicitando expedientes para decidir sobre la acumulación. Posteriormente, el 29 de noviembre de 2006 estado que comunica auto que niega la acumulación.

El 24 de abril de 2007, se profiere auto que ordena remitir al despacho del dr. Omar Enrique Cadavid Morales, fin decidir posible acumulación. 24 de abril de 2007 informe secretarial que envía el cuaderno principal (éste) con los acumulados: 2002-0483, 02-0529, 02-0486, 02-0485 y 02-0484, para posible acumulación al radicado 2002-0528 del despacho del magistrado Omar Enrique Cadavid morales, con oficio 967.

Una vez acumulados los procesos, el 20 de octubre de 2008 se entregan alegatos de conclusión y el 23 de octubre de 2008 pasa al despacho para fallo. Finalmente el 9 de julio de 2010 se comunica por edicto sentencia del 25 de junio de 2010. Ante ella se instaura recurso de apelación el 15 de julio, luego el 28 de junio de 2011 se decreta auto que comunica que el Consejo de Estado resolvió no darle trámite al recurso de apelación interpuesto por las partes. Finalmente el 20 de septiembre de 2011 pasa archivo.

9. Radicado: 2002-0528

Víctima: IRENE DE JESÚS GALLEGO QUINTERO

Demandantes:

ESTER JULIA QUINTERO DE GALLEGO

JOSE APAOLINAR GALLEGO QUINTERO

MARIA LUCELLY GALLEGO QUINTERO

ELADIO GALLEGO QUINTERO

Los hermanos de la víctima que no presentaron demanda de reparación en el orden interno fueron MARIA LUZ MERY GALLEGO QUINTERO, LUZ MARY DEL SOCORRO, MARLENY GALLEGO QUINTERO y JOSE IVAN DE JESUS GALLEGO QUINTERO

Se presenta la demanda el 14 de junio de 2002, luego de admitida se fija en lista el 3 de julio de 2002.

El 3 de diciembre de 2002 se comunica auto que abre a pruebas. El 15 de julio de 2003 se pone en conocimiento la comisión realizada en el Carmen de Viboral.

El 10 de octubre de 2006 se ordena enviar a secretaria para estudiar una posible acumulación mediante oficio 1260 de 20 de septiembre de 2006. El 5 de diciembre de 2006 regresa al magistrado ponente con oficio 1820, no se acumuló.

El 3 de mayo de 2007 se pone en conocimiento auto que ordena enviar el expediente para posible acumulación y el 22 de mayo de 2007 se profiere auto que aprueba acumulación.

El 20 de octubre de 2008 se entregan alegatos de conclusión. El 23 de octubre de 2008 al despacho para fallo y el 9 de julio de 2010 se comunica por edicto sentencia del 25 de junio de 2010.

El 15 de julio de se interpone recurso de apelación, el 3 de agosto de 2010 mediante estado se comunica la decisión de conceder el recurso, sin embargo, el 28 de junio de 2011 es proferido auto que comunica que el Consejo de Estado resolvió no darle tramite al recurso de apelación interpuesto por las partes. Finalmente el 20 de septiembre de 2011 pasa archivo

10. Radicado: 2003 – 02084

Víctima: LEONIDAS CARDONA GIRALDO

Demandantes:

MARIA DEL ROCIO CARDONA FERNANDEZ Cónyuge

YOR MARTI CARDONA CARDONA Hijo

CANDIDA ROSA GIRALDO DE CARDONA (apellido de soltera: GALLEGO) Madre

LUZ DARY CARDONA GIRALDO Hermana

MARIA CEMIDA CARDONA GIRALDO Hermana

AURA LUZ CARDONA GIRALDO Hermana

Los hermanos de la víctima que no presentaron demanda de reparación en el orden interno fueron Maria Isabel Giraldo Gallego Bernardo De Jesus Giraldo Gallego Elda Nuri Giraldo Gallego Luz Marcela Giraldo Gallego y Oscar Santiago Muñoz Giraldo.

Se presenta la demanda el 25 de junio de 2003, el 2 de julio de 2003 se exige que debe precisarse con claridad en nombre de la víctima de la Desaparición Forzada, posteriormente el 13 de agosto de 2003 se comunica auto que admite la demanda.

El 21 de enero de 2004 se comunica auto que abre a pruebas el proceso. El 17 de marzo de 2004 se libran exhortos. Luego el 30 de junio de 2004 se pone en conocimiento la comisión de los testimonios realizada en el Carmen de Viboral. El 9 de diciembre de 2004 se pone en conocimiento respuesta de exhorto.

El 11 de mayo de 2007 es proferido auto que ordena remisión del expediente al despacho de Omar Enrique Cadavid para estudiar acumulación, en auto del 16 de mayo de 2007, se decide acumular los procesos.

El 20 de octubre de 2008 se entregan los alegatos de conclusión y el 23 de octubre de 2008 pasa al despacho para fallo. El 9 de julio de 2010 se comunica por edicto sentencia del 25 de junio de 2010, ante la cual se interpone recurso de apelación el 15 de julio. El 3 de agosto de 2010 estado que comunica la decisión de conceder el recurso, y el 28 de junio de 2011 se profiere auto que comunica que el Consejo de Estado resolvió no darle tramite al recurso de apelación interpuesto por las partes. El 20 de septiembre de 2011 pasa archivo.

11. Radicado: 2002- 0527

Víctimas: MIGUEL ANCIZAR CARDONA QUINTERO Y JUAN CRISÓSTOMO CARDONA QUINTERO

Demandantes:

MARIA DIOCELINA QUINTERO

HECTOR HUGO CARDONA QUINTERO

ROMAN ANTONIO CARDONA QUINTERO

DIANA MARCELA CARDONA QUINTERO

CLARA ROSA CARDONA QUINTERO

JORGE ENRIQUE CARDONA QUINTERO

Los hermanos de la víctima que no presentaron demanda de reparación en el orden interno fueron PEDRO CLAVER QUINTERO LUIS ALBERTO QUINTERO MARTHA LUCIA QUINTERO, LUZ MARINA QUINTERO.

Se presenta la demanda el 17 de julio de 2002, después de ser inadmitida el 6 de mayo del mismo año, el 29 de agosto de 2002 se revoca el auto del 6 de mayo de ese mismo año y se exigen algunos requisitos para la admisión, el 20 de marzo de 2003 se comunica la admisión de la demanda.

El 5 de agosto se comunica auto que abre pruebas en el proceso. El 18 de noviembre de 2004 se pone en conocimiento la comisión. El 8 de septiembre de 2005 se da traslado a las partes para alegar. El 26 de abril de 2006 se envía la Procuraduría para revisión, regresa el 15 de mayo.

El 27 de septiembre de 2006 se profiere auto que ordena el envío del proceso al despacho del magistrado Jairo Jiménez Aristizabal para estudio sobre acumulación. El 5 de diciembre de 2006 se regresa al magistrado ponente con oficio 1821, no se acumuló.

El 7 de marzo de 2007 se dicta sentencia que niega las pretensiones se notifica por edicto el 13 de abril de 2007. El 9 de Mayo de 2007 se remite el proceso al Consejo de Estado con apelación de la CJL. El 8 de junio de 2007 se radica el proceso en el Consejo de Estado. El 31 de julio de 2007 se comunica auto que admite recurso. El 23 de septiembre de 2010 se reasigna ponente por reparto general de los procesos que cursan en la sección tercera del

consejo de estado, entre los nueve magistrados que hoy la integran en conformidad con lo dispuesto por la ley 1285. El 19 de octubre de 2011 la CJL aporta consideraciones y anexa copia de la sentencia de 15/06/2010 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

El 16 de mayo del 2014 la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado allega memorial solicitando información del proceso. El 21 de enero de 2015 la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado dictó la resolución número 7735 de 2014 emitida por el Comité de Ministros en la cual se aprueba la conciliación con los familiares que no fueron incluidos y reparados en la demanda de reparación directa. El 6 de marzo de 2015 el apoderado del Ministerio de Defensa, solicita que el expediente sea puesto a disposición de las partes.

## VIII. CAPÍTULO VIII – FUNDAMENTOS DE DERECHO

En el presente apartado, expondremos los fundamentos y alegatos de derecho en relación con las violaciones a los derechos humanos de las víctimas del presente caso.

### A. Consideración general sobre atribución de responsabilidad

De conformidad con lo señalado en la sección de contexto, y como será ampliado por los peritajes ofrecidos por las partes en el proceso, esta representación considera que está probado el vínculo y la colaboración entre las Autodefensas del Magdalena Medio y el Ejército Nacional en la zona y en la época en que ocurrieron los hechos. En este sentido, los órganos del Sistema Interamericano han tenido oportunidad de pronunciarse a través de su amplia jurisprudencia e informes sobre la relación entre el Estado de Colombia y la creación de grupos paramilitares[584].

La Corte ha sostenido que, pese algunos intentos más recientes de impulsar medidas legislativas orientadas a prohibir, prevenir y castigar las actividades de los grupos de autodefensa o paramilitares, estas medidas no han sido efectivas en desactivar efectivamente el riesgo que el propio Estado ha contribuido a crear[585]. Así, los lazos del paramilitarismo con el Estado colombiano "han permanecido históricamente a diferentes niveles, en algunos casos, solicitando o permitiendo a los paramilitares la ejecución de ciertos actos ilícitos con el entendido de que no serían objeto de investigación o juzgamiento ni sanción"[586].

---

584 *Cfr;* Corte I.D.H., *Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 75; CIDH, *Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia*. OEA/Ser.L/V/II.102 Doc. 9 rev. 1, 26 de febrero de 1999, Cap. I, párrs.7-19.

585 *Cfr;* Corte I.D.H., *Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 80.

586 *Cfr;* CIDH, *Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia*. OEA/Ser.L/V/II.102 Doc. 9 rev. 1, 26 de febrero de 1999. Cap. I, párrs. 17-19; CIDH, Informe No. 75/06, Caso 12.415, Fondo, Jesús María Valle Jaramillo, Colombia, 16 de octubre de 2006, párr. 62. Véase también: Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la Oficina en Colombia. Abril 2000, párr. 30.

Con base en la constatación de este vínculo, la Corte ha fallado la responsabilidad internacional del Estado de Colombia en varios casos en los que agentes estatales participaron, colaboraron, o toleraron graves violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las Auto Defensas o fuerzas paramilitares, y faltaron a su deber de investigar adecuadamente estas violacioes[587].

En este sentido, nos adherimos a las consideraciones de hecho expuestas por la Ilustre Comisión en su Informe de Admisibilidad y Fondo No. 85/13, el cual reitera la basta jurisprudencia de la Corte IDH[588] y refiere a la necesidad de analizar la responsabilidad estatal por las violaciones denunciadas teniendo en cuenta el contexto en que ocurrieron los hechos, así como atendiendo a una visión de los hechos en su conjunto. Sin perjuicio de lo anterior, y a fin de complementar lo destacado por la CIDH en su informe de fondo, a continuación estableceremos los hechos y evidencias que llevan a determinar la responsabilidad estatal en los casos individuales.

### B. Violación de los derechos a la personalidad jurídica, a la vida, la integridad personal, la libertad personal, la familia y la vida privada y familiar de las víctimas a raíz de la desaparición forzada de las víctimas, por grupos paramilitares, con la colaboración de agentes del Estado.

A raíz de la desaparición forzada de las víctimas el Estado colombiano violó diversos derechos consagrados en la Convención Americana. Su responsabilidad internacional se deriva tanto por el incumplimiento de su deber de respetar los derechos humanos, como de su deber de garantizarlos.

En este sentido, el Estado es responsable por la desaparición forzada de nuestros 12 representados en violación de los artículos 3, 4, 5 y 7 de la CADH, en conjunto con el incumplimiento de los artículos 1.1 del mismo instrumento, y del artículo 1.a y 1.b de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

Asimismo, el Estado incurre en una violación del deber de garantía por la falta de una investigación efectiva de los hechos de la desaparición forzada, en violación de los artículos 8 y 25 de la CADH, en conjunto con el incumplimiento del artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de las víctimas desaparecidas y sus familiares. A estas violaciones nos referiremos en el apartado siguiente.

---

587 *Cfr;* Corte I.D.H., *Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 135; Corte I.D.H., *Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 120; Corte I.D.H., *Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 140; Corte I.D.H., *Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, párr. 125.57; Corte I.D.H., *Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia.* Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165, párr. 78.

588 *Cfr.,* CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO, *supra,* párrs. 188 y ss.

### 1. La relación entre los hechos del presente caso

Esta representación coincide con la Ilustre Comisión en cuanto a la estrecha relación que existe entre los diferentes sucesos que conforman el marco fáctico del presente caso, debido a que estos presentan elementos comunes y es posible identificar con claridad un hilo conductor que los vincula entre sí[589].

Sobre los seis eventos ocurridos entre el 21 de junio y el 27 de diciembre de 1996, cabe destacar, entre otros, los siguientes aspectos comunes: 1) la mayoría de ellos ocurrieron entre junio y julio; 2) tuvieron como resultado la desaparición de 15 personas y la muerte de otra; 3) sucedieron en un espacio geográfico reducido en el cual, debido a la cercanía con la autopista, existía presencia del ejército colombiano[590]; 4) las víctimas eran percibidas como supuestas colaboradoras de los grupos guerrilleros que operaban en la zona, precisamente en el contexto en el cual uno de dichos grupos había cometido un secuestro de miembros de la fuerza pública, por lo cual, para esa fecha, existía un operativo militar en la zona[591]; 5) varias de las personas desaparecidas habían sido amenazadas anteriormente y calificadas como guerrilleros o colaboradores de la guerrilla por parte de miembros del Ejército –en algunos casos, las referidas amenazas se produjeron en el marco, o bien, en seguimiento, de otros hechos que hacen parte del presente caso[592]; y, 6) no consta información alguna que se refiera a la existencia de combate entre los grupos paramilitares y de la fuerza pública, ni a acciones de protección de la población civil por parte de la fuerza pública frente a la secuencia de hechos perpetrados por los paramilitares, la cual justamente se produce en el marco de los vínculos entre dichos grupos y la fuerza pública[593], así confirmado por el principal imputado por los hechos denunciados, el ex jefe paramilitar, Ramón Isaza[594].

De esta manera, resulta evidente que el presente caso abarca una secuencia de hechos relacionados entre sí que tenían el objetivo de desarticular supuestas redes de apoyo de la guerrilla en la Vereda La Esperanza[595]. Resulta por esto importante que la Corte se avoque a un estudio de los hechos y de la consecuente responsabilidad internacional del Estado teniendo en cuenta estos elementos comunes[596]. Igualmente, esta representación procurará aportar elementos que complementan el análisis realizado por la CIDH en su informe de fondo a fin de ilustrar algunas de las principales violaciones a los derechos humanos en los casos específicos.

589 *Cfr.,* CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO, *supra,* párr. 210.

590 *Cfr.,* CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO, *supra,* párr. 210.

591 *Cfr.,* CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO, *supra,* párr. 211.

592 *Cfr.,* CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO, *supra,* párr. 212.

593 *Cfr.,* CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO, *supra,* párr. 213.

594 *Cfr.,* CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO, *supra,* párr. 214.

595 *Cfr.,* CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO, *supra,* párr. 215.

596 *Cfr.,* CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO, *supra,* párr. 215.

### 2. El Estado es directamente responsable por la desaparición forzada de las víctimas

En el presente caso, en el período comprendido entre el 21 de junio de 1996 y el 27 de diciembre del mismo año, miembros del grupo paramilitar del Magdalena Medio cometieron la desaparición forzada de 12 campesinos con el conocimiento y la tolerancia y colaboración de agentes del Ejército colombiano que operaban en la zona. Estos hechos constituyen una violación a los derechos protegidos en los artículos 3, 4, 5 y 7 de la Convención Americana, en conjunto con el artículo 1.1 del mismo instrumento y del artículo 1.a y 1.b de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

El artículo 3 de la CADH dispone que "[t]oda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica".

El artículo 4 de la CADH establece que "Toda persona tiene derecho a que se respete su vida", especificando *inter alia* que este derecho "estará protegido por la ley" y que "[n]adie puede ser privado de la vida arbitrariamente".

El artículo 5 de la CADH, por su parte, dispone:

> 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
>
> 2. Nadie debe ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

El artículo 7 de la Convención Americana establece que "Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales".

El artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas establece:

> Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a:
>
> a) No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales;
>
> b) Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo;

Desde su más temprana jurisprudencia, la Corte Interamericana ha afirmado que la desaparición forzada de personas constituye una violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención Americana que coloca a la víctima en un estado de completa indefensión, acarreando otras violaciones conexas[597]. La práctica de la desaparición

[597] *Cfr.,* Corte IDH. *Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras*. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 155; Corte IDH. *Caso Molina Theissen Vs. Guatemala*. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de julio de 2004. Serie C No. 108, párr. 41.

forzada implica un craso abandono de los principios que más profundamente cimientan el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la misma Convención[598], y su prohibición ha alcanzado el carácter de *jus cogens*[599].

Este Tribunal ha destacado que *"el fundamento jurídico que sustenta una perspectiva integral sobre la desaparición forzada de personas en razón de la pluralidad de conductas que, cohesionadas por un único fin, vulneran de manera permanente, mientras subsistan, bienes jurídicos protegidos por la Convención"*[600]. Asimismo, la Corte ha establecido que:

> Es necesario […] considerar integralmente la desaparición forzada en forma autónoma y con carácter continuo o permanente, con sus múltiples elementos complejamente interconectados. En consecuencia, el análisis de una posible desaparición forzada no debe enfocarse de manera aislada, dividida y fragmentada sólo en la detención, o la posible tortura, o el riesgo de perder la vida, sino más bien el enfoque debe ser en el conjunto de los hechos que se presentan en el caso[601][.]

La desaparición forzada se caracteriza por tres elementos concurrentes y constitutivos: a) la privación de la libertad; b) la intervención directa de agentes estatales o la aquiescencia de éstos; y c) la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o el paradero de la persona interesada[602].

A continuación ampliaremos algunos hechos respecto de las desapariciones de las 12 víctimas campesinas que representamos.

### *a) Detención y desaparición de Aníbal de Jesús Castaño Gallego y del menor Oscar Hemel Zuluaga Marulanda*

La participación y colaboración de agentes estatales en las desapariciones de Aníbal de Jesús y Oscar Hemel ha sido evidenciada en este caso.

En ese sentido, el día 21 de junio de 1996, aproximadamente las 7:30 p.m., hombres armados y vestidos de civil ingresaron a la tienda comunitaria de la Vereda La Esperanza y retuvieron a Aníbal Castaño, propietario del establecimiento y a Oscar Hemel Zuluaga Marulanda, quien

---

598 *Cfr*., Corte IDH. *Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras*. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 158; Corte IDH. *Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010 Serie C No. 217, párr. 61.

599 *Cfr*., Corte IDH. *Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153, párr. 84; Corte IDH. *Caso García y Familiares Vs. Guatemala*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2012. Serie C No. 258, párr. 96.

600 *Cfr.* Corte IDH. *Caso García y Familiares Vs. Guatemala*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2012. Serie C No. 258, párr. 99; *cfr.*, Corte IDH. *Caso Radilla Pacheco Vs. México*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 138.

601 *Cfr.* Corte IDH. *Caso Ticona. Estrada y otros Vs. Bolivia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 56.

602 *Cfr.* Corte IDH. *Caso García y Familiares Vs. Guatemala*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2012. Serie C No. 258, párr. 97; *cfr*., Corte IDH. *Caso Gómez Palomino Vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136, párr. 97; Corte IDH. *Caso Radilla Pacheco Vs. México*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 114.

tenía 15 años de edad[603]. Según surge de los hechos probados, las víctimas fueron capturadas y obligadas a subir en los vehículos donde se trasladaban los agresores[604]. Juan Carlos Gallego -quien posteriormente seria desaparecido- denunció ante la personería de Cocorná que en el momento de la detención de Aníbal de Jesús y Oscar Hemel, *"los militares estuvieron por ahí observando todo"*[605].

En este sentido, se denunció ante las autoridades que Aníbal Castaño y Oscar Zuluaga fueron llevados a la base militar La Piñuela[606]. La esposa del señor Castaño, María Oveida Gallego indicó que las camionetas de color verde utilizadas por estas personas "las hemos visto subir con soldados"[607]. La esposa y el hermano del señor Castaño fueron en dos oportunidades a la base militar, pero se les impidió el ingreso. Asimismo, otro elemento importante en este caso lo aporta la declaración de la señora María Oveida Gallego quien señaló respecto de la desaparición de su esposo y de Oscar Hemel que: "*Yo volví a ver las camionetas […] ellos subían bajaban, se veía seguido seguido y ellos se comunicaban con el ejército […]*"[608].
Es importante también destacar que ese mismo día, horas antes de que se perpetrara la desaparición de Aníbal Castaño y Oscar Zuluaga, efectivos del ejército Nacional que operaba en la zona ingresaron en la tienda comunitaria amenazando al señor Castaño, señalando que iban a acabar con todas las tiendas para que la guerrilla no tuviera donde comprar nada y que *"tenía que desocupar todo eso"*[609].

### *b) Detención y desaparición de los adolescentes Juan Crisóstomo y Miguel Ancizar Cardona Quintero*

Los hermanos Cardona Quintero fueron detenidos el 22 de junio de 1996, desconociéndose, hasta la fecha, su paradero[610]. También respecto a estas víctimas existen suficientes elementos que demuestran la participación y connivencia de los agentes militares en la ejecución de los hechos que dan lugar a las desapariciones forzadas.

---

603 Declaración de María de la Cruz Hernández de Gallego ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, de fecha 8 de noviembre de 2004. Expediente No. 233 UNDH. Cuaderno No. 10. Folios 71-72. ANEXO 2 del ESAP.

604 *Ibídem*.

605 Declaración de Juan Carlos Gallego Hernández ante la Personería Municipal de Cocorná, de fecha 30 de junio de 1996. Radicado 33. Cuadernillo 18. Folio 17. Declaración de María Oveida Gallego Castaño ante la Unidad de Derechos Humanos y DH de la Fiscalía General de la Nación, de fecha 11 de noviembre de 2004. Radicado 233. Cuadernillo 10. Folios 109 y 110, ANEXO 2 del ESAP.

606 Declaración de Juan Carlos Gallego Hernández ante la Personería Municipal de Cocorná, de fecha 30 de junio de 1996. Cuadernillo 18. Folio 17. Radicado 233 UNDH-DIH, ANEXO 2 del ESAP.

607 Declaración de María Oveida Gallego Castaño ante la Personería Municipal de El Carmen de Viboral, de fecha 31 de julio de 1996. Expediente No. 008-10799-98. Procuraduría Delegada Disciplinaria de Derechos Humanos. Ministerio Público. Folios 88-90 CD presentado por la Comisión a la Corte denominado proceso disciplinario.

608 Declaración de María Oveida Gallego Castaño ante la Personería Municipal de El Carmen de Viboral, de fecha 31 de julio de 1996. Expediente No. 008-10799-98. Procuraduría Delegada Disciplinaria de Derechos Humanos. Ministerio Público. Folio 111. CD presentado por la Comisión a la Corte denominado proceso disciplinario.

609 Declaración de Florinda de Jesús Gallego Hernández ante la Personería Municipal de El Carmen de Viboral, de fecha 19 de julio de 1996. Radicado 233. Cuadernillo 18. Folios 50-54. ANEXO 2 del ESAP.

610 CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO. Párrs. 91-94 y 220.

Entre los captores de los adolescentes Miguel Ancizar y Juan Crisóstomo Cardona Quintero fueron reconocidos *"un soldado que acostumbraba permanecer en uno de los controles del ejercito situado a la entrada a Cocorná y a un policía de la Estación Cocorná"*[611]. Esta misma participación fue corroborada por Elvia Rosa Fernández Cardona cuando afirma que *"si estaba en el momento en que se llevaron a Juan Crisóstomo y Miguel Ancizar estaba un soldado que yo reconocí de cara, que mantenía en la entrada para Cocorná, pero no le sé el nombre y ese soldado se encontraba con los paramilitares"*[612]. Es decir, hay evidencias de la participación de personal del Ejército, más concretamente de la FTA que tenía un pelotón en la Vereda La Esperanza (ubicado en la carretera de entrada al Municipio de Cocorná) y de un agente de la Policía de la Estación de Policía de Cocorná participaron en las desapariciones forzadas de cinco personas, incluyendo a Juan Crisóstomo y Miguel Ancizar Cardona.

Las identidades de estos agentes estatales no han sido esclarecidas en las labores de investigación de las autoridades judiciales, ni tampoco en investigaciones disciplinarias. De hecho, no consta que, pese a contar con los testimonios que identificaban a estos funcionarios, se hayan efectuado reconocimientos de personas a través de llamados a testificar, fotografías o en filas de personas como lo permitía la normativa procesal penal desde la época de ejecución de los hechos[613]. En estos hechos también fue utilizada una camioneta verde, que coincide con la que usaron los perpetradores de las desapariciones forzadas de Aníbal de Jesús y Oscar Hemel[614]. Sin embargo, hasta la fecha no se han realizado diligencias tendientes a identificar la identificación, propiedad y paradero de los vehículos o su relación con las Fuerzas Públicas, como fue denunciado por testigos y víctimas.

### *c) Detención y Desaparición de Irene de Jesús Gallego Quintero*

De los hechos evidenciados en este caso surge claramente que en los días previos a su desaparición, Irene de Jesús Gallego Quintero fue privada de libertad por agentes militares y detenida bajo la autoridad de funcionarios del Ministerio Público, para luego ser puesta en libertad y vista nuevamente en compañía de agentes militares. En este sentido, la Comisión observó que al menos dos testigos vieron dos semanas después de los hechos a Irene de Jesús Gallego en compañía de un pelotón de soldados y que los propios militares habrían reconocido que habrían entregado a Irene de Jesús a los paramilitares y que éstos la habrían

611 Declaración del testigo bajo reserva de identidad V – B 1 tomado el 14 de abril de 1998 por la Fiscalía de la Unidad Nacional de derechos humanos. Folios 190 - 191 del cuaderno No. 2. Radicado 233 de la UNDH – DIH. ANEXO 2 del ESAP. Ver también, CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO. Párrs. 93 y 220.

612 Declaración de ELVIA ROSA FERNANDEZ CARDONA ante el Juzgado Civil municipal del Carmen de Viboral del día 12 de octubre de 2004. Esta declaración fue anexada al proceso penal y obra a Folios 299 – 301 del Cuaderno 10 del radicado 233 de la UNDH – DIH. ANEXO 2 del ESAP. Ver también, CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO. Párrs. 93 y 220.

613 Según lo disponían los artículos 367, 368 y 369 del Código de Procedimiento Penal. Decreto 2700 de 1991.

614 Folios 190-191 Cuaderno No. 2. Radicado 233 de la UNDH – DIH. ANEXO 2 del ESAP. Declaración con reserva de identidad. Fiscalía General de la Nación, Dirección nacional de Fiscalías, UNDH, 14 DE ABRIL 1998. Y declaración de María Oveida Castaño Gallego rendida el 31 de julio de 1996 ante la oficina de Investigaciones especiales de la Procuraduría seccional Antioquia. Folio 154 – 156 del Cuaderno No. 1 Radicado 233 de la UNDH – DIH. ANEXO 2 del ESAP.

asesinado[615]. Lo cierto es que, luego de estos días en los que Irene fue detenida por agentes estatales, y luego vista en compañía de agentes militares, Irene desapareció y permanece desaparecida hasta la fecha.

Así, surge del expediente que Irene de Jesús fue detenida el 26 de junio de 1996 por agentes militares de la FTA[616]. La participación de efectivos militares en la desaparición de Irene de Jesús está probada a través de diversos hechos y declaraciones[617]. El día de su detención, Irene fue desvestida frente a varios militares y obligada a ponerse ropa del ejército[618]. Esta circunstancia constituyen además una agresión a su intimidad personal, al verse forzada a exhibirse en medio de tantos soldados y personas de su familia.

Al finalizar la tarde del 26 de junio de 1996, los soldados terminaron de desarrollar la Operación Rayo y no se tuvo conocimiento sobre lo que hicieron con Irene de Jesús Gallego Quintero, sino hasta el día 28 de junio de 1996 cuando en horas de la tarde, fue puesta a disposición de la Fiscalía Seccional del Municipio de El Santuario por el propio mayor Carlos Guzmán, quien comandaba las FTA, acusándola del delito de rebelión[619]. Irene de Jesús permaneció en poder de la Fuerza Pública por más de 36 horas[620] sin ser puesta a órdenes de la autoridad competente, en incumplimiento de ley procesal penal ya que al momento de su captura no existía orden judicial ni fue sorprendida en situación de flagrancia[621]. El mayor Carlos Guzmán manifestó que a Irene de Jesús le fueron encontradas unas fotografías donde se le veía en conjunto con un grupo de guerrilleros, pero éstas no fueron puestas en conocimiento de la autoridad judicial[622].

---

615 *Cfr.,* CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO, *supra,* párr. 225-226

616 CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO. Párrs.99-107 y 225.

617 CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO. Párr. 103, anexo 15 del informe (Diligencia de indagatoria de Carlos Alberto Guzmán Lombana, Radicado 233 UDH, de fecha 13 de febrero de 2001) y anexo 11 del informe (Continuación de diligencia indagatoria a Carlos Guzmán Lombana, ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos, de fecha 20 de febrero de 2001. Expediente No. 233 UNDH. Cuaderno No. 8).

618 CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO. Párr. 101.

619 Diligencia de Indagatoria del Mayor Carlos Alberto Guzmán Lombana. Febrero 13 de 2001. Folios 12 – 24 Cuaderno No. 8 radicado 233 UNDH – DIH. ANEXO 2 del ESAP. "[E]l día 28 de junio en horas de la tarde, tipo dos o tres de la tarde yo entregue esa niña a la Fiscalía. Ver también, CIDH. CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO. Párr. 103.

620 Entre las 8:00 – 9:00 a.m. del 26 de junio de 1996 a las 3:00 – 5:00 p.m. del día 28 de junio de 1996 que fue puesta a disposición de la Fiscalía transcurrieron más de 50 horas. El término de 36 horas es el máximo posible que una persona privada de la libertad puede estar en poder de quien efectuó la captura. Pues la norma es clara en exigir que debe ser puesta a órdenes de autoridad competente en el término de la distancia o a más tardar a la primera hora hábil del día siguiente. Artículo 371 del Código de Procedimiento Penal. Decreto 2700 de 1991. Ver también, CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO. Párr. 103, anexo 15 del informe (Diligencia de indagatoria de Carlos Alberto Guzmán Lombana, Radicado 233 UDH, de fecha 13 de febrero de 2001) y anexo 11 del informe (Continuación de diligencia indagatoria a Carlos Guzmán Lombana, ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos, de fecha 20 de febrero de 2001. Expediente No. 233 UNDH. Cuaderno No. 8).

621 Artículo 370 del Código de Procedimiento Penal. Decreto 2700 de 1991. Ver también, CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO. Párr. 103.

622 Resolución de situación Jurídica que impone medida de aseguramiento a Ramón María Isaza Arango. Abril 3 de 2003. Folio. 278 Cuaderno x Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

El mayor Carlos Guzmán reconoció que llevó a Irene a la Fiscalía de Santuario y que no hizo ningún tipo de informe para sustentar su detención[623]. La Fiscal Seccional del Municipio de El Santuario, recibió a Irene de Jesús Gallego Quintero más de 14 horas después de aquellas en las que debió haber sido puesta a disposición de la autoridad judicial competente por parte de sus captores y dejó constar que se trataba de una situación "compleja e irregular"[624]. Sin embargo, no se realizaron diligencias tendientes a investigar esta irregularidad. Como referimos, luego de estos hechos y previo a su desaparición, Irene fue puesta en libertad y fue vista en compañía de un pelotón del Ejército[625].

En este sentido, al analizar los hechos y las pruebas en forma armonizada y teniendo en cuenta el contexto en el que ocurrieron los hechos denunciados, cabe a esta Corte concluir que agentes estatales tuvieron participación directa en la desaparición forzada de Irene de Jesús.

### *d) Desapariciones forzadas de Juan Carlos Gallego y Jaime Alonso Mejía Quintero*

Según los hechos del presente caso, Juan Carlos Gallego, promotor de salud de la Vereda La Esperanza, había sido amenazado, hostigado e intimidado por el Ejército Nacional en los días previos a su desaparición[626]. El 7 de julio de 1996, durante una reunión comunitaria de la Vereda La Esperanza, dos hombres encapuchados y armados se acercaron a él, preguntándole si era guerrillero y dijeron "este hijueputa es el que necesitamos", lo tomaron del cuello y la camisa y lo introdujeron en la camioneta[627].

---

623 Ampliación indagatoria rendida por Carlos Alberto Guzman Lombada, 5 diciembre 2011, Radicado No. 233 UNDH-DIH, Folio 244, 245, Cuaderno 13. Ver también, CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO. Párr. 104 y anexo 15 (Diligencia de indagatoria de Carlos Alberto Guzmán Lombana, Radicado 233 UDH, de 13 de febrero de 2001).

624 Certificación jurada mediante oficio 812-29 Unidad delegada ante los jueces penales municipales de Bello Antioquia. Abril 1º de 1997. Folios 163-167del Cuaderno 2 del radicado 233 de la UNDH – DIH. ANEXO 2 del ESAP. La Fiscal señala que un Mayor del ejército presentó a la joven a eso de las cinco (5) de la tarde, "sin un informe que respaldase su procedimiento, sin una imputación definida y sin en que en tal momento se vislumbrara con claridad, cuál su presencia en la fiscalía y cuál el motivo de la presentación de su joven acompañante."

625 *Cfr.,* CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO, *supra,* párr. 225-226.

626 CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO. Párrs. 108 y 227, anexo 33 del informe (Declaración de Juan Carlos Gallego Hernández ante la Personería Municipal de Cocorná, de 30 de junio de 1996), anexo 44 del informe (Denuncia presentada por Florinda de Jesús Gallego Hernández ante el juzgado penal municipal de Cocorná, de 11 de julio de 1996), anexo 45 del informe (Declaración de Javier Enrique Fox Quintana ante la Personería Municipal de El Carmen de Viboral, de 8 de julio de 1996), anexo 29 del informe (Declaración de Florinda de Jesús Gallego Hernández ante la Fiscalía General de la Nación, de 28 de noviembre de 2000), anexo 12 del informe (Declaraciones de María Engracia Hernández Quintero y Héctor Manuel González Ramírez ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía Regional, de 15 de abril de 1998. Expediente No. 233 UNDH. Cuaderno No. 2), y anexo 40 del informe (Declaración de la hermana de Juan Carlos Gallego Hernández).

627 CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO. Párr. 109, anexo 19 del informe (Escrito de la Corporación Jurídica Libertad a la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, presentado el 2 de abril de 2007), anexo 30 del informe (Declaración de José Eliseo Gallego Quintero ante la Personería Municipal de El Carmen de Viboral, de 19 de julio de 1996), anexo 46 del informe (Denuncia presentada por Florinda de Jesús Gallego Hernández ante l el juzgado penal municipal de Cocorná, de 11 de julio de 1996), anexo 12 del informe (Declaración de María Engracia Hernández Quintero ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía Regional, de 15 de abril de 1998. Expediente No. 233 UNDH. Cuaderno No. 2), anexo 24 del informe (Declaración de Pablo Antonio Quintero ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía

Pese a los reclamos de Florinda Gallego y el reconocimiento de unos soldados de la FTA de que el suceso había sido un error[628], a la fecha, se desconoce el paradero de Juan Carlos Gallego[629].

Por su parte, Jaime Alonso Mejía Quintero, también venía siendo tildado de guerrillero por parte del Ejército previo a su desaparición[630]. El mismo día, las mismas camionetas que se habían llevado a Juan Carlos Gallego, lo detuvieron mientras él se encontraba en un billar junto a la autopista Medellín-Bogotá[631]. A la fecha, se desconoce su paradero[632].

La presencia de la Fuerza Pública ese día 7 de julio de 1996 en la Vereda La Esperanza –y, más concretamente, en inmediaciones del lugar donde fueron detenidos Juan Carlos Gallego Hernández y Jaime Alonso Mejía Quintero– era notoria[633]. Esto guarda relación con la existencia de un pelotón de la FTA en la Vereda La Esperanza, ubicado en el cruce con la carretera que conduce a la localidad de Cocorná. Sin embargo, a pesar de las inspecciones judiciales realizadas por la Fiscalía a los archivos de la FTA en los Batallones Héroes de Barbacoas[634], Pedro Nel Ospina y Bárbula[635], a las Jefatura de la Central de Inteligencia de la Brigada 4ª[636] y la 14ª del Ejército[637]; y a la 1ª División del Ejército[638], hasta la fecha no se han

---

General de la Nación, de 5 de abril de 2005. Expediente No. 233 UNDH. Cuaderno No. 10. Folios 190-193) y anexo 40 del informe (Declaración de la hermana de Juan Carlos Gallego Hernández).

628 CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO. Párr. 110, anexo 44 del informe (Denuncia presentada por Florinda de Jesús Gallego Hernández ante el juzgado penal municipal de Cocorná, de 11 de julio de 1996) y anexo 29 del informe (Declaración de Florinda de Jesús Gallego Hernández ante la Fiscalía General de la Nación, de 28 de noviembre de 2000).

629 CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO. Párr. 111.

630 CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO. Párrs. 112 y 227, y anexo 24 del informe (Declaración de Olivia del Socorro Mejía ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, de 10 de noviembre de 2004. Expediente No. 233 UNDH. Cuaderno No. 10. Folios 88-90).

631 CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO. Párr. 112, anexo 19 del informe (Escrito de la Corporación Jurídica Libertad a la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, presentado el 2 de abril de 2007), anexo 30 del informe (Declaración de José Eliseo Gallego Quintero ante la Personería Municipal de El Carmen de Viboral, de 19 de julio de 1996), y anexo 24 del informe [Declaraciones de Diosdado Quintero Giraldo (Folios 64-70) y María de la Cruz Hernández de Gallego (Folios 71-72) ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, de 8 de noviembre de 2004. Expediente No. 233 UNDH. Cuaderno No. 10; Declaración de Pablo Antonio Quintero ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, de 5 de abril de 2005. Expediente No. 233 UNDH. Cuaderno No. 10. Folios 190-193].

632 CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO. Párr. 113.

633 Se encontraban a 200 o 300 metros de donde los capturaron. Según declaración de Carlos Estrada en el informe No. 84 Radicado. 21.005 Diligenciamiento de orden de trabajo No. 088. Dirigido al Dr. Iván De Jesús Duque Santa. De Nov. 27 de 1996. Fl. 107 Cuaderno No. 1. Radicado 233. ANEXO 2 del ESAP.

634 Folios 92 – 101 Cuaderno No. 4 Radicado 233 UNDH – DIH. Citado en Resolución que resuelve situación jurídica al procesado Ramón María Isaza Arango. Abril 3 de 2003. Folio 288. Cuaderno No. 9 Radicado 233 UNDH – DIH. ANEXO 2 del ESAP.

635 Folios 154 – 259 Cuaderno No. 7. Radicado 233 UNDH – DIH. Citado en Resolución que resuelve situación jurídica al procesado Ramón María Isaza Arango. Abril 3 de 2003. Folio 290. Cuaderno No. 9 Radicado 233 UNDH – DIH. ANEXO 2 del ESAP.

636 Folios 141 – 148 Cuaderno No. 6. Radicado 233 UNDH – DIH. Citado en Resolución que resuelve situación jurídica al procesado Ramón María Isaza Arango. Abril 3 de 2003. Folio 289. Cuaderno No. 9 Radicado 233 UNDH – DIH. ANEXO 2 del ESAP.

identificado los soldados que estarían adscritos a esa unidad táctica de la FTA ni se ha establecido la identidad y vinculación de los agentes militares que habrían participado en estas desapariciones.

### *e) Detención y Desaparición de Hernando de Jesús Castaño Castaño, Octavio de Jesús Gallego Hernández y Orlando de Jesús Muñoz Castaño*

El día de la detención y desaparición de Hernando de Jesús, Octavio de Jesús y Orlando de Jesús, al igual que en las anteriores desapariciones forzadas, la presencia del personal del Ejército en la Vereda La Esperanza fue ratificada en inmediaciones del lugar de los hechos por familiares de las víctimas y testigos de los hechos[639].

Asimismo, existen evidencias de la participación directa de soldados en la detención y desaparición forzada de Octavio de Jesús Gallego Hernández. En ese sentido, las dos personas que lo retuvieron en presencia de familiares fueron reconocidas como integrantes del pelotón de soldados que hacían presencia en la Vereda La Esperanza y que eran parte de las FTA[640]. Esta aseveración la hizo un testigo ante la Oficina de investigaciones especiales de la Procuraduría al señalar que *"…. a él –refiriéndose a Octavio- se lo llevaron un martes, al domingo yo bajaba por la autopista que venía de Cocorná de hacer el mercado y vi las dos personas que se lo llevaron a él uniformados de soldados"*[641].

---

637 Folios 92 – 94 Cuaderno No. 7. Radicado 233 UNDH – DIH. Citado en Resolución que resuelve situación jurídica al procesado Ramón María Isaza Arango. Abril 3 de 2003. Folio 290. Cuaderno No. 9 Radicado 233 UNDH – DIH. ANEXO 2 del ESAP.

638 Folios 51 – 54 Cuaderno 5. Radicado 233 UNDH – DIH. Citado en la Resolución que resuelve situación jurídica al procesado Ramón María Isaza Arango. Abril 3 de 2003. Folio 289. Cuaderno No. 9 Radicado 233 UNDH – DIH. ANEXO 2 del ESAP.

639 Declaración de Florinda de Jesús Gallego Hernández ante la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría. Julio 19 de 1996. Folios 91 – 95. Cuaderno 1. Expediente No. 008 – 1079998 Procuraduría delegada disciplinaria derechos humanos. CD presentado por la Comisión a la Corte denominado proceso disciplinario. "El día que se llevaron a mi esposo eso lo hicieron delante del ejército, que el ejército está por toda la vereda, a unos cien metros de distancia y nadie hizo nada por eso yo digo que son los mismos. …… Cuenta la gente que ese día atravesaron una camioneta, es que venían tres camionetas, en una era donde llevaban a mi hermano OCTAVIO que a esa subieron a mi esposo, otra camioneta la tenían en San Vicente". Ibídem. Declaración de HECTOR MANUEL GONZALEZ RAMIREZ, ante la Dirección nacional de fiscalías UNDH. Abril 15 de 1998 Fl 197-198-199, Cuaderno No. 2. Radicado 233. UNDH – DIH. ANEXO 2 del ESAP. "[E]l día que se llevaron a OCTAVIO había ejército en la zona porque a las dos y media cuando iba para mi casa y vi ejército en el Ramal a la entrada de Cocorná."

640 Declaración de HECTOR MANUEL GONZALEZ RAMIREZ. Rendida el 10 de noviembre 2004. FL 76- 80. Cuaderno No. 10. Radicado 233. UNDH – DIH. ANEXO 2 del ESAP "[L]os volví a ver a los tres días después de que desaparecieron a OCTAVIO, los vi en "el estanco" , los cuales estaban vestidos de ejército , o sea con camuflados, tenían insignias como el ejército, y ellos estaban ahí parados con toda la tropa, más o menos unos 15."

641 Declaración de HECTOR MANUEL GONZALEZ RAMIREZ. Agosto 9 de 1996. Folios 101 – 102 Cuaderno 1. Expediente No. 008 – 1079998 Procuraduría delegada disciplinaria derechos humanos. CD presentado por la Comisión a la Corte denominado proceso disciplinario.

### *f) Detención y desaparición de Leonidas Cardona y Andrés Antonio Gallego*

La presencia de la Fuerza Pública en inmediaciones del lugar en el que fueron desaparecidos Leonidas y Andrés Antonio fue también esclarecida en la investigación penal, pues se supo que mientras sucedían los hechos, "a esa hora en que esos sujetos entraron y se llevaron a Leonidas la autopista quedó paralizada, es decir no paso ningún carro y por ahí a los tres minutos de haber arrancado con Leonidas y con Andres Gallego fue que paso el ejército en volquetas, y me di cuenta de esto porque me fui a contarle a mi suegra y cuando vi fue dos volquetadas de ejército"[642].

Asimismo, la CIDH hizo referencia a declaraciones de testigos que indicaron que los paramilitares que participaron de los hechos les habrían dicho que serían llevados a la base militar de La Piñuela, puesto de mando de la FTA[643].

En conclusión, el Estado colombiano es responsable por la violación de derechos a la libertad personal, integridad personal, vida y reconocimiento de la personalidad jurídica, establecidos en los artículos 3, 4, 5 y 7 de la Convención Americana en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento; así como el artículo I.a) y 1,b) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas en perjuicio de 12 campesinos de la Vereda de Esperanza: Aníbal de Jesús Castaño Gallego, Irene de Jesús Gallego Quintero, Juan Carlos Gallego Hernández, Jaime Alonso Mejía Quintero, Hernando de Jesús Castaño Castaño, Octavio de Jesús Gallego Hernández, Orlando de Jesús Muñoz Castaño, Andrés Antonio Gallego Castaño, Leonidas Cardona Giraldo, así como de los niños Oscar Hemel Zuluaga Marulanda, Miguel Ancízar Cardona Quintero y Juan Crisóstomo Cardona Quintero.

## 3. El Estado es responsable por el incumplimiento del deber de garantía por la falta de una investigación efectiva de los hechos

El Estado ha fragmentado las investigaciones de los hechos del caso, convirtiendo la desaparición forzada de estos 12 campesinos cometidas en distintas operaciones militares y paramilitares, en una serie de crímenes menores, prescriptibles, aislados del núcleo duro de los hechos.

Sobre este particular, esta Honorable Corte ha establecido que "de la obligación general de garantía de los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal deriva la obligación de investigar los casos de violaciones de esos derechos"[644].

---

642 Fl 113-a-116 Cuaderno 10, Radicado 233 UNDH-DIH, ANEXO 2 del ESAP. Diligencia de declaración rendida por MARIA ROCIO CARDONA. 11 de Noviembre de 2004.

643 *Cfr.,* CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO, *supra,* párr. 237-238

Por lo tanto, el Estado colombiano no solo tiene responsabilidad internacional por la desaparición forzada de las víctimas debido a la participación directa, colaboración o tolerancia de las fuerzas militares, sino también por el incumplimiento de su deber de garantía, por la falta de una investigación adecuada de la desaparición forzada de las victimas señaladas.

Desde su primer caso, el Tribunal Interamericano ha establecido que "el carácter pluriofensivo de la desaparición forzada, así como su naturaleza permanente o continua, la cual implica que la desaparición forzada permanece mientras no se conozca el paradero de la persona desaparecida o se identifiquen con certeza sus restos"[645].

La Corte ha establecido, en este sentido, que el momento clave de análisis para evaluar hasta cuándo subsiste la desaparición forzada es la identificación y entrega de los restos.

En este sentido, en el Caso *Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia*, la Corte consideró que "se identificaron los restos de Carlos Horacio Urán Rojas y los mismos fueron entregados a sus familiares. A partir de este momento cesó su desaparición forzada"[646]. En ese caso, el Tribunal advirtió que ello "no afecta la calificación como desaparición forzada de los hechos cometidos en su perjuicio por el periodo que la persona permaneció desaparecida, sin importar la duración de este"[647].

En el presente caso persiste la vulneración al deber de investigar que hace parte integral de las violaciones a los derechos establecidos en los artículos 3, 4, 5 y 7 de la Convención Americana en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento; así como el artículo I.a) y 1,b) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Las irregularidades específicas que se detectan en las investigaciones y que tienen que ver con la ausencia de investigaciones eficaces y diligentes serán analizadas en el capítulo correspondiente a las violaciones de las garantías judiciales protegidas en los artículos 8 y 25 de la CADH.

---

644 *Cfr.,* Corte IDH. *Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 287. Asimismo, el Tribunal ha señalado, además, que tanto la prohibición de la desaparición forzada como el deber correlativo de investigar y, eventualmente, sancionar a los responsables han alcanzado carácter de *jus cogens*. Corte IDH. *Caso Contreras y otros Vs. El Salvador*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2011. Serie C No. 232, párr. 83; *et al*. *Ver* ESAP, pág. 55, párrs. 199, 200.

645 *Cfr.*, Corte IDH *Caso Osorio Rivera y Familiares Vs. Perú*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013. Serie C No. 274, párr. 31; Corte IDH. *Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras*. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párrs. 155 a 157.

646 *Cfr.,* Corte IDH. *Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Serie C No. 287, párr. 368.

647 *Cfr.,* Corte IDH. *Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Serie C No. 287, párr. 368.

### 4. El Estado es responsable por el incumplimiento del deber de adoptar medidas de protección especial para los niños y niñas en el contexto del conflicto armado interno

El artículo 19 de la CADH dispone que *"Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado"*.

Según la jurisprudencia reiterada de la Corte IDH*, "esta disposición debe entenderse como un derecho adicional, complementario, que el tratado establece para seres que por su desarrollo físico y emocional necesitan de protección especial"*[648].

El Estado tiene la obligación internacional de tomar medidas especiales orientadas en el principio del interés superior del niño y destinadas a asegurar la plena vigencia de sus derechos[649]. Este principio se fundamenta en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de las niñas y los niños y en la necesidad de propiciar su desarrollo y aprovechar plenamente sus potencialidades[650]. Así, el Estado debe prestar especial atención a las necesidades y los derechos de los niños, en consideración de su condición particular de vulnerabilidad[651].

Así, la Corte IDH ha afirmado que los casos en los cuales las víctimas de violaciones de los derechos humanos son niños y niñas, revisten especial gravedad[652]. Tal es la situación en el presente caso, en el que 3 niños fueron víctimas de desaparición forzada a manos de grupos paramilitares con la colaboración de agentes del ejército colombiano.

Según la reiterada jurisprudencia del Tribunal Interamericano, tanto el artículo 19 de la Convención Americana como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño ("Convención sobre los Derechos del Niño" o "CDN"), y otros instrumentos internacionales, forman parte de un muy comprensivo *corpus juris* internacional de protección

---

[648] *Cfr.,* Corte IDH. *Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Serie C No. 250, párr. 142; *cfr*., Corte IDH. *Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niños*. Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párrs. 53, 54 y 60; Corte IDH. *Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212, párr. 164.

[649] *Cfr.,* Corte IDH*. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niños*. Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párr. 164; *cfr.*, *Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Serie C No. 250, párr. 142.

[650] *Cfr*., Corte IDH. *Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Serie C No. 250;

[651] *Cfr*., Corte IDH. *Caso de la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párr. 184; Corte IDH. *Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212, párr. 166; Corte IDH. *Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Serie C No. 250, párr. 142.

[652] *Cfr.*, Corte IDH. *Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia*. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259.

de los niños y las niñas que debe servir a esta Honorable Corte para fijar el contenido y los alcances la protección requerida por el artículo 19 de la Convención Americana[653].

La CDN[654] contiene disposiciones relevantes que se refieren a las obligaciones del Estado en relación con los niños y niñas en supuestos fácticos similares a los hechos de este caso. Estas disposiciones pueden arrojar luz, en relación al artículo 19 de la CADH, sobre la conducta que el Estado debió haber observado en el caso concreto.

El artículo 1 de la CDN, cuya definición ha sido aplicada anteriormente por esta Honorable Corte en relación al artículo 19 de la CADH, establece que "se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad"[655].

En casos de desaparición forzada en que las víctimas son niños, niñas y adolescentes, ocurre una afectación al derecho a una protección especial en reconocimiento de su calidad de tales, lo cual conlleva la obligación de proteger el derecho intrínseco a la vida, la prohibición absoluta de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes y el derecho a no ser privados de su libertad ilegal o arbitrariamente, entre otros[656].

Asimismo, esta Honorable Corte en su más reciente jurisprudencia ha establecido la obligación por parte de los Estados de proporcionar protección especial a las niñas y niños en el contexto de conflictos armados, quienes deben recibir un trato humano y no ser objeto de ataque debido a que estos no participan activamente en las hostilidades[657]. Adicionalmente señala que las acciones del Estado deben ir orientadas a *"[…] preservar la unidad familiar y facilitar la búsqueda, identificación y reunificación familiar de las familias dispersas a causa de un conflicto armado y, en particular, de los niños no acompañados y separados"*[658].

Por otra parte, en el contexto específico de conflictos armados internos, los niños y las niñas tienen derecho a gozar de protección especial adicional. En este supuesto, se aplican las siguientes disposiciones de la CDN:

---

653 *Cfr.*Corte IDH. *Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala*. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 194; *cfr*., Corte IDH. *Caso Forneron e hija Vs. Argentina*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012 Serie C No. 242, párr. 137.

654 Colombia ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño el 28 de enero de 1991. Disponible en: http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en.

655 Convención sobre los Derechos del Niño, Art. 1; *cfr*., Corte IDH. *Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala*. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 188; *et al*.

656 *Ver*, *mutatis mutandis*, Corte IDH. Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 188; Corte IDH. Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, párr. 238; *et al*. *Ver también*, Convención sobre los Derechos del Niño, arts. 6 y 37, *inter alia*.

657 *Cfr.*, Corte IDH. *Caso Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de octubre de 2014. Serie C No. 285. párr. 110.

658 *Cfr.*, Ibídem.

Artículo 38.

1. Los Estados partes se comprometen a respetar y velar por que se respeten las normas del derecho internacional humanitario que les sean aplicables en los conflictos armados y que sean pertinentes para el niño.

   [...]

4. De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho internacional humanitario de proteger a la población civil durante los conflictos armados, los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto armado.

La Corte Interamericana también ha utilizado las normas relevantes del derecho internacional humanitario para establecer las obligaciones que surgen para los Estados en el contexto de conflictos armados internos[659]. Ello incluye los Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo adicional II a éstos, ambos ratificados por el Estado colombiano con anterioridad a los hechos de este caso[660].

Entre las garantías fundamentales consagradas en el Protocolo II, se dispone en el artículo 4.3 que los Estados Partes, en conflictos armados internos, están obligados a "[proporcionar] a los niños los cuidados y la ayuda que necesiten", incluyendo la educación conforme a los deseos de los padres, la adopción de "medidas oportunas para facilitar la reunión de las familias temporalmente separadas" y la adopción de medidas "para trasladar temporalmente a los niños de la zona en que tengan lugar las hostilidades a una zona del país más segura y para que vayan acompañados de personas que velen por su seguridad y bienestar", entre otros[661].

En este sentido, otros organismos internacionales han desarrollado estándares relevantes sobre la desaparición forzada de niños. El Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) ha señalado que la desaparición forzada de niños y la separación de sus familiares lesiona de forma particularmente grave la integridad mental, física y moral de los niños, siempre que éstos *"[…] experimentan sentimientos de pérdida, abandono, miedo intenso, incertidumbre, angustia y dolor, todo lo cual podría variar o intensificarse en función de la edad y de las circunstancias específicas del niño"*[662].

---

659 *Cfr*., Corte IDH. *Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia*. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, párr. 238; Corte IDH. *Caso Contreras y otros Vs. El Salvador*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2011. Serie C No. 232, párr. 107.

660 Colombia ratificó los Convenios de Ginebra el 8 de noviembre de 1961 y ratificó el Protocolo adicional I el 1 de septiembre de 1993 y el Protocolo adicional II el 14 de agosto de 1995. Disponible en: https://www.icrc.org/ihl

661 *Cfr*., Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, 1977, Art. 4.3 a-e. Disponible en: http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-ii.htm.

662 ONU, GTDFI. Observación General sobre los niños como víctimas de desaparición forzada. UN doc. A/HRC/WGEID/98/1. Del 14 de febrero de 2013. párr. 6. Disponible en: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/GC/A-HRC-WGEID-98-1_sp.pdf, ANEXO 24 del ESAP.

De igual manera, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CDF) ha expresado

> […] la singular crueldad con la que las desapariciones forzadas afectan a las mujeres y a los niños. A las primeras, porque las expone y hace particularmente vulnerables, como sujeto directo de desaparición forzada, a violencia sexual y de otro tipo, y, como miembro de la familia de un desaparecido, a sufrir violencia, persecución y represalias. A los niños, porque los hace especialmente vulnerables a la sustitución de su identidad[663].

Vista tal aseveración, el CDF insiste en que Estado debe brindar una especial protección y asistencia en los casos donde las mujeres y niños sean víctimas de la desaparición forzada[664].

Asimismo, el GTDFI ha establecido que los Estados pueden considerar como factor agravante del delito que la persona desaparecida sea un niño, debido a la crueldad que implica la comisión de este delito siendo la victima un menor[665] y también ha aclarado que "las obligaciones estatales que surgieron cuando el niño tenía menos de 18 años continuarán siempre que no se cumplan plenamente"[666].

En esta línea, cabe recordar que, en el presente caso, tres de las víctimas de desaparición forzada que representamos eran personas menores de 18 años de edad, sujetos de medidas especiales de protección, a saber: Oscar Zuluaga Marulanda (15 años), Juan Crisóstomo Cardona Quintero (12 años) y Miguel Ancizar Cardona Quintero (15 años). Esto resulta de particular gravedad, si se considera la posibilidad de que se estuviera frente a sucesos de reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes[667]; lo cual, sin duda alguna, ameritaba una actuación por demás diligente de parte del Estado de prevenir e investigar estos hechos.

---

663 ONU, CDF. Observaciones finales sobre Uruguay. UN doc. CED/C/URY/CO/1. Del 8 de mayo de 2013. párr.38. Disponible en: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED/C/URY/CO/1&Lang=Sp ANEXO 25 del ESAP.

664 ONU, CDF. Observaciones finales sobre Uruguay. UN doc. CED/C/URY/CO/1. Del 8 de mayo de 2013. párr.38. Disponible en: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED/C/URY/CO/1&Lang=Sp ANEXO 25 del ESAP.

665 ONU, GTDFI. Observación General sobre los niños como víctimas de desaparición forzada. UN doc. A/HRC/WGEID/98/1. Del 14 de febrero de 2013. párr. 9. Disponible en: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/GC/A-HRC-WGEID-98-1_sp.pdf ANEXO 24 del ESAP.

666 ONU, GTDFI. Observación General sobre los niños como víctimas de desaparición forzada. UN doc. A/HRC/WGEID/98/1. Del 14 de febrero de 2013, párr. 4. Disponible en: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/112/67/PDF/G1311267.pdf?OpenElement ANEXO 24 del ESAP

667 CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO, párrs. 66 y 75, anexo 1 del informe (págs. 3 y 4), anexo 7 del informe (Denuncia de Arley de Jesús Arango ante el Juzgado 27 de Instrucción Penal Militar, de 30 de abril de 1996. Declaración de Arley de Jesús Arango ante el Departamento Administrativo de Seguridad, de 10 de septiembre de 1996. Expediente No. 233 UNDH. Cuaderno No. 4) y anexo 22 del informe (Declaración de Uriel Antonio Hernández ante la Personería Municipal de El Carmen de Viboral, de 31 de julio de 1996. Expediente No. 008-10799-98. Procuraduría Delegada Disciplinaria de Derechos Humanos. Ministerio Público. Folios 97-98). Ver también, Tribunal Superior de Bogotá – Sala de Justicia y Paz. Sentencia Ramón María Isaza Arango y otros, de 29 de mayo de 2014. Rad. 11-001-60-00253-2007 82855 - Rad interno 1520. ANEXO 8 del ESAP. Párrs. 387-388 y 957-958. Asimismo, ver: International Center for Transitional Justice (ICTJ). "Reparación integradora para niños, niñas y jóvenes víctimas de reclutamiento ilícito en Colombia". Octubre de 2014. Págs. 8-9. Disponible en:

En virtud de todo lo antes expuesto, esta representación sostiene que el Estado colombiano es responsable internacionalmente por la violación de su obligación de adoptar medidas de protección especial para los niños y niñas en el contexto del conflicto armado interno en violación del artículo 19 de la Convención Americana, en conjunto con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de los 3 adolescentes forzosamente desaparecidos por el grupo paramilitar del Magdalena Medio con aquiescencia del funcionarios militares colombianos, a saber: Oscar Zuluaga Marulanda (15 años), Juan Crisóstomo Cardona Quintero (12 años) y Miguel Ancizar Cardona Quintero (15 años).

### C. El Estado es responsable por la ejecución extrajudicial de Javier Giraldo Giraldo

El Estado colombiano es responsable internacionalmente por la violación al derecho a la vida en perjuicio de Javier Giraldo Giraldo, debido a que este fue ejecutado en la carretera Medellín-Bogotá por miembros del grupo de autodefensas del Magdalena Medio con el conocimiento y la colaboración de agentes estatales, en violación los artículos 4 y 5 de la CADH.

Esta Honorable Corte ha establecido con respecto a los derechos a la vida y a la integridad personal, que tales derechos no sólo implican la obligación de respeto por parte del Estado, sino que, además, requieren que el Estado adopte todas las medidas apropiadas para garantizarlos, en cumplimiento de su deber general establecido en el artículo 1.1 de la Convención Americana[668].

Como bien lo reiterado este Alto Tribunal, las obligaciones de respetar y garantizar los derechos que establece el artículo 1.1 de la CADH, derivan deberes especiales determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre[669]. Además, la responsabilidad internacional del Estado se funda en actos u omisiones de cualquier poder u órgano de éste, independientemente de su jerarquía, que sean violatorios de los derechos y obligaciones contenidos en la Convención Americana[670].

Asimismo, este Alto Tribunal ha establecido que *"(…) el derecho a la vida ocupa un espacio fundamental en la Convención Americana, por ser el presupuesto esencial para el ejercicio de*

https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Informe-Colombia-Reparacion-reclutamiento-ilegal-2014.pdf ANEXO 4 del ESAP.

668 *Cfr*., Corte IDH. Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259. Párr. 188; Corte IDH. *Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala*. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 139; Corte IDH. *Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012. Serie C No. 252, párr. 145.

669 *Cfr*., Corte IDH. *Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia.* Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 111; Corte IDH. *Caso Furlán y Familiares Vs. Argentina*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, párr. 134.

670 *Cfr.*, Corte IDH. *Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras.* Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C No. 7, párr. 164; Corte IDH. *Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012. Serie C No. 252, párr. 142.

*los demás derechos"*[671]. En este sentido, los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones necesarias para que no se generen violaciones al derecho a la vida. Esta protección activa del derecho a la vida por parte del Estado no sólo involucra a sus legisladores, sino a toda institución estatal y a quienes deben resguardar la seguridad, sean éstas sus fuerzas de policía o sus fuerzas armadas[672].

Es importante resaltar la obligación que tienen los Estados de i) crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida; ii) vigilar que sus cuerpos de seguridad, a quienes les está atribuido el uso legítimo de la fuerza, respeten el derecho a la vida de quienes se encuentren bajo su jurisdicción; iii) establecer un sistema de justicia efectivo capaz de investigar, castigar y dar reparación por la privación de la vida por parte de agentes estatales o particulares; y iv) salvaguardar el derecho a que no se impida el acceso a las condiciones que garanticen una existencia digna[673].

Respecto a la práctica de ejecuciones extrajudiciales, la Corte ha indicado que *"[…] los Estados deben tomar las medidas necesarias, no sólo para prevenir y castigar la privación de la vida como consecuencia de actos criminales, sino también prevenir las ejecuciones arbitrarias por parte de sus propias fuerzas de seguridad […]"*[674].

Asimismo, la CIDH ha sostenido en otras oportunidades que *"[…] las ejecuciones extrajudiciales o sumarias se caracterizan por ser privaciones deliberadas e ilegítimas de la vida por parte de agentes del Estado, actuando generalmente bajo órdenes o al menos con el consentimiento o aquiescencia de las autoridades"*[675].

En el presente caso, el 7 de julio de 1996, los ocupantes de las mismas camionetas en las que se habían llevado a Juan Carlos Gallego Hernández y Jaime Alonso Mejía Quintero[676], pasaron por la autopista Medellín-Bogotá, donde se encontraba Javier Giraldo; le preguntaron su

---

671 *Cfr*., Corte IDH. *Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala.* Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 144; Corte IDH. *Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012. Serie C No. 252, párr. 145.

672 *Cfr*., Corte IDH. *Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador.* Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 80; Corte IDH. *Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala.* Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 144.

673 *Cfr*., Corte IDH. *Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador.* Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 81; Corte IDH. *Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, párr. 66.

674 *Cfr*., Corte IDH. *Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, párr. 237; Corte IDH. *Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 231; Corte IDH. *Caso Huilca Tecse Vs. Perú.* Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de marzo de 2005. Serie C No. 121, párr. 66.

675 *Cfr*., CIDH. *Caso Vereda la Esperanza Vs. Colombia*. Informe sobre el Fondo. párr. 209; Citando a CIDH. Caso *Masacre de Plan de Sánchez Vs. Guatemala*. Informe No. 25/02, Caso No. 11.763, del 28 de febrero de 2002, párr. 114

676 CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO. Párr. 114 y anexo 48 del informe (Declaración de Carlos Arturo Estrada Ramírez ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, de 15 de abril de 1998).

nombre y le indicaron que se subiera, a lo que él se negó[677]. Al tratar de escapar en su moto, una de las camionetas pisó la llanta de su moto y su pie, insultándolo y subiéndolo a uno de los vehículos[678]. Testigos señalaron que vieron cómo le dispararon y dejaron su cuerpo en la carretera[679].

El mismo día de los hechos, el inspector de policía del municipio de Cocorná emitió un acta de levantamiento del cuerpo del señor Giraldo, indicando que el cadáver fue hallado en la Vereda San Vicente, al lado izquierdo de la carretera Medellín-Bogotá[680].

Según la necropsia, el cuerpo presentaba 19 orificios de entrada producidos por arma de fuego, en la espalda, hombro, pecho, cuello, labio, mentón y costilla derecha y *"'múltiples laceraciones en hipocondrio derecho, falange medio tercer dedo mano derecha, labio superior e inferior en comisura derecha'. Por las vainillas recuperadas en el lugar de los hechos y en el cuerpo de la víctima las heridas se produjeron con pistola o subametralladora calibre 9 mm"*[681]. Sin embargo, la multiplicidad de disparos de armas de fuego, no logró ninguna reacción de la Fuerza Pública que se encontraba en el área.

En conclusión, en el marco de la participación conjunta de agentes militares y las AMM[682], se configura una ejecución extrajudicial. En consecuencia, el Estado colombiano es responsable internacionalmente por violar el derecho a la vida y a la integridad personal de Javier Giraldo Giraldo y por la falta de una investigación adecuada de estos hechos, en violación a los derechos consagrados en los artículos 4 y 5 de la Convención Americana en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento

---

677 CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO. Párr. 114, anexo 47 del informe (Declaración de Nelly Soto de Castaño ante la Fiscalía General de la Nación, de 12 de agosto de 1996) y anexo 24 del informe (Declaración de Pablo Antonio Quintero ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, de 5 de abril de 2005. Expediente No. 233 UNDH. Cuaderno No. 10. Folios 190-193).

678 CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO. Párr. 114, anexo 47 del informe (Declaración de Nelly Soto de Castaño ante la Fiscalía General de la Nación, de 12 de agosto de 1996) y anexo 24 del informe(Declaración de Pablo Antonio Quintero ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, de 5 de abril de 2005. Expediente No. 233 UNDH. Cuaderno No. 10. Folios 190-193).

679 CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO. Párr. 114, anexo 24 del informe (Declaración de María de la Cruz Hernández de Gallego ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, de 8 de noviembre de 2004. Expediente No. 233 UNDH. Cuaderno No. 10. Folios 71-72), anexo 19 del informe (Escrito de la Corporación Jurídica Libertad a la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, presentado el 2 de abril de 2007) y anexo 30 del informe (Declaración de José Eliseo Gallego Quintero ante la Personería Municipal de El Carmen de Viboral, de 19 de julio de 1996).

680 CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO. Párr. 115 y anexo 49 del informe (Informe No. 084, Radicado No. 21.005 de la Dirección Regional del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, de 27 de noviembre de 1996).

681 CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO. Párr. 115, anexo 49 del informe (Informe No. 084, Radicado No. 21.005 de la Dirección Regional del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, de 27 de noviembre de 1996, folio 107, Cuaderno No. 1. Radicado 233) y anexo 13 del informe (Decisión judicial de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, firmada por la Fiscal Especializada Lilia Hernández Ramírez, de 30 de abril de 2003. Expediente No. 233 UNDH. Cuaderno No. 9. Folios 251-302).

682 CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO. Párr. 230.

### D. El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial de las victimas sus familiares

El Estado colombiano es responsable por la violación del derecho a las garantías judiciales y la protección judicial, en perjuicio de las víctimas y sus familiares, debido a que han trascurrido casi 19 años desde que los hechos denunciados tuvieron lugar sin que las investigaciones y procesos llevadas a cabo hayan conducido a la clara identificación de los responsables y a su sanción.

Es más, pese al transcurso de 19 años desde los hechos, **todos los procesos judiciales iniciados a la fecha no han avanzado desde la primera etapa procesal, es decir ni siquiera existen acusaciones**, siendo que a la fecha hay solamente 5 personas vinculadas a los procesos.

Los graves hechos denunciados permanecen en la impunidad, lo que constituye una transgresión de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en conjunto con el incumplimiento del artículo 1.1 del mismo instrumento y con el artículo 1.a y 1.b de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

El artículo 8 de la Convención establece que:

> Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, labor, fiscal o de cualquier otro carácter.

El artículo 25, por su parte, dispone que:

> Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

Asimismo, los Estados Partes se comprometen a:

> a. Garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
>
> b. Desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
>
> c. Garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

Por su parte, el artículo I de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas establece:

Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a:

> a) No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales;
>
> b) Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo; […]

De acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, los Estados Partes están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos[683]. El derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo ante los jueces o tribunales nacionales competentes es una garantía judicial fundamental, que jamás puede ser minimizada. Constituye, en última instancia, uno de los pilares básicos no sólo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino del Estado de Derecho[684].

En reiteradas oportunidades la Honorable Corte Interamericana ha señalado que el Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, situación que ha sido definida por la Corte como *"la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana"*[685].

Al respecto, la Corte ha advertido que *"[…] el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares"*[686].

Asimismo ha señalado que:

> "[…] toda vez que haya motivos razonables para sospechar que una persona ha sido sometida a desaparición forzada debe iniciarse una investigación ex officio, sin dilación, y de una manera seria, imparcial y efectiva […]. Esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. No obstante, la investigación y el proceso deben tener un propósito y ser asumidos por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión

---

683 *Cfr.* Corte IDH. *Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala*. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 191.

684 *Cfr.* Corte IDH. *Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 192; Corte IDH. *Caso Baldeón García Vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C No. 147, párr. 144; Corte IDH. *Caso López Álvarez Vs. Honduras*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 138.

685 *Cfr*. Corte IDH*. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú.* Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110. 110, párr. 148; Corte IDH. *Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 175; Corte IDH. *Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No. 103 párr. 126.

686 *Cfr.* Corte IDH. *Caso Carpio Nicolle y otros Vs. Guatemala*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre 2004. Serie C No. 117, párr. 126; Corte IDH. *Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala*. Reparaciones. Sentencia de 19 de noviembre 2004. Serie C No. 116, párr. 95; Corte IDH. *Caso Tibi Vs. Ecuador.* Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 255.

> de intereses particulares. En casos de desaparición forzada de personas, la denuncia formal de los hechos no descansa exclusivamente en los familiares de las víctimas."[687]

Igualmente ha establecido que:

> […] los órganos estatales encargados de la investigación relacionada con la desaparición forzada de personas, cuyos objetivos son la determinación de su paradero y el esclarecimiento de lo sucedido, la identificación de los responsables y su posible sanción, deben llevar a cabo su tarea de manera diligente y exhaustiva. Los bienes jurídicos sobre los que recae la investigación obligan a redoblar esfuerzos en las medidas que deban practicarse para cumplir su objetivo. El actuar omiso o negligente de los órganos estatales no resulta compatible con las obligaciones emanadas de la Convención Americana, con mayor razón si están en juego bienes esenciales de las personas"[688].

De la descripción de los hechos realizada *supra* es evidente que en el caso que nos ocupa no se cumplió con la obligación de investigar de acuerdo a los estándares descritos.

A continuación nos referiremos a las distintas violaciones a los derechos contenidos en los artículos 8 y 25 de la CADH y a las obligaciones contenidas en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

## 1. Procesos Penales

### *a) Falta de debida diligencia en la primeras etapas de las investigaciones*

Esta Honorable Corte ha establecido que la obligación de garantizar los derechos contenidos en la Convención comprende, entre otras cosas, el deber jurídico de

> "[…] investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponer [a los responsables] las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación"[689].

En este sentido, se debe determinar si la violación en cuestión se ha perpetrado *"[…] con el apoyo o la tolerancia del poder público o si éste ha actuado de manera que la transgresión se haya cumplido en defecto de toda prevención o impunemente"*[690].

---

687 *Cfr.* Corte IDH. *Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010. Serie C No. 217, párr. 155; Corte IDH. *Caso Radilla Pacheco Vs. México*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 197.

688 *Cfr.* Corte IDH. *Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010. Serie C No. 217, párr. 173.

689 *Cfr.,* Corte IDH. *Caso de las Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) Vs. Colombia*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2013. Serie C No. 270, párr. 370.

690 *Cfr.,* ídem.

Asimismo, es pertinente recordar que a pesar de que el deber de investigar es de medio y no de resultado, ello no se traduce en que la investigación sea tratada como *"una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa*" o como una mera gestión de intereses particulares[691].

Es por esto que la responsabilidad recae en las autoridades estatales, para que dentro de sus funciones realicen "[…] una investigación seria, imparcial y efectiva por todos los medios legales disponibles que debe estar orientada a la determinación de la verdad y al eventual enjuiciamiento y en su caso castigo de los autores de los hechos"[692], especialmente en un caso como el presente en el cual están involucrados agentes estatales.

En el Caso Rodríguez Vera y otros (Palacio de Justicia) vs. Colombia, la Corte se refirió al Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas precisando lo siguiente:

> "[…] La Corte ha establecido que la eficiente determinación de la verdad en el marco de la obligación de investigar una posible muerte, debe mostrarse desde las primeras diligencias con toda acuciosidad. Asimismo, este Tribunal ha sustentado que, en el manejo de la escena del crimen y el tratamiento de los cadáveres de las víctimas, deben realizarse las diligencias mínimas e indispensables para la conservación de los elementos de prueba y evidencias que puedan contribuir al éxito de la investigación, tales como la autopsia y el levantamiento del cadáver. Igualmente, se ha señalado que la debida diligencia en la investigación de una muerte exige el mantenimiento de la cadena de custodia de todo elemento de prueba forense."[693]

En este sentido, la Corte ha reiterado que las omisiones en las primeras diligencias pueden condicionar e incluso limitar las investigaciones que se realicen ulteriormente[694], causando de esta forma obstáculos en el esclarecimiento de los hechos y resultando imposible la sanción a los responsables.

En el presente caso, es posible identificar diversas irregularidades en las primeras actuaciones que son imputables a las autoridades estatales y que tienen un impacto directo en la falta de éxito de las investigaciones y los procesos iniciados que llevan a la impunidad de las violaciones denunciadas.

Así por ejemplo, pese a que existen evidencias de que los ministerios públicos actuantes llevaron a cabo algunas diligencias tempranas que podrían haber arrojado información útil para la identificación de los responsables, los resultados de estas diligencias no aparecen luego

---

691 *Cfr.,* Ibíd. párr.371.

692 *Cfr.,* ídem.

693 *Cfr.,* Corte IDH. *Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Serie C No. 287. párr. 478. Citando al *Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas*, Doc. E/ST/CSDHA/.12 (1991), y *Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México*. *Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.* Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párrs. 305 y 310.

694 *Cfr.,* Corte IDH. *Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Serie C No. 287. párr. 479.

incorporados a los procesos ni fueron utilizados por los fiscales y jueces actuantes para dar seguimiento a hipótesis de investigación que se basaban en las denuncias de las víctimas o los testimonios de testigos claves.

La CIDH se refiere en su informe de fondo, por ejemplo, a las inspecciones llevadas a cabo en la Vereda por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación el 12 de julio y el 1 y 2 de agosto de 1996. En esta última consta que se evidenció "la destrucción de la casa de José Eliseo Gallego, el hurto de varios elementos y lesiones a Juan Carlos" y se procedió a tomar fotografías y a recoger cartuchos de munición y bolsas que eran utilizados por el ejército y estaban marcadas con sus logotipos.[695] Consta asimismo en el expediente que los resultados de la diligencia en la propiedad del Sr. Eliseo Gallego llevada a cabo por el Personero del Municipio de Cocorná, donde se recogieron estas evidencias, fueron presentados ante la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación y consignados en forma de un video.[696]

Adicionalmente, la Comisión observa que se realizaron alrededor de diez inspecciones y visitas en sedes de brigadas y pelotones, incluyendo en la base militar La Piñuela y el archivo general del Ministerio de Defensa Nacional, realizadas principalmente entre agosto de 2000 y febrero de 2001.[697] Sin embargo, ninguna de estas inspecciones da cuenta de información sobre la FTA o sus integrantes.[698] En efecto, hemos dado cuenta de que la Fiscalía realizó al menos 5 inspecciones judiciales a los archivos de la FTA en los Batallones Héroes de Barbacoas[699], Pedro Nel Ospina y Bárbula[700], a las Jefaturas de la Central de Inteligencia de la Brigada 4a[701], la 14ª del Ejército[702], y la 1ª División del Ejército[703].

Es de notoria preocupación que, pese a todas estas tareas de investigación, no se haya podido encontrar información en los registros del Estado y de estas instalaciones que permita identificar

---

695 *Cfr.* CIDH. Caso Vereda la Esperanza v Colombia. Informe sobre el Fondo. parr.250, 251.

696 Informe No.84 dentro del Radicado. 21.005 en desarrollo de la orden de trabajo No. 088 Dirigido al Dr. Iván De Jesús Duque Santa. Noviembre 27 de 1996. Folios 107 del Cuaderno 1 del Radicado 233 de la UNDH DIH, ANEXO 2 del ESAP.

697 *Cfr.* CIDH. Caso Vereda la Esperanza v Colombia. Informe sobre el Fondo. párr. 252

698 *Ibídem.*

699 Folios 92-101 Cuaderno No. 4 Radicado 233 UNDH DIH. Citado en Resolución que resuelve situación jurídica al Procesado Ramón María Isaza Arango. Abril 3 de 2003. Folio 288. Cuaderno No.9 Radicado 233 UNDH DIH, ANEXO 2 del ESAP.

700 Folios 154-259 Cuaderno No. 7 Radicado 233 UNDH DIH. Citado en Resolución que resuelve situación jurídica al Procesado Ramón María Isaza Arango. Abril 3 de 2003. Folio 290. Cuaderno No.9 Radicado 233 UNDH DIH, ANEXO 2 del ESAP.

701 Folios 141-148 Cuaderno No. 6 Radicado 233 UNDH DIH. Citado en Resolución que resuelve situación jurídica al Procesado Ramón María Isaza Arango. Abril 3 de 2003. Folio 289. Cuaderno No.9 Radicado 233 UNDH DIH, ANEXO 2 del ESAP.

702 Folios 92-94 Cuaderno No. 4 Radicado 233 UNDH DIH. Citado en Resolución que resuelve situación jurídica al Procesado Ramón María Isaza Arango. Abril 3 de 2003. Folio 290. Cuaderno No.9 Radicado 233 UNDH DIH, ANEXO 2 del ESAP.

703 Folios 51-54 Cuaderno No. 4 Radicado 233 UNDH DIH. Citado en Resolución que resuelve situación jurídica al Procesado Ramón María Isaza Arango. Abril 3 de 2003. Folio 289. Cuaderno No.9 Radicado 233 UNDH DIH, ANEXO 2 del ESAP.

a los soldados que estarían adscritos al Pelotón de la FTA que operaba en la Vereda y se ubicaba en el cruce con la carretera que conduce a la localidad de Cocorná en la época de los hechos. Como hemos referido en este escrito, esta información resulta central para la identificación de muchas de las violaciones de este caso, pero muy especialmente para la identificación de los responsables de la desaparición forzada de Octavio de Jesús Gallego Hernández. En este caso, la participación de funcionarios de soldados de la FTA fue denunciada desde el primer momento a través de los testimonios de los testigos Héctor Manuel González Ramírez y otros familiares[704].

De mayor gravedad aún, y como ha notado la CIDH en su informe sobre el fondo, existen evidencias de que muchas de estas primeras diligencias fueron frustradas por la negativa de funcionarios oficiales de colaborar o por la obstaculización de acceder a información o incluso por la destrucción de información que pudiera ser relevante para la investigación.[705] La CIDH refiere particularmente a la inspección realizada el 26 de febrero de 2001 a la Brigada XIV donde se evidenció que i) las oficinas de derechos humanos de dicho lugar fueron cerradas; ii) no se respondió a las numerosas solicitudes de requerimiento de información; y iii) los archivos existentes estaban semidestruidos y guardados sin ningún orden o sistematización.[706]

En este sentido, esta representación considera que en el caso se han violación a las garantías judiciales desde el comienzo mismo de las actuaciones procesales y de investigación, llevando a la pérdida de evidencia, a la frustración de los procedimientos judiciales y, en definitiva a la impunidad que afecta las causas al día de la fecha y el desconocimiento respecto al paradero de las víctimas que fueron denunciadas como desaparecidas[707].

### *b) Omisión de las líneas de investigación fundamentales e irregularidades en las investigaciones*

Asimismo, no solamente se vieron frustradas muchas de las diligencias iniciales por causa de la falta de colaboración de algunos agentes estatales, la pérdida de prueba o la no incorporación de evidencias en los expedientes procesales, sino que además las autoridades públicas a cargo de impulsar las investigaciones omitieron impulsar diligencias que hubieran sido necesarias para dar seguimiento a importantes líneas de investigación.

---

704 Declaración de Héctor Manuel González Ramírez abril 15 de 1998 ante la Dirección nacional de fiscalías UNDH. Folios 197-198-199 Cuaderno No. 2 Radicado 233 UNDH – DIH. ANEXO 2 del ESAP. Declaración de HECTOR MANUEL GONZALEZ RAMIREZ. Agosto 9 de 1996. Folios 101 – 102 Cuaderno 1. Expediente No. 008 – 1079998 Procuraduría delegada disciplinaria derechos humanos, CD presentado por la Comisión a la Corte denominado proceso disciplinario. Declaración de HECTOR MANUEL GONZALEZ RAMIREZ. Rendida el 10 de noviembre 2004. FL 76- 80. Cuaderno No. 10. Radicado 233. UNDH – DIH. "…. los volví a ver a los tres días después de que desaparecieron a OCTAVIO, los vi en "el estanco", los cuales estaban vestidos de ejército, o sea con camuflados, tenían insignias como el ejército, y ellos estaban ahí parados con toda la tropa, más o menos unos 15".

705 *Cfr.* CIDH. Caso Vereda la Esperanza v Colombia. Informe sobre el Fondo. parr. 252.

706 *Cfr.* CIDH. Caso Vereda la Esperanza v Colombia. Informe sobre el Fondo. párr. 252.

707 *Cfr;* Corte I.D.H.,*Caso Uzcátegui Vs. Venezuela*. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 3 de septiembre de 2010. Serie C No. 249, párr. 218.

En este sentido, este Alto Tribunal ha establecido que no realizar las diligencias investigativas de manera oportuna constituye una falta de debida diligencia, pues impide *"entre otras cosas, la oportuna preservación y recolección de la prueba y la identificación de testigos oculares"*[708].

Muy particularmente, cabe destacar que estos son casos que involucraron varias denuncias de desapariciones. Sin embargo, no surge del expediente que se hayan llevado a cabo las diligencias prontas y necesarias para investigar en forma inmediata a la denuncia el posible paradero de las personas desaparecidas, quienes bien podían estar vivas y en situación de riesgo. En ese sentido, la Corte ha establecido que toda vez que haya motivos razonables para sospechar que una persona ha sido sometida a desaparición forzada debe iniciarse una investigación de oficio[709], y esta investigación debe tener por objetivo el esclarecimiento de lo ocurrido pero también la rápida identificación del paradero de la persona que desapareció.

Asimismo, a lo largo de la investigación fueron surgiendo elementos probatorios importantes que podrían haber sido piezas claves para descifrar lo ocurrido, identificar a los responsables y encontrar el paradero de las víctimas. Sin embargo, muchas de estas líneas de investigación no fueron perseguidas por las autoridades a cargo de las investigaciones, evidenciando así la ausencia del impulso procesal diligente que es exigido por la Convención Interamericana para la investigación de graves violaciones a los derechos humanos.

### *c) Falta de investigación sobre la propiedad, identificación y ubicación de los automóviles utilizados en los hechos delictivos*

Uno de los más claros ejemplos en este sentido, se da en la ausencia absoluta de investigación respecto a la identificación, procedencia o ubicación de los automóviles utilizados por los perpetradores de las desapariciones forzadas de Aníbal de Jesús y Oscar Hemel. En este sentido, a pesar de que los familiares de las víctimas identificaron desde el inicio de la investigación penal que los vehículos utilizados en esa instancia eran los usados por los soldados que permanecían en la Vereda La Esperanza[710], esta circunstancia no fue materia de investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía ni de la Procuraduría General de la Nación. No surge del expediente que las fuerzas públicas que recibieron las denuncias o las autoridades judiciales hayan desarrollado oportunamente labores de indagación encaminadas a identificar estos vehículos o sus propietarios, así como tampoco para inmovilizarlos.

La investigación sobre la procedencia y ubicación de estos elementos delictivos podría no solamente haber aportado información clave a las investigaciones, sino que además podría haber permitido prevenir otras de las violaciones que se dieron con posterioridad a las

---

[708] *Cfr.,* Corte IDH. *Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil*. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 189.

[709] *Cfr. Caso Radilla Pacheco, supra* nota 74, párr. 143; *Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, supra* nota 9, párr. 65, y *Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia)*, *supra* nota 16, párr. 108.

[710] Declaración de María Oveida Castaño Gallego rendida el 31 de julio de 1996 ante la oficina de Investigaciones especiales de la Procuraduría seccional Antioquia. Folio 154 – 156 del Cuaderno No. 1 Radicado 233 de la UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP. La testigo sostiene que "han visto subir soldados, las camionetas más conocidas son una blanca y otra roja pero he visto de otros colores, esa gente se moviliza en moto también y en taxis amarillos" y las ha visto también "como por ahí unas tres veces después de la desaparición de mi marido, con soldados vestidos de camuflado".

desapariciones de Aníbal de Jesús y Oscar Hemel. En este sentido, varios de los testimonios recabados luego de las desapariciones de los menores Juan Crisostomo y Miguel Ancizar Cardona Quintero, identificaron una camioneta verde de iguales características a la utilizada por los perpetradores de la desaparición de Aníbal y Oscar.[711]

En efecto, surge del expediente que, también en esta oportunidad, algunos de los testigos fueron describiendo colores y tipos de automotores en declaraciones o en oportunidad de presentar información a la CTI[712]. Consta incluso que se allegó al expediente un escrito anónimo, y se elaboró un breve informe de policía judicial, que identificó los vehículos usados por personal del Batallón Héroes de Barbacoas, que operaba en la Autopista Medellín – Bogotá[713].

Sin embargo, nuevamente aquí las autoridades omitieron seguir esta línea de investigación y no consta información respecto a la identificación de los vehículos, sus propietarios o su paradero.

### *d) Ausencia de diligencias tendientes a identificar y vincular a los agentes militares que participaron o toleraron los hechos denunciados.*

Asimismo, esta representación llama la atención de esta Honorable Corte al hecho de que, pese a los numerosos testimonios e información que obra en el expediente respecto a la relación y colaboración entre las fuerzas paramilitares y las fuerzas públicas a la fecha de los hechos, hasta la fecha no ha habido avances significativos en la investigación que permitan identificar a varios de los agentes estatales que tuvieron participación directa o indirecta en los hechos denunciados.

En este sentido, la CIDH hizo referencia en su informe de fondo a la existencia de al menos cinco informes de órganos de la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación que resaltaron la presunta participación de miembros del ejército en los hechos del presente caso[714]. También surgen del expediente al menos 20 declaraciones de familiares y testigos, respecto a las cuales la CIDH constató referencias a la participación de agentes

---

711 Folios 190-191 Cuaderno No. 2. Radicado 233 de la UNDH – DIH. ANEXO 2 del ESAP. Declaración con reserva de identidad. Fiscalía General de la Nación, Dirección nacional de Fiscalías, UNDH, 14 DE ABRIL 1998. Y declaración de María Oveida Castaño Gallego rendida el 31 de julio de 1996 ante la oficina de Investigaciones especiales de la Procuraduría seccional Antioquia. Folio 154 – 156 del Cuaderno No. 1 Radicado 233 de la UNDH – DIH. ANEXO 2 del ESAP.

712 Informe 047-2551-2560-032 FGNDR-CTI-SIE del 15 de agosto de 1996, dirigido al Director Regional del CTI. En él se indica que los vehículos en los que se desplazan las personas encargadas de cometer los hechos son tres carros lujosos con aproximadamente 6 hombres de civil bien armados; un TOYOTA blanco tipo camioneta NISSAN rojo de placas No 912 y un TROOPER verde oliva carpado. Figura en las conclusiones que en el sector comprendido entre la entrada al municipio de San Francisco y cerca del peaje se movilizan un grupo de paramilitares en los vehículos descritos. Folios 273 – 276 Cuaderno No. 3. Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

713 Folio 40. Cuaderno No. 6. Radicado 233 UNDH – DIH. ANEXO 2 del ESAP. Oficio fechado el 27 de agosto de 1996 suscrito por la Técnico en criminalística Patricia Cabezas Yarce, que hace un estudio de los vehículos utilizados por los miembros del Batallón Héroes de Barbacoas que se movilizan por la autopista Medellín Bogotá, tales como: una camioneta Toyota de placas NIK 775, un Nissan de placas ITO 605, un Mitsubishi de placas CPH 599.

714 *Cfr.* CIDH. Caso Vereda la Esperanza v Colombia. Informe sobre el Fondo. párr. 255

militares en los hechos, sea porque los testigos presenciaron los hechos, pudieron identificar luego a los perpetradores como agentes militares o dialogaron con ellos[715]. Asimismo, la Comisión hizo referencia en su informe de fondo a las resoluciones de la UNDH y del Tribunal Superior de Bogotá que indicaron diversos elementos de prueba que vincularían a miembros del Ejército Nacional en los hechos y a las propias declaraciones de Ramón Isaza, líder de las Autodefensas del Magdalena Medio, quien reconoció la participación del Ejército Nacional en el planeamiento y ejecución de los hechos de la Vereda La Esperanza[716].

Asimismo, de los hechos evidenciados en nuestro escrito surgen elementos adicionales que debieron haber dado lugar a diligencias específicas tendientes a identificar a los agentes militares y policiales que participaron de los hechos delictivos y fueron señalados por las víctimas, sus familiares o testigos.

Así, por ejemplo, en el caso de las desapariciones forzadas de Juan Crisóstomo y Miguel Ancizar Cardona Quintero, hubo testigos directos que se refirieron concretamente a la participación de un soldado "que acostumbraba permanecer en uno de los controles del ejército situado a la entrada a Cocorná y a un policía de la Estación de Cocorná"[717]. Sin embargo, no consta en el expediente de este caso que se hayan llevado a cabo diligencias judiciales o administrativas tendientes a identificar a esta persona, tomado sus testimonios, ni realizado diligencias de reconocimiento a través de fotografías o filas de personas, como lo prevé la normativa procesal vigente a la época de los hechos[718].

También en el caso de la desaparición forzada de Octavio de Jesús Gallego Hernández, la participación de soldados de la FTA, que integraban un Pelotón en la Vereda La Esperanza (en la carretera que entra al Municipio de Cocorná) fue establecida desde el inicio de la investigación penal a través de las denuncias efectuadas por el testigo Héctor Manuel González Ramírez y otros familiares. Sin embargo, tampoco en el trámite de esta investigación surge información que indique que las autoridades actuantes llevaron a cabo diligencias con la finalidad de identificar e individualizar a esos autores y partícipes. De hecho, hasta la fecha no se han establecido las identidades del personal de la FTA que hizo parte de ese Pelotón en el lugar indicado.

La falta de investigación en este sentido es notoria también en el caso de la desaparición de Irene de Jesús Gallego Quintero. En este caso, no se indagó por el personal militar que la capturó el día 26 de junio de 1996, ni se investigaron las irregularidades que caracterizaron su posterior entrega, por parte del Comandante de la Fuerza de Tarea Águila, ante la Fiscalía Seccional de Santuario. Tampoco la Fiscalía avanzó con respecto al testimonio recibido con

715 *Cfr.* CIDH. Caso Vereda la Esperanza v Colombia. Informe sobre el Fondo. párr. 255

716 *Cfr.* CIDH. Caso Vereda la Esperanza v Colombia. Informe sobre el Fondo. párr. 255

717 Declaración de Elvira Rosa Fernández Cardona ante el juzgado Civil Municipal del Carmen de Viboral del día 12 de octubre de 2004. Esta declaración fue anexada al proceso penal y obra a Folios 299-301 del Cuaderno 10 del Radicado 233 de la UNDH DIH. ANEXO 2 del ESAP.

718 Artículos 367, 368, 369 del Código de Procedimiento Penal. Decreto 2700 de 1991. ANEXO 27 del ESAP.

reserva de identidad, en el cual se daba cuenta que Irene se encontraba con agentes del ejército varios días después de su retención[719].

La presencia de personal militar también fue referenciada en las desapariciones forzadas de Leónidas Cardona y Andrés Gallego por una de las testigos presenciales. Sin embargo, no se profundizo en esa línea tendiente a esclarecer los hechos[720].

### *e) Ausencia de investigación de denuncias presentadas por víctimas y testigos y falta de adopción de medidas para su protección*

Las omisiones de las autoridades colombianas de llevar a cabo diligencias o abrir investigaciones prontas y eficaces ante la denuncia de violaciones a los derechos humanos en este caso, ha repercutido directamente en la impunidad que afecta los hechos denunciados. Asimismo, tal como evidenciamos en el caso de la falta de identificación de los automóviles utilizados en la primera desaparición denunciada, también han llevado a frustrar el cumplimiento del deber estatal de prevenir violaciones a los derechos humanos.

Esta Corte ha establecido en su jurisprudencia que, a fin de cumplir con su obligación de investigar, los Estados *deben "adopt[ar] de oficio y de forma inmediata medidas suficientes de protección integral e investigación frente a todo acto de coacción, intimidaciones y amenazas a testigos e investigadores"*[721].

En coincidencia con la CIDH, esta representación considera que el deber de adoptar medidas de protección y de iniciar investigaciones prontas, efectivas y de oficio son complementarios y constitutivos de las garantías judiciales protegidas en la CADH a través de los artículos 8 y 25, en relación con el artículo 1.1.

Así, en el caso de la desaparición de Irene de Jesús Gallego Quintero recordamos a la Corte Interamericana que la Fiscalía Seccional del Municipio de El Santuario recibió a esta víctima de parte de agentes militares que la tenían detenida. En oportunidad de recibir a Irene, la propia Fiscal determinó que la situación era *"compleja e irregular"*[722], que la joven fue presentada por parte de un Mayor del Ejército "*sin un informe que respaldase su procedimiento, sin una imputación definida y sin en que en tal momento se vislumbrara con claridad, cuál su presencia en la fiscalía y cuál el motivo de la presentación de su joven acompañante"*[723]. Asimismo, consta en el expediente que la joven Irene denunció ante esta Fiscal haber solicitado la

---

719 Declaración con reserva de identidad VB -1 tomada ante la Fiscalía Regional de la UNDH. Abril 14 de 1998. Folios 190 – 191 cuaderno No. 2 Radicado 233 UNDH – DIH. ANEXO 2 del ESAP.

720 Declaración de MARIA ROCIO CARDONA FERNANDEZ. Noviembre 11 de 2004. Folios 113 - 116. Cuaderno No. 10. Radicado 233. UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

721 Corte I.D.H., *Caso Kawas Fernández Vs. Honduras*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009 Serie C No. 196, párr.107.

722 Certificación Jurada mediante oficio 812-29 Unidad delegada ante los jueces penales municipales de Bello Antioquia. Abril 1 de 1997. Folios 163-167 del Cuaderno 2 del Radicado 233 de la UNDH-DIH, ANEXO 2 del ESAP.

723 Declaración de Olga María Ruiz ante la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación. Cuaderno 2, Folio 165, Radicado 233 de la UNDH-DIH, ANEXO 2 del ESAP.

protección del Mayor del Ejército porque *"estaba amenazada de muerte por el grupo subversivo con el que convivió unos meses en contra de su voluntad"*[724].

Sin embargo, pese a constatar las irregularidades en la privación de libertad de Irene, no surge del expediente que la Fiscalía haya adoptado diligencia o medida alguna para investigar esta detención arbitraria o la falta aparente de motivos que llevaron al Mayor a detenerla y llevarla a la Fiscalía. Solamente surge que la Fiscalía Seccional del Municipio de El Santuario habría iniciado una investigación con el Nro. Radicado 1015 correspondiente a las denuncias presentadas por Irene. Sin embargo, esta investigación no tuvo ningún impulso probatorio. En efecto, a la fecha, todas estas violaciones y su posterior desaparición forzada permanece en impunidad y no existen elementos que indiquen que las diligencias llevadas a cabo en los procesos hayan pretendido investigar la relación entre todos estos acontecimientos.

Por su lado, Andrés Antonio Gallego Castaño, quien luego fue desaparecido forzadamente, había acudido con fecha 11 de julio de 1996 a formular una denuncia ante el Juzgado Penal Municipal de Cocorná en relación a los distintos acontecimientos que venían ocurriendo en la Vereda La Esperanza y a atribuyó su responsabilidad a la Fuerza Pública. Sin embargo, las autoridades no condujeron una investigación diligente de esta denuncia, ni existen antecedentes en el expediente que relacionen este episodio con su posterior desaparición como posible línea de investigación.

La CIDH hizo referencia al hecho de que el 30 de junio de 1996[725], Juan Carlos Gallego rindió su declaración sobre los hechos ocurridos el 26 de junio de dicho año ante la Personería Municipal de Cocorná; y una semana después, el 7 de julio de 1996, el señor Juan Carlos Gallego fue retenido y desaparecido[726]. Por su lado, Andrés Gallego presentó una denuncia el 11 de julio y luego la amplió el 25 de octubre de 1996 donde se refirió a los distintos hechos ocurridos en la Vereda La Esperanza; luego, el 27 de diciembre de 1996 el señor Andrés Gallego fue retenido y desaparecido[727]. La CIDH destacó especialmente que en ambos supuestos las dos víctimas alegaron la participación de las Fuerzas Armadas y la colaboración con grupos paramilitares en la perpetración de los hechos mencionados[728]; sin embargo, las denuncias no fueron seriamente investigadas, ni tampoco se ha investigado el nexo entre las denuncias y las posteriores violaciones.

Igualmente, cabe hacer referencia en este sentido a las denuncias penales formuladas por el señor José Eliseo Gallego Quintero respecto al ataque a su vivienda y las lesiones personales que sufrió[729], que le ocasionaron una incapacidad médico legal de 25 días. Estas denuncias

---

724 Declaración de Olga María Ruiz ante la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación. Cuaderno 2, Folio 165, Radicado 233 de la UNDH-DIH, ANEXO 2 del ESAP.

725 Denuncia de JUAN CARLOS GALLEGO HERNÁNDEZ ante la Personería del Municipio de Cocorná el día 30 de junio de 1996. Obrante a Folios 141 – 142 cuaderno No. 1 Radicado 233 UNDH – DIH. ANEXO 2 del ESAP.

726 *Cfr.* CIDH. Caso Vereda la Esperanza v Colombia. Informe sobre el Fondo. párr. 270

727 *Cfr.* CIDH. Caso Vereda la Esperanza v Colombia. Informe sobre el Fondo. párr. 270

728 *Cfr.* CIDH. Caso Vereda la Esperanza v Colombia. Informe sobre el Fondo. párr. 270

729 Denuncia formulada por JOSE ELISEO GALLEGO QUINTERO ante la Unidad de Fiscalía Local de Cocorná. Julio 8 de 1996. Folios 12 – 15 del Cuaderno 1 del radicado 233 de la UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

tampoco tuvieron un seguimiento correspondiente. De un análisis del expediente surge que tanto la Fiscalía General de la Nación, como la Procuraduría General de la Nación dejaron de lado estas denuncias para concentrarse en la investigación de desaparición, y a la fecha, aún no se ha establecido la responsabilidad de los autores de estas violaciones, no se han esclarecido los hechos, y tampoco se han adoptado medidas de reparación de los daños causados.

Por su parte, el señor José Eliseo Gallego y la señora Dioselina Quintero formularon denuncia penal por los delitos de torturas, intimidaciones y amenazas que fueron conocidas por la Fiscalía 108 Seccional del Municipio de El Santuario; sin embargo, los hechos no han sido esclarecidos ni sus responsables investigados, juzgados ni sancionados[730], además tampoco se incorporaron como una línea lógica de investigación, a pesar de que se recogió evidencia en el proceso penal de esas denuncias.

Finalmente, también en los casos de Hernando de Jesús Castaño Castaño y María del Rocío Fernández Cardona existieron denuncias previas que debieron haber sido investigadas de oficio y diligentemente por las autoridades. Así, surge del expediente que la víctima Hernando de Jesús Castaño Castaño había formulado denuncia sobre los hechos que venían ocurriendo en la Vereda La Esperanza un día antes de su desaparición forzada, vinculando incluso la participación de agentes militares[731]. Asimismo, María del Rocío Fernández Cardona también formuló denuncia por la desaparición forzada de su esposo Leónidas Cardona. En ella develaba la intervención de soldados de la zona como participes de los hechos, así como que a las víctimas las conducirían a la Base Militar de la Piñuela, pero esta circunstancia no se desarrolló en materia de investigación[732].

### *f) Retardo injustificado*

La Honorable Corte Interamericana ha establecido que:

> "El derecho de acceso a la justicia requiere que se haga efectiva la determinación de los hechos que se investigan y, en su caso, de las correspondientes responsabilidades penales en tiempo razonable, por lo que, en atención a la necesidad de garantizar los derechos de las personas perjudicadas, una demora prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías judiciales. Además, por tratarse de una desaparición forzada, el derecho de acceso a la justicia incluye que en la investigación de los hechos se procure determinar la suerte o paradero de las víctimas".[733]

---

730 La investigación penal fue Radicada con el Nro. 1202 y fue adelantada por la Fiscalía 108 Seccional del Municipio de El Santuario. Folio 81 Cuaderno No. 2. Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

731 Denuncia formulada por el señor HERNANDO DE JESUS CASTAÑO CASTAÑO 5el 8 de julio de 1996 ante la Personería Municipal de Cocorná señala que en esa parte de la Vereda La Esperanza se mantiene una contraguerrilla del Ejército. Folio 143 Cuaderno No. 1 Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

732 Denuncia formulada por Andrés Antonio Gallego Castaño ante el Juzgado Penal Municipal de Cocorna el 11 de julio de 1996, Folio 2, Cuaderno 1, Radicado 233 UNDH-DIH.

733 *Cfr.,* Corte IDH. *Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010. Serie C No. 217, párr. 152.

Igualmente, esta Honorable Corte ha establecido que "es preciso tomar en cuenta cuatro elementos para determinar la razonabilidad del plazo: a) complejidad del asunto, b) actividad procesal del interesado, c) conducta de las autoridades judiciales, y d) afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso"[734].

Además, en casos de graves violaciones a derechos humanos, como el que nos ocupa, ha señalado que:

> "[c]on relación a la actividad procesal de los interesados, es necesario recordar que […], el Estado tiene el deber de iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva. Consecuentemente, la búsqueda efectiva de la verdad en este caso corresponde al Estado, y no depende de la iniciativa procesal de la víctima, o de sus familiares o de su aportación de elementos probatorios"[735].

Los representantes consideramos además, que por tratarse de desapariciones forzadas, la excesiva duración del proceso afecta gravemente los derechos de los familiares de las víctimas, pues prolonga innecesariamente el dolor por la incertidumbre de no conocer lo ocurrido a los seres queridos y el paradero de sus restos[736]. Por lo tanto, es necesario que "el procedimiento corra con más diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve"[737].

Finalmente, la Corte ha establecido que:

> […] la pertinencia de aplicar esos criterios para determinar la razonabilidad del plazo de un proceso depende de las circunstancias de cada caso, pues en casos [de desaparición forzada] como el presente el deber del Estado de satisfacer plenamente los requerimientos de la justicia prevalece sobre la garantía del plazo razonable. En todo caso, corresponde al Estado demostrar las razones por las cuales un proceso o conjunto de procesos han tomado un período determinado que exceda los límites del plazo razonable. Si no lo demuestra, la Corte tiene amplias atribuciones para hacer su propia estimación al respecto".[738]

Los hechos a los que se refiere este caso ocurrieron entre el 21 de junio y el 27 de diciembre de 1996. Han transcurrido 19 años desde entonces y a la fecha ninguna persona ha sido efectivamente condenado por los órganos del Poder Judicial colombiano. Es más, pese al transcurso de 19 años desde los hechos, **todos los procesos judiciales iniciados a la fecha no han avanzado desde la primera etapa procesal, es decir ni siquiera existen acusaciones**, siendo que a la fecha hay solamente 5 personas vinculadas a los procesos.

---

734 *Cfr.,* Corte IDH. *Caso Kawas Fernández Vs. Honduras*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009 Serie C No. 196, párr. 113; Corte IDH. *Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 155; Corte IDH. *Caso Anzualdo Castro Vs. Perú*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, párr. 156.

735 *Cfr.,* Corte IDH. *Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 157.

736 *Cfr.,* Ibíd., párr. 155.

737 *Cfr.,* Idem.

738 *Cfr.,* Corte IDH. *Caso Anzualdo Castro Vs. Perú*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, párr. 156.

Al respecto los representantes reconocemos que en efecto nos encontramos frente a un caso complejo, pues el mismo se refiere a la desaparición forzada de 14 personas y a la ejecución extrajudicial de una persona. Por la naturaleza de los hechos y los testimonios prestados, es posible suponer que en la desaparición forzada participaron una multiplicidad de personas.

En este sentido, de un análisis del proceso judicial surge que recién luego de cuatro años de sucedidos los hechos se logró avanzar en el sentido de emitir el auto de resolución de apertura de la investigación en contra de Ramón Isaza, líder de las Autodefensas del Magdalena Medio, y en contra del mayor Carlos Guzmán Lombana[739]. Cabe destacar que existían para ese momento numerosos testimonios y evidencias en el expediente que apuntaban a la participación de miembros de las Fuerzas Armadas en coordinación con las fuerzas paramilitares.

Luego, entre 2001 y 2003 sin justificación conocida no existieron movimientos significativos en el curso de las investigaciones llevando a un estancamiento de los procesos.[740]

El proceso penal No. 752.065, por su lado, evidencia también un atraso procesal significativo, siendo que transcurrieron más de seis años entre que el 11 de febrero de 1997 la Fiscalía Regional Delegada ante el Gaula de Antioquia dio inicio a la investigación, y el 26 de marzo de 2003, cuando el jefe de la Unidad de Fiscalías Especializadas de Medellín decidió suspenderla[741]. Transcurrieron así casi seis años de suspendida la investigación, hasta que una nueva fiscal decidió reactivar el expediente[742]. Esta nueva Fiscal incluso reconoció las falencias procesales y el estancamiento de las investigaciones en una resoluciones de 24 de febrero, 27 de julio y 5 de noviembre de 2009, entre las que expresamente destacó *"la ausencia de una adecuada actividad investigativa previa"* en el proceso seguido[743]. Sin embargo, tampoco luego de esta resolución se adoptaron las diligencias necesarias como para impulsar las investigaciones e identificar a los responsables.

En el último año, la Fiscalía que adelanta la investigación ha venido desarrollando una serie de actividades probatorias, y vinculó con medida de aseguramiento a tres desmovilizados de las AMM que habían confesado parcialmente los hechos en el escenario de Justicia Paz. Sin embargo, en relación con el Mayor Guzmán Lombana, quien se encuentra vinculado a la investigación, no ha desplegado labores investigativas, y ha permitido el paso del tiempo sin que se adoptan determinaciones con respecto a su compromiso penal en los hechos.

La investigación penal por las desapariciones forzadas de Leonidas Cardona y Andrés Gallego, a pesar de haber pasado a la Fiscalía especializada de desplazamiento forzado y desaparición forzada no ha identificado a los autores y determinadores de las mismas. Tampoco se acumuló

739 *Cfr.* CIDH. Caso Vereda la Esperanza v Colombia. Informe sobre el Fondo. párr. 261.

740 *Cfr.* CIDH. Caso Vereda la Esperanza v Colombia. Informe sobre el Fondo. párr. 261.

741 *Cfr.* CIDH. Caso Vereda la Esperanza v Colombia. Informe sobre el Fondo. párr. 264.

742 *Cfr.* CIDH. Caso Vereda la Esperanza v Colombia. Informe sobre el Fondo. párr. 266.

743 Oficio 322 de la Fiscalía destacada ante el Gaula Rural Oriente Antioqueño, 27 de julio de 2009, Folio 4, Cuaderno 13, Radicao 233 UNDH-DIH

a la investigación que adelanta la Fiscalía bajo el radicado 233 de la UNDH – DIH, no obstante haberse decretado la conexidad procesal[744].

En consecuencia, a la fecha los procesos adelantados en justicia ordinaria no han cumplido con los estándares de debida diligencia que son exigibles de las autoridades estatales en el marco de investigaciones de graves violaciones a los derechos humanos.

La Corte ha establecido que *"la facultad de acceso a la justicia debe asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y se sancione a los eventuales responsables"*[745]. Ha señalado, además, que en ciertos casos la demora prolongada en administrar justicia puede llegar a constituir por sí misma una violación de las garantías judiciales[746]. Es notorio que, habiendo transcurrido casi dos décadas de los hechos que llevaron a la desaparición forzada de 12 personas, incluyendo una mujer y menores de edad, y la ejecución de una persona, el hecho de que estos permanezcan en la impunidad con varios años de estancamiento en las actuaciones configura esta violación.

En este sentido, es necesario también referir al hecho de que, pese a estar tipificado en el derecho colombiano vigente a la época de los hechos, el delito de desaparición forzada no ha sido utilizado en las investigaciones internas, que han sido llevadas por los delitos de secuestro y en un caso por homicidio. Esta representación coincide con las conclusiones de la CIDH en el sentido de que la calificación inadecuada ha constituido un obstáculo adicional para la debida investigación de los hechos y la identificación de los posibles responsables[747]. En este sentido, cabe destacar que la utilización de la figura delictiva de la desaparición forzada ha sido requerida en diversas oportunidades por la parte civil en el proceso.

### 2. Proceso adelantado ante la jurisdicción de Justicia y Paz

Como hemos referido, la Ley de Justicia y Paz prevé que las personas desmovilizadas de grupos de guerrillas o de autodefensas que cumplan con los requisitos establecidos en dicha norma pueden recibir una condena de entre cinco a ocho años por los delitos cometidos[748]. El acusado Ramón Isaza, líder de las Autodefensas del Magdalena Medio, solicitó la suspensión de las investigaciones que se cursaban ante la justicia ordinaria a fin de acogerse a un proceso bajo la Ley de Justicia y Paz.

La piedra angular de este proceso de pretendida justicia transicional es la "versión libre" del postulado. A través de la misma, se le exige al postulado que contribuya eficazmente a la

---

744 Folio 68 al 69. Cuaderno 16. Radicado 233 de la UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

745 Corte IDH, *Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz,* Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167, párrafo 132.

746 Corte IDH, *Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párrafo 191.

747 *Cfr.* CIDH. Caso Vereda la Esperanza v Colombia. Informe sobre el Fondo. párr. 275.

748 Ley 975 de 2005. Diario Oficial No. 45.980 de 25 de julio de 2005. Artículo 29.

verdad con una confesión plena de los delitos en que haya intervenido, exigiéndose en los casos de Desaparición Forzada el aporte a la localización de las víctimas directas.

El día dieciséis (16) de octubre de dos mil ocho (2008) le correspondió al postulado Ramón Isaza presentar su versión libre programada por el Despacho Segundo de la Unidad Nacional de Justicia y Paz. Los familiares de las víctimas de la Vereda la Esperanza acudieron a la diligencia con la esperanza de conocer lo ocurrido a sus seres queridos[749].

Cuando se esperaba que el señor Ramón María Isaza Arango aportara información que permitiera esclarecer los hechos y sobre todo conocer la suerte de los desaparecidos de la Vereda La Esperanza, este postulado optó por incumplir su compromiso de aportar eficazmente al derecho a la verdad. En nuestro siguiente capítulo analizaremos las implicaciones que las diligencias del proceso de Justicia y Paz tuvieron en el presente caso en relación con la vulneración del derecho a la verdad.

Es así como sobre los hechos referidos por la Fiscalía como “Masacre de La Esperanza”, el postulado manifestó no tener conocimiento alguno, endilgando responsabilidad a tres personas ya fallecidas, su hijo Omar Isaza (conocido con el seudónimo de “El Teniente”), a los castrenses General Manosalva Florez y el Mayor Hernández[750]. Estas referencias incluso ratifican lo constatado por la honorable Comisión Interamericana en el sentido de que los hechos fueron planeados y ejecutados por miembros del ejército nacional y de los paramilitares[751].

Ante esta postura del versionado, las víctimas no solo manifestaron su inconformidad en la diligencia judicial, sino también en el pronunciamiento público VÍCTIMAS DE LA ESPERANZA SIN ESPERANZA EN LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ. [752]

Con fundamento en lo expuesto por Ramón Isaza Arango en la diligencia de versión libre y confesión, la Fiscalía acudió al Magistrado con funciones de control de garantías del Tribunal Superior de Bogotá para que programara diligencias de formulación de imputación al postulado y solicitud de media de aseguramiento, por un sinnúmero de hechos punibles, entre los que se encontraban los acaecidos en la Vereda La Esperanza.

Es importante resaltar que los funcionarios judiciales que intervienen en el proceso de Justicia y Paz vienen asimilando erróneamente la aceptación de responsabilidad penal por la condición de mando, a una confesión, sin que se le exija al postulado un aporte eficaz a la verdad. La Comisión Interamericana en su informe de fondo en el presente caso llamó la atención en el sentido que la confesión del postulado no es suficiente para el pleno esclarecimiento de los

---

749 Esta versión solo fue citada por el Fiscal de Justicia y Paz cuando el estado conoció de la petición incoada ante el Sistema Interamericano.

750 Como corolario de esta diligencia el Fiscal Segundo de la Unidad Nacional de Justicia y Paz compulsó copias para que fuera investigada la conducta punible en que pudieron incurrir el excomandante de la IV Brigada Alfonso Manosalva Florez y el Mayor del Ejército Nacional David Hernández.

751 La Comisión constató que en todas sus declaraciones libres Ramón Isaza indicó que los hechos del presente caso fueron planeados y ejecutados por agentes militares y miembros de las autodefensa del Magdalena Medio. Página 71, CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO.

752 pronunciamiento público VÍCTIMAS DE LA ESPERANZA SIN ESPERANZA EN LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ, ANEXO 35 del ESAP.

hechos y que el Estado debe desplegar todas las labores investigativas para saber la verdad[753]. En efecto, corresponde a las autoridades judiciales y fiscales llevar a cabo el impulso de las investigaciones a fin de contrastar, complementar y ahondar en las versiones presentadas a través de confesiones.

Luego de la versión libre, se adelantó una imputación jurídica por los punibles de Secuestro Extorsivo Agravado, Homicidio Agravado en la modalidad de participación de determinación y Muerte Violenta de Helí Gómez Osorio. La imputación se hace por responsabilidad de mando, al tenor de lo dispuesto en el artículo 28 del Estatuto de Roma.

La representación jurídica de las víctimas cuestionó la adecuación típica que de los hechos de la Vereda la Esperanza hizo el delegado del ente acusador, sosteniendo que la imputación debió hacerse por el punible de lesa humanidad de Desaparición Forzada y no por el delito de Secuestro Extorsivo Agravado. Igualmente, la representación jurídica de las víctimas se manifestó inconforme con la forma de responsabilidad endilgada al postulado, la cual se corresponde con la coautoría impropia, pues es evidente que el Señor Ramón Isaza Arango participó en la planeación y ejecución de los delitos objeto de imputación. Sin embargo, el Fiscal que formuló la imputación, manifestó en esta diligencia, que al momento de presentar la respectiva acusación, lo haría por el delito de desaparición forzada, el cual valga reiterar, es un delito de conducta permanente y como autor mediato de los hechos.

Efectivamente, el día 1 de abril de 2009 la Fiscalía formuló al postulado los cargos por los hechos presentados por la Fiscalía como “la masacre de la Esperanza” por los delitos de Secuestro Extorsivo Agravado, Desaparición Forzada, Homicidio en Persona Protegida, Tortura en Persona Protegida y Destrucción y Apropiación de Bienes Protegidos[754].



Igualmente, de manera apresurada en esta instancia del proceso transicional y desconociendo las numerosas pruebas obrantes en las carpetas, la Fiscal sostuvo en la acusación que los integrantes del Ejército Nacional no tuvieron intervención en los hechos[755].



753 Página 71, CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO.

754 Minuto 01:35:00 y siguientes del audio de registro de la formalización del escrito de acusación por el Fiscal de la Unidad Nacional de Justicia y Paz.

755 “...Ramón Isaza indicó que los hechos del presente caso fueron planeados y ejecutados por agentes militares y miembros de las autodefensas campesinas...” como lo constató la Comisión Interamericana en su informe de Admisibilidad y Fondo, CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO.

El proceso no ha sido efectivo para avanzar en la identificación de los responsables y esclarecer lo ocurrido en las violaciones denunciadas. Casi la totalidad de las actuaciones procesales en este proceso se basan en lo dicho por el postulado, sin que las autoridades hayan impulsado investigaciones serias para constatar lo referido por el postulado con las diversas pruebas obrantes en el expediente, con nuevas pruebas que pudieran diligenciarse, o incluso con lo establecido por las víctimas. En este sentido, las valoraciones y exposiciones que son presentadas por las víctimas y sus representantes sobre los cargos formulados no fueron tenidas en cuenta y sus afirmaciones solo cuentan como fuente de información para el reconocimiento y registro de su condición de víctimas.

En este sentido, esta representación coincide con lo apreciado por la CIDH en su informe de fondo en el sentido de que *".. la confesión de los imputados no puede eximir a las autoridades de un Estado de su obligación de investigar diligentemente los hechos..."*[756].

Esta situación ha sido advertida por la Magistratura, en la decisión proferida en contra del postulado el día veintinueve (29) de mayo del 2005, en el proceso radicado bajo el número 2007 - 82855, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, sostuvo que:

> "En la exposición de la Fiscalía, se da a entender que uno de los patrones era las acciones de contrainsurgencia al atacar a quienes el grupo armado presumía como guerrilleros, colaboradores o simpatizantes y que la mayoría de delitos fueron cometidos bajo ese argumento según se arguyó arriba. Por el hecho de mencionarlo como un patrón, daría a entender que todas las víctimas que estuvieron bajo esa categoría entrarían como presuntos guerrilleros, colaboradores o simpatizantes. La Fiscalía sin embargo, no profundizó en la investigación alrededor de este rasgo específico de las víctimas agrupadas bajo este criterio, de ahí que no puede concluir que en efecto correspondía a un patrón. En este sentido, no basta con la aseveración del comandante del grupo o frentes alusiva a que sus víctimas eran guerrilleros, colaboradores o simpatizantes de la insurgencia para definir categóricamente que sí lo eran o no.
>
> *661. Esta diferencia entre* patrón *(lo que en efecto pasó) con la motivación del grupo (lo que, según argumentan, los comandantes buscaban) es fundamental en el entendido que si bien los comandantes y demás perpetradores de acciones delictivas pudieran tener una justificación o argumento de las razones por las que daban órdenes o cometían delitos directamente, esto no significa que la víctima necesariamente pudiera estar en la categoría u objetivo pretendido por dicho comandante. Difuminar esta frontera es tan grave como afirmar que en efecto todas las personas que fueron victimizadas bajo esa noción de contrainsurgencia, eran en efecto insurgentes o colaboradores, lo cual no ha sido verificado por la Fiscalía y se estaría entonces cayendo en un error frente al deber de la verdad histórica y al deber de esclarecerles a los familiares de las víctimas directas cuáles fueron los motivos de la victimización de sus seres queridos.*

[756] CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO. Página 71.

> *662. Así pues,* respetuosamente *se exhorta a la Fiscalía a que en sus exposiciones se tenga especial cuidado en la diferenciación entre un patrón de conducta (que es una constatación fáctica de cómo operaba o actuaba un individuo o una organización criminal) y una motivación u objetivo planteado del grupo que eran las razones del grupo para cometer actos delictivos.*
>
> *663. Otro aspecto que se debe tener en cuenta es que los términos usados por los* fiscales *en sus exposiciones deben ser cuidadosos de respetar la construcción de memoria que se viene haciendo por parte de los operadores judiciales en Justicia y Paz, sin asumir posiciones frente a una de las versiones de los hechos y, con especial cuidado que con el lenguaje no se justifique el recurso a la violencia. Así pues llama la atención de la Sala que en ocasiones la Fiscalía se dirigiera a que las razones del grupo armado ilegal era el recurso a las armas "como única salida" y ante "el clamor de la comunidad asediada por la guerrilla"497. En este mismo sentido, en algunos apartes de su intervención la Fiscalía, aduce -y es reiterativo-, que el recurso de las armas por parte del grupo armado de cuyos orígenes está centrado su exposición fue "necesario frente a una realidad de la comunidad y ante la negativa del Estado de prestar la seguridad"*

A pesar de que Ramón Isaza se acogió a la Ley de Justicia y Paz el 7 de febrero de 2006, hasta la fecha no se ha realizado la diligencia de legalización de cargos al postulado, lo que evidencia una violación del artículo 8.1 de la Convención Americana que establece como uno de los elementos del debido proceso que los tribunales decidan los casos sometidos a su conocimiento en un plazo razonable[757]. En efecto, como lo destacó la CIDH, desde la desmovilización de Ramón Isaza transcurrieron "i) más de 14 meses hasta su primera declaración ante una autoridad judicial; ii) un año y ocho meses hasta la audiencia pública de versión libre; y iii) casi dos años hasta la audiencia de formulación de imputación."[758] De hecho, hasta la fecha no existe una sentencia definitiva en contra de Ramón Isaza.

En diligencias de indagatoria recibidas por la Fiscalía Ochenta Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, bajo el radicado número 233, los también postulados a la ley de justicia transicional Luis Eduardo Zuluaga y Walter Ochoa Guisao, manifestaron bajo la gravedad del juramento que el señor Ramón de Jesús Isaza Arango participó no solo en el diseño y planeación de la primera incursión a la precitada vereda, sino también en los hechos perpetrados el día nueve (9) de julio de 1996, en el devenir de los cuales fueron sustraídos violentamente de este paraje rural el niño de dos meses Andrés Suarez Cordero y los señores Hernando Castaño Castaño, Octavio de Jesús Gallego Hernández y Orlando de Jesús Muñoz Castaño.

El 6 de mayo de 2014, copias de los audios que consignan estas diligencias fueron enviadas tanto al Fiscal adscrito a la Unidad Nacional de Justicia y Paz como a la Magistratura, con en el propósito de que el delegado del ente acusador, titular de la acción penal, valore la posibilidad

---

757 Debe resaltarse que a partir de la vigencia de la ley 1592 de 2012 y Decreto 3011 de 2013, las audiencias de formulación, aceptación y legalización de cargos son concentradas y se desarrollan ante la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz de los Tribunales Superiores.

758 *Cfr.* CIDH. Caso Vereda la Esperanza v Colombia. Informe sobre el Fondo. párr. 281.

de solicitar el marginamiento del señor Ramón Isaza Arango del proceso de justicia transicional de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5 de la ley 1592 de 2012 y 35 del Decreto 3011 de 2013, toda vez que para hacerse merecedor de los beneficios consagrados en la Ley 975 de 2005 debe colaborar con la justicia en procura de que las víctimas puedan ver realizados sus derechos a la Verdad, la justicia y la reparación.

Sin embargo, hasta la fecha esto no ha ocurrido. Es importante llamar la atención en el sentido de que la ley 1592 de 2012[759] y en decisión de la Corte Suprema de Justicia[760] dejaron solo a los Fiscales de Justicia y Paz la facultad de solicitar la exclusión del postulado, negando a las víctimas el derecho de acudir directamente ante la magistratura a sustentar y hacer esta petición

Como ha sido establecido por la Corte Interamericana, "en las decisiones sobre la aplicación de determinadas figuras procesales a una persona, debe prevalecer la consideración de la imputación de graves violaciones de derechos humanos"[761]. Ninguna ley ni disposición de derecho interno puede impedir a un Estado cumplir con la obligación de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos[762]. Sin embargo, en la práctica de este caso, el proceso de Justicia y Paz ha operado como un obstáculo para que las víctimas puedan finalmente obtener justicia por las violaciones cometidas en su contra. En el proceso se han constatado atrasos procesales injustificados y se omitido conducir investigaciones serias y de oficio que permitan constatar las declaraciones del postulado. Así, por ejemplo, Ramón Isaza hizo referencia en su declaración a los ríos donde habrían sido arrojados los cuerpos de las víctimas. Sin embargo, no surge del expediente que las autoridades hayan impulsado diligencias para la búsqueda de los restos, del mismo modo que tampoco ha constatado efectivamente las alegaciones del postulado con la prueba que obra en los expedientes iniciados por las violaciones denunciadas y los testimonios de las víctimas. Asimismo, debido al curso del proceso en esta jurisdicción, la investigación penal avanzada en la justicia ordinaria se encuentra suspendida[763].

Asimismo, las actuaciones ante Justicia y Paz han obstaculizado el progreso de los procesos seguidos en contra del único otro imputado por estas violaciones, el mayor Carlos Guzmán

---

759 Artículo 11A Ley 1592 de 2012.

760 Corte Suprema de Justicia. MP. Maria del Rosario Gonzalez Muñoz. AP4085-2014. Radicación No. 43005**.** Aprobado Acta No. 235. Pág. 37.

761 Corte I.D.H., *Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia.* Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 08 de julio de 2009, párr. 41.

762 Corte I.D.H., *Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia*. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 304;. *Caso Molina Theissen Vs. Guatemala. Reparaciones*. Sentencia de 3 de julio de 2004. Serie C No. 108, párrs. 83 a 84; *Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala*. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101, párrs. 276 a 277; *Caso Bulacio Vs. Argentina*. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C No. 100, párr. 116; *Caso Barrios Altos Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Fondo*. Sentencia de 3 de septiembre de 2001. Serie C No. 83, párr. 15; *Caso Castillo Páez Vs. Perú.* Reparaciones. Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 43, párr. 105, y *Caso Loayza Tamayo Vs. Perú.* Reparaciones. Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 42 párr. 168.

763 Oficio 3383, Unidad Nacional de Fiscalias para la Justicia y la Paz, 13 julio 2009, Folio 55 Cuaderno 13 Radicado 233, ANEXO 2 del ESAP.

Lombana, ya que por resoluciones de 22 de abril y 13 de julio de 2009 la Unidad de Fiscalías para la Justicia y la Paz solicitó que se suspendan los dos procesos en relación con Ramón Isaza "para continuarse con las demás personas vinculadas al mismo". Sin embargo, esta suspensión ha causado que no se avance con la investigación en contra del mayor Carlos Guzmán Lombana u otro miembro del Ejército Nacional en los procesos penales ordinarios.[764] A la fecha, el proceso seguido contra el Mayor Carlos Guzmán se encuentra paralizado, contando solamente con una actuación significativa para readecuar la tipificación[765].

En este sentido, destacamos lo establecido por la Comisión Interamericana en el sentido de que "el Estado, en base a la obligación convencional de investigar graves violaciones de derechos humanos, debe continuar e impulsar en la justicia ordinaria la investigación necesaria respecto de otros actores que no sean desmovilizados en base a la información revelada en los procesos de Justicia y Paz."[766]

### 3. Conclusión

Con base en todo lo anterior, la Honorable Corte debe concluir que el Estado de Colombia vulneró los derechos al debido proceso y protección judicial en perjuicio de las víctimas y sus familiares, violando de ese modo los artículos 8.1 y 25 de la CADH en relación al artículo 1.1 de dicho instrumento; en conexión con los artículos I(b) y III de la CIDF.

### 4. Acciones en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo

Respecto de los procedimientos en el ámbito disciplinario, esta Honorable Corte ha establecido en el caso Operación Génesis lo siguiente:

> "[…] los mismos pueden ser valorados en tanto el examen contribuya al esclarecimiento de los hechos siendo decisiones relevantes, además, por el valor simbólico del mensaje de reproche que puede significar ese tipo de sanciones para funcionarios públicos y miembros de instituciones públicas[767]. A su vez, en tanto tiende a la protección de la función administrativa y se orienta esencialmente a la corrección y control de los funcionarios públicos, una investigación de esta naturaleza puede complementar pero no sustituir a cabalidad la función de la jurisdicción penal en casos de graves violaciones de derechos humanos"[768].

---

764 *Cfr.* CIDH. Caso Vereda la Esperanza v Colombia. Informe sobre el Fondo. párr. 285

765 Auto cúmplase UDH, 25 marzo 2011, folio 166 Cuaderno 13; Auto cúmplase UDH 1 junio 2011 folio 192 Cuaderno 13 Radicado 233. ANEXO 2 del ESAP.

766 *Cfr.* CIDH. Caso Vereda la Esperanza v Colombia. Informe sobre el Fondo. párr. 286

767 *Cfr.,* Corte IDH. *Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia.* Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134*,* párr. 215; Corte IDH. *Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia.* Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, párr. 167.

768 *Cfr.,* Corte IDH. *Caso de las Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) Vs. Colombia.* Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2013. Serie C No. 270, párr. 395*;* Corte IDH. *Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia.*

El Estado colombiano en este punto no garantiza que las víctimas del presente caso vayan a recibir una reparación adecuada, acorde con la gravedad de las violaciones incurridas, la responsabilidad del Estado, y los parámetros desarrollados por los órganos del Sistema Interamericano sobre la reparación integral.

En primer lugar, tal y como observamos en escritos anteriores en el trámite ante la CIDH[769], la posición del Estado deja por fuera a un grupo de víctimas que si bien fueron reparadas por el contencioso administrativo previo a la emisión del Informe de Fondo de la CIDH, lo fueron por conceptos diferentes y niveles de responsabilidad distintos a los determinados por la CIDH en el presente caso.

Al respecto, algunos familiares han recibido indemnización por la vía contencioso administrativa por ser víctimas de desaparición forzada, pero por falla de servicio, es decir por omisión del Estado, cuando en el presente caso la CIDH ha imputado responsabilidad al Estado por acción.

Por otro lado, otro grupo de víctimas recibió por vía administrativa, en aplicación del Decreto 1290, por conductas tales como desplazamiento forzado, homicidios y desaparición forzada. Sin embargo, dichas indemnizaciones no fueron fijadas como consecuencia de los hechos del presente caso. Esta representación ha sido clara respecto de las víctimas del caso de la Vereda La Esperanza que recibieron indemnización por vía administrativa[770]. Así como que la señora MARIA ROCIO CARDONA FERNANDEZ, recibió dicha indemnización por la muerte de su hermano Gabriel Cardona Quintero, y no por la desaparición de su cónyuge Leónidas Cardona[771].

Por lo tanto, la reparación indemnizatoria adelantada por el Estado dejaría sin reparación adecuada a un número de víctimas que son víctimas del presente caso, y que tienen derecho a recibir una reparación adecuada como el resto de víctimas identificadas. En anexo presentamos a este Tribunal una relación de los pagos, omisiones y calificaciones jurídicas ofrecidas[772].

En la sección correspondiente a las reparaciones señalaremos los montos por los conceptos que el Sistema Interamericano ha determinado para llevar a cabo una reparación material.

---

Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140*,* párr. 203; Corte IDH. *Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia.* Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, párr. 167.

769 Cfr., Escrito de 9 de diciembre de 2014 sobre nuestras observaciones al último informe del Estado sobre la implementación del informe de fondo del caso.

770 Cfr., escrito nuestro escrito del 3 de marzo de 2013 sobre nuestras observaciones al informe del Estado sobre la implementación del informe de fondo del caso. A saber: NELLY SOTO DE CASTAÑO y su hija VERONICA GIRALDO SOTO que efectivamente fueron indemnizadas como consecuencia del asesinato de su cónyuge y padre JAVIER DE JESUS GIRALDO GIRALDO. MARIA FLORINDA GALLEGO HERNANDEZ y JANETH GALLEGO GALLEGO madre y una de las hijas de OCTAVIO DE JESUS GALLEGO HERNANDEZ, víctima de los hechos del caso. Y MARIA DE LA CRUZ HERMANDEZ DE GALLEGO y sus hijos: RICAUTE, EUSEBIO, MARIA NUBIA, LUCELLY, OMAIRA, ROSA LINDA, por la desaparición de su cónyuge y padre Andes Antonio Gallego Castaño.

771 Informe estatal del 22 de agosto de 2014. Párr. 18, presentado durante la etapa de implementación del informe de fondo de la CIDH.

772 ANEXO 11 del ESAP (“Comparación montos de reparación”).

## E. El Estado es responsable por la violación del derecho a la verdad de los familiares de las víctimas

El Estado colombiano es responsable por la violación del derecho a la verdad, en la medida en que ha ocultado información relevante al caso, al contexto, restringe la participación de las víctimas, y no ha provisto de procesos y mecanismos necesarios para esclarecer la verdad de lo ocurrido, en violación de los artículos 5, 8, 13 y 25 de la Convención Americana, en conjunto con el incumplimiento del artículo 1.1 del mismo instrumento.

La Corte Interamericana ha reiterado la importancia que reviste para las víctimas de violaciones de derechos humanos, el conocer la verdad de lo ocurrido. Desde su más temprana jurisprudencia este Tribunal ha interpretado que el derecho a la verdad está amparado bajo los artículos 8 y 25 de la CADH, ya que forma parte del derecho de las víctimas de acceder a la justicia como una medida de reparación por las violaciones ocasionadas. Al respecto, ha establecido que

> "los familiares de víctimas de graves violaciones de derechos humanos tienen el derecho de conocer la verdad. Este derecho a la verdad, al ser reconocido y ejercido en una situación concreta, constituye un medio importante de reparación para la víctima y sus familiares y da lugar a una expectativa que el estado debe satisfacer. Por otra parte el conocer la verdad facilita a la sociedad […] la búsqueda de formas de prevenir este tipo de violaciones en el futuro"[773].

Este Tribunal ha determinado que el derecho a la verdad está formado por las protecciones contenidas en los artículos 1.1, 8, 25 y 13. En este sentido, y tomando en cuenta el derecho al acceso a la información como un componente fundamental del derecho a conocer la verdad, la Corte ha establecido que

> "toda persona, incluyendo los familiares de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, tiene el derecho a conocer la verdad. En consecuencia, los familiares de las víctimas, y la sociedad, deben ser informados de todo lo sucedido con relación a dichas violaciones"[774].

Este derecho tiene dos dimensiones: una dimensión individual, que salvaguarda el derecho de los familiares de las víctimas, y una dimensión colectiva, que protege el derecho de la sociedad de conocer la verdad, acceder a la información y reconstruir la memoria colectiva.

Esta representación propone que el derecho a la verdad debe ser entendido como un derecho autónomo e independiente. Si bien no aparece explícitamente declarado en el texto de la CADH, el derecho a la verdad se desprende del conjunto de las protecciones consagradas en los artículos 1.1, 8, 25 y 13 de la CADH. Según, expondremos, un análisis de la evolución jurisprudencial tanto en el ámbito del sistema interamericano como en el sistema universal de

---

773 *Cfr*. Corte IDH. *Caso Blanco Romero y otros Vs. Venezuela*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2005. Serie C No. 138, párr. 95. *Cfr*., Corte IDH. *Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 297.

774 *Cfr*. Corte IDH. *Caso Gomes Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia") Vs. Brasil.* Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219, párr. 107.

protección de los derechos humanos da cuenta del desarrollo del carácter independiente y universal del derecho a la verdad.

El derecho a la verdad fue primeramente reconocido en las normas internacionales relativas al derecho humanitario[775]. Sin embargo, luego fue objeto de desarrollo en el ámbito de la protección de los derechos humanos y aplicados en relación a otros derechos fundamentales, como el acceso a la información, el derecho a la identidad y el derecho a obtener la justicia. Por ejemplo, el derecho a la verdad – en su dimensión individual y colectiva – fue reconocido como uno de los principios fundamentales de la protección de los derechos humanos en contra de la impunidad, proclamados por la entonces Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 1998[776].

La Asamblea General de la OEA, en el mismo espíritu, ha reiterado en sus sesiones anuales desde el año 2006, la existencia del derecho a la verdad y la importancia que reviste esta protección en el hemisferio americano[777]. La Asamblea resolvió, por tanto, *"[r]econocer la importancia de respetar y garantizar el derecho a la verdad para contribuir a acabar con la impunidad y promover y proteger los derechos humanos"*[778].

El derecho a la verdad ha sido reconocido en forma similar mediante Resolución aprobada por la entonces Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 20 de abril de 2005, que establece que en casos de graves violaciones de derechos humanos, es necesario estudiar la interrelación entre el derecho a la verdad y el derecho de acceso a la justicia, el derecho a obtener reparación y otros derechos humanos[779].

Más recientemente, mediante Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 1 de octubre de 2009[780], se destaca la "importancia de que la comunidad internacional reconozca el derecho que asiste a las víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, así como a sus familias y a la sociedad en su conjunto, de conocer la verdad

---

775 Particularmente, se trataba de la obligación de los Estados de proveer información sobre el paradero de personas desaparecidas en el curso de un conflicto armado. *Cfr*., Arts. 32 y 33, Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I); Ver también Comisión Internacional de Juristas, Derecho Internacional y la Lucha contra la Imnpunidad, Guía para Profesionales No.7, 2014, páginas 7 a 41.

776 *Cfr.* Conjunto de Principios Actualizados para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad "de 8 de febrero de 2005, E/CN.4/2005/102/Add.1, *disponible en*: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?si=E/cn.4/2005/102/Add.1.

777 OEA, Asamblea General. Resoluciones sobre el Derecho a la Verdad. AG/RES 2175 (XXXVI-O/06); AG/RES. 2267 (XXXVII-0/07); AG/RES. 2406 (XXXVIII-0/08); AG/RES. 2595 (XL-O/10); AG/RES. 2662 (XLI-O/11); AG/RES. 2725 (XLII-O/12), AG/RES. 2800 (XLIII-O/13).

778 OEA, Asamblea General. Resolución sobre el Derecho a la Verdad del 5 de junio de 2013. AG/RES. 2800 (XLIII-O/13). párr. 1. Disponible en: http://www.observatoriodemocratico.org/wp-content/uploads/2011/07/Derecho-a-la-verdad_2013.pdf.

779 Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos. Informe de la Comisión al Consejo Económico, Sesión 59, E/CN.4/2005/L.10/Add.17, de 22 de abril de 2005. Disponible en http://derechos.org/nizkor/impu/righttotruth.html.

780 Consejo de Derechos Humanos, 12º periodo de sesiones, 1 de octubre de 2009, A/HRC/12/L/27. Disponible en http://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_HRC_12_L27.doc.

sobre esas violaciones, en la máxima medida posible"[781]. Esta Resolución reconoce la naturaleza colectiva del derecho a la verdad, al destacar la necesidad de que los Estados provean "mecanismos adecuados y efectivos para que la sociedad en su conjunto y, en particular, los familiares de las víctimas conozcan la verdad"[782].

En el marco de estas resoluciones se encomendó la realización de varios estudios sobre el desarrollo del "Derecho a la Verdad". En consideración a ello, en el año 2006 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó un estudio, en el que reconoce que "[e]l derecho a la verdad sobre violaciones manifiestas de los derechos humanos y las infracciones graves del derecho humanitario es un derecho autónomo e inalienable"[783]. El Alto Comisionado concluyó además, que el derecho a la verdad "[e]stá estrechamente vinculado con otros derechos, como el derecho a un recurso efectivo, el derecho a la protección jurídica y judicial, el derecho a la vida familiar, el derecho a una investigación eficaz, el derecho a ser oído por un tribunal competente, independiente e imparcial, el derecho a obtener reparación, el derecho a no sufrir torturas ni malos tratos y el derecho a solicitar y a difundir información[784].

Tomando esto en consideración, el entonces Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados evaluó el ámbito de aplicación del derecho a la verdad y su relación con otros derechos[785]. En su estudio, afirmó por ejemplo, que existe una relación cercana entre el derecho a la justicia y el derecho a la verdad, debido a que los órganos judiciales juegan un rol prominente en asegurar que se esclarezcan los hechos en un caso concreto. Ello porque el fin ulterior de todo proceso judicial, debe ser precisamente el de clarificar la verdad de lo ocurrido. Sin embargo, concluye que el derecho a la verdad va más allá de los confines del poder judicial y el Estado deviene obligado a proveer todas las instancias y mecanismos necesarios para asegurar el ejercicio este derecho. El derecho a la verdad, es un derecho que permanece intocable aún ante los diversos supuestos de suspensión de garantías, nunca se pierde o desvanece en el tiempo[786].

i. Igualmente, el mismo experto estableció:

> "los estados tienen la obligación positiva de arbitrar mecanismos judiciales y extrajudiciales para el conocimiento de la verdad. Esa obligación trasciende los imperativos estrictos del estado de derecho, para situarse también en el plano ético y moral de toda sociedad, en la medida en que el conocimiento de la verdad es, además

781 ***Cfr.,*** Ídem.

782 ***Cfr.,*** Ídem.

783 Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. *Estudio Sobre el Derecho a la Verdad*, de 9 de enero de 2006. E/CN.4/2006/91, párr. 55.

784 ***Cfr.,*** Ibíd., párr. 57.

785 Naciones Unidas. Los derechos civiles y políticos, en particular las cuestiones relacionadas con la independencia del poder judicial, la administración de justicia, la impunidad. Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Leandro Despouy Doc. ONU E/CN.4/2006/52, 23 de enero de 2006.

786 ***Cfr.,*** Ibíd., párr. 24

> de un derecho, el único camino que permitirá restaurar la dignidad de quienes han sido víctimas. […]"[787]

El derecho a la verdad tiene además una dimensión colectiva, de la cual se deriva la obligación de identificar los medios apropiados - sean estos judiciales o extrajudiciales- de garantizar la reconstrucción de la verdad histórica:

> "[…] el derecho a la verdad implica algo más que el derecho a la justicia, puesto que incluye el deber de memoria por parte del Estado. Esto último ratifica la dimensión social o colectiva del derecho a la verdad y al mismo tiempo confiere carácter imprescriptible al derecho de las víctimas y sus familiares a conocer "las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima" (Principio 4) […][788].

En este sentido, el Juez Ferrer Mcgregor en su voto concurrente del caso *Rodríguez Vera y otros vs. Colombia* estableció que "si bien el derecho a la verdad está relacionado con el derecho de acceso a la justicia —derivado de los artículos 8 y 25 de la Convención—, no debe necesariamente quedar subsumido en el examen realizado en las demás violaciones a los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, ya que este entendimiento propicia la desnaturalización, esencia y contenido propio de cada derecho"[789]. Asimismo plantea, que dependiendo del contexto y circunstancias particulares del caso, el derecho a la verdad puede afectar distintos derechos consagrados en la Convención Americana[790], como lo reconoció la Corte en el caso *Gomes Lund y otros (Guerrilla de Araguaia) vs. Brasil* respecto del derecho de acceso a la información (artículo 13 de la Convención) y en el caso *Gudiel Álvarez y otros ("Diario Militar") vs. Guatemala* respecto del derecho a la integridad personal, contenido en el artículo 5 de la Convención Americana.

Este reconocimiento autónomo del derecho a la verdad ha permitido que en el caso de desplazados internos, se haya reconocido el derecho de éstos a conocer la suerte de sus familiares desaparecidos[791]. De igual modo, la naturaleza colectiva de este derecho a dado

---

787 ***Cfr.,*** Ibíd., párr. 21.

788 ***Cfr.,*** Ibíd., párr. 22. Ver conjunto de principios para la protección y la promoción de los Derechos Humanos, para la lucha contra la impunidad.

789 ***Cfr.,*** Voto Concurrente del Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot. *Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos Del Palacio De Justicia) Vs. Colombia*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014. párr. 24.

790 En este sentido, en su estudio sobre el derecho a la verdad, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recogió que distintas declaraciones e instrumentos internacionales han reconocido el derecho a la verdad vinculado con el derecho a obtener y solicitar información, el derecho a la justicia, el deber de combatir la impunidad frente a las violaciones de derechos humanos, el derecho a un recurso judicial efectivo y el derecho a la vida privada y familiar. Además, en relación con los familiares de las víctimas, ha sido vinculado con el derecho a la integridad de los familiares de la víctima (salud mental), el derecho a obtener una reparación en casos de graves violaciones a los derechos humanos, el derecho a no ser objeto de tortura ni malos tratos y, en ciertas circunstancias, el derecho de los niños y niñas a recibir una protección especial. *Cfr.,,* Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. *Estudio sobre el derecho a la verdad*, U.N. Doc. E/CN.4/2006/91 de 9 de enero de 2006.

791 Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. *Principios Rectores De Los Desplazamientos Internos*. Del 11 de febrero de 1998. (E/CN.4/1998/53/Add.2). Principio 16.1. Disponible en: http://www.ohchr.org/EN/Issues/IDPersons/Pages/Standards.aspx.

paso a que los Estados adopten una serie de medidas, que sumadas a los procesos judiciales, fortalece la protección del mismo.

Por otro lado, la jurisprudencia de esta Corte Interamericana ha reiterado que los procesos judiciales no son sustituibles, y que aun cuando existan instrumentos alternos para la reconstrucción de la memoria, el Estado siempre tiene "la obligación de establecer la verdad también a través de los procesos judiciales."[792] Pero, el derecho a la verdad impone además, obligaciones negativas, que exigen que los Estados no impidan u obstruyan con su accionar la posibilidad de que las víctimas y sus familiares conozcan la verdad de lo ocurrido. El derecho a la verdad nace desde el momento mismo en que se tergiversa la verdad, se le oculta o se mantiene fuera del alcance de las víctimas. Ello por sí solo crea una violación inmediata y única que permite que se cometan violaciones ulteriores.

En una de sus últimas decisiones la Corte ha sintetizado su valoración frente a este derecho expresando que:

> "El Tribunal estima que en una sociedad democrática se debe conocer la verdad sobre los hechos de graves violaciones de derechos humanos. Esta es una justa expectativa que el Estado debe satisfacer, por un lado, mediante la obligación de investigar las violaciones de derechos humanos y, por el otro, con la divulgación pública de los resultados de los procesos penales e investigativos. Esto exige del Estado la determinación procesal de los patrones de actuación conjunta y de todas las personas que de diversas formas participaron en dichas violaciones y sus correspondientes responsabilidades y reparar a las víctimas del caso".[793]

A continuación analizaremos cómo el marco de Justicia y Paz violenta este derecho a la verdad. En Colombia, la incorporación normativa de los principios internacionales sobre impunidad, -y dentro de estos, el derecho a la verdad-, y sobre reparaciones de las Naciones Unidas, así como la jurisprudencia de la Corte IDH tienen valor o fuerza vinculante para el ordenamiento jurídico interno de Colombia, según las prescripciones constitucionales establecidas en los artículos 9, 93 y 94 de la Carta Política. Esa interpretación la adoptó la Corte Constitucional cuando revisó la exequibilidad de la Ley 975 de 2005, denominada de justicia y paz, que regula el procedimiento mediante la cual se "dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios". La Corte Constitucional señaló al respecto

> "En resumen, la Corte aprecia que, dentro de las principales conclusiones que se extraen del "Conjunto de Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad" en su última actualización, cabe mencionar las siguientes, de especial relevancia para el estudio de constitucionalidad que adelanta: (i) durante los procesos de transición hacia la paz, como

[792] *Cfr*., Corte IDH. *Caso La Cantuta Vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 224.

[793] *Cfr*., Corte IDH. *Caso de la Masacre de las Dos Erres*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párr. 49.

> el que adelanta Colombia, a las víctimas les asisten tres categorías de derechos: a) el derecho a saber, b) el derecho a la justicia y c) el derecho a la reparación; (ii) el derecho a saber es imprescriptible e implica la posibilidad de conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima; (iii) el derecho a saber también hace referencia al derecho colectivo a conocer qué pasó, derecho que tiene su razón de ser en la necesidad de prevenir que las violaciones se reproduzcan y que implica la obligación de "memoria" pública sobre los resultados de las investigaciones; (iv) el derecho a la justicia implica que toda víctima tenga la posibilidad de hacer valer sus derechos beneficiándose de un recurso justo y eficaz, principalmente para conseguir que su agresor sea juzgado, obteniendo su reparación; (v) al derecho a la justicia corresponde el deber estatal de investigar las violaciones, perseguir a sus autores y, si su culpabilidad es establecida, de asegurar su sanción; (vi) dentro del proceso penal las víctimas tienen el derecho de hacerse parte para reclamar su derecho a la reparación. (vii) En todo caso, las reglas de procedimiento deben responder a criterios de debido proceso; (viii) la prescripción de la acción penal o de las penas no puede ser opuesta a los crímenes graves que según el derecho internacional sean considerados crímenes contra la humanidad ni correr durante el período donde no existió un recurso eficaz; (ix) En cuanto a la disminución de las penas, las "leyes de arrepentidos" son admisibles dentro de procesos de transición a la paz, "pero no deben exonerar totalmente a los autores"; (x) la reparación tiene una dimensión doble (individual y colectiva) y en el plano individual abarca medidas de restitución, indemnización y readaptación; (xi) en el plano colectivo, la reparación se logra a través de medidas de carácter simbólico o de otro tipo que se proyectan a la comunidad; (xii) dentro de las garantías de no repetición, se incluye la disolución de los grupos armados acompañada de medidas de reinserción[794]"

En Colombia, la Ley 975 de 2005 establece el procedimiento especial mediante el cual un desmovilizado de una agrupación al margen de la ley que busca una pena alternativa[795], tiene el deber de proporcionar una confesión[796] plena, veraz y fidedigna de los delitos cometidos durante su permanencia en la estructura criminal. Para acceder a dicha ventaja judicial, la ley y las normas reglamentarias establecen varios requisitos y fases procesales.

Al respecto, se distingue un primer momento alusivo al acto de ratificación por parte del postulado de someterse a la Ley de Justicia y Paz, y un segundo, que es propiamente la confesión, que se cumple a través de audiencias de versión libre. Ésta se configura como un presupuesto de acceso al procedimiento de justicia y paz, para lo cual deber ser completa y

---

794 Corte Constitucional, sentencia C-370 del 18 de mayo de 2006, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, apartado 4.7 (en especial párrafo 4.7.3.4).

795 La cual está prevista entre 5 y 8 años de prisión.

796 Corte Constitucional. Sentencia C 370 de 2006. Mayo 18 de 2006. Párr. 6.2.2.1.7.29.

veraz, así como un medio probatorio esencial, lo cual implica "la renuncia a la presunción de inocencia" siempre y cuando se superen los juicios de legalidad formal y material por la judicatura.

Para preparar el interrogatorio al postulado, así como para verificar la veracidad de lo confesado, la Fiscalía General de la Nación debe adelantar una serie de actividades de investigación, en función de lo cual debe elaborar **un programa metodológico** para comprobar la autenticidad de la información suministrada y esclarecer esos hechos y todos aquellos de los cuales tenga conocimiento dentro del ámbito de su competencia, así como desplazarse a zonas donde se cometieron los hechos para conseguir información"[797]. Tal como dice la Corte Suprema de Justicia, *"Entonces, como surge de la lectura concordada de todas estas disposiciones de la ley de justicia y paz, a partir de la versión libre se inicia la labor investigativa y descubrimiento de evidencias por parte de los fiscales para comprobar la veracidad de su contenido"*[798]. Y adiciona que *"Con la información suministrada por el desmovilizado, le corresponde al instructor reconstruir una verdad de lo ocurrido a través de los elementos materiales de prueba y para cumplir con ese propósito la misma ley le ha asignado a la Fiscalía unas prerrogativas o facultades de acción, para la adecuada formulación del programa metodológico todo lo cual es connatural a la labor investigativa.*[799]"

Realizar efectiva y eficazmente el programa metodológico para comprobar la veracidad o autenticidad de las aseveraciones dadas por los postulados es un deber del Estado colombiano a cargo de la Fiscalía General de la Nación. Es decir, "el contenido de la versión libre deber ser verificado por el instructor a través de un plan metodológico que incluye, además de recibir la información por parte del desmovilizado, la necesidad de decantarla, verificarla y confrontarla con otros medios de prueba[800]. Se mantiene la obligación de profundizar en la verificación de los hechos confesados, de las circunstancias modales de la comisión de los crímenes en un determinado territorio, de las responsabilidades penales de quienes promovieron, instigaron, determinaron, planearon y realizaron la acción material, el modus operandi de las estructuras criminales, los patrones comunes de los delitos, los efectos y daños colectivos, sociales, individuales en las víctimas. En ese sentido la actividad probatoria de la autoridad judicial no es pasiva, por el contrario, es la base fundamental para que la confesión del desmovilizado aporte a la construcción de la verdad para las víctimas y la sociedad[801].

En el caso concreto de las desapariciones forzadas de la Vereda La Esperanza, la Fiscalía de Justicia y Paz recepcionó la versión libre al Postulado Ramón María Isaza Arango el día 16 de

---

797 Diagnóstico de justicia y paz en el marco de la justicia transicional en Colombia. Coordinador Baltasar Garzón. Organización de los Estados Americanos. Misión de apoyo al proceso de paz Colombia. Octubre de 2011. Páginas 29 y 30.

798 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación penal. Radicado 27.484. Oct 2 de 2007. MP Augusto Ibáñez Guzmán. Pág. 33.

799 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación penal. Radicado 27.484. Oct 2 de 2007. MP Augusto Ibáñez Guzmán. Pág. 31

800 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación penal. Radicado 27.484. Oct 2 de 2007. MP Augusto Ibáñez Guzmán. Pág. 32.

801 La Corte Suprema de Justicia, en la Sentencia referenciada, le atribuye a la Fiscalía la labor de interrogar al versionado en justicia y paz y releva de esa facultad a las víctimas y sus representantes.

octubre de 2008 y dentro de la Carpeta suministrada a la representación de las víctimas, no se observa una resolución de la Fiscalía que permita reconocer la existencia de un **programa metodológico** que direccione las labores del aparato judicial tendientes a la verificación, contrastación o autenticidad de las afirmaciones o aseveraciones que el Postulado haya manifestado sobre las circunstancias fácticas de las desapariciones forzadas, así como con respecto a los otros autores o determinadores de los hechos, en aras de construir la verdad real y procesal.

Por ejemplo, el Postulado mencionó aspectos relacionados con la elaboración de listas por parte de integrantes de la inteligencia militar de la Brigada Cuarta que fueron entregadas al grupo paramilitar "para que por favor le limpiara esa autopista"[802], sobre este aspecto, hay en el proceso ordinario existen una serie de evidencian de ese modus operandí dentro del accionar del paramilitarismo[803] que no han sido analizadas por la Fiscalía de Justicia y Paz.

Así mismo, dijo que Postulado que el Costeño (nombre que le asigna a Fredy, quien fuera retenido el día 22 de junio de 1996, junto con su esposa y otras tres personas) ya había tenido conversaciones con el Mayor Hernández; y que el MAYOR "le había dicho a Teniente que se llevara el muchacho y que durara por ahí 8 días sacándole información para que empezaran a trabajar, porque el sabia como era la situación allá"; que en la retención del Costeño y su esposa participaron "según eso venía un soldado y el Mayor[804]". Sobre la participación de agentes del ejército en las desapariciones se tienen evidencias en el proceso penal, que no son tenidas en cuenta por la Fiscalía de Justicia y Paz.

Señala además el Postulado que la planeación de las desapariciones forzadas había sido convenida o acordada con el General Manosalva y un Mayor Hernández, sin embargo, tampoco, se establece dentro del programa metodológico una línea de investigación que tienda a esclarecer el compromiso de estos militares en los hechos, ni de ganaderos y comerciantes del Magdalena Medio que estaban cansados del asedio de la guerrilla, y que podrían haber motivado la génesis de las desapariciones forzadas de la Vereda La Esperanza.

En la diligencia de versión libre al Postulado Isaza Arango, varios familiares de las víctimas de desaparición forzada, presentaron argumentos para señalar omisiones del Postulado, como por ejemplo, que en el ataque del ejército a la vivienda del señor José Eliseo Gallego, el día 26 de

---

802 Minuto 33:32 de la Versión libre de Ramón Isaza Arango. Remitido por la Comisión a la Corte.

803 Según información recabada por investigadores judiciales "[E]l modo de operar de las Autodefensas del Magdalena Medio, es eliminando a sus enemigos en forma selectiva, llevando listas se apoderan de las víctimas, le sacan toda la información posible y luego las asesinan. Informe de inteligencia sobre grupo de autodefensa. No. 32. Junio 28 de 1996. Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación. Oficina Información análisis y apoyo operativo. Para el proceso Radicado No. 16. 734 de la Fiscalía Regional de Medellín. Folios 1 – 8. Cuaderno 5 (Anexo). Expediente No. 008 – 1079998 Procuraduría delegada disciplinaria derechos humanos. Disco remitido por la Comisión denominado proceso disciplinario. En el mismo sentido obra Declaración con reserva de identidad VB -1 tomada ante la Fiscalía Regional de la UNDH. Abril 14 de 1998. Folios 190 – 191 cuaderno No. 2 Radicado 233 UNDH – DIH. ANEXO 2 del ESAP. Y también Declaración del Personero EDGAR MARIO ALZATE GARCIA tomada por el Fiscal Regional el 13 de mayo de 1997. Folios 214 – 216. Cuaderno No.1 Radicado 233 UNDH – DIH en la que señala sobre la existencia "de una lista "negra" en manos de los paramilitares que comanda Ramón Isaza, en la cual figuran los nombres de numerosos ciudadanos de la localidad, incluyendo empleados de diferentes instituciones para ser eliminados por supuestos nexos por colaboración o simpatías con los grupos subversivos".

804 Después del Minuto 45:33 de la Versión libre de Ramón Isaza Arango.

junio de 1996, día en que también fue captura Irene de Jesús Gallego, el ejército llevaba como guía a Fredy, a quien le dice Ramón Isaza el Costeño[805]. El Postulado omite precisar, aclarar o corroborar esta circunstancia fáctica establecida en el proceso ordinario y la Fiscalía de Justicia y Paz, tampoco la relaciona o tiene en cuenta en el devenir probatorio, en la formulación del programa metodologico que se constituye en el mecanismo de verificación y contrastación de la versión libre, para efectos de construir la verdad, como centro del derecho a saber de las víctimas y de memoria de la sociedad.

En esta versión libre el Postulado señala que él en particular no fue a esa Vereda, que el responsable es su hijo Omar Isaza, porque hizo los compromisos con el General Manosalva y el Mayor Hernández. Relacionó los nombres de los integrantes del Grupo Los Halcones, comandando por su hijo como los autores de los hechos, sin embargo, preciso que todas estaban muertos. Así mismo, en esta diligencia, el Postulado anunció que todas las víctimas estaban muertas y habían sido arrojadas a los ríos Samaná, Calderas y Magdalena.

A partir de esta confesión en Justicia y Paz, así como en la diligencia de indagatoria que el señor Ramón Isaza había rendido en el proceso ordinario[806], el Postulado, si bien admitía la responsabilidad conjunta entre la Fuerza Pública y los paramilitares en la planeación y ejecución de los hechos de la Vereda La Esperanza, cerraba cualquier posibilidad de judicializar a los agentes estatales involucrados, porque ya estaban muertos, lo que también ocurrió con quienes integraban el grupo de su hijo Omar Isaza, y más grave aún, se relevaba de informar el paradero o localización de las víctimas, aduciendo que habían sido arrojadas a tres ríos del oriente y del Magdalena Medio[807], que se impone como requisito de elegibilidad para obtener la ventaja judicial en materia de punibilidad.[808]

No se desarrollaron labores de verificación ni contrastación de la versión del Postulado, de acuerdo con un programa metodológico. La actividad de la Fiscalía de Justicia y Paz consistió en inspeccionar el proceso penal ordinario por las desapariciones forzadas de la Vereda La Esperanza y extraer una serie de declaraciones, inspecciones, registros civiles, fotografías, informes de policía judicial, informes de la conformación de grupos al margen de la ley, resoluciones que ordenan práctica de pruebas[809].

También, efectuó algunos registros de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley y tomó las entrevistas de María del Rocío Cardona Fernández, Diana Marcela Quintero, María de la Cruz Hernández de Gallego sobre la desaparición de Andrés Gallego, Florinda de

[805] En el proceso ordinario, se contaba con la declaración de al menos Juan Carlos Gallego Hernández, víctima de desaparición forzada, quien había informado que Fredy hizo parte de la tropa del Ejército, en el operativo realizado por la Fuerza de Tarea Águila el día 26 de junio de 1996 en la vivienda donde vivía con sus padres. Así mismo, obra en el expediente la Orden de la Operación Rayo emanada del Comandante de la Fuerza de Tarea Aguila, en la cual se relaciona la participación de un guía en dicha acción.

[806] Indagatoria rendida el 23 de abril de 2007 ante la UNDH – DIH de la Fiscalía General de la Nación.

[807] Ríos Samaná, Calderas y Magdalena.

[808] Artículos 10 y 11 de la Ley 975 de 2005.

[809] Pruebas que obran a folios 199 al 399 de la Carpeta de Justicia y Paz. ANEXO 5 del ESAP.

Jesús Gallego Hernández, Eladio Gallego Quintero, Oliva del Socorro Mejía de Gallego, Carlos Amador Muñoz Muñoz, María Nohelia Zuluaga Marulanda[810].

Con una relación de los elementos materiales recogidos del proceso penal ordinario y la enunciación de sus contenidos[811], la Fiscalía formuló acusación al Postulado Ramón María Isaza ante el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz en calidad de determinador, de los delitos de secuestro extorsivo agravado, conducta que dice se corresponde en la actualidad con la hipótesis punible de desaparición forzada. Así como por el homicidio de Alirio de Jesús Hernández, alias Palomo, Javier de Jesús Giraldo Giraldo y Helí Gómez Osorio, frente a este último hecho, varió la forma de participación del Postulado, aduciendo que respondía por línea de mando. La Fiscalía en ese momento procesal, salvo hacer la relación formal de unas pruebas y de unas conductas punibles, no desarrolló un ejercicio analítico y ponderado de la versión libre con esas evidencia probatorias, y tampoco con otras, aportadas por la Parte civil[812], que permitían a la Fiscalía, identificar omisiones o maniobras engañosas del Postulado para desviar la investigación con respecto a otros autores materiales y determinadores que estuvieran vivos, y pudieran ser responsables de los hechos. En ese sentido, ha sido ineficaz el Estado en el cumplimiento del deber investigar, que en justicia y paz se ha traducido en contrastar y verificar la versión libre, que siendo válido, no se asemeja a un ejercicio integral del deber de investigar.

No hay una explicación de la conexión o asociación entre las desapariciones forzadas de las víctimas de la Vereda La Esperanza con el homicidio de Alirio de Jesús Hernández, tampoco como respecto al homicidio del Personero del Municipio del Carmen de Viboral, Dr. Helí Gómez, hecho que fue luego confesado por el paramilitar Ricardo López Lora[813], y que sin mayor rigor analítico, la Fiscalía le excluyó esa imputación fáctica al Postulado Ramón Isaza. Tampoco se analiza la relación que las desapariciones de la Vereda La Esperanza tenían con las desapariciones forzadas de los señores Julio Cesar Morales Hernández y su hijo Geovany Abad Morales, hechos que habían sido escindidos de la investigación ordinaria llevaba a cabo por la Unidad de derechos humanos de la Fiscalía, por no guardar conexidad.

De otro lado, la Fiscalía, salvo la decisión judicial de remitir a la Unidad Nacional de Justicia y Paz la información pertinente para investigar al General Manosalva y al Mayor Hernández por los hechos declarados por Ramón Isaza en Versión Libre[814], no relaciona esa circunstancia

---

[810] Folios 107 al 167 de la Carpeta de Justicia y Paz. ANEXO 5 del ESAP.

[811] Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz. Escrito de sustentación y desarrollo de audiencia de formulación de cargos al Postulado Ramón Maria Isaza Arango. Hecho No. 155. Masacre de la Esperanza. Julio 31 de 2009. Págs 717 a 748. ANEXO 5 del ESAP.

[812] El representante de las víctimas aporto información referente a la hoja de vida del Mayor David Hernández Rojas, quien para la época de los hechos de la Vereda La Esperanza no se encontraba prestando sus servicios como Comandante en la base militar de la Piñuela, a fin de que la Fiscalía, profundizara en la veracidad de la versión del postulado, dado que cuando él se refiere a un MAYOR HERNANDEZ, lo hace como aquel, que luego se incorpora a un grupo paramilitar en el Norte Colombia, al mando de alias Jorge 40, y fue posteriormente asesinado el 26 de octubre de 2004. Lo anterior, por cuanto en la base militar de la Piñuela había operado era el Mayor JAIRO ENRIQUE HERNANDEZ ALONSO, y no se tiene constancia de que estuviera muerto.

[813] Versión Libre de Ricardo López Lora alias el Marrano, donde confiesa el homicidio del Personero Helí Gómez Osorio. Fiscalía XXXXX. 28 de septiembre de 2009. Folios 723-752. ANEXO 5 del ESAP.

[814] Folio 583 de la Carpeta de Justicia y Paz. ANEXO 5 del ESAP.

como elemento esclarecedor de los hechos, así como tampoco investiga o explora la actividad conjunta entre militares y paramilitares develada por el Postulado para esclarecer los hechos y profundizar en la verdad para las víctimas y sus familiares.

El proceso de Justicia y Paz se edifica a partir de la versión libre de los postulados, pero ello no exonera a la Fiscalía para que cumpla con el deber legal de contrastar y verificar las aseveraciones de los Postulados. Sobre la compulsa de copias para investigar a los militares señalados por Ramón Isaza como autores y partícipes de las desapariciones forzadas no se conoce el estado de esa investigación y no se precisa sí se ha avanzado en el esclarecimiento de ese compromiso penal en los hechos de la Vereda La Esperanza. Sobre la individualización del Mayor HERNANDEZ, a quien Ramón Isaza señala como un actor determinante en los hechos, la Fiscalía a pesar de haber recibido información del representante de las víctimas, tampoco, profundiza en las contradicciones en las que incurre el Postulado, para concretar la autoría de los hechos en una persona ya fallecida, habiendo actuado en la zona, otro mayor de apellido HERNANDEZ, que posiblemente se encuentre vivo.

Años después, esto es, el 19 de diciembre de 2011, se celebró una audiencia de versión libre con los señores desmovilizados LUIS EDUARDO ZULUAGA ARCILA, WALTER OCHOA GUISAO y CAMILO DE JESUS ZULUAGA ZULUAGA en los que cada uno, de manera separada, reconocen autorías parciales[815] en los hechos y más claramente, tienen la virtud de excluir cualquier compromiso en los hechos de agentes de la Fuerza Pública, así como, desinformar respecto a la identidad del Mayor HERNANDEZ[816]. Esta nueva explicación de los hechos, diferente a la suministrada por el Postulado Ramón Isaza, no le genera a la Fiscalía ningún asomo de preocupación en torno al devenir de la verdad, a fin de provocar un proceso de verificación y contrastación más sofisticado y detallado, con base en los análisis de los contenidos de sus confesiones, y contrastar con otros elementos materiales de prueba.

Por ejemplo, estos Postulados le atribuyen responsabilidad a un Mayor HERNANDEZ de la base militar de la Piñuela, lo hacen con relación a hechos ocurridos en el año 1994, e igual, que Ramón Isaza, aluden a él, como aquel que se insertó al grupo paramilitar de alias Jorge 40, en el Norte de Colombia y no a quien efectivamente sí había sido comandante de la base la Piñuela, Mayor Jairo Enrique Hernández Alfonso en la época por ellos referenciada. Es decir, relacionan a un Mayor de apellido Hernández, pero cuando lo precisan, se refieren a otro, que en el momento de esos hechos del año 1994, no tenía competencia en la Base militar de la

[815] Luis Eduardo Zuluaga Arcila reconoce su participación en las desapariciones forzadas efectuadas los días 7 y 9 de julio de 1996. Walter Ochoa Guisao en las desapariciones del día 22 de junio de 1996 y Camilo de Jesús Zuluaga Zuluaga solo reconoce haber custodiado a algunas de las víctimas. Niegan haber actuado en las desapariciones de Anibal de Jesús Castaño y Oscar Hemel Zuluaga, de Irene de Jesús Gallego, desconocen que Fredy haya servido de guía al ejército en el operativo llevado a cabo en la vivienda del señor José Eliseo Gallego Hernández y no reconocen tampoco la participación en las desapariciones de Leonidas Cardona y de Andres Antoni Gallego, ocurridas el 27 de diciembre de 1996, a pesar de que en estas acciones, fue reconocido nuevamente Fredy o el Costeño como participe de los mismos.

Piñuela. Esta misma tendencia de las versiones libres de los Postulados se repite en la diligencia celebrada los días 4 y 5 de diciembre de 2014.[817]

Aunque el Postulado Luis Eduardo Zuluaga reconoce haber servido de guía en labores de la Fuerza de Tarea Águila a mediados del año 1996, fecha en que ocurrieron las primeras desapariciones forzadas,[818] elude relacionar las desapariciones forzadas en el marco de esa vinculación a las Fuerzas militares en la zona como guías del ejército, lo cual debe ser materia de análisis de la Fiscalía al momento de tomar determinaciones en relación con la imputación de los hechos a estos postulados. Esa misma percepción de desprende de las manifestaciones de Walter Ochoa Guisao, quien también participo como guía del ejército.[819]

Para la Fiscalía de Justicia y Paz no ha sido problema la contradicción que se planteó en las diligencias de indagatoria en el proceso ordinario de la Unidad Nacional de derechos humanos, rendidas por los señores Luis Eduardo Zuluaga y Walter Ochoa, quienes declararon bajo la gravedad del juramento, que el señor Ramón Isaza Arango había participado de manera directa en las desapariciones forzadas de la Vereda La Esperanza, a pesar de que éste solo admitía que el autor de esos hechos había sido su hijo Omar Isaza. Esta situación la hizo saber el representante de la Parte Civil a la Fiscalía[820], pero ésta no ha contrastado ni verificado esa circunstancia y menos tomado medidas respecto de la eventual exclusión del Postulado por faltar a la verdad.

Sin embargo, lejos de una labor comprensiva y proactiva en la investigación y en la búsqueda de la verdad, la Fiscalía de Justicia y Paz, después de las versiones libres de los postulados, de diciembre 4 y 5 de 2014, -a pesar de las contradicciones, omisiones y falacias de los

---

[817] Versión libre de Luis Eduardo Zuluaga Arcila Folio 173 Minuto 13:30:15. Caso 200668005. Versión libre 04 de 2014. Folio 167 Cuaderno No. XXX. Radicado 233 UNDH – DIH. "No señor Fiscal que yo tenga registro, como lo he manifestado, desde que empezó justicia y paz ya me lo han preguntado en justicia ordinaria y he venido diciendo, que no existía ninguna clase de acercamiento, acuerdo o compromiso con los militares" (subrayas fuera del texto). Luis Eduardo Zuluaga Arcila como Mario HERNANDEZ "sino estoy mal y que él murió en Valledupar". Masacre de la Esperanza. Caso 200668005. Versión libre 04 de 2014. Folio 167 Cuaderno No. XXX. Radicado 233 UNDH – DIH. ANEXO 2 del ESAP.

[818] Versión libre de Luis Eduardo Zuluaga Arcila Folio 172 Minuto 13:23:44. Caso 200668005. Versión libre 04 de 2014. Folio 167. Radicado 233 UNDH – DIH. ANEXO 2 del ESAP.

[819] Versión libre e Walter Ochoa Guisao. Folio 173 Minuto 13:35:05. Caso 200668005. Versión libre 04 de 2014. Folio 167 Cuaderno No. XXX. Radicado 233 UNDH – DIH. "Yo solo que haya laborado con el ejército como guía desconozco que haya habido un acuerdo con la fuerza águila. Y como lo manifesté en horas de la mañana que yo haya patrullado con las fuerzas de tareas especiales, águila, ellos eran un grupo de soldados regulares por lo que pude percibir en la patrullada con ellos".



Postulados en su conjunto, lo que ameritaría un juicio razonable para su exclusión del procedimiento de justicia y paz-, propone que a raíz de *"las nuevas circunstancias probatorias, indican, de una parte, que en el marco de la justicia transicional, deberemos evaluar la presentación ante la Magistratura de una nueva audiencia de formulación de imputación para imputar por primera vez los hechos confesados, según corresponda, a los señores Walter Ochoa Guisao, (a. "guerre"), Luis Eduardo Zuluaga Arcila (a. Mac Guiver) y/o Camilo de Jesús Zuluaga (a. Napo), así como para corregir y adicionar el contenido de la imputación hecha en su momento (14 de abril de 2009) al señor Ramón María Isaza, ajustándola a las aceptaciones de responsabilidad consolidadas en la versión del pasado mes de diciembre/14)…."*[821] .

Es decir, las actuaciones y decisiones judiciales, así como la construcción de la verdad, se adaptan a las versiones de los postulados, y no a las labores integrales de investigación serias y diligentes que le corresponden al Estado, y menos aún se articulan con la prueba ya recogida en la jurisdicción interna, ni en el apoyo de los testimonios de las víctimas.

En la versión libre de los días 4 y 5 de diciembre de 2014, la Fiscalía tuvo la oportunidad de escuchar a los familiares de las víctimas que en la audiencias aclararon y precisaron hechos del caso, así mismo, la representación legal de las víctimas formuló preguntas basadas en las contradicciones y omisiones relevantes de los Postulados que se esperaría que hicieran parte del programa metodológico para contrastar y verificar la veracidad de las afirmaciones de los Postulados, de lo contrario, el papel o rol de la Fiscalía sería de "notario" o "fedatario" de las versiones de los Postulados y no un artífice de la reconstrucción de la verdad de los hechos.

La Corte Constitucional de Colombia sobre este particular deber de investigar de la Fiscalía en Justicia y Paz señaló que "Por las razones que han sido expresadas, en casos como estos, además de confiar en la voluntad de buena fe de quienes deciden entrar a la legalidad, el Estado debe adoptar mecanismos procesales idóneos para asegurarse que las personas a quienes se beneficia a través de la imposición de penas alternativas reducidas respecto de los delitos cometidos, colaboren eficazmente en la satisfacción de los derechos a la verdad de sus propias víctimas. De esta manera, las personas que tendrán los beneficios que supone vivir en un Estado de derecho, tendrán también las cargas proporcionales que el derecho les impone. Así se logra ponderar el derecho a la paz y los derechos de las víctimas, en especial el derecho a la verdad. De otra forma el Estado estaría renunciando a su deber de adelantar investigaciones serias y exhaustivas sobre los hechos dentro de un plazo razonable, y estaría sacrificando desproporcionadamente el derecho de las víctimas a conocer la verdad integral y fidedigna de lo ocurrido.[822] (subrayas fuera del texto)

Ahora bien, la ley 1592 de 2012, que reformó la Ley 975 de 2005, estableció criterios de priorización en la investigación y juzgamiento de conductas atribuidas a los Postulados de los grupos ilegales en proceso de justicia y paz.

El artículo 15 de dicha ley señaló que "los servidores públicos dispondrán lo necesario para que se asegure el esclarecimiento de la verdad sobre el patrón de macro-criminalidad en el

---

821 Oficio DFNEJT No. 0217 del 27 de febrero de 2015. Suscrito por el Fiscal 47 delegado ante Tribunal superior de Bogotá. Folio 152. Radicado 233 UNDH – DIH. ANEXO 2 del ESAP

822 Corte Constitucional. Sentencia C 370 de 1996 Párr. 6.2.2.1.7.21.

accionar de los grupos armados organizados al margen de la ley y se pueda develar los contextos, las causas y los motivos del mismo". El artículo 16ª de la citada Ley también determinó que el Fiscal General de la Nación establecería unos criterios de priorización dirigidos a establecer el patrón de macrocriminalidad.

La Ley 1592 de 2012 introduce para el sistema de Justicia y Paz unas obligaciones específicas a cargo de la Fiscalía, que implican que a las conductas criminales que van a ser investigadas y judicializadas se les aplicarán criterios de priorización. Igualmente, que la Fiscalía deberá develar el patrón de macro-criminalidad de las acciones delictivas cometidas por los grupos armados organizados al margen de la ley, en el cual se deben reconstruir los contextos, las causas y los motivos del patrón referido. Finalmente, llama la atención para que los esfuerzos de investigación se concentren sobre los máximos responsables.

La investigación de las desapariciones forzadas de la Vereda La Esperanza, se conoce por información del Estado, que fue priorizada por decisión de la Fiscalía General de la Nación, tanto a nivel de la justicia ordinaria, como en Justicia y Paz. Sin embargo, no se sabe cuáles fueron los criterios y parámetros usados por el ente instructor para realizar la priorización, y cuales han sido los mecanismos y procedimientos para elaborar las hipótesis de investigación criminal y de explicación de los patrones de comisión delictiva. Entre otros factores, porque en este procedimiento que es discrecional de la Fiscalía y administrativo, es decir, por fuera del proceso penal, no participan otros sujetos procesales, como el Ministerio Público ni la representación de las víctimas.

Ahora bien, el modelo de investigación por patrones de macrocriminalidad, que según la Fiscalía, permitiría avanzar en el esclarecimiento de los hechos priorizados frente a los máximos responsables, presenta una dificultad adicional para las víctimas y sus representantes, pues a éstas se les arrincona al conocimiento expreso de su caso concreto, dentro del universo de casos priorizados, pues la Fiscalía solo proporciona información, no con respecto a la consignada en el proceso de justicia y paz, relativa a los patrones analizados, sino exclusivamente, frente a aquella relacionada con su particular afectación. Las víctimas no logran interpelar el contexto, las causas y motivaciones de los crímenes, entre los cuales, la Fiscalía circunscribió el suyo, pues se le niega el acceso a la totalidad de la carpeta[823].

[823] En el caso del secuestro de integrantes del Instituto Popular de Capacitación Popular en la ciudad de Medellín por parte de las autodefensas unidas de Colombia, que se inscribe, desde la perspectiva de las víctimas en un patrón de ataques contra defensores de derechos humanos, la Fiscalía de Justicia y Paz negó el acceso a las pruebas que obran en la carpeta contra el Postulado Diego Fernando Murillo Bejarano, en razón a que "Como parte interviniente en el proceso del señor MURILLO BEJARANO, lógicamente la ley le confiere unas facultades, entre ellas el acceso a información para la estructuración del caso, el aporte de pruebas; pero no se trata de una potestad ilimitada. La fiscalía por mandato del art. 250 de la carta magna, la directiva 001 de 2012, tiene el *ius puniendi* del estado y es quien tiene a cargo la determinación de los patrones de macro-criminalidad. Los mismos serán conocidos dentro del escenario de la audiencia de formulación de cargos en su debido momento procesal, durante el desarrollo de las audiencias, de conformidad con el principio de publicidad y concentración, usted no sólo podrá conocer los mismos, sino intervenir de manera activa. A su disposición por tanto se encuentran los video-clips, donde el postulado se ha referido al hecho del IPC, para lo cual se puede poner en contacto con la investigadora EUGENIA VALENCIA GRAJALES, quien tiene a su cargo el postulado. Oficio nro. 0570. Medellín, abril 13 de 2015. Fiscal 089 Especializada de apoyo. Fiscalía 15 Delegada ante el Tribunal.

A lo anterior se suma, que con la reforma legal de la Ley 975 de 2005 contenida en la Ley 1592 de 2012 la potestad o faculta para solicitar la terminación del proceso y la exclusión a los Postulados de Justicia y Paz quedó exclusivamente radicada en la Fiscalía General de la Nación[824]. Arbitrio que la Judicatura en Colombia, ratificó, negando incluso esa facultad a la Magistratura de Justicia y Paz[825]. Es decir, ningún otro sujeto procesal[826], ni las victimas que solo ostentan una calidad de intervinientes parciales del proceso de justicia y paz, están facultadas para formular solicitudes en ese sentido.

Por lo tanto, como ha quedado demostrado a través del análisis de la investigación en el proceso de Justicia y Paz en relación con el esclarecimiento de la verdad, el Estado colombiano es responsable internacionalmente por la violación del derecho a la verdad, en contravención de los artículos 5, 8, 13 y 25 de la CADH, en conjunto con el incumplimiento de los artículos 1.1 del mismo instrumento en perjuicio de los familiares de las víctimas de desaparición forzada en la Vereda La Esperanza.

### F. El Estado es responsable por la violación del derecho a la propiedad

El Estado colombiano violó el derecho a la propiedad privada consagrado en el artículo 21 de la Convención Americana, en conjunto con el incumplimiento del artículo 1.1 del mismo instrumento, cuando los agentes estatales destruyeron el domicilio de José Gallego Quintero.

El artículo 21 de la Convención Americana dispone:

> "Artículo 21. Derecho a la propiedad privada
>
> 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.
>
> 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.
>
> 3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley."

[824] Articulo 11 A. de la Ley 1592 de 2012. "La solicitud de audiencia de terminación procede en cualquier etapa del proceso y debe ser presentada por el fiscal del caso".

[825] Corte Suprema de Justicia. MP. Maria del Rosario Gonzalez Muñoz. AP4085-2014. Radicación No. 43005. Aprobado Acta No. 235. Pág. 37. Auto que decreta la nulidad de la exclusión de varios Postulados a Justicia y Paz del Bloque Cacique Nutibara por parte de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín.. La Corte dice que En ese orden, la potestad de solicitar la exclusión quedó taxativamente atribuida a la Fiscalía General de la Nación y la decisión de la misma se le asignó a la Sala de Conocimiento de los Tribunales de Justicia y Paz, razón por la cual éstos operadores jurídicos no pueden expulsar oficiosamente a los postulados, pues siempre deberá mediar petición del ente acusador. Proceder de forma contraria, como lo hizo el Tribunal *a quo*, comporta afectar de manera trascendente la estructura procesal diseñada por el legislador en punto del trámite transicional.

[826] Ni el Ministerio Público, ni los Magistrados de Justicia y Paz y menos las víctimas y sus representantes tienen esa atribución, dado que quedó radicada exclusivamente en la Fiscalía.

La jurisprudencia de la Corte IDH ha desarrollado "un concepto amplio de propiedad que abarca, entre otros, el uso y goce de los bienes, definidos como cosas materiales apropiables o como objetos intangibles, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona"[827]. Los animales domésticos, los víveres y el ganado, por tanto, se incluyen dentro de este concepto de la propiedad[828].

Si bien el derecho a la propiedad privada no es absoluto, toda restricción o limitación a éste debe realizarse por la vía legal adecuada y de conformidad con los parámetros establecidos en el artículo 21 de la CADH[829].

Como se desprende del capítulo de los hechos del caso, el 26 de junio de 1996 miembros de las fuerzas armadas colombianas pertenecientes a la FTA llegaron al domicilio de José Eliseo Gallego Quintero y de su esposa María Engracia Hernández Quintero, identificándose como soldados contraguerrilla. Ordenaron que les abrieran la puerta y comenzaron a disparar al interior de la casa. Posteriormente, ingresaron a la casa de las víctimas y destruyeron los bienes muebles que se encontraban en ella, dejando herido al señor Gallego como producto de este ataque.

Han trascurrido casi 19 años desde el ataque a la propiedad de las víctimas sin que se haya investigado ni sancionado a las personas responsables de estos hechos.

En consecuencia, el Estado colombiano es responsable de la violación al derecho de propiedad contenido en el artículo 21 de la CADH, en perjuicio de las victimas José Eliseo Gallego Quintero y de su esposa María Engracia Hernández Quintero.

### G. El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas

Esta Honorable Corte ha señalado en numerosas ocasiones que "los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas"[830]. En este sentido, ha establecido que la violación de la integridad psíquica y moral de los familiares de una persona desaparecida "es una consecuencia directa, precisamente, de la desaparición forzada" y, por tanto, las "circunstancias de dicha desaparición generan sufrimiento y angustia, además de un

---

827 *Cfr*., Corte IDH. *Caso Furlan y Familiares Vs. Argentina*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, párr. 220.

828 *Cfr.*, Corte IDH. *Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, párr. 178.

829 *Cfr*., Corte IDH. *Caso "Cinco Pensionistas" Vs. Perú*, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C No. 98, párr. 102; Corte IDH. *Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador*, *Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuado*r. Excepción Preliminar y Fondo. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 179, párr. 55; Corte IDH. *Caso Acevedo Buendía y otros ("Cesantes y Jubilados de la Contraloría") Vs. Perú*, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009 Serie C No. 198, párr. 84.

830 *Cfr.,* Corte IDH. *Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala*. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 160; Corte IDH. *Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010. Serie C No. 217, párr. 126; Corte IDH. *Caso Gelman Vs. Uruguay*. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C No. 221, párr. 133.

sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia ante la abstención de las autoridades públicas de investigar los hechos"[831].

Así, el Tribunal ha establecido en su jurisprudencia reiterada que:

> […] se puede presumir un daño a la integridad psíquica y moral de familiares directos de víctimas de ciertas violaciones de derechos humanos aplicando una presunción *iuris tantum* respecto de madres y padres, hijas e hijos, esposos y esposas, compañeros y compañeras permanentes (en adelantes "familiares directos"), siempre que ello responda a las circunstancias particulares del caso. En el caso de tales familiares directos, corresponde al Estado desvirtuar dicha presunción. En los demás supuestos, el Tribunal deberá analizar si de la prueba que consta en el expediente se acredita alguna afectación a la integridad personal de la presunta víctima, sea o no familiar de alguna otra víctima en el caso […][832].

En el presente caso, corresponde aplicar la presunción de una violación del derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 5 de la Convención Americana, en conjunto con el incumplimiento del artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de los familiares de las víctimas del presente caso.

Los familiares de las víctimas del presente caso han experimentado profundo sufrimiento a raíz de la desaparición forzada de sus seres queridos, lo cual se acrecienta especialmente en consideración de la desaparición de los 3 niños. La desaparición forzada de las víctimas provocó una ruptura en el seno de la familia que se sigue experimentando en la actualidad.

La esposa de uno de los desparecidos ha manifestado que: "A mí hijo no le gusta hablar del papá porque es muy doloroso, no haberlo conocido es muy triste. […] Sólo hasta los 10 años de edad mi hijo comprendió lo que le paso al papá. No podemos olvidar porque necesitamos saber la verdad"[833]

Asimismo, la señora Florinda Gallego ha señalado que para ella fue muy duro ver como los paramilitares se llevaban a su esposo en frente de sus cuatro hijos, sabiendo que estaba embarazada de dos meses[834]. Estos hechos le han generado sentimientos de angustia y depresión.

Para Verónica Giraldo fue un golpe muy duro la pérdida de su padre en manos de los grupos paramilitares, ella expresó: "[…] Me quitaron un pedazo de mi corazón, porque mi papa para mí

---

831 *Cfr.*, Corte IDH. *Caso Blake Vs. Guatemala*. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36, párr. 114; Corte IDH. *Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala*. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 160; Corte IDH. *Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010. Serie C No. 217, párr. 126.

832 *Cfr.*, Corte IDH. *Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010. Serie C No. 217, párr. 127.

833 Corporación Jurídica Libertad, *Caminando la Esperanza por Justicia y Dignidad*. Testimonio de familiar desaparecido(los nombres de omiten por razones de seguridad). Publicado en el año 2012. pág. 23. ANEXO 17 del ESAP.

834 Programa Televisivo Contravía. "*CONTRAVIA. Cap 177. Los desparecidos de la Esperanza parte I*". Entrevista de Florinda de Jesús Gallego Hernández. Minuto 21:00. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=GUq8EVzDWBg ANEXO 3 del ESAP.

era todo"[835]. Los familiares de Oscar Emel Zuluaga aseguran que la desaparición de su hermano ha causado mucho daño, pues se trataba de una familia muy unida[836].

En los testimonios se narra el caso de las personas que murieron de pena moral, como José Eliseo Gallego, padre de Juan Carlos y Octavio Gallego quienes fueron desparecidos en julio de 1996, o la señora Maria Dioselina Quintero, que falleció sin saber el paradero de sus hijo Juan Crisostomo y Miguel Ancizar[837]. En este sentido, los familiares de las víctimas han sufrido por la falta de justicia en las investigaciones de lo ocurrido en torno a la desaparición forzada de sus seres queridos. Esta Corte ha establecido, en este sentido, que la violación al derecho a la integridad de los familiares de las víctimas se debe a la falta de investigaciones efectivas para el esclarecimiento de los hechos, a la falta de iniciativas para sancionar a los responsables, a la falta de información acerca de los hechos y, en general, respecto a la impunidad en la que permanece el caso, lo cual les ha generado sentimiento de frustración, impotencia y angustia[838].

Además, los familiares de las víctimas sufren por la falta de esclarecimiento de la verdad que aún caracteriza los hechos del caso concreto, lo cual les ha imposibilitado identificar y recibir los restos mortales de sus seres queridos y, así, darles una sepultura adecuada. En este sentido, la Corte IDH ha establecido que "la privación del acceso a la verdad de los hechos acerca del destino de un desaparecido constituye una forma de trato cruel e inhumano para los familiares cercanos"[839]. Asimismo, esta Corte ha indicado que el esclarecimiento del paradero final de las víctimas desaparecidas permite a los familiares aliviar la angustia y sufrimiento causados por la incertidumbre respecto del destino de su familiar desaparecido[840].

En consideración de lo expuesto, el Estado colombiano es responsable por la violación del derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 5 de la CADH, in conjunto con el incumplimiento del artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de los familiares de las victimas anteriormente señalados.

---

835 *Ídem*. Minuto 04:28.

836 Corporación Jurídica Libertad, *Video: Por lo menos sus nombres*, desaparecidos de la Vereda La Esperanza. Minuto 01:30. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=qajHSrHqYSo ANEXO 3 del ESAP.

837 Programa Televisivo Contravía. "¨*Los Desaparecidos de La Esperanza II¨Parte1-CONTRAVÍA"*.Entrevista de José Eliseo Gallego Hernández. Minuto 03:40. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=bnptjXGw7yI ANEXO 3 del ESAP.Corporación Jurídica Libertad, *Caminando la Esperanza por Justicia y Dignidad*. Testimonio de familiar desaparecido(los nombres de omiten por razones de seguridad). Publicado en el año 2012. pág. 24. ANEXO 17 del ESAP.

838 *Cfr.,* Corte IDH. *Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219, párr. 241.

839 *Cfr.,* Corte IDH. *Caso Gelman Vs. Uruguay*. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C No. 221, párr. 133; cfr., Corte IDH. *Trujillo Oroza Vs. Bolivia*. Fondo. Sentencia de 26 enero de 2000. Serie C No. 64, párr. 114.

840 *Cfr.,* Corte IDH. *Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219, párr. 240; Corte IDH. *Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 155.

# IX. CAPITULO IX - REPARACIONES

## A. Aspectos generales y la obligación de reparar

A lo largo de este proceso los representantes hemos demostrado la responsabilidad internacional del Estado por las violaciones a los derechos de las víctimas a raíz de los hechos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales en la Vereda La Esperanza, cometidas por parte de grupos paramilitares con tolerancia y colaboración de agentes estatales. Asimismo, hemos evidenciado la responsabilidad estatal por no llevar a cabo una investigación ni reparar de manera adecuada el daño que las mismas les causaron a las víctimas.

El derecho internacional sobre la responsabilidad de los Estados establece que *"al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de la norma internacional de que se trata, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación"*[841].

Dicha norma se encuentra reflejada en el Sistema Interamericano en el artículo 63.1 de la Convención Americana, el cual dispone que:

> Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

Esta Honorable Corte ha interpretado al artículo 63.1 de la Convención como *"una norma consuetudinaria que es, además, uno de los principios fundamentales del actual derecho de gentes"*[842], dado *"que es un principio de derecho internacional que toda violación de una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente"*[843].

Para reparar a las víctimas de violaciones de derechos humanos el Estado infractor debe buscar siempre que sea posible, la plena restitución de la situación anterior a la violación (*restitutio in integrum*)[844]. Sin embargo, este Tribunal ha reconocido desde sus primeras

---

841 *Cfr.,* Corte IDH. *Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia*. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 211; Corte IDH. *Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212. párr. 227; Corte IDH. *Caso Radilla Pacheco Vs. México*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 327.

842 *Cfr.,* Corte IDH. Caso *Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia*. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213. párr. 211; Corte IDH., *Caso Aloeboetoe y otros Vs. Surinam*. Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de septiembre de 1993. Serie C No. 15, párr. 43.

843 *Cfr.,* Corte IDH. *Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras*. Sentencia de indemnización compensatoria. Serie C No. 7, Párr. 25; Corte IDH. *Caso Baena Ricardo y Otros*. Sentencia de fondo de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72, párr. 201; Corte IDH. *Caso de la "Panel Blanca" (Caso Paniagua Molares y Otros) vs. Guatemala*. Sentencia de reparaciones de 25 de mayo de 2001. Serie C No. 76, párr. 75.

844 *Cfr.,* Corte IDH. *Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205. párr. 450.

sentencias que cuando esto no es posible, *"la reparación ha de asumir otras formas sustitutivas, como la indemnización pecuniaria"*[845].

Asimismo, en su jurisprudencia la Corte ha considerado que, aunadas a una justa compensación, las reparaciones deben incluir el rembolso de todos los gastos y costas que los familiares de las víctimas o representantes hayan realizado derivados de la representación en procedimientos ante cortes nacionales e internacionales[846].

Dado el carácter de las violaciones cometidas en el presente caso, que hacen imposible la plena restitución de los derechos lesionados, el Estado debe adoptar las medidas de satisfacción de los derechos violados y garantías de no repetición, así como medidas compensatorias necesarias para garantizar la debida indemnización moral y material de las víctimas.

## B. Titulares del derecho a la reparación

En primer término, respetuosamente solicitamos que la Honorable Corte considere como beneficiarias de las reparaciones a las víctimas directas de los hechos a los que se refiere este escrito.

De igual modo, y de acuerdo a los criterios establecidos por este Tribunal, deben tenerse en cuenta como víctimas y beneficiarios de las reparaciones, a los familiares más cercanos, por las violaciones de las cuales han sido objeto a través de los años. En atención a ello, las reparaciones ordenadas por esta Honorable Corte Interamericana deben alcanzar a las personas identificadas en los cuadros establecidos en el Capítulo de "Identidad de las víctimas".

## C. Medidas de reparación solicitadas

Las reparaciones, así como el término lo indica, consisten en las medidas que tienden a reparar integralmente los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial. Las reparaciones no pueden implicar ni enriquecimiento, ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores[847].

---

845 *Cfr.,* Corte IDH. *Caso Aloeboetoe y otros Vs. Surinam*. Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de septiembre de 1993. Serie C No. 15, párr. 50.

846 *Cfr.,* Corte IDH. *Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador.* Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr. 205; Corte IDH. *Caso Carpio Nicolle y otros Vs. Guatemala.* Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2004. Serie C No. 117, párr. 143*;* Corte IDH. *Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala*. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 19 de noviembre de 2004. Serie C No. 116, párr. 115; Corte IDH. *Caso De la Cruz Flores Vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de noviembre de 2004. Serie C No. 15, párr. 177.

847 *Cfr.*, Corte IDH. *Caso Carpio Nicolle y otros Vs. Guatemala*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre 2004. Serie C No. 117. párr. 89; Corte IDH. *Caso Tibi Vs. Ecuador.* Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 225.

En los siguientes apartados, desarrolláremos una serie de medidas que tienden a aminorar – sin necesariamente eliminar – las consecuencias sufridas por las violaciones de derechos humanos sufridas por las víctimas dada la naturaleza del daño infligido a las mismas. Son éstas medidas que solicitamos que la Honorable Corte ordene al Estado colombiano en concepto de reparación.

## 1. Garantías de no repetición y satisfacción

### *a) Investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de la desaparición forzada de las víctimas*

En reiteradas oportunidades el Tribunal ha señalado que el Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, la cual ha sido definida por la Corte Interamericana como la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana[848]. Tal como ha señalado la Corte, *"la investigación de los hechos y la sanción de las personas responsables, [...] es una obligación que corresponde al Estado siempre que haya ocurrido una violación de los derechos humanos y esa obligación debe ser cumplida seriamente y no como una mera formalidad"*[849].

En el presente caso, han transcurrido más de 19 años desde que ocurrieron estos graves crímenes de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, y a la fecha ninguna persona ha sido sancionada o siquiera acusada en los procesos judiciales que han sido iniciados. Esta omisión se hace aún más grave al tomar en cuenta que las desapariciones forzadas y la ejecución judicial que tuvieron lugar en la Vereda La Esperanza, fueron llevadas a cabo con la tolerancia y colaboración de agentes de las fuerzas de seguridad del Estado colombiano.

La Corte Interamericana ha sido clara al señalar que *"la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus*

---

848 *Cfr.*, Corte IDH. *Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190, párr. 69; Corte IDH. *Caso de la "Panel Blanca" (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala,* Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2001. Serie C No. 76, párr. 173; Corte IDH. *Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú*, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, párr. 405; Corte IDH. *Caso Vargas Areco Vs. Paraguay*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 155, párr. 153. Ver en igual sentido: *Caso Myrna Mack Chang, Vs. Guatemala,* Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101, párrs. 156 y 210; *Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No. 103, párr. 126; *Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala*, Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 100.

849 *Cfr.,* Corte IDH. *Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190, párr. 69; Corte IDH. *Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras*, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C No. 7, párr. 177; Corte IDH. *Caso El Amparo Vs. Venezuela. Reparaciones y Costas.* Sentencia de 14 de septiembre de 1996. Serie C No. 28, párr. 61; Corte IDH. *Caso García Prieto y otros Vs. El Salvador.* Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 16, párr. 100; Corte IDH. *Caso Heliodoro Portugal Vs Panamá*, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 144.

*familiares"*[850]*.* En otras oportunidades, la Corte ha sostenido que la obligación de investigar con la debida diligencia adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados[851]. Adicionalmente, este deber del Estado de enfrentar la impunidad y erradicarla sirve como herramienta para evitar que graves violaciones a los derechos humanos, como aquellas cometidas en el presente caso, no se repitan.

Con base en lo anterior, solicitamos a la Honorable Corte que ordene al Estado colombiano que investigue los hechos a través de instituciones imparciales, independientes y competentes dentro de un plazo razonable[852], individualizando a la persona o personas que fueron autoras de la desaparición forzada y la ejecución judicial de las víctimas de presente caso. Solicitamos además a la Corte que dicha investigación sea continuada en la justicia ordinaria y que sea conducida con debida diligencia[853], y que las autoridades encargadas de la investigación tengan a su alcance todos los medios necesarios para llevarla a cabo con prontitud[854].

Para cumplir con esta obligación, es necesario que la investigación explore diferentes líneas de investigación para establecer la verdad de lo sucedido, para ellos se deben investigar, entre otros:

- La actuación conjunta de integrantes de la FFPP y los grupos paramilitares en las desapariciones forzadas de la Vereda La Esperanza.
- Actuación del paramilitarismo del Magdalena Medio en el oriente antioqueño.
- Contextualizar los hechos del caso e identificar de patrones comunes de la práctica de desaparición forzada en el oriente antioqueño que permita interpretar el caso de la

---

850 *Cfr.,* Corte IDH. *Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia***.** Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 266; Corte IDH. *Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia.* Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 297.

851 *Cfr.,* Corte IDH. *Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190, párr. 76; Corte IDH. *Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay*, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153, párr. 84; Corte IDH. *Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas.* Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 157; Corte IDH. *Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia*, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 156.

852 *Cfr.,* Corte IDH*. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú.* Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, párr. 181.

853 *Cfr.,* Corte IDH. *Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190, párr. 77.

854 *Cfr.,* Corte IDH. *Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190, párr. 77; Corte IDH. *Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras,* Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C No. 7, párr. 174; Corte IDH. *Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador,* Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr. 83; Corte IDH. *Caso García Prieto y otros Vs. El Salvador,* Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 168, párr. 101; Corte IDH. *Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá*, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 144.

Vereda La Esperanza como una práctica masiva y sistemática de desaparición forzada[855].

Los resultados de las investigaciones deberán ser divulgados pública y ampliamente, para que la sociedad colombiana los conozca. De acuerdo al señalamiento de la Corte, *"[e]stas medidas no sólo benefician a los familiares de las víctimas sino también a la sociedad como un todo, de manera que al conocer la verdad en cuanto a los hechos alegados tenga la capacidad de prevenirlos en el futuro"*[856].

### *b) El Estado debe sancionar de manera proporcional y efectiva tomando en cuenta la gravedad de las violaciones*

El Estado debe castigar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas en la Vereda La Esperanza de una manera proporcional y efectiva tomando en cuenta la gravedad de las violaciones. En este sentido, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición ha señalado que la justicia transicional *"no se trata de mecanismos creados para establecer una 'forma de justicia blanda' ni como medio para alcanzar el objetivo de la reconciliación"*[857]; ésta última que *"no debería concebirse como una alternativa a la justicia ni como un fin que puede lograrse con independencia de la aplicación del enfoque global de las cuatro áreas de acción (verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición)"*[858].

Sin embargo, como lo señaló el Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howlland:

> la noción que se tiene o que se difunde en Colombia sobre la justicia de transición es igualmente problemática. Se habla frecuentemente sobre la justicia de transición como si se tratara de una fuente fantástica de beneficios para los violadores de derechos humanos. Sin embargo, la justicia transicional no es una fórmula que se utiliza para evitar la cárcel. No es el saco de regalos que trae Papá Noel a los violadores de derechos humanos cuando hay un acuerdo de paz; ni es una cura mágica a los males causados. La justicia en el post-conflicto surge como una opción para hacer justicia y recuperar el sentido de lo justo en

---

855 Por ejemplo, se deben analizar los posibles vínculos con el homicidio del Personero del Carmen de Viboral, Dr. Helí Gómez Osorio ocurrido el día 26 de noviembre de 1996.

856 *Cfr.,* Corte IDH. *Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr. 169; Corte IDH. *Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala*. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91, párr. 77.

857 ONU. Consejo de Derechos Humanos. *Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff*. A/HRC/21/46. 9 de agosto de 2012. Párr. 19. Disponible en: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A-HRC-21-46_sp.pdf. ANEXO 31 del ESAP.

858 ONU. Consejo de Derechos Humanos. *Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff*. A/HRC/21/46. 9 de agosto de 2012. Párr. 37. ANEXO 31 del ESAP.

> función de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos, no de los victimarios[859].

En este sentido, la CIDH ha reiterado que *"al momento de diseñar (…) marcos [de justicia transicional], existen ciertas obligaciones que deben ser observadas para ser acordes al derecho internacional de los derechos humanos"*[860].

En el caso colombiano, este marco de "transición" tuvo como base la Ley 975 de 2005 *(ver supra)*. Así, desde 2007, esta Honorable Corte indicó al Estado colombiano *"que los funcionarios y autoridades públicas tienen el deber de garantizar que la normativa interna y su aplicación se adecúen a la Convención Americana"*[861]. En este sentido, estableció *"algunos aspectos sobre principios, garantías y deberes que debe observar la aplicación del referido marco jurídico de desmovilización"*[862].

En su sentencia sobre el *Caso de la Masacre de La Rochela* (2007) la Corte señaló que para que el Estado satisfaga el deber de garantizar adecuadamente diversos derechos protegidos en la Convención, entre ellos el derecho de acceso a la justicia y el conocimiento y acceso a la verdad, es necesario que cumpla su deber de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar y reparar las graves violaciones a los derechos humanos. Para alcanzar ese fin el Estado debe observar el debido proceso y garantizar, entre otros, el principio de plazo razonable, el principio del contradictorio, el principio de proporcionalidad de la pena, los recursos efectivos y el cumplimiento de la sentencia[863].

Más específicamente, en relación con el principio de proporcionalidad de la pena, este Alto Tribunal estableció que

> la respuesta que el Estado atribuye a la conducta ilícita del autor de la transgresión debe ser proporcional al bien jurídico afectado y a la culpabilidad con la que actuó el autor, por lo que se debe establecer en función de la diversa naturaleza y gravedad de los hechos. La pena debe ser el resultado de una sentencia emitida por autoridad judicial. Al momento de individualizar las sanciones se debe fundamentar los motivos por los cuales se fija la sanción correspondiente. En cuanto al principio de favorabilidad de una ley anterior debe procurarse su armonización con el principio de proporcionalidad, de manera que no se haga ilusoria la justicia penal. Todos los elementos que incidan en la

---

859 Comisión Internacional de Juristas (CIJ). Guía para profesionales No. 7 - Derecho internacional y Lucha contra la impunidad. 2014. Págs. 50-51. Disponible en: http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/10/Universal-Lucha-contra-la-Impunidad-PG7-Publications-Practitioners-guide-series-2014-SPA.pdf ANEXO 26 del ESAP.

860 CIDH. "Verdad, justicia y reparación: cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia". OEA/Ser.L/V/II. Doc. 49/13. 31 de diciembre de 2013. Párr. 247.

861 Corte IDH. *Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163. Párr. 192.

862 Corte IDH. *Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163. Párr. 192.

863 Corte IDH. *Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163. Párr. 193.

> efectividad de la pena deben responder a un objetivo claramente verificable y ser compatibles con la Convención[864].

Si bien la Corte tuvo oportunidad de pronunciarse en relación con la morigeración de la pena a partir de la sentencia del caso la Rochela, esto sólo se permite en algunos supuestos, entre otros, cuando exista una cooperación para establecer una verdad plena. Sin embargo, esto no es lo que sucede en el presente caso.

Con relación al proceso que se adelanta ante la jurisdicción de Justicia y Paz, el Estado debe sancionar y castigar con penas adecuadas acordes con el aporte para la construcción de la verdad que realicen los postulados. Sobre esto, cabe recordar que uno de los primeros debates generados en torno a la Ley 975 fue el relativo al beneficio de la pena alternativa para los postulados que cumplieran con los requisitos establecidos en la ley[865], consistente en la privación de la libertad por un período mínimo de cinco años y máximo de ocho años[866]. En este sentido se han pronunciado tanto organizaciones de la sociedad civil[867], como organismos internacionales. Respecto de éstos últimos, cabe destacar que, previo a la promulgación de la ley[868], el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias ya había señalado que la considerable reducción de las penas aplicables a la perpetración de desapariciones forzadas no se correspondía con la gravedad del delito[869] y, por tanto, no cumplía con los requisitos de la *Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas* (resolución 47/133 de la Asamblea General)[870]. Similar postura adoptó el Comité contra la Tortura, manifestando que los beneficios jurídicos otorgados "no coinciden con el principio de la proporcionalidad de la pena y la ausencia de condenas indica una amnistía *de facto* en contravía con las obligaciones internacionales de derechos humanos"[871].

Si bien una causal de atenuación de la pena que eventualmente podría ser válida es la *"cooperación efectiva con la justicia, y en particular la colaboración efectiva en el*

---

[864] *Cfr.,* Corte IDH. *Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163. Párr. 196.

[865] *Cfr.,* Ley 975 de 2005. Artículo 3.

[866] *Cfr.,* Ley 975 de 2005. Artículo 29.

[867] CCAJAR. "La Ley de Justicia y Paz a la luz del principio de complementariedad". Septiembre de 2013. Págs. 28-29. Disponible en: http://www.colectivodeabogados.org/IMG/pdf/ley_de_justicia_y_paz_ccajar.pdf ANEXO 28 del ESAP.

[868] ONU – Consejo Económico y Social. *Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias – Misión a Colombia*. E/CN.4/2006/56/Add.1. 17 de enero de 2006. Párr. 76. Disponible en: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/102/28/PDF/G0610228.pdf?OpenElement ANEXO 29 del ESAP.

[869] *Cfr.,* ONU – Consejo Económico y Social. *Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias – Misión a Colombia*. E/CN.4/2006/56/Add.1. 17 de enero de 2006. Párr. 69.

[870] *Cfr.,* ONU – Consejo Económico y Social. *Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias – Misión a Colombia*. E/CN.4/2006/56/Add.1. 17 de enero de 2006. Párrs. 75, 70 y 27.

[871] *Cfr.,* ONU – Comité contra la tortura. Observaciones finales del Comité contra la tortura sobre Colombia. CAT/C/COL/CO/4. 4 de mayo de 2010. Párr. 14. Disponible en: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/C/COL/CO/4&Lang=En

*esclarecimiento del crimen"*[872]*;* justamente, otra de las críticas fundamentales de esta ley es que los procesos denominados de "justicia y paz" no han redundado en el verdadero esclarecimiento de los hechos. Esta deficiencia también se constata en el caso en particular de la Vereda la Esperanza.

### *c) El Estado debe garantizar que el proceso penal se conduzca de manera que garantice el derecho a la verdad de las víctimas*

En primer lugar, es importante destacar que, según información de la Fiscalía General de la Nación, a febrero de 2015, únicamente se han emitido 25 sentencias en el marco de la Ley 975 de 2005[873]. Se destaca esto, pues han pasado casi 10 años desde su entrada en vigor; es decir, dos años más de la pena máxima que dicha ley establece para quienes sean sancionados a través de ésta[874].

Es claro que no se trata sólo del número de sentencias dictadas, sino también de la forma como se llega a ellas. En este sentido, en su momento la CIDH consideró que la Ley 975 de 2005 *"no [establece] incentivos para que los desmovilizados confiesen en forma exhaustiva la verdad sobre su responsabilidad, a cambio de los beneficios judiciales que recibirán"*[875]*.* Por ello, la Ilustre Comisión alertaba para que las autoridades "hicieran cumplir de manera rigurosa los requisitos que condicionaban el acceso a la pena atenuada y a su preservación", a fin de que la imposición de sanciones reducidas fuera producto de la obtención plena de la verdad; asegurada ésta no solo a través de la confesión del postulado, sino también de la investigación diligente por parte de las autoridades de los hechos confesados[876], de manera de garantizar el derecho a la verdad de las víctimas.

Sin embargo, esto no está ocurriendo en la práctica. A manera de ejemplo, esto ha quedado evidenciado en las propias sentencias emitidas en el marco de esta ley; así, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, se ha referido a las deficiencias del trabajo realizado por la Fiscalía[877], señalando que los argumentos de ésta "deben ser sometidos a constatación por

---

872 *Cfr.,* CIJ. Guía para profesionales No. 7 - Derecho internacional y Lucha contra la impunidad. 2014. Págs. 233-234. ANEXO 26 del ESAP.

873 *Cfr.,* Fiscalía General de la Nación. Sentencias ley de Justicia y Paz. Disponible en: http://www.fiscalia.gov.co/jyp/direccion-de-fiscalia-nacional-especializada-de-justicia-transicional/ley_justicia_y_paz/

874 *Cfr.,* CIDH. "Verdad, justicia y reparación: cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia". OEA/Ser.L/V/II. Doc. 49/13. 31 de diciembre de 2013. Párr. 314.

875 *Cfr.,* Corte IDH. *Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134. Párr. 302.

876 *Cfr.,* CIDH. "Verdad, justicia y reparación: cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia". OEA/Ser.L/V/II. Doc. 49/13. 31 de diciembre de 2013. Párrs. 285-286; Ver también, CIDH. Pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la aplicación y el alcance de la Ley de Justicia y Paz en la República de Colombia. 2006. Disponible en: http://www.cidh.org/countryrep/Colombia2006sp/pronunciamiento.8.1.06esp.htm.

877 *Cfr.,* Tribunal Superior de Bogotá – Sala de Justicia y Paz. Sentencia Ramón María Isaza Arango y otros, de 29 de mayo de 2014. Rad. 11-001-60-00253-2007 82855 - Rad interno 1520. Párrs. 659-670. ANEXO 8 del ESAP.

parte de la Fiscalía y no una conclusión de la mera exposición de los motivos que esgrimen varios de los jefes originales del paramilitarismo"[878]. Profundiza la Sala, exponiendo que extraña que la Fiscalía no hubiera realizado una investigación con mayor profundidad, y en consecuencia una exposición del contexto en la cual se presenten los elementos específicos de secuestros, extorsiones, robos y otras actividades delictivas por parte de los grupos guerrilleros, y no solo una mención general.

Es diferente, en términos de memoria histórica y de la responsabilidad que las instituciones del Estado tenemos para con ella, que en la audiencia y en la sentencia quede expuesto que la razón del recurso a la violencia por parte del actor armado que es objeto de la decisión fue la presencia guerrillera en la zona con información verificable, que puede incluir testimonios, información de prensa y decisiones judiciales, a que simplemente haya sido señalado por el postulado en versión libre de manera general.

En este mismo sentido, para la Sala tampoco se realizó una investigación exhaustiva en la cual se pudiera comprobar que el Estado en efecto se había negado prestar seguridad en la zona, lo cual es afirmado en varias ocasiones y con contundencia por el Fiscal, pero finalmente solo está sustentado en la versión del postulado como argumento[879].

Así, se evidencia que la Fiscalía no está llevando a cabo su obligación de comprobar la veracidad de los hechos confesados por el postulado en su versión libre, contrastándolos con la posición de las víctimas y la evidencia disponible[880]; incumpliéndose así con el estándar de investigación requerido[881]. Adicionalmente, este actuar de la Fiscalía también puede considerarse revictimizante para las personas afectadas, al valerse únicamente de la posición del postulado[882].

Según concluye la referida Sala, *"la Fiscalía debe contrastar y realizar un deber investigativo para ampliar, complementar o confrontar dicha verdad del postulado. De no hacerlo, se corre el riesgo que la visión subjetiva y particular del postulado sea la que quede finalmente como resultado del proceso de Justicia y Paz"*[883]. Esto particularmente si se considera que, como ocurrió en el presente caso los postulados se contradicen a lo largo del tiempo, vulnera flagrantemente la obligación que el Estado tendría en un adecuado proceso de justicia transicional que tenga por objetivo, entre otros, garantizar el derecho a la verdad de las víctimas.

---

878 *Cfr.,* Tribunal Superior de Bogotá – Sala de Justicia y Paz. Sentencia Ramón María Isaza Arango y otros, de 29 de mayo de 2014. Rad. 11-001-60-00253-2007 82855 - Rad interno 1520. Párr. 664. ANEXO 8 del ESAP.

879 Tribunal Superior de Bogotá – Sala de Justicia y Paz. Sentencia Ramón María Isaza Arango y otros, de 29 de mayo de 2014. Rad. 11-001-60-00253-2007 82855 - Rad interno 1520. Párrs. 666-668. ANEXO 8 del ESAP.

880 Ley 975 de 2005. Artículos 15 y 17.

881 CCAJAR. "La Ley de Justicia y Paz a la luz del principio de complementariedad". Septiembre de 2013. Págs. 29-32. ANEXO 28 del ESAP.

882 Tribunal Superior de Bogotá – Sala de Justicia y Paz. Sentencia Ramón María Isaza Arango y otros, de 29 de mayo de 2014. Rad. 11-001-60-00253-2007 82855 - Rad interno 1520. ANEXO 8 del ESAP. Párrs. 663-665. Ver también, CCAJAR. "La Ley de Justicia y Paz a la luz del principio de complementariedad". Septiembre de 2013. Pág. 26. ANEXO 28 del ESAP.

883 Tribunal Superior de Bogotá – Sala de Justicia y Paz. Sentencia Ramón María Isaza Arango y otros, de 29 de mayo de 2014. Rad. 11-001-60-00253-2007 82855 - Rad interno 1520. Párr. 670. ANEXO 8 del ESAP.

Ahora bien, como señalamos *supra*, con el Marco Jurídico para la Paz de julio de 2012 –que se refiere a los criterios de priorización y selección como inherentes a los procesos de justicia transicional– y la Ley 1592 de diciembre de 2012 que reformó la Ley 975 de 2005, se establecieron "criterios de priorización (…) dirigidos a esclarecer el patrón de macro-criminalidad en el accionar de los grupos armados organizados al margen de la ley y a develar los contextos, las causas y los motivos del mismo, concentrando los esfuerzos de investigación en los máximos responsables"[884].

Al respecto, evidentemente preocupa que dicha priorización se transforme en una selección de casos y que, por tanto, los casos que no resulten priorizados, no sean investigados[885], en detrimento de los derechos a la verdad, de acceso a la justicia y a la reparación integral de las víctimas. En este sentido, si a los 7 años de adoptada la Ley 975 de 2005, ya se ha optado por limitar los ámbitos de investigación, ¿qué garantiza que a 7 años –o menos o más– de la Ley 1592 de 2012 no se decidirá por la impunidad absoluta?

Por otro lado, un adecuado proceso de justicia transicional debe basarse en el principio de centralidad de las víctimas[886].

Sobre este aspecto, desde el principio del proceso ha habido numerosos cuestionamientos en relación con la efectiva participación de las víctimas. A lo largo del proceso, las víctimas que acudían a escuchar las versiones libres de los postulados, se han enfrentado a diferentes obstáculos, tales como:

> 1) que las convocatorias se hacían, de manera general, a través de una página web;
>
> 2) la incertidumbre de si ese día se trataría o no lo relativo a su caso particular y, en consecuencia, los costos que ello implicaba si se habían tenido que movilizar de otras partes del país;
>
> 3) debían escuchar al postulado desde una sala contigua, desde la cual formulaban sus preguntas por escrito y era el fiscal quien decidía si su pregunta era entendible o pertinente para ser formulada al postulado;
>
> 4) la revictimización, pues el postulado responde afirmando que su ser querido sufrió determinada violación a sus derechos humanos por su pertenencia, colaboración o simpatía con la guerrilla[887];

---

884 Congreso de la República de Colombia. Ley 1592 de 2012 de 3 de diciembre de 2012 (en adelante, "Ley 1592 de 2012"). Artículo 13 (que añade el artículo 16A a la Ley 975 de 2005); ver también, artículos 1 y 10. Disponible en: http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2013/04/Ley-1592-del-03-de-Diciembre-de-2012.pdf ANEXO 30 del ESAP.

885 CIDH. "Verdad, justicia y reparación: cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia". OEA/Ser.L/V/II. Doc. 49/13. 31 de diciembre de 2013. Párrs. 379-384.

886 ONU. Consejo de Derechos Humanos. *Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff*. A/HRC/21/46. 9 de agosto de 2012. Párrs. 54-56 y 68.

887 Tribunal Superior de Bogotá – Sala de Justicia y Paz. Sentencia Ramón María Isaza Arango y otros, de 29 de mayo de 2014. Rad. 11-001-60-00253-2007 82855 - Rad interno 1520. Párrs. 660-661. ANEXO 8 del ESAP.

5) el reconocimiento de su calidad como tales por parte de los postulados[888], entre otros. Del mismo modo, la participación de las víctimas se ha visto limitada por la extradición de los máximos líderes paramilitares desmovilizados, en el acceso a la verdad, justicia y reparación de las víctimas[889].

Es así como las diferentes medidas, legislativas y de otra naturaleza, que el Estado colombiano ha adoptado, en su consideración, al amparo de la justicia transicional –aunque aún no ha habido tal transición–, se han configurado en medidas que han beneficiado más a los perpetradores de las violaciones de derechos humanos, por sobre la garantía efectiva de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de violaciones a derechos humanos en el marco del conflicto armado.

Toda vez que no se ha demostrado que haya existido en el caso de La Esperanza una verdad completa, ni la Fiscalía ha verificado de manera exhaustiva ésta, el poder judicial debe solicitar la terminación del proceso de justicia y paz y la exclusión de la lista de postulados, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 5 de la Ley 1592 de 2012, que adiciona el artículo 11 de la Ley 975 de 2005.

En consecuencia, para que sea posible reparar integralmente el daño causado a las víctimas de este caso y sus familiares, solicitamos a la Honorable Corte que exija al Estado llevar a cabo y concluir investigaciones completas, imparciales y efectivas con el fin de juzgar y sancionar, dentro de un plazo razonable, a la totalidad de los autores materiales e intelectuales de las violaciones de derechos humanos cometidas en contra de las víctimas del presente caso.

### *d) Se debe ordenar la investigación de los responsables en la obstaculización de las investigaciones*

En la misma línea, y dada la impunidad total, solicitamos a la Honorable Corte que ordene el Estado colombiano realizar inmediatamente las diligencias necesarias y adecuadas para identificar, procesar, y sancionar a todos oficiales responsables en la obstrucción de la investigación, en un plazo razonable y a través de una investigación seria, independiente, e imparcial. Como hemos demostrado ha habido una falta de respuesta oportuna y adecuada así como una falta de celeridad en los actos de investigación, causando que a la fecha los responsables de la obstrucción de la investigación queden impunes. Asimismo, solicitamos que esta Honorable Corte ordene el Estado de Colombia informar periódicamente a los familiares de las víctimas y sus representantes acerca de las gestiones realizadas en este sentido, así como los resultados de las mismas y las sanciones impuestas a los responsables.

---

888 CIDH. “Verdad, justicia y reparación: cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 49/13. 31 de diciembre de 2013. Párrs. 304-309.

889 CIDH. “Verdad, justicia y reparación: cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 49/13. 31 de diciembre de 2013. Párrs. 298-303. Ver también, PCS, CIJP, CCAJAR y FCSPP. “La Extradición: Aprendizajes y recomendaciones desde las víctimas”. Agosto de 2014. Disponible en: http://www.colectivodeabogados.org/IMG/pdf/extradicion.pdf ANEXO 28 del ESAP.

### *e) Ordene al Estado la eliminación de la aplicación de la doctrina del enemigo interno*

Solicitamos a la Corte, que, reconozca la importancia de las garantías de no repetición en el proceso de transición del conflicto armado hacia la paz. La Corte Constitucional en varias Sentencias ha reconocido el valor de los principios *Joinet* contra la impunidad de graves violaciones de los derechos humanos, entre los cuales se enumeran las garantías de no repetición[890]. La Corte en reciente decisión sobre la exequibilidad el marco jurídico para la paz, citó expresamente dichos principios para garantizar el derecho a la reparación integral de las víctimas[891].

En ese sentido, solicitamos que ordene al Estado la no aplicación de la doctrina del enemigo interno para mitigar así sus implicaciones en la violación de los derechos humanos. Como hemos referido, esto sucedió en particular, en el caso de la Vereda La Esperanza, en el cual, las víctimas fueron señaladas de auxiliar y colaborar a la guerrilla, por personal militar que actuaba en la zona, y por esa vía, se intentó justificar la perpetración de la secuencia de desapariciones forzadas.

Los familiares de las víctimas de la Esperanza han señalado que es necesario que los militares se *"comprome[an] a cumplir la ley y cambiar su forma de relacionarse con los campesinos, [y] no vernos como delincuentes"*[892]. Esa percepción de enemigo por parte de la Fuerza Pública y los grupos paramilitares contribuyó a la ejecución de las desapariciones forzadas y en ese sentido, una medida sólida que permita remover esa concepción, permitiría al país dar pasos importantes en las garantías de no repetición.

La ley 1448 de 2011 estableció en el parágrafo 1º del artículo tercero que las víctimas del conflicto armado tienen derecho a las garantías de no repetición. En el artículo 149 de la misma ley, determinó como medidas en ese sentido *"la derogatoria de normas o cualquier acto administrativo que haya permitido o permita la ocurrencia de las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente Ley, de conformidad con los procedimientos contencioso-administrativos respectivos"*[893].

En consecuencia, teniendo como base las disposiciones internas en material constitucional y la reiterada jurisprudencia de la Corte colombiana, le solicitamos a la Corte IDH, ordene al Estado la no aplicación de la doctrina del enemigo interno para mitigar así sus implicaciones en la violación de los derechos humanos.

---

890 Corte Constitucional, sentencia T- 327 del 26 de marzo de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, disponible en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/T-327-01.htm; Corte Constitucional, sentencia C-370 del 18 de mayo de 2006, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, apartado 4.7 (en especial párrafos 4.7.2 y 4.7.3.4), disponible en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/C-370-06.htm.

891 Corte Constitucional. C 579 del 28 de agosto de 2013. Acapite 8.4.2. Salvaguarda de los derechos de las víctimas; (v) Garantizar el derecho a la reparación integral de todos los daños que hayan sufrido, disponible en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56742.

892 *Cfr.,* Caminando en la Esperanza, por Justicia y Dignidad, ANEXO 17 DEL ESAP.

893 Ley 1448 de 2011 Artículo 149 literal r.

### *f) Recuperación de los restos de las víctimas y su entrega a sus familiares*

Solicitamos a la Corte que ordene al Estado colombiano cumplir con la obligación de recuperar y entregar los cuerpos a los familiares de las víctimas del delito de desaparición forzada. Para ello, el Estado debe presentar a los familiares a la mayor brevedad posible un plan de búsqueda para este fin[894]. Ese proceso deberá incluir el acompañamiento psicosocial a los familiares de las víctimas. Cualquier actividad tendiente a localizar el paradero de los familiares desaparecidos debe llevarse a cabo en acuerdo y con la participación de sus familiares y representantes legales.

La obligación de determinar el paradero de las personas desaparecidas y la identificación de sus restos es una obligación que surge del derecho a la verdad que tienen las víctimas y es fundamental para morigerar el sufrimiento que genera la incertidumbre frente a la suerte y paradero de los seres queridos[895]. En específico, el Estado debe garantizar todos los recursos necesarios para encontrar a las victimas desaparecidas. Al respecto, recordamos que en caso Anzualdo Castro v. Perú, esta Corte estableció que:

> […] al Estado a continuar realizando todos los esfuerzos necesarios y a adoptar las medidas administrativas, legales y políticas públicas que correspondan para determinar a las personas desaparecidas durante el conflicto interno y, en su caso, identificar sus restos a través de los medios técnicos y científicos más eficaces y, en la medida de lo posible y científicamente recomendable, mediante la estandarización de los criterios de investigación.[896]

En el evento de que se encuentren los restos mortales, éstos deberán ser entregados a sus familiares previa comprobación de filiación, a la mayor brevedad posible y sin costo alguno y asegurando el acompañamiento psicológico si fuera necesario. El Estado deberá cubrir los gastos funerarios, de acuerdo a las creencias de las familias y de común acuerdo con estos.

Finalmente, solicitamos a la Corte que ordene al Estado disponer de un espacio adecuado para que los familiares de las víctimas que así lo deseen puedan enterrar los restos de éstas en el lugar que sea acordado con sus familiares.

### *g) Medidas para la recuperar la memoria de las víctimas*

De igual manera, como medida de reparación destinada a preservar y recuperar la memoria de las víctimas, los familiares han considerado erigir un monumento en la comunidad, con el fin de

---

894 En este sentido, véanse las obligaciones derivadas del delito de desaparición forzada en relación con la búsqueda de los restos en Centro Nacional de Memoria Histórica, Balance de la Acción del Estado colombiano frente a la desaparición forzada de personas, tomo IV, ANEXO 23 del ESAP; véase también, Comisión Internacional de Juristas, Desaparición Forzada y Ejecución Extrajudicial: Investigación y Sanción, Guía para profesionales No. 9, 2015, ANEXO 26 del ESAP.

895 *Cfr. Caso del Caracazo Vs. Venezuela. Reparaciones y Costas, supra* nota 317, párr. 122; *Caso Ticona Estrada Vs. Bolivia*, *supra* nota 23, párr. 84, y *Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, supra* nota 44, párr. 185.

896 *Cfr.,* Corte IDH. *Caso Anzualdo Castro Vs. Perú*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, párr. 189.

preservar la memoria histórica, tal y como lo ha decidida esta misma Corte en otros casos[897]. En el Informe Camino a la Esperanza se enumeraron distintas iniciativas para preservar la memoria de aquellos que fueron desaparecidos, o en el caso de Javier Giraldo asesinado, por los grupos paramilitares en componenda con agentas del Estado[898].

Las medidas simbólicas están dirigidas a reconocer la dignidad de las víctimas, son un testimonio de los hechos, expresan una sanción moral hacia los perpetradores y una llamada de atención sobre la relevancia de la prevención de las violaciones, y en este sentido, pueden tener un efecto educativo social más amplio[899].

Dado que en la época de los hechos existía en Colombia un patrón de graves violaciones de derechos humanos perpetradas fuerzas paramilitares que actuaban en coordinación con agentes estatales, acompañado por la prevalencia de la impunidad de estos graves hechos, por lo que en un caso como el que nos ocupa, la adopción de este tipo de medidas cobra especial relevancia.

En atención a ello, la Corte debe ordenar al Estado colombiano que construya un museo de la memoria en la comunidad de Vereda la Esperanza para conmemorar los hechos de este caso, como una manifestación del firme propósito de que los mismos no se repetirán en el futuro. El diseño y el lugar en que el mismo se ubicará serán previamente acordados con los familiares de las víctimas y sus representantes. El mismo incluirá una placa que contendrá los nombres de las víctimas.

### *h) Otorgamiento de becas de estudio para los familiares de las víctimas*

A lo largo de este proceso, los representantes hemos probado que las víctimas de este caso desaparecieron, o en el caso de Javier Giraldo, fueron ejecutadas extrajudicialmente, por parte de miembros de grupos paramilitares con la tolerancia y colaboración de agentes estatales. Estos hechos además de causar un profundo sufrimiento a sus familiares, afectaron seriamente su capacidad económica, lo que en algunos casos ha impedido que éstos cuenten con los recursos para procurar que sus descendientes puedan recibir una educación adecuada.

La mayoría de las víctimas en el presente caso se desempeñaban como cabezas de familia, generando el sustento económico para sus familiares. Al ser víctimas de las violaciones a los

---

[897] Corte IDH. *Caso Barrios Altos Vs. Perú*. Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2001. Serie C No. 87. parr.43 y 44.

[898] Camino en la Esperanza. 32. ANEXO 17 del ESAP. Entre ellas se acordó que: Se construya un salón de la memoria en la vereda, donde podamos hacer un mural, colgar las fotos de nuestros familiares desaparecidos, donde podamos contar quiénes eran. Un sitio donde nos podamos reunir y seguir haciendo memoria y poder hablar tranquilamente de lo que pasó. Un sitio que nos dé unidad, que sirva para mostrar el trabajo y animarnos. Un salón de la memoria que también uniría a las familias; Que todo lo que paso sea narrado en un libro de la memoria. Un libro donde se compare lo que se ha dicho de lo que pasó en la vereda, con la historia de las familias […]. Construir un monumento, donde se haga memoria de los desaparecidos y que el mismo esté en la vereda para que quienes lo vean reconozcan lo que aquí pasó. Hacer la Galería de la Memoria de los familiares, con sus historias, sus gustos, sus familias, sus objetos. Pero la galería también debe mostrar todo lo que hemos hecho las familias para encontrarlos. Mostrar la memoria de nuestra lucha.

[899] Carlos Martin Beristain, Diálogos sobre la reparación, Experiencias en el sistema interamericano de derechos humanos, Tomo II, págs. 115 y 125.

derechos humanos narradas perpetradas por los grupos paramilitares con cooperación del ejército colombiano, dejaron a sus familiares en una total desprotección económica llevando a algunos a la pobreza y privándolos de una buena educación académica[900].

Hoy, 19 años después los familiares de las víctimas, en especial sus hijos, han crecido asumiendo la lucha por la búsqueda de justicia, respecto de las violaciones de derechos humanos ocurridas en la Vereda. Han entendido la razón de su pobreza, la imposibilidad de acceder a la universidad, el no poder tener un trabajo digno y estable[901].

Con base en lo anterior, solicitamos a la Honorable Corte que ordene al Estado colombiano que proporcione a las personas que lo requieran becas de estudio en el nivel universitario para que puedan cursar la carrera que ellos escojan. Estas becas deberán incluir el pago de textos, útiles, y otras herramientas que sean necesarias para los referidos estudios, lo anterior sin perjuicio de los gastos de pensión completa (infra) solicitados.

### *i) Garantizar un adecuado tratamiento médico y psicológico a las víctimas directas así como indirectas*

Solicitamos a la Honorable Corte que ordene al Estado a brindar asistencia médica y psicológica gratuita a los familiares de las víctimas. Esta asistencia deberá permitirles acceder a un centro médico en la Vereda La Esperanza, donde se encuentre personal médico de forma permanente que brinden una atención adecuada y personalizada para ayudarles a sanar sus heridas tanto físicas como psicológicas. Esta medida incluirá además el costo de los medicamentos que sean prescritos[902]. Dicho centro asistencial debe contar con un laboratorio, para la realización de cualquier examen de rutina que se requiera para tratar las

La Corte ya ha indicado en otras instancias que en dicho tratamiento se deberá considerar las circunstancias y necesidades particulares de cada una de las víctimas, de manera que se le brinden tratamientos colectivos, familiares, e individuales. Además, el plan de tratamiento debe desarrollarse después de una evaluación completa que refleja lo que se acuerde con cada una de las víctimas[903].

---

900 Camino en la Esperanza. 32.. pág. 36. ANEXO 17 del ESAP.

901 *Cfr.,* Caminando en La Esperanza por Justicia y Dignidad. pag.37. ANEXO 17 del ESAP. En el informe "Caminando en la Esperanza" se señalan los testimonios de varios familiares de las victimas quienes solicitan que se garantice una educación profesional en forma gratuita, debido a que dentro de su núcleo familiar no cuentan con las posibilidades económicas para formarse técnica o profesionalmente. Denuncian que es casi imposible ingresar a las universidades públicas existentes en el departamento. Por tanto, el Estado debe garantizar que haya cupos especiales en las Universidades Publicas para los hijos e hijas de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en el país.

902 *Cfr.,* Corte IDH. *Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 274.

903 *Cfr.,* Corte IDH. *Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala*. Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de noviembre 2004. Serie C No. 116, párr. 107.

### *j) Reconocimiento público de responsabilidad estatal y desagravio*

La Corte Interamericana ha establecido en reiteradas ocasiones que "con el fin de reparar el daño causado a las víctimas y sus familiares y de evitar que hechos como los de este caso se repitan, [es necesario] que el Estado realice un acto público de reconocimiento de su responsabilidad en relación con las violaciones declaradas […] y de desagravio a las víctimas y sus familiares"[904].

Para que este acto tenga un verdadero sentido para los familiares de las víctimas, el mismo será organizado con su participación y acuerdo en la modalidad del mismo. Además, el Estado garantizará la presencia de altas autoridades de las instituciones estatales involucradas en las violaciones, así como la difusión del mismo en los medios de comunicación a nivel nacional e internacional.

### *k) Publicación de las partes pertinentes de la sentencia*

La Honorable Corte Interamericana ha reiterado que sus sentencias son en sí mismas una forma de reparación y ha ordenado su publicación como una forma de dar a conocer la verdad de lo ocurrido. Ha reconocido igualmente que la difusión de su sentencia en los medios de comunicación del país contribuye a que la sociedad, en su conjunto, conozca sobre la responsabilidad del Estado en los hechos denunciados y sobre la verdad de los mismos. Igualmente, ha interpretado que tal difusión constituye parte de la reparación moral de las víctimas y de sus familiares[905].

En atención a ello, con el objetivo de que la sociedad colombiana conozca la verdad de los hechos de este caso, el Estado se compromete a publicar las partes pertinentes de la sentencia que la Corte IDH emita en el presente caso, en un periódico de circulación nacional, que será acordado con las víctimas y sus representantes.

Asimismo, realizará dicha publicación en el diario oficial al menos en una ocasión y en las páginas web de las fuerzas armadas.

### *l) Adopción de una medida de reparación comunitaria*

El caso afectó a una comunidad entera, por ello la Corte debe ordenar al Estado reconocer los daños e impactos a la comunidad, por los hechos de violencia que han implicado alteración de las costumbres y modos de producción campesina. Esta medida debe ser acordada con la comunidad a través de procesos participativos y colectivos.

---

904 Corte IDH, Caso Loayza Tamayo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33, párr. 192 y 194.

905 Corte IDH, Caso de las Hermanas Serrano Cruz. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr. 195; Caso Lori Berenson Mejía. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C No. 119, párr. 240; Caso Carpio Nicolle y otros. Sentencia de 22 de noviembre de 2004. Serie C No. 117, párr. 138; y Caso Masacre Plan de Sánchez. Sentencia de 29 de abril de 2004. Serie C No. 105, párr. 103.

## 2. Medidas de Compensación

Con respecto a las indemnizaciones pecuniarias por los perjuicios sufridos, la Corte las ha otorgado en el entendido de que éstas "comprenden tanto el daño material como el daño moral"[906], incluyéndose dentro del primer rubro el lucro cesante y el daño emergente.

Las indemnizaciones pecuniarias por parte del Estado que ha incurrido en la violación de sus obligaciones internacionales y convencionales, tienen el propósito principal de remediar los daños – tanto materiales como morales – que sufrieron las partes perjudicadas. Asimismo, para que las reparaciones constituyan una justa expectativa, deberán ser proporcionales a la gravedad de las violaciones y del daño causado[907].

### *a) Daño Inmaterial o Moral*

La Corte Interamericana ha entendido por daño moral aquél que:

> "[P]uede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas y a sus allegados, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y otras perturbaciones que no son susceptibles de medición pecuniaria. Es una característica común a las distintas expresiones del daño moral el que, no siendo posible asignárseles un preciso equivalente monetario, solo puedan, para los fines de la reparación integral a las víctimas, ser objeto de compensación, y ello de dos maneras. En primer lugar, mediante el pago de una suma de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que el Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad. Y en segundo lugar, mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, que tengan efectos como la recuperación de la memoria de las víctimas, el restablecimiento de su dignidad, la consolación de sus deudos o la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir"[908].

En la misma línea, la Corte ha establecido que "es propio de la naturaleza humana que toda persona sometida a tratamientos crueles y a suplicio experimente un perjuicio moral" y que "la producción de este daño no requiere pruebas y resulta suficiente el reconocimiento de responsabilidad efectuado en su momento por [el estado]"[909] .

---

906 *Cfr.,* Corte IDH. *Caso Loayza Tamayo Vs. Perú*. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 42, párr. 124.

907 La Corte ha estimado que la naturaleza y el monto de las reparaciones "dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como moral". Corte IDH. *Caso de la "Panel Blanca" (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala*. Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2001. Serie C No. 76, párr. 79.

908 *Cfr.,* Corte IDH. *Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala*. Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77, párr. 84.

909 *Cfr.,* Corte IDH. *Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina*. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C No. 39, párr. 49; Corte IDH. *Caso Aloeboetoe y otros Vs. Surinam*. Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de septiembre de 1993. Serie C No. 15, párr. 52; Corte IDH. *Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú.* Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 1996. Serie C No. 29, párr. 57.

En este sentido, solicitamos a este Honorable Tribunal que ordene al Estado a pagar a cada una de las 12 víctimas desaparecidas y de la víctima ejecutada la suma de USD 80,000.00, monto que tenga como base la jurisprudencia reciente de la Corte[910], en concepto de indemnización por el daño moral causado por las violaciones cometidas en su contra.

Asimismo, y tomando en cuenta que en su informe de fondo, la Ilustre Comisión señala expresamente que las indemnizaciones pagadas por el Estado deben tomar en cuenta la especial condición de los 3 niños víctimas de este caso, solicitamos a esta Corte que ordene el Estado a pagar la suma de USD 5,000.00 adicional a favor de sus familiares. Dicha cantidad deberá ser adicionada al monto establecido en el párrafo anterior[911].

Estos montos serán entregados a los familiares que correspondan de acuerdo al derecho interno en la línea de sucesión.

Por otro lado, la Honorable Corte Interamericana ha reconocido en varias oportunidades que "los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas"[912]. Específicamente, ha establecido que:

> "[…] la violación de la integridad psíquica y moral de […] los] familiares [de una persona desaparecida] es una consecuencia directa, precisamente, de la desaparición forzada. En particular, la Corte consideró que las 'circunstancias de dicha desaparición generan sufrimiento y angustia, además de un sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia ante la abstención de las autoridades públicas de investigar los hechos"[913].

Además, ha señalado que:

> "[…] se puede presumir un daño a la integridad psíquica y moral de familiares directos de víctimas de ciertas violaciones de derechos humanos aplicando una presunción iuris tantum respecto de madres y padres, hijas e hijos, esposos y esposas, compañeros y compañeras permanentes (en adelante "familiares directos"), siempre que ello

---

910 Monto calculado en base a la reparación concedida en el caso Corte IDH. *Caso Anzualdo Castro Vs. Perú*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, párr. 222. Este monto es consistente con la jurisprudencia previa de la Corte Interamericana en la materia. Así, los casos *Bámaca Velásquez v. Guatemala*, *Juan Humberto Sánchez v, Honduras*, *Molina Theissen v. Guatemala* y *Gómez Palomino v. Perú*, la Corte ordenó al Estado el pago de USD 100,000.00 en concepto de daño moral a favor de la víctima. *Cfr.,* Corte IDH. *Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala*. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91, párr. 66. Corte IDH. *Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párr. 177; Corte IDH. *Caso Gómez Palomino Vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136, párr. 135.

911 En el caso *Servellón García v. Honduras*, la Corte Interamericana estableció que el Estado estaba obligado a pagar la suma de USD$ 5,000.00 adicional a favor de cada una de las víctimas que al momento de los hechos fueran menores de edad. Corte IDH. *Caso Servellón García y otros Vs. Honduras*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C No. 152, párr. 184.b).

912 *Cfr.,* Corte IDH, *Caso Bámaca Velásquez v. Guatemala.* Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2000, Serie C No. 70, párr. 160; Corte IDH. *Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010. Serie C No. 217, párr. 126.

913 *Ídem.*

> responda a las circunstancias particulares del caso. En el caso de tales familiares directos, corresponde al Estado desvirtuar dicha presunción. […]"[914]

En el presente caso, las violaciones generaron una afectación emocional y mental enorme en los familiares. Tal como señalamos anteriormente, cada uno de los familiares sobrevivientes han sufrido considerablemente como resultado de la desaparición forzada de sus seres queridos y han sido, a su vez, víctimas.

En atención a lo anterior, solicitamos a la Corte que ordene el Estado a pagar a familiares directos de las víctimas desaparecidas la suma de USD 45,000 por cada una de ellas por el daño moral causado por las violaciones cometidas en contra de sus seres queridos. Asimismo, solicitamos a la Corte que ordene al Estado colombiano a pagar a los hermanos y otros familiares indirectos de las víctimas de desaparición forzada la suma de USD 15,000 por cada una de ellas[915].

De igual manera, solicitamos a esta Honorable Corte que ordene al Estado a pagar a los familiares directos de Javier Giraldo Giraldo la suma de USD 45,000, por el daño moral causado en atención a la ejecución extrajudicial de este.

En el caso de los familiares que a la fecha han fallecido, estos montos se entregarán a quienes corresponda de acuerdo a la línea de sucesión.

### *b) Daño Material*

Por el otro lado, el daño material supone la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, así como los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con dichos hechos . El daño material comprende, en esa medida, las nociones de daño emergente, daño patrimonial familiar y lucro cesante; estos elementos serán analizados a continuación y surgen como consecuencia directa de las actuaciones ilegítimas del Estado de Colombia.

#### *(1) Daño Emergente*

Esta Honorable Corte ha definido el daño emergente como el detrimento directo, menoscabo o destrucción material de los bienes, con independencia de los otros efectos, patrimoniales o de otra índole que puedan derivar del acto que los causó. Comprende el valor de los bienes destruidos y cualquier costo adicional que esa violación pueda haber causado a la víctima o a

---

914 *Cfr.,* Corte IDH. *Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010 Serie C No. 217, párr. 127.

915 Monto establecido de conformidad con lo establecidos por la Corte Interamericana en el caso *Gomes Lund y otros v. Brasil*, que se refiere a la desaparición forzada de un número plural de personas. *Cfr.,* Corte IDH. *Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010.Serie C No. 219, párr. 311. Este monto es consistente con la jurisprudencia previa de la Corte, así en el caso *Bámaca Velásquez v. Guatemala*, la Corte ordenó el pago de USD$20,000 a favor de cada una de las hermanas de la víctima. *Cfr.,* Corte IDH. *Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala*. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91, párr. 66.

sus familiares[916]. Igualmente, comprende los gastos extrajudiciales realizados con el fin de indagar el paradero de la víctima[917], los gastos por medicinas y tratamientos psicológicos que han tenido que realizar los familiares de las víctimas producto del sufrimiento causado a raíz de las violaciones de que han sido objeto[918], entre otros.

Por otro lado, esta Honorable Corte ha reconocido las dificultades que enfrentan las víctimas de violaciones de derechos humanos para aportar documentos que acrediten el daño material causado por las violaciones de que se trata[919].

Solicitamos a la Corte que dicte en equidad la cantidad de USD $,3000 por cada grupo familiar por las acciones realizadas en la búsqueda de justicia en estos 19 años.

En este caso, merece especial atención el ataque que un Pelotón de 54 soldados realizaron en el amanecer del 26 de junio de 1996, a las dos de la madrugada a la vivienda en la que se encontraba durmiendo el señor José Eliseo Gallego, su esposa María Engracia y su hijo Juan Carlos, a través de disparos indiscriminados y el lanzamiento de granadas.[920]

Como surge de los hechos de este caso, los soldados que atacaron la vivienda del señor José Eliseo Gallego estaban desarrollando la *"Operación Militar Rayo"*. Juan Carlos Gallego posteriormente declaró lo siguiente:

> Las balas se metieron al closet y traspasó todo lo que había, loza, libros, ropa, quedaron esquirlas en el chifonier, el muro casi lo tumban, el techo quedó vuelto colador, emparamándose totalmente, una hoja transparente quedó en pedazos, los bultos de sal y de cuido quedaron destrozados, el cuido se derramó todo, las lámparas caperuzas quedaron todas quebradas, las bombas de vidrio, los espejos, los cuadros, diplomas, todo quedó destrozado, todo lo de la cocina quedó destruido, la olla a presión nuevecita quedó traspasada, una guitarra que me había prestado de cien mil pesos quedó destrozada, la sagrada biblia que incluso tiene una bala incrustada. Además las cobijas y los libros que yo tenía del hospital, porque soy Promotor de salud quedaron destrozados, todos los libros y cuadernos que yo tenía quedaron vueltos en la nada [921].

---

916 *Cfr.,* Corte IDH. *Caso Tibi Vs. Ecuador*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 237.

917 *Cfr.,* Corte IDH. *Caso Blake Vs. Guatemala.* Reparaciones y Costas*.* Sentencia de Reparaciones de 22 de enero de 1999. Serie C No. 48, Párr. 49.

918 *Cfr.,* Corte IDH. *Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr. 152.

919 *Cfr.,* Corte IDH. *Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas.Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 266.

920 Declaración de John Fredy Castaño Gallego, retomada por la Fiscalía en la resolución de Situación Jurídica que le impone medida de aseguramiento a Ramón María Isaza Arango. Folio 263, Cuaderno 9. Radicado 233 UNDH – DIH, ANEXO 2 del ESAP.

921 La declaración de Juan Carlos Gallego Hernández fue recepcionada por la Personería Municipal de Cocorná el día 30 de junio de 1996. Es decir, 4 días después de ocurridos los hechos. Obrante a Folios 140 – 142.

En la finca del señor Eliseo y María Engracia se cultivaba café, plátano, yuca, que era vendida en los mercados de los municipios de Cocorná y del Carmen de Viboral principalmente y de ello derivaba su sustento para la familia[922]. Con la destrucción de la vivienda la familia no volvió a la finca, desde ese momento y hasta el día de su muerte, el 13 de Noviembre de 1997, debieron sufrir penurias económicas; las que continuó padeciendo su esposa, hasta el momento de su fallecimiento el 28 de septiembre de 2008.

En consecuencia de lo anterior, la Corte IDH fijará una indemnización compensatoria, conforme a la equidad en consideración a las características que acompañan la perpetración de esta violación de la familia Gallego Hernández por la destrucción del espacio físico y simbólico que constituía la forma de vida del núcleo familiar.

### *(2) Lucro cesante*

El lucro cesante se refiere a la pérdida de ingresos económicos como consecuencia de la violación padecida por la víctima. En este caso, se refiere a la pérdida de ingresos económicos como consecuencia de la interrupción de las actividades diarias de las víctimas y sus familiares, en virtud de lo ocurrido, tanto las detenciones como las desapariciones. En el caso de víctimas sobrevivientes de violaciones de derechos humanos, la Honorable Corte ha establecido que la indemnización por pérdida de ingresos "debe calcularse con base en el período de tiempo que la víctima permaneció sin laborar como consecuencia de la violación"[923].

En documentos anexos se encuentran los cálculos realizados para cada persona por concepto de lucro cesante[924], a continuación señalamos los montos finales en un cuadro:

| Nombre de la Victima | Lucro Cesante |
|---|---|
| Andres Antonio Gallego Castaño | $ 57.025.371 |
| Aníbal De Jesús Castaño Gallego | $ 59.703.819 |
| Hernando De Jesús Castaño Castaño | $ 59.445.184 |
| Irene De Jesús Gallego Quintero | $ 59.631.901 |
| Jaime Alonso Mejia Quintero | $ 59.473.884 |

Cuaderno No. 1, Radicado 233 UNDH – DIH, y obrante a Folios 32 – 33, Cuaderno 1, Radicado 233 UNDH-DIH, Expediente No. 008 – 1079998 Procuraduría delegada disciplinaria derechos humanos. ANEXO 2 del ESAP.

922. Contrato de compraventa de derechos y acciones en la sucesión de los señores Lázaro Hernández y María de los Ángeles Quintero suscrito entre José Eliseo Gallego y Ascensión Hernández Quintero, Anexo 32 del ESAP.

923 *Cfr.,* Corte IDH. *Caso Bayarri Vs. Argentina*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 187, párr. 50; Corte IDH. *Caso López Álvarez Vs. Honduras*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 194; Corte IDH. *Caso Cantoral Benavides Vs. Perú.* Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de diciembre de 2001. Serie C No. 88, párr. 49.

924 *Cfr.,* relación de cálculos de lucro cesante por cada víctima, ANEXO 7 del ESAP.

| | |
|---|---|
| Javier De Jesús Giraldo Giraldo | $ 59.473.884 |
| Juan Carlos Gallego Hernandez | $ 59.473.884 |
| Juan Crisostomo Cardona Quintero | $ 72.645.281 |
| Leonidas Cardona Giraldo | $ 57.025.371 |
| Miguel Ancizar Cardona Quintero | $ 70.628.706 |
| Octavio De Jesús Gallego Hernández | $ 59.445.184 |
| Orlando De Jesús Muñoz Castaño | $ 59.445.184 |
| Oscar Hemel Zuluaga Marulanda | $ 73.823.477 |

Estos montos deberán ser entregados a quien corresponda de acuerdo a la línea de sucesión.

### 3. Costas y Gastos

Esta Honorable Corte ha establecido que:

> "[L]as costas y gastos están comprendidos dentro del concepto de reparación consagrado en el artículo 63.1 de la Convención Americana, puesto que la actividad desplegada por los familiares de las víctimas o sus representantes con el fin de obtener justicia, tanto a nivel nacional como internacional, implica erogaciones que deben ser compensadas cuando la responsabilidad internacional del Estado es declarada mediante una sentencia condenatoria. […] comprende los gastos generados ante las autoridades de la jurisdicción interna, así como los generados en el curso del proceso ante el sistema interamericano, teniendo en cuenta la acreditación de los gastos hechos, las circunstancias del caso concreto y la naturaleza de la jurisdicción internacional de la protección de los derechos humanos. Esta apreciación puede ser realizada con base en el principio de equidad y tomando en cuenta los gastos señalados y comprobados por las partes, siempre que su quantum sea razonable"[925].

En base a ello, solicitamos a esta Honorable Tribunal que exija al Estado pagar a los familiares de las víctimas, así como sus representantes, Corporación Jurídica Libertad y CEJIL, los siguientes montos en concepto de gastos y costas.

---

925 *Cfr.,* Corte IDH., Caso Carpio Nicolle y otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre 2004. Serie C No. 117, párr. 143; Corte IDH. Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 268; Corte IDH. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 328; Corte IDH. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 212.

### *a) Costas y Gastos incurridos por la Corporación Jurídica Libertad*

La Corporación Jurídica Libertad, desde la ocurrencia de los hechos, a mediados de 1996 ha venido acompañando a los familiares de la Vereda La Esperanza, desde su actividad jurídica a nivel interno, como internacional; así mismo ha desplegado una serie de talleres, movilizaciones, campañas, encuentros, conmemoraciones con otras comunidades y víctimas durante estos 19 años. Así mismo, ha destinado funcionalmente a varios abogados para la representación en el proceso contencioso, penal ordinario y de justicia y paz; ha mantenido el asesoramiento jurídico y de acompañamiento. Igualmente, la CJL ha provisto gastos de viajes regionales, nacionales e internacionales para las labores emprendidas, en particular a la región del Oriente antioqueño y en la ciudad de Bogotá donde desde 1998 se adelanta la investigación penal. También ha incurrido en erogaciones en autenticaciones notariales, fotocopias de expedientes

El desglose y documentación del monto total de las costas y gastos se encuentran en anexo a este ESAP[926]. En consideración, solicitamos a la Corte que fije en equidad la cantidad correspondiente en concepto de gastos y costas. Solicitamos a la Honorable Corte que dicha cantidad sea reintegrada directamente del Estado a los representantes.

### *b) Costas y Gastos incurridos por CEJIL*

CEJIL ha actuado como representante de la víctima y sus familiares desde el trámite del caso ante la CIDH. A partir de ese momento ha colaborado en el litigio del caso en el proceso internacional. Para la realización de esta labor ha incurrido en gastos que incluyen viajes, pago de hoteles, gastos de comunicaciones, fotocopias, papelería y envíos.

CEJIL ha incurrido en gastos correspondientes al tiempo de trabajo jurídico dedicado a la atención específica del caso y a la investigación, la recopilación y presentación de pruebas, realización de entrevistas y preparación de escritos. Presentamos una relación de las horas que el personal de CEJIL ha trabajado en el caso para que sea considerado por el Tribunal al momento de dictar las reparaciones. Asimismo, CEJIL ha realizado dos viajes a Colombia y se ha encargado de la recopilación de prueba destinada a fortalecer el presente escrito..

En base a ello, incluimos un cuadro sobre los gastos aproximados incurridos por CEJIL[927], los mismos que están acompañados de los medios probatorios correspondientes. En consideración, solicitamos a la Corte que fije en equidad la cantidad correspondiente en concepto de gastos y costas. Solicitamos a la Honorable Corte que dicha cantidad sea reintegrada directamente del Estado a los representantes.

---

926 Relación de gastos soportados con egresos contables de la CJL Costas y gastos CJL, ANEXO 12 del ESAP.

927 Costas y gastos CEJIL, ANEXO 13 del ESAP.

### *c) Gastos futuros*

Los gastos detallados arriba no incluyen aquellos a ser incurridos por las víctimas y sus representantes en lo que resta del trámite del caso ante la Honorable Corte. Estos gastos futuros comprenden, entre otros, los desplazamientos y gastos adicionales de testigos y peritos a la eventual audiencia ante la Corte, el traslado de los representantes a la misma, los gastos que demande la obtención de prueba futura, y los demás en que se pueda incurrir para la adecuada representación de las víctimas ante la Honorable Corte.

En atención a lo anterior, los representantes de las víctimas solicitamos a la Honorable Corte que, en la etapa procesal correspondiente, nos otorgue la oportunidad de presentar cifras y comprobantes actualizados sobre los gastos en los que se incurrirá durante el desarrollo del proceso contencioso internacional.

## X. CAPÍTULO X – SOLICITUD DE ACCESO AL FONDO DE VÍCTIMAS

En base al Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Funcionamiento del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas (en adelante, "Reglamento del Fondo"), solicitamos a la Honorable Corte que determine procedente la solicitud de asistencia legal de los familiares, para cubrir algunos costos concretos relacionados con la producción de prueba durante el proceso del presente caso ante la Corte.

El artículo 2 del Reglamento del Fondo dispone lo siguiente:

> La presunta víctima que desee acogerse al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas deberá hacerlo saber a la Corte en su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. Deberá demostrar, mediante declaración jurada y otros medios probatorios idóneos que satisfagan al Tribunal, que carece de recursos económicos suficientes para solventar los costos del litigio ante la Corte Interamericana e indicar con precisión qué aspectos de su defensa en el proceso requieren el uso de recursos del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas.

Los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas y los familiares de Javier Giraldo –quien fue ejecutado extrajudicialmente- en este caso rindieron declaraciones juradas que hoy son presentadas ante este Tribunal señalando que no poseen los recursos económicos para llevar adelante el trámite del caso ante esta Honorable Corte[928].

Como puede apreciar esta Honorable Corte, los familiares no cuentan con los recursos económicos para hacer frente a este proceso. Hasta el momento, las organizaciones representantes, Corporación Jurídica Libertad y CEJIL, han sufragado los gastos del proceso internacional, pero no se encuentran en condiciones de afrontar el aumento en los gastos que implicaría el trámite ante la Corte.

En base a ello, solicitamos a la Honorable Corte que los siguientes gastos sean cubiertos por el Fondo de Asistencia Legal:

---

928 Solicitud de fondo de asistencia legal de los representados, Anexo 14 del ESAP.

- Gastos de viaje (pasaje, hotel y per diem) de las personas que la Corte llame a declarar en audiencia, incluyendo víctimas, testigos y peritos, de acuerdo al artículo 50 del Reglamento de la Corte;

- Gastos de notario derivados de las declaraciones de víctimas, testigos y peritos que la Corte considere pertinente recibir por affidavit de acuerdo al citado artículo;

- Gastos y viaje derivados de la realización de los peritajes incluidos en el presente escrito, en aquellos casos en los que los peritos necesiten viajar a la sede de la Corte IDH en Costa Rica para la realización de los mismos.

Como puede observar la Honorable Corte, los gastos solicitados se refieren a la producción de declaraciones a ser rendidas ante esta Honorable Corte, ya sea en forma oral o por escrito.

En esta fase del procedimiento, los representantes no estamos en capacidad de determinar los costos específicos que generarían estos rubros, en vista de que no tenemos certeza de si todos los testigos y peritos propuestos en el presente escrito serán admitidos por esta Honorable Corte[929].

Tampoco tenemos conocimiento si, de ser admitida la prueba propuesta, los testigos y peritos en cuestión serán llamados a declarar personalmente ante esta Honorable Corte o si por el contrario, se requerirá que su declaración sea rendida ante notario público[930]. Finalmente, desconocemos el lugar en el que la Honorable Corte decidirá convocar la eventual audiencia del caso (tomando en cuenta su práctica de celebrar sesiones extraordinarias fuera de su sede), por lo que los gastos de viaje podrían variar considerablemente[931].

En virtud de lo anterior, solicitamos que, en caso de que la Honorable Corte acceda a la solicitud de nuestros representados, tome en cuenta los testimonios y peritajes que decida admitir en su resolución de convocatoria acorde con el artículo 50 de su Reglamento.

No obstante lo anterior, a continuación presentamos un estimado de los gastos que solicitamos sean cubiertos por el Fondo de Asistencia Legal a Víctimas, así como un estimado de los gastos que serían asumidos por esta representación, si la audiencia se llevara a cabo en la sede de la Corte en San José, Costa Rica.

---

929 Al respecto, el artículo 50 "Ofrecimiento, citación y comparecencia de declarantes" del Reglamento de esta Honorable Corte establece: "1. La Corte o su Presidencia emitirá una Resolución en la que, según el caso, decidirá sobre las objeciones o recusaciones que se hayan presentado; decidirá el objeto de la declaración de cada uno de los declarantes; requerirá la remisión de las declaraciones ante fedatario público (affidávit) que considere pertinente y convocará a audiencia, si lo estima necesario, a quienes deben participar en ella".

930 *Idem*.

931 En este sentido, el artículo 13 del Reglamento de esta Honorable Corte indica: "Artículo 13. Sesiones fuera de la sede. La Corte podrá reunirse en cualquier Estado miembro en que lo considere conveniente por mayoría de sus miembros y previa aquiescencia del Estado respectivo".

### A. Gastos necesarios para la comparecencia de los declarantes a audiencia pública

A continuación incluimos un cuadro de los gastos que generaría la comparecencia de los declarantes ofrecidos por esta representación a la audiencia pública. Estos incluyen: boleto aéreo del lugar de residencia de los declarantes a Costa Rica, y 5 días de viáticos y hotel.

Es preciso señalar que si la audiencia se llevara a cabo en un lugar distinto a Costa Rica, los gastos podrían variar considerablemente.

### B. Gastos de producción de declaraciones juradas (affidávits)

Con relación a aquellas declaraciones o peritajes que esta Honorable Corte determine que sean rendidas ante Notario Público, cumplimos con señalar que el costo aproximado de la notarización de las declaraciones juradas en Colombia es de USD 50 cada una. Dicho costo puede variar dependiendo del número de páginas que el documento contenga.

Asimismo, dado a que los familiares residen fuera de Medellín, sería necesario cubrir su traslado desde su lugar de residencia. El costo aproximado del mismo será determinado con antelación al momento de la convocatoria de la audiencia.

### C. Gastos que serían asumidos por esta representación

Adicionalmente a los costos señalados en el apartado anterior, CEJIL y Corporación Jurídica Libertad (en su calidad de representantes de las víctimas del presente caso), están en posición de asumir una serie de gastos generados por el proceso ante esta Honorable Corte, por lo que no están incluidos en la solicitud de las víctimas de asistencia del fondo.

Estos gastos son los siguientes:

- Gastos logísticos de la producción de peritajes: local para la realización de entrevistas individuales; papelería; etc.
- Pasajes de avión, estadía y per diem de dos abogados de CEJIL y un abogado de Corporación Jurídica Libertad al lugar en el que se celebre la audiencia;
- Gastos logísticos durante la preparación y celebración de la audiencia (local de trabajo, fotocopias, llamadas de teléfono, materiales de trabajo y otros gastos necesarios). Estos gastos son asumidos por CEJIL, dada la existencia de una de sus sedes en Costa Rica. Los mismos son sustancialmente más altos cuando la audiencia tiene lugar en otro Estado.

Finalmente solicitamos que se requiera al Estado el reintegro de dichos gastos al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas, de acuerdo al artículo 2 del Reglamento del Fondo. Ello sin prejuicio de los montos en concepto de gastos y costas que la Honorable Corte determine para las víctimas y sus representantes y que deberán ser reintegrados directamente a los mismos.

# XI. CAPÍTULO XI – PRUEBA

## A. Declaraciones de las víctimas

Durante el trámite ante la Corte Interamericana presentaríamos las declaraciones de los familiares directos de las personas desaparecidas forzosamente y los familiares de la persona víctima de ejecución extrajudicial:

### 1. DE FAMILIARES:

Los familiares propuestos como testigos declararán sobre la forma en que se enteró de la desaparición de sus familiares y lo que sabe acerca de lo que les ocurrió; la pérdida de bienes y viviendas en estos mismos hechos; a lo que se vieron enfrentados para responder a los cambios familiares, económicos y de residencia derivados de las desapariciones forzadas de sus familiares; y el accionar de los grupos paramilitares en la zona; las gestiones realizadas para la búsqueda de justicia por él y sus familiares, los obstáculos enfrentados y la respuesta obtenida; la forma en que estos hechos les han afectado al declarante y miembros de su familia, incluyendo los familiares que fallecieron durante estos últimos 19 años; así como acerca de las medidas que el Estado debería adoptar para reparar el daño causado, entre otros aspectos relevantes para el caso.

| | NOMBRE DE LA VÍCTIMA | TESTIMONIOS |
|---|---|---|
| 1 | JUAN CRISOSTOMO CARDONA QUINTERO | ROMAN ANTONIO CARDONA QUINTERO<br>DIANA MARCELA QUINTERO |
| 2 | MIGUEL ANCIZAR CARDONA QUINTERO | |
| 3 | OSCAR HEMEL ZULUAGA MARULANDA | SANDRA LILIANA ZULUAGA MARULANDA<br>ARBEY ESTEBAN ZULUAGA MARULANDA |
| 4 | ANIBAL DE JESUS CASTAÑO GALLEGO | MARIA OVEIDA GALLEGO CASTAÑO (cónyuge)<br>SANTIAGO CASTAÑO GALLEGO (hijo)<br>BERNABE CASTAÑO GALLEGO (hermano) |
| 5 | IRENE DE JESUS GALLEGO QUINTERO | JOSE IVAN GALLEGO QUINTERO (hermano)<br>BLANCA ESTELLA LOPEZ RAMIREZ (compañera permanente de Eladio Gallego Quintero) |
| 6 | HERNANDO DE JESUS CASTAÑO CASTAÑO | FLORINDA DE JESUS GALLEGO HERNANDEZ (Cónyuge)<br>CLAUDIA YANETH CASTAÑO GALLEGO, |
| 7 | JUAN CARLOS GALLEGO HERNANDEZ | MARIA AURORA GALLEGO HERNANDEZ (Hermana)<br>JHON FREDY CASTAÑO GALLEGO (sobrino) |
| 8 | OCTAVIO DE JESUS GALLEGO HERNANDEZ | MARIA FLORINDA GALLEGO HERNANDEZ (cónyuge)<br>YANET GALLEGO GALLEGO (hija)<br>HECTOR MANUEL GONZALEZ RAMIREZ (testigo presencial) |
| 9 | JAIME ALONSO MEJIA QUINTERO | JOSE OCTAVIO MEJIA QUINTERO (hermano)<br>ANA OBEIDA MEJIA QUINTERO (hermana) |
| 10 | JAVIER DE JESÚS GIRALDO GIRALDO | NELLY SOTO DE CASTAÑO (cónyuge)<br>CRUZ VERONICA GORALDO SOTO (hija) |
| 11 | ORLANDO DE JESUS MUÑOZ CASTAÑO | CARLOS AMADOR MUÑOZ MUÑOZ (hermano)<br>MARIA AURORA MUÑOZ MUÑOZ (hermana) |

| | | |
|---|---|---|
| 12 | LEONIDAS CARDONA GIRALDO | MARIA DEL ROCIO CARDONA FERNANDEZ (Cónyuge)<br>MARIA CEMIDA CARDONA GIRALDO (hermana) |
| 13 | ANDRES ANTONIO GALLEGO | OMAIRA GALLEGO HERNANDEZ (hija)<br>RICAURTE GALLEGO HERNANDEZ (hijo) |

**2. HOLLMAN FELIPE MORRIS**

**Hollman Felipe Morris Rincón,** quien declarará sobre la forma en que tuvo conocimiento de los hechos del caso en su labor periodística; las entrevistas que realizó a los familiares de las víctimas, el ataque que el mismo presenció en la carretera cercana a la Vereda la Esperanza durante el acto realizado por la comunidad en Noviembre de 1996, así como sobre la entrevista que realizó al señor Ramón Isaza en el Magdalena Medio. Se referirá a la forma y contratiempos que tuvo para acceder al lugar donde se encontraba el señor Isaza y el señor NN Freddy con su hijo. Además, declarará las labores que las familias han llevado a cabo para buscar justicia y encontrar a sus familiares desaparecidos, y lo que le consta sobre el accionar del Estado sobre estas desapariciones a la época de los hechos.

### B. Prueba pericial

Durante el trámite ante la Corte Interamericana, los representantes, presentaríamos peritos especializados en diversos temas[932], a saber:

**Vilma Liliana Franco Restrepo**, quien declarará sobre la incompatibilidad con el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario de la aplicación de políticas de lucha contrainsurgente del Estado, basada en la doctrina del enemigo interno, implementada directamente por parte de las Fuerzas armadas, o a través del modelo de las autodefensas, Convivir, redes de informantes, y otras formas de involucramiento de la población civil al conflicto armado en Colombia.

**Alberto Yepes Palacio,** quien declarara sobre la evolución y consolidación del paramilitarismo en el Departamento de Antioquia, en la región conocida como el Magdalena Medio y oriente antioqueño. Además, el perito analizara la responsabilidad del Estado en un contexto de vínculos entre agentes estatales y paramilitares por el importante nivel de coordinación entre la Fuerza Pública y las autodefensas del Magdalena Medio.

**Luz Marina Monzón Cifuente**, quien declarará sobre la existencia de una práctica sistemática de desapariciones forzadas en Colombia para la época en la que ocurrieron los hechos del caso. Realizará un balance del marco normativo y el accionar del Estado colombiano frente al derecho a la búsqueda de personas desaparecidas y a la investigación de la desaparición forzada de personas a partir del año 1970 al presente, incluyendo el procedimiento penal de la Ley 975 y las Leyes 1448 y 1408 como mecanismos de reparación focalizado para víctimas de desaparición forzada. Además, hará especial énfasis en la garantía de los derechos de las víctimas en relación con el caso de las desapariciones forzadas en la Vereda La Esperanza.

[932] Las hojas de vida de los peritos se encuentran en el anexo 18 del ESAP.

**Gabriella Citroni,** investigadora y profesora de derecho internacional de los derechos humanos, experta en materia de desaparición forzada de personas, declarará sobre los estándares internacionales aplicables a las investigaciones en relación con el delito de desaparición forzada de personas en casos en que han transcurrido casi dos décadas, con especial énfasis en la desaparición de niños y mujeres, en un contexto de desapariciones sistemáticas en el marco de conflictos armados internos. Además, desarrollará las obligaciones que tiene un Estado para garantizar los derechos a la verdad y la justicia en la investigación de este delito en un marco de justicia transicional, con particular referencia a la Ley de Justicia y Paz colombiana y, en su caso, ofrecerá las medidas que debe aplicar el Estado para superar las dificultades identificadas.

**Federico Andreu Guzmán**, quien realizará un análisis de la compatibilidad de las normas legales y reglamentarias aplicadas en proceso de Justicia y Paz (Ley 975) con los estándares de debida diligencia en el deber de investigar graves violaciones de los derechos humanos para garantizar plenamente los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas en el marco de un proceso de justicia transicional.

Para ello, analizará el marco jurídico internacional que regula la justicia transicional; el modelo de construcción procesal de la verdad en la Ley 975 a partir de la confesión a través de versiones libres de los postulados; el deber del Estado de contrastación y verificación de dichas versiones libres para la construcción de la verdad procesal; la estrategia de priorización de casos, y de máximos responsable; la participación efectiva de las víctimas y sus representantes en dichos procesos; la construcción de contextos y patrones; la identificación y caracterización de los poderes políticos, económicos y militares; la evaluación de los requisitos de elegibilidad para el otorgamiento de los beneficios jurídicos en el marco del proceso de justicia y paz; acceso a información que permita la identificación del paradero o localización de las víctimas de desaparición forzada. Finalmente, el perito se referirá a la aplicación en el caso concreto del referido marco internacional de justicia transicional.

**David Martínez Osorio**, declarará sobre la eficacia y compatibilidad con estándares internacionales de la metodología investigativa que está aplicando el Estado para indagar patrones de actuación conjunta entre agentes estatales y paramilitares a través de la incorporación del principio de priorización de casos para investigar a los máximos responsables de graves violaciones de los derechos humanos y de "macrocontextos" en los procesos de Justicia y Paz, con el propósito de evaluar si dicha actuación permite investigar de manera efectiva crímenes de sistema, avanzar en la identificación y caracterización de estructuras criminales complejas, en los planes criminales, el *modus operandi*, y las motivaciones e intencionalidades de los perpetradores.

**David Medina Hernández**, realizará un análisis sobre el cumplimiento de los estándares sobre debida diligencia en la investigación de violaciones a los derechos humanos en los procesos penales ordinarios seguidos por las desapariciones forzadas de las víctimas del caso, sobre todo resaltando los obstáculos de hecho y de derecho que se han presentado en los 17 años que llevan los procesos penales relacionados con el caso.

Las peritas **Hada Luz García Méndez y Yeny Carolina Torres Bocachica**, rendirán su peritaje sobre los efectos psicosociales que la detención y desaparición forzada de las víctimas tuvieron

sobre los familiares, haciendo énfasis en los efectos en los niños, las niñas y las mujeres. Asimismo se referirá al daño causado en los familiares a raíz de la impunidad en que se mantienen estos hechos y sobre las confesiones que han efectuado los postulados en Justicia y Paz sobre este caso. Examinarán los daños colectivos que la secuencia de las desapariciones generó en la comunidad de la Vereda La Esperanza. También se referirá a las medidas que el Estado debe adoptar para reparar el daño causado a las víctimas y a sus familiares, entre otros aspectos relacionados con el caso.

### C. Prueba documental

Los representantes presentaremos a la Corte la prueba documental señalada como anexo en los pies de página de presente escrito.

## XII. CAPÍTULO XII – PETITORIO

De acuerdo con los argumentos y pruebas presentados en el transcurso de este proceso, los representantes respetuosamente solicitamos que esta Honorable Corte Interamericana declare que el Estado colombiano es responsable por la violación de los derechos a:

i. Personalidad jurídica; vida; integridad personal; libertad personal: y derechos de la niñez, contenidos en los artículos 3, 4, 5, 7 y 19 de la CADH, éste último para aquellas personas menores de 18 años al momento de los hechos, en concordancia del incumplimiento con el artículo 1.1 del mismo instrumento, a raíz de la desaparición forzada de Aníbal de Jesús Castaño Gallego, Irene de Jesús Gallego Quintero, Juan Carlos Gallego Hernández, Jaime Alonso Mejía Quintero, Hernando de Jesús Castaño Castaño, Octavio de Jesús Gallego Hernández, Orlando de Jesús Muñoz Castaño, Andrés Antonio Gallego Castaño, Leónidas Cardona Giraldo, así como de los niños Oscar Hemel Zuluaga Marulanda, Miguel Ancízar Cardona Quintero y Juan Crisóstomo Cardona Quintero.

ii. Deber de prevención y sanción del delito de desaparición forzada establecido en el 1.a y 1.b de La Convención Interamericana para la Desaparición Forzada de Personas (CIDFP).

iii. Vida e integridad personal, contenidos en los artículos 4 y 5 de la CADH en concordancia con el incumplimiento del artículo 1.1 del mencionado instrumento, en perjuicio de Javier de Jesús Giraldo Giraldo.

iv. Derecho a la propiedad privada, contenido en el artículo 21 de la CADH en conjunto con el incumplimiento de los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, a raíz de la destrucción la vivienda del señor José Eliseo Gallego y su esposa María Engracia Hernández.

v. Derecho a las garantías judiciales y protección judicial consagrados en los artículos 8 y 25 de la CADH, en concordancia con el incumplimiento del artículo 1.1 del

mismo instrumento, por la impunidad imperante en el presente caso tanto en el fuero ordinario como en la jurisdicción de Justicia y Paz en perjuicio de las víctimas y sus familiares.

vi. Derecho a la verdad, consagrado en los artículos 5, 8, 25 y 13 de la CADH en concordancia con el incumplimiento del artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de los familiares de las víctimas.

vii. Derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas de la desaparición forzada, contenido en el artículo 5 de la CADH en concordancia con el incumplimiento del artículo 1.1 del mencionado instrumento.

Con base en las referidas violaciones, solicitamos que la Honorable Corte ordene al Estado colombiano implementar las siguientes medidas de no repetición:

i. Llevar a cabo una investigación completa, imparcial, efectiva e identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones de los derechos humanos en perjuicio de las víctimas del presente caso, dentro de un plazo razonable[933];

ii. La imposición de la pena de los responsables se debe realizar de forma proporcional y efectiva, atendiendo a la gravedad de las violaciones de derechos humanos.

iii. Llevar a cabo un proceso penal que este orientado a garantizar el derecho que tienen los familiares de las víctimas a conocer la verdad.

iv. Llevar a cabo una investigación, completa imparcial y efectiva e identificar, juzgar y sancionar mediante el uso de medidas administrativas, disciplinarias o penales que correspondan a los funcionarios estatales, que por acciones u omisiones, contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad en la que se encuentran los hechos del caso o que participaron en medidas para obstaculizar los procesos destinados a identificar y sancionar a los responsables[934];

v. El Estado debe tomar las medidas necesarias para eliminar la aplicación de la doctrina del enemigo interno.

Además, solicitamos que la Honorable Corte ordene al Estado implementar las siguientes medidas de satisfacción:

i. La recuperación de los restos de las víctimas, su identificación y entrega a sus familiares[935];

ii. Medidas para recuperar la memoria de las víctimas, tales como la realización de un monumento así como la construcción de un museo de la memoria en la comunidad de Vereda la Esperanza para conmemorar los hechos de este caso;

---

933 *Cfr.,* CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO, *supra,* párr. 311, párr. 4.

934 *Cfr.,* CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO, *supra,* párr. 311, párr. 5.

935 *Cfr.,* CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO, *supra,* párr. 311, párr. 3.

iii. Brindar becas para la educación de aquellos familiares de las víctimas que se vieron obligada a interrumpirla;

iv. Garantizar un adecuado tratamiento médico y psicológico a los familiares de las víctimas desaparecidas y ejecutada; y

v. Llevar a cabo un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y perdón a sus familiares como forma de desagravio;

vi. Publicar la sentencia en un diario de circulación nacional y en las páginas web de las Fuerzas Armadas de Colombia;

vii. Establecer, con la participación de la comunidad de la Vereda La Esperanza, una medida de reparación comunitaria que reconozca el impacto que tuvo la secuencia de hechos de violencia contra la población civil en el presente caso[936].

Finalmente, solicitamos que la Honorable Corte ordene al Estado reparar las violaciones sufridas por las víctimas a través del pago de una indemnización pecuniaria por conceptos de daño moral y daño material, así como el reintegro de las costas y gastos procesales a nivel nacional e internacional. Los gastos futuros que se generen del litigio del caso ante la Corte y su posterior implementación también deberán ser contemplados al momento de dictar reparaciones.

Aprovechamos la ocasión para transmitirle las muestras de nuestra más alta y digna consideración.

Atentamente,

Viviana Krsticevic
Francisco Quintana
CEJIL

Liliana Uribe
Bayron Ricardo Gongora Arango
Corporación Jurídica Libertad

936 *Cfr.,* CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO, *supra,* párr. 311, párr. 6.